

"La cuestión agraria y el agronegocio desde una perspectiva histórica"

Coordinadores: Gabriela Olivera
Gabriel Carini
Pablo Iparraguirre
Gina Lucía Aichino
María Inés Dellavale

**La cuestión agraria y el agronegocio
desde una perspectiva histórica**

COORDINADORES

Gabriela Olivera

Gabriel Fernando Carini

Pablo Iparraguirre

Gina Lucía Aichino

María Inés Dellavale

La cuestión agraria y el agronegocio desde una perspectiva histórica

Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica

Facultad de Filosofía y Humanidades - U.N.C.

La cuestión agraria y el agronegocio desde una perspectiva
histórica / Gabriela Olivera ... [et al.]. - 1a ed . - Córdoba :
Corintios 13, 2018.
372 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-778-633-0

1. Desarrollo Agropecuario. I. Olivera, Gabriela
CDD 338.1

Diseño de tapa: Manuel Coll



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-No-Comercial-SinDerivadas 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Índice

La cuestión agraria en perspectiva. Procesos, actores y políticas en debate (siglos XX-XXI) <i>Gabriela Olivera, Gabriel Fernando Carini, Gina Lucía Aichino</i>	7
“Nuestra lucha es por la vida”. Conversaciones con el Grupo de Madres del Barrio Ituzaingó-Anexo	17
“No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo; son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes”: apuntes para una historia de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos <i>Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos</i>	25
Modernización y agricultura familiar. La producción de maíz en Marcos Juárez (1950-1970) <i>Pablo Iparraquirre</i>	53
Modernidad, agronegocio y pensamiento único en Argentina: entidades agrarias e instituciones estatales <i>Gina Lucía Aichino, Gabriela Inés Maldonado</i>	85
El “modelo sojero” de desarrollo. Contexto histórico, consecuencias y resistencias <i>Fernando Barri</i>	123

Un nudo que se desata: la ruptura entre la Federación Agraria Argentina y el Partido Socialista (primer trienio del siglo XX)

María Inés Dellavale..... 149

Acerca de cómo la confrontación no siempre es resistencia al agronegocio. El caso de las organizaciones agrarias empresariales, de la agricultura familiar, campesina e indígena, 1991-2002

Gabriela Olivera..... 173

Entre la confrontación y la profesionalización: estrategias de legitimación del agronegocio

Gabriel Fernando Carini..... 203

¿Área de investigación o subcampo historiográfico? Análisis de la agenda y los desafíos de los estudios sobre cooperativismo agrario en la actualidad.

Rocío Soledad Poggetti..... 239

Territorialidad y multiescalaridad, dimensiones inherentes a los conflictos socioambientales. Un análisis de las relaciones de un movimiento socioterritorial en disputa por el agronegocio

María Eugenia Isidro..... 279

Uso del territorio y modernización agropecuaria: el caso de Vicuña Mackenna (Departamento Río Cuarto- Córdoba)

Ana Laura Picciani..... 303

Agricultores familiares modernos: un estudio del territorio Pozo del Carril (Río Cuarto, Córdoba)

*Leandro Sabanés, María Villaberde, Erica Funes,
Nahuel Ramos*..... 331

**La cuestión agraria en perspectiva.
Procesos, actores y políticas en debate
(siglos XX-XXI)**

Gabriela Olivera

Gabriel Fernando Carini

Gina Lucía Aichino

Este libro tiene origen en un workshop que—durante el mes de mayo de 2017— organizamos un grupo de investigadorxs nucleados en torno al proyecto: “La cuestión agraria en la pampa cordobesa: políticas estatales y actores sociales (década de 1930 a la actualidad)” y la cátedra de Historia Agraria de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestro objetivo fue generar un espacio de debate y reflexión sobre las transformaciones socio-territoriales del pasado y del presente que pusiera en diálogo a investigadorxs de diferentes unidades académicas. Pretendíamos discutir las dimensiones políticas, sociales y económicas implicadas en los diferentes modelos de desarrollo agrario. Apenas nos pusimos a trabajar y a coordinar lxs posibles expositorxs cobró visibilidad el hecho de que lxs investigadorxs cuya actividad nos resultaba de interés traspasaban largamente el campo disciplinar de la historia. Eran geógrafxs, sociólogxs, ingenierxs agrónomxs, biólogxs... Se trataba, por lo tanto, no solo de un workshop interuniver-

sitario sino de uno eminentemente transdisciplinario, dado que buscó conjugar objetivos, lenguajes y actividades para avanzar en la construcción de una agenda común.

Otra cuestión que se puso en evidencia fue la importancia y preocupación que para nosotrxs y otrxs investigadorxs tenía la cuestión del agronegocio como problemática social, cultural y ambiental. Este modelo agrario cristalizado desde la década de 1990 y caracterizado por la intensificación del uso del paquete tecnológico (semillas genéticamente alteradas resistentes a herbicidas) genera la naturalización de una única racionalidad que busca optimizar los resultados través de la eficacia, la previsibilidad y la funcionalidad. Esta lógica de producción se relaciona con el contexto de profundización de otras políticas extractivistas aplicadas en los últimos años en numerosos países latinoamericanos como la megaminería a cielo abierto y el fracking. Implica, a su vez, la aplicación de una lógica de reproducción social y económica, de despojo territorial, exclusión social, mercantilización de bienes comunes, contaminación ambiental en una escala que no tiene precedentes históricos. Esto no solo pone bajo amenaza a la agricultura familiar, campesina e indígena, sino a vastas poblaciones rurales y urbanas, a la biodiversidad, a la salud humana.

Como resultante de esa configuración histórica, se generaron procesos de superposición territorial que involucraron a una gran diversidad de actores sociales –Estado, corporaciones agrarias, cooperativas, movimientos sociales, etc.– con una heterogeneidad de grados de poder, racionalidades e intereses que ocasionaron tensiones en (y sobre) los territorios. Por esta razón, nuestro horizonte de posibles participantes se amplió aún más: no nos interesaba solo el intercambio académico con investigadorxs de otras disciplinas sino que nos interpelaba la necesidad de tomar contacto con las experiencias de los actores que resistían a las consecuencias económicas, sociales y ambientales del agronegocio.

¿Cómo abordar este vasto y heterogéneo universo? Solo pensando cada testimonio, cada ponencia, como una de las piezas de un rompecabezas mayor, sin pretensiones de recorrer exhaustivamente la totalidad, pero sin renunciar a su horizonte cognitivo. Solo apuntando a pasar revista a problemas centrales era posible hacerlo. Así, nos encontramos, por ejemplo, con la resistencia de madres y jóvenes contra la contaminación ambiental, por el derecho a la salud y a la vida. Son los testimonios de lxs actorxs de los movimientos socio-territoriales que, como interlocutores, nos relataron cómo imaginaron y diseñaron estrategias de resistencia frente a actores públicos y privados vinculados al agronegocio y nos brindaron herramientas para pensar como investigadorxs y ciudadanxs alternativas al modelo hegemónico. Pudimos conocer y pensar conceptualizaciones sobre diversos aspectos del agronegocio, reconfiguraciones del empresariado rural y la agricultura familiar, conflictos rurales, el papel de la política y las agencias estatales en cursos de desarrollo rural local y en coyunturas históricas acotadas.

Por esta razón consideramos que esta puesta en común de saberes merecía ser escrita. Pensamos que este libro suma a un debate que integra, dialoga y tensiona visiones críticas sobre el agronegocio y la cuestión agraria; que discute, corroe, disputa el sentido común, la naturalización que las relaciones sociales que promueven sobre el mismo ciertos sectores académicos, políticos, corporativos y que está también ampliamente presente en los medios masivos de comunicación. El diálogo entre investigadores que comparten el compromiso en desentrañar y cuestionar la naturalización de este modelo agrario, desde diferentes disciplinas y tradiciones académicas que se focalizan en la realidad agraria pasada y/o presente, supone un esfuerzo –que nos mueve de un lugar cómodo, donde el lenguaje es común y abundan supuestos no explicitados– para llevarnos a un territorio de incertidumbre, de cierta incomodidad pero que, como contrapartida, nos permite discutir nuestras propias perspectivas de análisis, nuestras prácticas de investigación; en definitiva re-pensarnos como investigadorxs.

Dentro de las numerosas consecuencias que generó el modelo del agronegocio en la supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida de los actores sociales, la deforestación y la contaminación por fumigaciones son algunas de las abordadas en este libro. Ya con anterioridad a la hegemonía del agronegocio, Argentina había sufrido la pérdida del 70% de sus bosques nativos. Con la creciente orientación al monocultivo de la soja, la deforestación se profundizó exponencialmente. Córdoba presentó una de las mayores tasas de deforestación del planeta, una pérdida relevante de sus bosques nativos paralelamente al avance de la frontera sojera, lo que implicó el incremento de los desalojos y la represión de campesinos. El aprovechamiento sin límites del suelo para uso sojero ha llevado a fumigaciones masivas en el ámbito rural e incluso en el periurbano.

A pesar de los riesgos sanitarios del paquete tecnológico asociado al cultivo de la soja no han sido los gobiernos (en todas sus escalas) los que han promovido la toma de medidas para regular su uso, sino que fueron algunas de las poblaciones afectadas las que comenzaron a reclamar por reglamentaciones y que continúan resistiendo la contaminación ambiental. Es justamente en este marco de constante transformación territorial, donde se ha producido la emergencia de diversas estrategias de resistencia desarrolladas por colectivos sociales que buscaron visibilizar y denunciar dichas problemáticas, deconstruyendo fronteras y promoviendo el surgimiento de redes que enlazan acciones públicas y conectan lugares. Contamos en este libro con la presencia de dos de estos casos emblemáticos: las Madres del Barrio Ituzaingó-Anexo y los integrantes de la Asamblea de Río Cuarto Sin Agrotóxicos. Los textos elaborados por los mencionados actores, nos relatan cómo surgieron sus demandas, los dilemas organizacionales que atravesaron en los inicios, cómo los resolvieron y la situación actual de sus reclamos. Estos trabajos constituyen una fuente privilegiada de información que historizan el accionar de los movimientos socio-territoriales en la provincia de Córdoba y, fundamentalmente, son una invitación para mancomunar acciones y apuntalar iniciativas.

Acompañan a esos relatos un conjunto de investigaciones que han sido producidas tomando como anclaje el territorio de la provincia de Córdoba pero cuyos abordajes hacen evidente el estudio de diferentes escalas de análisis. En este sentido, mirados en conjunto –y parafraseando a Revel (1995)– los trabajos dan cuenta de cómo cada actor histórico participa, de cerca o de lejos, en procesos y entonces se inscribe en contextos de dimensiones y niveles diferentes, del más local al más global. No existe entonces un corte, ni menos una oposición, entre historia local e historia global. En ese amplio registro –si bien los capítulos se plantean diferentes problemáticas, apelan a diversos marcos de análisis, procesos históricos y emplean metodologías acordes a sus objetivos– se encuentran atravesados por un eje común: comprender, indagar, pensar formas alternativas en las articulaciones entre Estado, política, relaciones sociales y territorio. Más allá de esto, hemos organizado los artículos en tres ejes que posibilitan una lectura de más amplio alcance y que acentúa el carácter histórico tanto del modelo agrario vigente como de las prácticas, los discursos y las estrategias de los actores agrarios.

Dentro del primer eje denominado “Estado, políticas públicas y modelos de desarrollo agrario”, Pablo Iparraguirre centra su análisis en la mitad del siglo XX –momento de significativas transformaciones para el sector agropecuario– para desde allí pensar los procesos productivos y sociales. Para ello, toma como objeto de análisis un sujeto y una región vitales para el desarrollo productivo de la región pampeana como los productores familiares del departamento Marcos Juárez, ubicado en el corazón de la zona núcleo. En su recorrido, además, da cuenta de las dimensiones que adquirió la producción de maíz dado el acelerado proceso de innovación tecnológica. Por su parte, Lucía Aichino y Gabriela Maldonado –partiendo de precisar los alcances conceptuales de Estado, poder y desarrollo– toman como objeto de análisis los discursos y representaciones de agentes estatales vinculados a instituciones tradicionalmente comprometidas con el desarrollo rural en Argentina como el INTA. En su análisis las autoras observan

la predominancia de una visión de “progreso y modernización” en el discurso de las entidades rurales asociada a los avances técnico-científico-informacionales y la reproducción de estos discursos en los relatos de algunos productores y técnicos entrevistados. Dan cuenta, a su vez, de las tensiones existentes entre los lineamientos de las políticas públicas de tendencia modernizante y productivista frente a las prácticas de técnicos que buscan promover otras racionalidades. Así, el trabajo de Fernando Barri proporciona una síntesis explicativa de las consecuencias socio-territoriales de lo que el autor denomina como el “modelo sojero”, vinculando teóricamente y de manera sistemática la economía política crítica con lo ambiental. En su escrito recorre, por un lado, los antecedentes normativos y productivos que actuaron como factores que permitieron la emergencia del modelo socio-productivo actual y, por otro lado, las consecuencias ambientales que esas innovaciones produjeron en el territorio cordobés.

La legitimidad u oposición resulta clave para la comprensión de la conflictividad que las políticas estatales y los modelos de desarrollo agrario generan. En ese punto, actores sociales como los partidos políticos y las asociaciones agrarias cumplen un rol fundamental. Este es el hilo conductor del segundo eje: “Formas de mediación política de los actores colectivos del agro pampeano”. Bajo ese supuesto, el trabajo de María Inés Dellavale muestra las tensiones que se generaron –en la primera mitad del siglo XX– entre la Federación Agraria Argentina y el Partido Socialista por la definición de una estrategia política que permitiera construir un programa para el sector agropecuario. En ese recorrido, la autora describe los itinerarios y dilemas que la dirigencia agraria atravesó y que caracterizaron la dinámica organización de los primeros años. En otro extremo temporal, Gabriela Olivera ofrece un panorama general sobre el conjunto de asociaciones y entidades que pueden ser agrupadas en vertientes de apuntalamiento o resistencia al agronegocio y que redefinieron la estructura de representación del conjunto de los intereses agrarios que históricamente los había caracterizado. Resulta importante destacar, como lo hace la autora,

que la conflictividad en el espacio público que plantearon muchas de las asociaciones no cuestionaban las bases del modelo sino que, por el contrario, reclamaban disruptivamente para que se habilitaran condiciones más favorables en su internalización desde la década de 1990. Surgieron y crecieron organizaciones que sirvieron de “usinas” de pensamiento al agronegocio, otras –de corte empresarial– se apropiaron a las lógicas para adecuarse a los lineamientos del agronegocio mientras que las que nuclearon a campesinos e indígenas resistieron al “modelo”.

Dentro de las asociaciones agrarias que pueden ubicarse en el primer grupo, Gabriel Fernando Carini muestra cómo una entidad que históricamente había asumido la representación, la reivindicación y la defensa de intereses de productores del sur de Córdoba re-configuró sus discursos, incorporando elementos que incentivaban a sus asociados a asumir prácticas de corte empresarial. Este discurso, para el autor, tuvo una alta performatividad puesto que no solo incentivó la adopción de nuevas formas de gestionar el proceso productivo sino que, concomitantemente, supuso una operación discursiva que divulgó y legitimó el agronegocio. También la incorporación de perfiles organizacionales de corte empresarial es la preocupación central de Rocío Poggetti. En su trabajo, la autora retoma la discusión historiográfica sobre un actor clave: las tradicionales cooperativas agrícolas. Muestra a partir de un estudio historiográfico cómo es necesario repensar el funcionamiento de estas organizaciones en el marco del agronegocio. Las formas organizativas que tienen como objetivo denunciar los efectos perjudiciales sobre el ambiente o bien proponer modelos alternativos de organización de producción constituyen el objeto de estudio de María Eugenia Isidro. A través de las nociones de territorialidad y multiescalaridad da cuenta de los conflictos socio-ambientales tomando para ello la resistencia que generó la instalación de la planta de la multinacional Monsanto en la agrocuidad de Río Cuarto durante el año 2016.

Tanto las organizaciones empresariales y de resistencia como todo el amplio abanico de actores que participan en el entramado del agronegocio generaron nuevas territorialidades que modificaron sustancialmente la dinámica espacial característica de los modelos de desarrollo agrario previos. Los trabajos agrupados en el eje “Agronegocio y transformaciones territoriales” dan cuenta de estas mutaciones. Así, Ana Picciani, centra su interés en cómo las dinámicas globales del agronegocio le otorgaron nuevos significados a ciudades y pueblos del sur de Córdoba, imponiéndoles especializaciones productivas que responden a demandas extra-locales. En este sentido, la autora presta atención a una serie de empresas –muchas de las cuales tenían vínculos previos– que en el modelo del agronegocio asumieron nuevas funciones (generalmente asociadas con la comercialización, la capacitación y la venta de servicios para el agro) y que fueron una de las claves para explicar la rápida penetración del modelo productivo. Estas transformaciones territoriales también tuvieron correlato en las estrategias de reproducción de los productores. Leandro Sabanés, María Villaberde, Erica Funes y Nahuel Ramos nos introducen por medio de un exhaustivo trabajo de campo a la situación de uno de los sectores más vulnerados por las políticas económicas del último cuarto del siglo XX: los agricultores familiares. En su estudio los autores dan cuenta tanto de los cambios en la estructura agraria del sur de Córdoba como de una variada gama de estrategias que les permitieron garantizar su reproducción familiar.

En síntesis, estos trabajos parten de considerar al sector agrario como históricamente atravesado por un conjunto de relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que lo conforman, le otorgan especificidad y, a su vez, lo imbrican estrechamente con “lo urbano”, el Estado y la sociedad. Así, las prácticas de los actores, las acciones y representaciones de las organizaciones rurales y las políticas instrumentadas desde las agencias estatales instituyen y reinventan permanentemente “lo agrario” y “lo rural” y se erigen como aspectos centrales para la comprensión del mismo. Sobre ese presupuesto, los traba-

jos aquí reunidos abren un debate –necesariamente interdisciplinario/transdisciplinario– y reafirman una perspectiva de estudio que concibe al sector agrario y al espacio rural como construcciones sociales que se encuentran sujetas a procesos transformadores. Lxs autorxs revisan algunas nociones teóricas y conceptuales como las de agricultura familiar, nueva ruralidad, empresariado rural, modelos de desarrollo agrario, etc., las que constituyen herramientas para abrir preguntas y desarrollar las líneas de indagación de los procesos y sujetos agrarios.

El resultado de esos intercambios fue posible gracias a un conjunto de actores institucionales a los cuales queremos expresar nuestro reconocimiento. En este sentido, debemos agradecer a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba que sostenidamente a lo largo de los años financia los diferentes proyectos de investigación sobre el agro cordobés dirigidos por la Dra. Gabriela Olivera. Asimismo, el apoyo brindado por las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades resultó vital para la organización del mencionado evento y la publicación de este libro, en especial debemos agradecer a la Dra. Cecilia Defagó, entonces Secretaria de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a la Dra. Marta Philp, Directora de la Escuela de Historia, y al Área de Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Igualmente significativa resultó la colaboración del personal del área de Prensa y difusión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hacemos extensiva también nuestra gratitud a las Madres de Barrio Ituzaingó-Anexo y a los integrantes de la Asamblea de Río Cuarto Sin Agrotóxicos que, a partir de compartir sus experiencias de lucha, nutrieron los sentidos de nuestras investigaciones.

En virtud de lo expuesto, es decir, del compromiso de las instituciones estatales con la construcción de conocimiento es que se decidió que el formato de este libro fuera electrónico como muestra de nuestro compromiso con las políticas de acceso abierto. En este sentido, esperamos que este aporte sirva para que se profundicen los debates pendientes y, más importante, para contribuir a la corriente de

opinión y de resistencia de quienes pensamos que otro modelo agrario es posible y, sobre todo, necesario.

“Nuestra lucha es por la vida”. Conversaciones con el Grupo de Madres del Barrio Ituzaingó-Anexo¹*

A continuación transcribimos la intervención del Grupo de Madres del Barrio Ituzaingó-Anexo en el panel “Agronegocio, Deforestación y Conflictos Socio Ambientales”, realizado entre los días 22 y 23 de mayo de 2017 en el marco del *I Workshop Interuniversitario: La cuestión agraria en perspectiva. Actores, procesos y políticas en debate (Siglos XX-XXI)* en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.



Fuente: Facebook Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo
Recuperado de <https://www.facebook.com/Cristina.Vita.Chave.Marcela/>

1 * Transcripción y armado del texto a cargo del Dr. Gabriel Fernando Carini.

[Vita]: Nuestra lucha es por la vida y vamos a pedir un minuto de silencio por los que ya no están, por los que quedaron en el camino gracias a la contaminación que hemos sufrido.

[Marcela]: Soy Marcela del Grupo de Madres. Hace quince años que estamos en la lucha, una lucha bastante difícil. Los primeros años fue bastante difícil el tema de concientizar y saber lo que estaba pasando en el barrio. Nosotras empezamos en 2002, un grupo de vecinas que notábamos que se había enfermado un señor, de 55 años que tenía cáncer... Después una niña que en esa época tenía tres años. Después otra niña de quince años. Entonces nos comenzamos a preguntar cuál era el problema que había en la zona, porque en menos de una cuadra había tres casos de cáncer, uno de cáncer y dos de leucemia. Entregamos una nota al Ministerio de Salud. Obviamente, que si uno no hace lío nadie te escucha. Bueno... Entonces, en esa época teníamos un grave problema con el tema del agua... un agua salada, imposible de tomar. Esto fue en febrero de 2002. En esa época teníamos muchos problemas, aparte pasábamos a veces una semana, diez días sin agua... Los vecinos empezaron a ver este problema y aparte había mucha gente con problemas en el estómago porque pensábamos que era el agua. A todo esto, empezamos a llamar a los medios y nos dicen busquen gente para ver si sale la nota y así fue... Buscamos gente, todos iban por el problema del agua no específicamente por el problema de salud que había.

Así empezó y se armó el Grupo de Madres. Éramos en esa época aproximadamente trece mujeres. Siempre ha sido muy difícil más en esa época porque era el *boom* de la soja en el 2002. En los colegios, en las iglesias se estaba enseñando cómo se preparaba la hamburguesa de soja y nosotras, en la vereda de en frente, estábamos diciendo que esto nos estaba haciendo mal. A todo esto, nosotras teníamos la

ayuda de Raúl Montenegro.² Él nos enseñó muchísimo el problema de las fumigaciones y, bueno, salimos adelante... Las trece mujeres con algunos varones que nos ayudan, hicimos un pequeño relevamiento que lo llevamos al Ministerio [de Salud de la Provincia de Córdoba] donde, obviamente, miraron para otro lado. También tuvimos mucha ayuda de la gente de los medios. En aquella época se podía llamar a los medios, ahora ya no... Así salió el tema del barrio, nos dimos cuenta de que estábamos contaminados con agrotóxicos. Nosotras estamos viviendo prácticamente a una cuadra de donde era el campo, donde fumigaban con avioneta, fumigaban con mosquito. Ahí nunca había un control, a veces los chicos jugaban en la calle y pasaba la avioneta como si nada. Los chicos ahí atrás de la avioneta que les estaba tirando todo ese químico.

Se hicieron muchísimos análisis, muchos estudios de agua, suelo, incluso del aire. Todos daban que tenían químicos y metales pesados que es lo que tenía el tanque mayor de donde nos daban agua a nosotros en el barrio. Fue todo una sorpresa, nunca nos hubiésemos imaginado que estábamos en un lugar contaminado, que nos estaban envenenando, que éramos parte de la soja. Ahí empezamos a notar también que había mucha gente enferma, mucha gente con cáncer, muchos niños con malformaciones. Uno dice malformaciones y uno se da cuenta que es algo que ese niño lleva para toda su vida, una enfermedad. Hay niños que tienen cuatro o cinco médicos para poder salir adelante y no quiere decir que se vaya a sanar...

Es grave lo que está pasando, lo que está pasando en Córdoba es muy grave y nadie responde a nuestros problemas. Sabemos que Barrio Ituzaingó es una parte pero hay muchos “Barrios Ituzaingó” donde está pasando lo mismo. Acá nosotras hace quince años que estamos en esto y el gobierno mira para otro lado. Si vamos a la Legislatura son

2 Raúl Montenegro, es biólogo. Fue uno de los fundadores, en 1982, de la Fundación para la Defensa del Medioambiente (FUNAM). Es un reconocido militante ambientalista.

las mismas personas de hace quince años atrás. El gobierno que tuvimos cuando iniciamos con este problema era el de De la Sota-Schiaretti, Schiaretti-De la Sota, son las mismas personas y vos tenes que ir y golpearle la puerta para sacar una ley que queremos hacer...

[Vita]: Nosotras no teníamos conocimiento de lo que eran los agrotóxicos hasta que por la movilización de la gente del barrio se logra que se hagan los estudios del agua de los pozos que era la que se suministraba a todo el barrio. Ahí se encuentran los metales pesados y los agrotóxicos, agroquímicos. Palabra que nosotras no teníamos ni idea de lo que era, eso nos llevó a averiguar. Así nos enteramos que cada cien mil habitantes había uno o dos casos de leucemia por año y nosotros –en menos de una manzana– teníamos tres casos. Así fue como empezamos a averiguar, necesitábamos informarnos. Así fue como llegamos al Dr. Raúl Montenegro, al Dr. Barri. A informarnos para impedir las fumigaciones. Nosotras teníamos un campo a cincuenta metros de nuestras viviendas: yo estiraba la mano y tocaba la soja; fumigaba el avión y a mí me peinaba el agroquímico, me mojaba el flequillo todos los días. Cuando nos enteramos qué era lo que esa avioneta nos tiraba encima empezamos a entrar, nosotras, mamás, al campo a impedir la fumigación.

Nosotras siempre decimos que la tarea que hoy tenemos es conscientizar porque a nosotras nos mató el desconocimiento. De haber sabido que eso que nos tiraban encima no era agua bendita que era veneno no hubiésemos estado hoy sentadas acá diciendo: tenemos niños con malformaciones, tenemos personas con cáncer. Todo lo que se logró en el Barrio Ituzaingó Anexo fue gracias a la movilización de las mamás. De las trece madres y de las personas que se acercaron y colaboraron para que se haga un petitorio al Concejo Deliberante donde se pidió todos los estudios del barrio. Lo primero que se hace es declarar en emergencia sanitaria al barrio, luego se hacen los estudios... pero para lograr todo eso, tuvimos que salir, movilizarnos, cortar rutas, molestar a la gente, hacer eso por primera vez porque nosotras no

estábamos acostumbradas a salir a la calle a cortar la ruta pero eso lo tuvimos que hacer porque nuestros hijos se estaban enfermando, porque nuestros vecinos se estaban muriendo. Nosotras empezamos a protestar e impedir las fumigaciones en 2002 pero se dejó de fumigar recién en 2008. O sea que a pesar de nuestros reclamos y de los análisis que teníamos hechos no nos llevaban el apunte. Hoy tenemos niños con agrotóxicos en sangre, no conseguimos que esos niños sean tratados, hoy algunos ya son adultos. No conseguimos que esas personas tengan un seguimiento médico. El impacto ambiental de estos venenos los sufrimos en carne propia...

Lo que nosotras queremos saber hoy es que va a pasar con las personas que han estado expuestas porque sabemos que tenemos agrotóxicos en sangre. Si bien sabemos que hay ciento catorce chicos con estudio que dan que tienen agrotóxicos en sangre eso no quiere decir que el resto no lo tenga. Entonces queremos saber qué va ser en el futuro de nosotros. Hay niños con malformaciones, esos niños ya tienen una sentencia en su vida porque no pueden vivir como otro niño. Tenemos un centro de salud que carece de médicos, de medicamentos y de un equipo de salud mental. Ya no sé el tiempo que lo estamos pidiendo... Por qué pedimos un equipo de salud mental, porque los niños necesitan un tratamiento psicológico como la familia porque es muy difícil para un niño que no tiene un riñón, que tienen un montón de problemas, aceptar la situación y lo digo porque lo sufro en carne propia: tengo una nieta que tiene trece años, que está operada de vejiga y le falta un riñón. Esa niña hoy no quiere ir más al médico, no quiere tomar más medicamentos pero si ella no lo hace no vive. Eso a mí como abuela, me quita años de vida. Por mi hija, por mi hijo, por mi nieta y por todos, no solamente por lo que nos toca personalmente sino porque nos duele el resto, nosotros no le vamos a dar soluciones a la gente pero la gente viene a nosotros y nos plantea los problemas... y nos encontramos atadas de pies y manos porque no le podemos dar una solución; porque el Estado en esto se lavó las manos, no tenemos más derechos. Hoy desde acá pedimos que se sumen ustedes porque

tienen que ayudar. Por ejemplo, nosotros sin el apoyo del médico podemos decir estamos enfermos, estamos contaminados pero si el médico no apoya y no investiga la palabra nuestra no vale, no sirve. Tenemos un gran ejemplo que son la Madres de la Plaza de Mayo que nos han marcado el camino, empezaron dando vuelta a la plaza pidiendo justicia, fueron tratadas de locas... Nosotras hace tres años que recorremos la Plaza San Martín, por esas grandes maestras que hemos tenido en la vida y en la defensa de nuestros derechos... Nosotras decimos que a ellas les mataron los hijos con balas a nosotras nos están matando con veneno y no queremos ser cómplices de eso. Nosotras no pedimos que nos den nada, pedimos que se hagan cargo de los daños que han causado y no solamente para nosotros, porque este problema de la contaminación, de la fumigación, de la deforestación nos llega y nos afecta a todos.

[Chavela] Hace quince años que venimos luchando. No fue fácil para ninguna de las cuatro. Cada una llevamos nuestra mochila y bastante pesada. Esto me impulsa a mí a salir adelante porque a mí me tocó un niño con leucemia y dos con agroquímicos en sangre. Para una madre que le toquen a los hijos es tremendo. Estamos hartas de repetir siempre la misma historia, hablar, hablar... cada momento que uno cuenta esto, damos un paso atrás y recordamos todo... todo lo pasado, todo lo vivido. Para ninguna fue fácil. Siempre cargo con mi bella niña [se refiere a la foto que muestra al auditorio] que en su momento lo paso muy feo, muy feo. El tener que hacerle quimio tan pequeña... doy gracias a Dios que la tengo. Así como luchamos por la vida, muchos de nuestros vecinos han partido, tanto niños como jóvenes y adultos, eso duele, duele... Tener que entrar a la casa de un vecino y verlo tirado en la cama tipo cadáver en una cama, duele... Me tocó ver vecinos convertidos en cadáveres, me tocó ver mal formaciones... Entonces, como mamá duele pero vamos a seguir luchando para poder lograr que se haga justicia. Nosotras ya somos grandes pero vamos a tratar de dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, un futuro, un

Madres del Barrio Itzaingó

futuro sin enfermedades. Basta de Monsanto, basta de todo. Duele... vamos a seguir y agradecer a todos los que se prendan y nos apoyen...

“No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo; son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes”: apuntes para una historia de la Asamblea
Río Cuarto sin Agrotóxicos

Introducción

La Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos (ARCsa) es un movimiento socio-territorial compuesto por vecinxs autoconvocadxs, organizaciones, instituciones, en resistencia al modelo agropecuario hegemónico extractivista-contaminante. De estructura flexible y horizontal parte de un análisis profundo de la realidad social, económica, política y ambiental de la región para ayudar al crecimiento de propuestas y modelos alternativos de producción que consideramos viables y necesarios, como el agroecológico.

En sentido amplio, uno de los objetivos principales de la Asamblea es la defensa tanto de los bienes comunes como del cumplimiento del derecho a un ambiente sano y la consolidación de la soberanía alimentaria. Para actuar en el territorio apelamos tanto a vías administrativas e institucionales como a acciones directas no violentas cuando las primeras ya han sido agotadas y no han dado resultado.

En la búsqueda de modelos alternativos de desarrollo, sostenibles en el tiempo y respetuosos con la vida, reivindicamos los que

se basan en el concepto “buen vivir” y las resistencias que continúan llevando a cabo distintas comunidades de pueblos originarios luego de más de 500 años de genocidio.

Los inicios

Como antecedentes a la conformación de la ARCsa, entre los años 2007 y 2010 se comenzó a visibilizar entre lxs vecinxs de la ciudad de Río Cuarto el efecto de las fumigaciones, parte del paquete del modelo hegemónico del agro, el agronegocio. Desde los barrios de las periferias surgen expresiones de malestar ante los efectos nocivos a la salud. Durante un tiempo no hubo una articulación concreta por parte de los afectados y las denuncias que presentaron quedaron como casos aislados por lo que no se logró que se reglamente una zona de resguardo ambiental. Pero de a poco se fue constituyendo un grupo de personas que tenía la misma preocupación y de lo que mucho se hablaba en el Vivero Comunitario Wichán Ranquén.¹ Muchxs de sus integrantes son quienes impulsaron un espacio que se denominó “Vecinos por un Río Cuarto sin agrotóxicos” hacia finales del 2010, año en el que se realizaron actividades como, por ejemplo, un panel llamado “¿Somos una ciudad fumigada?”.

En el año 2012, el juicio de “Las Madres de Barrio Ituzaingó” fue el disparador social, político y jurídico central para la revitalización de la ARCsa, por ello nos sentimos lxs hijxs de esas madres en la resistencia. Este fue un hecho crucial ya que fue el primer caso en el que se llevó a la justicia a un aero-aplicador y dos productores que podían ser encontrados culpables por afectar la salud de la población de Ituzaingó. Así, desde ese año se conformó la ARCsa con un grupo

1 Es una organización de base, con sede en la ciudad de Río Cuarto, abocada a la lucha por la conservación de FLORA NATIVA y la BIODIVERSIDAD en el ecosistema del espinal [N.E.].

estable de personas. Nos constituimos como un movimiento socio-territorial que articula con otras organizaciones sociales, culturales, sindicales, partidos políticos, vecinos y sectores de la administración pública como, por ejemplo, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) desde el trabajo del Observatorio de Conflictos Socio-ambientales y el Centro Agroecológico que funcionaron en ese ámbito durante 4 años.² Para ese momento las consignas de las marchas, concentraciones, festivales iban desde el “apoyo a las Madres de Barrio Ituzaiago”, “contra el modelo extractivista” hasta el pedido de la “erradicación de los depósitos de agroquímicos cerca de las viviendas” y la “No instalación de Monsanto en Río Cuarto y Córdoba” de la que se había empezado a rumorear.

En octubre de dicho año se realiza un “Encuentro Regional por una vida sin agrotóxicos, del modelo extractivo al modelo ecológicamente sustentable” donde además de visibilizar las consecuencias sanitarias, ambientales, sociales del modelo se comenzó a incorporar la parte propositiva con ejemplos concretos donde otro modelo de producción es posible, viable y cada vez más urgente y necesario.

Desde el año 2013 en adelante, hubo tres ejes principales de lucha en relación con la instalación de Monsanto en la ciudad; la visibilización de Bio4 como industria contaminante y parte del modelo extractivista del agronegocio; y la propuesta de un ejido urbano agroecológico.

2 Este ámbito dentro de la UNRC pretende constituirse como un espacio donde la comunidad universitaria junto con organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales debatan y analicen diferentes conflictos existentes y/o emergentes en la ciudad y la región y articulen acciones para la búsqueda de posibles soluciones de las problemáticas mencionadas. Busca potenciar la capacidad de gestión de las comunidades en conflicto, a favor de sus derechos ambientales, planteados como derechos humanos según el Artículo N° 41 de la Constitución Nacional. Asimismo, tiene como objetivo generar una verdadera incidencia que implique la creación de líneas de investigación, docencia y extensión. Para más información se puede consultar: <https://www.unrc.edu.ar/unrc/unijysoc/obspsocamb.php> [N.E.]

El NO a Monsanto

A fines del 2012, tras la noticia de la posible instalación de la multinacional Monsanto en la ciudad nos movilizamos para recibir como apoyo el posicionamiento público de la UNRC en rechazo de su instalación. El mismo se materializó en la resolución rectoral 322/12 después de una extensa y agitada sesión del Concejo Superior. Se puede leer en su artículo n° 7:

“Expresar públicamente el desacuerdo de la UNRC respecto de la instalación de empresas multinacionales del monopolio del agronegocio en particular Monsanto, en la Ciudad de Río Cuarto (...) en relación a que las mismas representan paradigmáticamente un avance de dicho modelo de acumulación por desposesión que pudiera vulnerar la soberanía nacional y popular, con posibles consecuencias ambientales y con el agravante que no se informó debidamente a la población (...).”

Este apoyo público le dio gran legitimidad a nuestro reclamo y nos acompañó durante los siguientes años de lucha. La última actividad del año fue una “bicicleteada por la vida”, para visibilizar la triangulación entre FocSeed (empresa local de insumos del agro) y Monsanto. A través de Focseed, la multinacional gestionó en la Municipalidad la construcción de su pretendida planta. Tras los anuncios de Monsanto y reuniones que tuvimos con funcionarios municipales desentramamos el encubrimiento y realizamos la bicicleteada hasta las instalaciones de la empresa local en la que realizamos pintadas a modo de escrache. La actividad culminó con varias vueltas alrededor de la plaza central con las consignas “Fuera Monsanto de Río Cuarto, Córdoba y América Latina”, ocupando el espacio público y manifestando nuestro repudio de un modo pacífico pero decidido.

En el mes de junio, conjuntamente con el Observatorio de Conflictos Socio Ambientales de la UNRC organizamos la Jornada “De-

rechos Ciudadanos Ambientales, nuevas implicancias luego del Juicio de Barrio Ituzaingó Anexo” en la que contamos con la presencia del abogado ambientalista Darío Ávila, el fiscal Carlos Metheu, el entonces Legislador provincial por el Partido Socialista Roberto Birri y la Magister Lilian Martella, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UNRC. A esto se le sumaron representantes de las organizaciones sociales.

Para la lucha contra Monsanto en primera instancia realizamos pedidos de audiencia a la Municipalidad, a la Defensoría del Pueblo, al EDECOM (Ente Descentralizado de Control Municipal); y también los distintos documentos con información pública en relación a la construcción de la planta. Ante cada falta de respuesta, y agotadas las instancias administrativas, realizamos concentraciones en espacios públicos, escraches, intervenciones artísticas (que son las acciones habituales de las asambleas socio ambientales). Muchas de estas intervenciones fueron en las escalinatas del Palacio Municipal, con gran presencia y acompañamiento de vecinxs, artistas, expresiones musicales, lecturas de documentos, radios abiertas. En el edificio del Centro Cívico, sede local del Gobierno provincial (Río Cuarto es capital alterna dos días al mes) realizamos una intervención personificando al entonces gobernador José Manuel De la Sota y Monsanto en la que “celebramos” su casamiento arrojando al aire soja en lugar del augurioso arroz. En la Exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto de ese año hicimos un escrache en el puesto de Monsanto que se presentó en ese marco por primera vez como tal. En el marco de una jornada provincial de protesta contra la instalación de Monsanto, hicimos en octubre un corte de ruta intermitente en la ruta nacional n°8 (una de las arterias emblemáticas para el transporte de cereales) en el que difundimos los motivos de la acción con información sobre lo que la multinacional representa y el significado de la planta en nuestra ciudad y la monstruosa que había empezado a construir en Malvinas Argentinas. Tuvimos gran apoyo de las personas que circulaban en la ruta, incluso es para destacar que los mismos camioneros también lo manifestaron.

En octubre hicimos un festival en la costanera del río en el que bandas locales tocaron en apoyo al reclamo y tuvo una gran convocatoria; difundimos la información de cuanto venía sucediendo en Malvinas Argentinas y en nuestra localidad y lo que Monsanto representa.

Un momento crítico fue cuando el *lobby* de Monsanto tomó una iniciativa proactiva de ofensiva, invitando a los medios de comunicación a que recorran la planta para que vean que “no contamina”. Nos presentamos de sorpresa y logramos presionar aprovechando la presencia de las cámaras para poder ingresar. Desbaratamos esa manipulación mediática ya que encontramos dos pruebas gravísimas: granos de maíz y huellas de tractor en un depósito, siendo que la planta no tenía el permiso y las habilitaciones para funcionar. Además, en la parte externa señalamos un depósito de agrotóxicos que no figuraba en los planos de sus informes presentados al municipio y en el que se observaban serios errores de instalación. Los medios terminaron así escuchando las dos versiones y también nos tuvieron que hacer una nota a nosotrxs y trascendió en las noticias locales lo que Monsanto omitía. En conjunto con el Observatorio de Conflictos Socio Ambientales conseguimos el estudio de impacto ambiental (EIA). El mismo Observatorio lo evaluó e hizo un análisis negativo señalando graves falencias técnicas. La más importante: el EIA se presentó cuando la construcción de la planta estaba concluida. El biólogo Raúl Montenegro (quién también estuvo evaluando el EIA) fue aún más contundente: “esto es un mamarracho”. El informe del EDECOM también desaprobó el EIA.

La planta iba a darle empleo permanente a sólo veinte personas, con lo cual tampoco era éste un argumento fuerte que favorecería a la multinacional. Y otro hecho importante para nuestra lucha fue que en Malvinas Argentinas ya había comenzado el acampe y bloqueo a la planta. Daniel Arzani, intendente de aquella ciudad, estaba realmente complicado.

Para el 28 de noviembre de 2013, desde la Asamblea teníamos ya organizado el festival “EL NO A MONSANTO ES AHORA” en la plaza del Palacio Municipal. Así, el Intendente Juan Jure prohibió por decreto la instalación de Monsanto para “garantizar la paz social” que fue su principal argumento, aunque lo que el poder hegemónico visibilizó fue la desaprobación del EIA, y a raíz de esto muchos sectores de la sociedad tomaron por cierto que el Intendente de Río Cuarto realmente velaba por el derecho a la salud ambiental de los ciudadanos. Aunque el decreto del Intendente fue previo a la actividad que teníamos prevista para el 28, la realizamos para darle fuerza a esta construcción que fue colectiva, festejar la victoria de la decisión soberana de lxs ciudadanxs que le dijeron “NO A MONSANTO”. Iniciamos una marcha en la Plaza central de la que participaron más de 1000 personas (siendo la segunda más masiva del año después de la del 24 de marzo que es la más convocante en la ciudad) y culminó en el festival en la Plaza Olmos, frente al Palacio Municipal. El comunicado que leímos contó con el apoyo de unos sesenta espacios colectivos, gremios, entidades institucionales.

También se comenzó a articular con otras luchas provinciales como la que surge del Festival “Primavera sin Monsanto” en la que comienza el acampe y futuro bloqueo a la multinacional en la localidad de Malvinas Argentinas, de la cual participamos en dicha oportunidad y en actividades organizadas por la asamblea Malvinas Lucha por la Vida en los tiempos que siguieron, entendiendo que somos parte de la misma lucha. También en este apartado cabe mencionar la articulación y participación en el espacio colectivo Coordinadora provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, que si bien no tuvo una larga trayectoria, nos permitió vincularnos a otras asambleas y organizaciones de la provincia entendiendo que todas las resistencias estamos atravesadas por lo mismo: la defensa de la vida, la soberanía en todas sus facetas, la construcción de un mundo en el que quepamos todxs. Hacia finales del 2013 se realizó en ciudad de Córdoba una marcha y festival por la emergencia ambiental a nivel provincial.

Pasando de la resistencia a la propuesta nace la campaña “Río Cuarto Agroecológico”

Producto de estas actividades de acción directa conseguimos instalar cada vez más en agenda el tema en los medios de comunicación, ya que estos mismos cubren principalmente noticias que tienen que ver con reclamos. De esta forma, las autoridades municipales empezaron a recibirnos y después de las muchas reuniones con funcionarios y con el mismo Intendente es que conseguimos que se convoque a una audiencia pública en el Concejo Deliberante para poner en discusión qué agricultura queremos lxs habitantes de la ciudad. En dicha audiencia participaron alrededor de 70 disertantes entre ellxs vecinxs, científicxs, políticxs, productores, especialistas o profesionales, damnificadxs, representantes de instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales. Durante la extensa jornada quedó sumamente claro que a pesar de las enormes diferencias en los discursos de quienes defienden el agronegocio y quienes queremos la agroecología, el modelo transgénico es nocivo desde muchas dimensiones de análisis y el agroecológico no sólo que es viable sino que se sustenta en un importante desarrollo científico, técnico y praxis cotidiana.

Para poder organizar la audiencia hubo un arduo trabajo y camino en la articulación con las instituciones estatales desde el ejecutivo municipal que dio el aval para que lo hiciéramos como con los diferentes bloques de los partidos con representación en el Concejo Deliberante. Asimismo coordinamos tanto la logística de invitación a referentes locales, provinciales y nacionales en las distintas áreas como también la difusión y cobertura de la misma con pegatinas de afiches en la ciudad, volanteadas, *spot* en radios, etc.

Pasando de la resistencia a la propuesta nace la campaña “Río Cuarto Agroecológico” con un Proyecto de Ordenanza que plantea un proceso de transición y desarrollo hacia la producción Agroecológica en el ejido municipal de Río Cuarto. Este Proyecto será presentado en

el Honorable Concejo Deliberante como Iniciativa Popular acompañado por la firma de ciudadanxs locales. Para ello, durante la mayoría de los sábados durante el 2013 y el 2014 estuvimos presentes en la Plaza central a la mañana con las planillas; muchas veces también con la propuesta de huerta en maceta, para lo que llevamos tierra y semillas y las personas acudían con envases como botellas y se volvían a sus hogares con semillas sembradas. Otras veces nos acompañaron músicxs, artistas callejeros, el Vivero Comunitario Wichán Ranquén; o llevamos equipos de sonido para difundir los *spot* que teníamos armados, otras informaciones y también música.

El proyecto plantea una disminución progresiva de la aplicación de los agrotóxicos utilizados en la producción (tanto extensiva como hortícola), protección del bosque nativo con franjas de entre 50 y 100 metros rodeando cursos de agua y zona urbana y una zona de resguardo ambiental o zona de protección libre de fumigaciones a 500 m de la zona urbana y a 300 metros de toda casa o centro poblado del periurbano donde se puedan realizar prácticas productivas sustentables como las agroecológicas.

Durante el 2014 continuamos las actividades en relación al Proyecto Río Cuarto Agroecológico que es como la columna vertebral del que se desprenden nuestras acciones. Así, como relatamos más arriba, continuamos con la juntada de firmas que avalan el Proyecto de Ordenanza en plazas, eventos, charlas, encuentros, colegios, la Jornada Mundial de lucha contra Monsanto, los talleres de huerta en maceta, educación ambiental en escuelas, ciclos de cine, organización de conferencias y disertaciones, entre otras.

En relación a la multinacional Monsanto, en mayo de 2014, judicializa el decreto que prohibió su radicación con una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Pero elige mal la figura, alega discriminación frente a otras empresas que se instalaron en la zona. La justicia corrige a Monsanto, le indica cuál es la figura legal con la que debe iniciar la demanda y le da un plazo de treinta días há-

biles para cambiar la nominación de la misma. Esta resolución, alega la defensa del municipio, es un caso inédito en la historia de la justicia cordobesa. No existen precedentes de algo similar ni para personas físicas ni para personas jurídicas y como la Justicia siempre se basa en fallos precedentes, en este caso se aparta de este proceder otorgando esta posibilidad. Frente a semejantes irregularidades, la defensa del gobierno local vuelve a hacer planteos en la Justicia, esta vez en el Tribunal Superior de Justicia, ya que al haber quejas por lo resuelto en la Cámara de Apelaciones, pasa a una instancia mayor. Así llegamos al fallo de septiembre del corriente año (septiembre de 2017) que le permite a Monsanto reconducir el proceso y presentar una nueva demanda en los tribunales locales. Hecho ante el cual estamos en alerta permanente y considerando la posibilidad de que realicen los trámites bajo la firma de Bayer, debido a que es de público conocimiento que anunciaron su fusión.

En su momento, ante la demanda al municipio, volvimos a mantener contacto con el Ejecutivo, principalmente con el asesor legal para entrar en conocimiento de los detalles y así estar alertas siguiendo los procedimientos. Repudiamos públicamente la maniobra de la multinacional y el fallo de la Cámara de Apelaciones. Desde la Municipalidad nos facilitaron los materiales necesarios para hacer pasacalles con consignas de rechazo a Monsanto. Durante varias semanas nos reunimos en asamblea en el espacio que se conoce como la herradura del Andino y mientras planteamos el temario de la reunión, debatíamos y decidíamos, pintamos los diez pasacalles que luego colgamos en calles de distintos sectores de la ciudad. Fue realmente una sorpresa incluso para nosotrxs que a esta actividad se acercaron muchas personas que apenas conocíamos en algunos casos y que no participan de las reuniones habituales de la Asamblea pero sí estaban comprometidas con la decisión. Pudimos comprobar que esta construcción colectiva es siempre más grande e invisible.

La lucha contra Bio4

La lucha contra Bioetanol Río Cuarto S.A.(Bio4)³ consistió en el acceso a la información y visibilizar cuestiones como el gran consumo de agua que requiere el funcionamiento de la planta, al mismo tiempo que en el Sur de la ciudad en cercanías a la industria el agua es un bien escaso o suele tener presencia de arsénico. La contaminación ambiental con los desechos o efluentes sin tratar y los olores que genera la industria que llegan a todo el sur de la ciudad. También realizamos denuncias principalmente al EDECOM al constatar que la planta había comenzado a funcionar sin todas las medidas de seguridad requeridas, como por ejemplo las piletas de tratamiento de efluentes, sin la habilitación de EMOS (agua), entre otras. En otra oportunidad, vecinxs nos comunicaron que una empresa de camiones atmosféricos desechó directamente al río toda su carga de un contenido amarillo fluor y que procedía de Bio4. Durante buena parte del 2013 y 2014 un pequeño grupo de vecinxs de la planta se mantuvieron activos y oponiéndose a la instalación de la planta; más adelante reclamaron por su derecho a vivir en un ambiente sano, al padecer los insoportables olores de los gases que emite la planta y que tristemente generaron afecciones en su salud. Con el correr del tiempo, debido al *lobby* que la empresa hace en la ciudad y las acciones demagógicas que tiene para con los vecinxs, lxs que estaban movilizados no soportaron tanta presión y hostigamiento y dejaron de protestar.

Los cuestionamientos de fondo que nosotrxs hacemos consisten en que así como decimos “agrotóxicos” y no “agroquímicos” o “fitosanitarios”, en pos a llamar las cosas por su nombre, empezamos a hablar de que se están generando “agrocombustibles” en lugar de

3 Empresa agroindustrial formada por productores agropecuarios de la región de Río Cuarto. Tiene por finalidad la transformación de granos en agrocombustibles. Para más información se puede consultar: <http://www.bio4.com.ar/> [N.E.]

“biocombustibles” como ellos le llaman. Es decir, de granos que podrían servir de alimentos se produce etanol que se exporta en su gran medida para abastecer tanques de autos al mezclarse con las naftas. Asimismo, se cuestiona que es un proceso desfavorable energéticamente, comprobado por numerosas investigaciones locales y mundiales y ni sustentable ecológicamente, ni ético humanamente.

Miles de hectáreas destinadas a la producción de granos transgénicos (tecnología de la que se desconocen los efectos en el consumo); más la cantidad de litros de agrotóxicos que requiere este paquete tecnológico y que provienen de la industria petrolera, lo que hace que se consuma petróleo para producir combustible como modelo “alternativo” ante la inminente escasez del “oro negro”, un claro sinsentido; más los litros de combustible destinados al transporte de los granos hacia las planta que producen agrocombustible como Bio4; más la cantidad de agua potable (para resguardar el funcionamiento de las maquinarias) que consumen (4 litros de agua para 1 litro de agrocombustible, igual que la megaminería).

Además de esto, se suma el desastre ambiental y los perjuicios comprobados en el mundo entero que genera el agronegocio en general, la deriva de los agrotóxicos que contaminan el agua de las napas y la lluvia, la tierra, el aire; la pérdida y erosión de suelos; en cada grano se van los nutrientes que co-evolucionaron con el suelo durante miles de años, suelo que en muchos casos ya carece de vida y, por eso, el uso de fertilizantes es cada vez mayor. El desmonte de bosques nativos y pérdida de la biodiversidad son producto de la “Revolución Verde” y de este paquete tecnológico que empresas como Bio4 contribuyen a que se sostenga.

A pesar del *lobby* y los millones con los que se compran, medios, periodistas, políticos, agrónomos, para seguir desinformando, en los últimos años las consecuencias nefastas del modelo se empezaron a sentir aún en los sectores ligados a la producción; millones de hectáreas inundadas que afectan principalmente a Buenos Aires, Córdoba,

Santa Fe, La Pampa y San Luis y que son el efecto de tantos años de monocultivo que han hecho que suban las napas freáticas, al mismo tiempo que el suelo se impermeabiliza y el agua de lluvia corre en vez de infiltrarse generando crecidas de los ríos cada vez más incontrolables. El costo económico que acarrea el Estado ya sea en salud en los hospitales públicos por el aumento en la frecuencia de ciertas enfermedades ligadas a los agrotóxicos, los gastos en infraestructura por rutas anegadas, y obras hídricas millonarias para encauzar el agua que sobra por el bosque que nos falta; es enorme y se contradice con los eslogan de “producción sustentable” y “amigable con el ambiente” como desde los sectores del agro la promocionan.

A pesar de estos cuestionamientos nunca pudimos acceder al Estudio de Impacto Ambiental de la empresa, ni siquiera a través del Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales de la UNRC, ni los reclamos ante la Defensoría del Pueblo y tampoco tuvieron efecto favorable las acciones directas de denuncia que llevamos a cabo; pero a pesar de esto los vertidos crudos que denunciábamos que se estaban realizando se terminaron con la puesta en marcha de lagunas para el tratamiento de los desechos y determinadas irregularidades que tenían las fueron poniendo en orden conforme las denunciábamos al EDECOM. Por este tema, nos vinculamos a Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro (VUDAS) que llevan adelante una lucha contra la empresa Porta hnos⁴ en barrios de la zona sur de la capital provincial y tratamos de visibilizar su lucha cada vez que hemos tenido alguna oportunidad.

4 Empresa, fundada en 1882, abocada a la producción y elaboración de alcoholes de alta calidad, vinagres y acetos balsámicos. También se dedica al diseño y construcción de plantas de etanol.<http://portahnos.com.ar/> [N.E.]

Bosque Nativo

Entre el 8 y 10 de diciembre participamos del 28 Encuentro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) en la localidad de La Rioja. En este mismo mes comenzó a conformarse la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa) cuando un Proyecto de Ley de Bosque impulsado por el bloque oficialista de legisladores provinciales de Unión por Córdoba (UPC) y sectores del agro vinculados a la Confederación Rural de la Tercera Zona (CARTEZ) tomó estado parlamentario en el recinto del Poder Legislativo de Córdoba. Estuvimos participando activamente en todas las acciones que velozmente se organizaron. La CoDeBoNa es un espacio asambleario del cual forman parte entre ochenta y cien organizaciones de las distintas regionales de la provincia, más el Movimiento Campesino de Córdoba, pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y espacios académicos. El altísimo grado de movilización y conciencia socio ambiental es una característica de la Córdoba actual, hecho por el que se puede comprender lo rápido que nos nucleamos y organizamos. Sólo durante esos días de diciembre (que sabemos que es un mes en el que generalmente la sociedad está distraída) se hizo una radio abierta en las puertas de la Legislatura; al señalar que no se respetó el proceso participativo que exige la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos y Protección de Bosques Nativos, convocaron para una audiencia pública en la localidad Villa de María del Río Seco (un paraje al norte de la provincia a escasos km de Santiago del Estero); inmediatamente se presentó un recurso de amparo pidiendo la nulidad de esa audiencia primero porque no responde a lo requerido por la Ley 26.331 y segundo por la ubicación, porque claramente no había voluntad para garantizar la participación ciudadana; luego se hizo una vigilia con Festival en la Plaza del Fundador (a metros del recinto de la Legislatura) ese día previo al de la Audiencia (21/12); la Justicia falló a favor de la apelación presentada por CoDeBoNa y la Audiencia quedó nula. El día 22 se hizo otro Festival en la Plaza del Fundador

que se desbordó de personas de toda la provincia y de la ciudad capital que nos manifestamos una vez más en rechazo del proyecto del oficialismo y exigimos un verdadero proceso de participación ciudadana ya sea para la actualización del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) (que es lo que exige la Ley 26.331 que se actualice cada 5 años) o para un nuevo proyecto de ley, consignas que siguen acompañando nuestras acciones. El año culminó con la primera Marcha en Defensa del Bosque Nativo el 28 con la movilización de alrededor de 10.000 personas y posterior festival que logró que el proyecto no fuera tratado en el 2016 (cifra importante para el momento del año y con apenas 16 días de acciones en relación al tema).

Como Asamblea, además de ser parte y participar de las distintas instancias de lucha en la misma capital de la provincia, estuvimos acompañando con distintas acciones en la Plaza central de la ciudad principalmente. Desde la juntada de firmas que acompañaron al recurso de amparo hasta concentraciones con festivales, música, radio abierta principalmente el día de la marcha del 28.

Durante el 2017, enero se fusionó con diciembre en la continuidad de acciones de la CoDeBoNa que nos encontró recorriendo localidades de toda la provincia para las reuniones semanales en las que fuimos consolidándonos como grupo, trabajo en comisiones, lineamientos, objetivos, estrategias, la necesidad de visibilizar el tema. Se hizo una Caminata y Festival el 28 en Cosquín, en medio de los días que la localidad serrana desborda de turistas que van a su reconocido festival. El primero de febrero se realizó la segunda acción legal, un reclamo administrativo para garantizar el proceso de participación ciudadana, sin el cual en caso de aprobarse el proyecto, era inconstitucional por violar la normativa nacional (Ley 26.331). El día 3 participamos de la Conferencia de Prensa en la Plaza del Fundador (Córdoba) en la que establecimos nuestro posicionamiento como CoDeBoNa respecto al proceso de actualización de OTBN. Continuamos las reuniones que pasaron a ser cada 15 y organizamos la Marcha y Festival del primero de marzo con las consignas de archivo del Pro-

yecto del oficialismo y exigiendo el genuino proceso participativo. Esta acción trascendió las fronteras provinciales con la participación de alrededor de 40.000 personas y el conflicto pasó a tener conocimiento nacional. Continuamos dándonos distintas acciones y estrategias en los siguientes meses como la elaboración y presentación de la Quinta Cartilla de Presupuestos Mínimos de Participación Ciudadana; reunión con el Ministro de Ambiente de la Nación Sergio Bergman; con Enrique Viale, asesor del Senador Pino Solanas; con ONGs y fundaciones ambientalistas tanto dentro como fuera de la provincia; una nueva acción legal, esta vez una denuncia penal en la que tres ex – funcionarios públicos fueron acusados de haber habilitado acciones de desmonte ilegal en 20.000 has de bosque y en asociación ilícita con un ex-abogado de CARTEZ. También desde diciembre rechazamos el Proyecto de Plan Provincial Agroforestal señalando los distintos motivos por los que es un proyecto a medida del agronegocio y avance en detrimento del Bosque Nativo (el Ejecutivo provincial había ya firmado un convenio de 20 millones de dólares con la empresa misionera BioFábrica que desarrolla una tecnología de clonación de pinos y eucaliptos, razón por la cual todas nuestras acciones cayeron en saco roto); realizamos la Marcha y Festival del 28 de junio que fue seguida también por los medios nacionales; visibilizamos y denunciemos los incendios de origen antrópico que devastaron alrededor de 16.000 has principalmente en el Valle de Punilla, el corredor de Sierras Chicas y Traslasierra. Al día de la fecha continuamos realizando las asambleas plenarias en las que seguimos conformando nuestras líneas de acción y resistencia, principalmente en cuanto a la Ley de OTBN, todo lo que está en relación a protección y conservación del bosque nativo y también la articulación con las luchas socioambientales de toda la provincia y también nacionales.

Otras actividades

A lo largo de estos años hemos participado de diferentes actividades en pos de lograr nuestros objetivos. A continuación enunciamos algunas de las más relevantes. En 2013, participamos como voluntarios en el proceso de encuestas que el Grupo GEMA (Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental) de la Universidad de Río Cuarto realizó sobre la población antes de tomar las muestras de sangre que analizaron en sus investigaciones de genotoxicidad en el Barrio Jardín Norte, en las manzanas que se encontraban más cercanas a un campo en el que por ese entonces, se realizaban fumigaciones en la producción agrícola.

Desde el año 2014 dimos inicio a un ciclo de cine ambiental y debate que se sostuvo cada 15 días a lo largo de todo el año rotando en distintos espacios de la ciudad. En este marco, un título para destacar es la proyección de la película “Desierto Verde” dirigida por Ulises de la Orden (quien nos cedió los derechos para su libre difusión) en un Instituto de Formación Terciaria y en la sala de cine Centro Cultural Leonardo Favio.

En 2015, luego de asistir a un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en el bloqueo a Monsanto, volvimos con el compromiso de organizar una jornada homenaje al científico y militante Andrés Carrasco, quien investigó los efectos teratogénicos del glifosato en embriones de anfibios en el 2009. Sus estudios constituyen una prueba irrefutable de lo que continua sucediendo en los territorios, y son muy necesarios para las organizaciones socio-ambientales, campesinas, familias de pueblos fumigados y activistas que denunciamos los efectos de muerte del modelo hegemónico, y que los medios corporativos nos presentan como grupos de fanáticos, extremistas, anti-progreso y desarrollo, carentes de rigor científico. Pero la verdad que Carrasco demostró en el laboratorio le significó una persecución y hostigamiento constante desde que publicó sus resultados en el Diario Página 12, incluso por la misma academia, aun siendo que

en años atrás había sido Director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

La Jornada “Día del desagravio, hacia la construcción de una Ciencia Digna” realizada en el Aula Mayor de la UNRC contó con el aval de la Facultad de Ciencias Exactas. Participaron referentes del ámbito científico como Raúl Montenegro de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Delia Aiassa y Fernando Mañas de la UNRC, Damián Verzeñassi de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Alicia Massarini de la Universidad de Buenos Aires. Además, asistieron los vecinos damnificados de Monte Maíz de la Red de Prevención de Monte Maíz.

El momento más emotivo de la jornada fue cuando se plantó un algarrobo, emblema del bosque nativo, en la Reserva de Bosque Autóctono “El Espinal”. Un árbol, que es mucho más que sólo un pedacito de vida; el algarrobo que fue hecho de semilla, por las manos y corazón de personas del Vivero Comunitario WichánRanquén y cuidado por una compañera de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos por dos años en una maceta hasta su trasplante en la jornada de 2015. Este algarrobo se ha venido nutriendo desde ese día en parte, de las cenizas del mismo Andrés que fueron traídas por su compañera Alicia Massarini para que se depositaran en la tierra donde se trasplantó el árbol.

En el mes de agosto organizamos dos Jornadas de Reflexión denominadas “El Mensaje Ambiental de Francisco” sobre el mensaje de la Encíclica “Laudato Si” a las que invitamos a aportar con su mirada a personas de la Iglesia, científicxs, productores, dirigentes barriales y se dieron debates muy enriquecedores. En el mes de octubre asistimos a la Jornada Salud y Buenas Prácticas- Aplicación de fitosanitarios” desarrollada en el Aeroclub de Río Cuarto, promovidas por la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), la Sociedad Rural de Río Cuarto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de

Córdoba, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fuimos invitadxs por la organización y se utilizó la presencia de la Asamblea para legitimar toda la jornada como plural, y para enarbolarse como abiertos y democráticos siendo que fuimos silenciadxs y ninguneadxs. Fue sólo una catarsis de argumentos falaces y unívocos, ya que en los paneles no hubo disertantes con otros puntos de vistas ni un panel de afectadxs por fumigaciones. No obstante, asistimos preparadxs y pudimos confrontar su discurso unívoco, y exponer la verdad de los daños a la salud de los cuerpos de los pueblos fumigados junto a estudios científicos que evidencian la deriva de las fumigaciones.

Desde fines del 2015, comenzamos con una serie de acciones para poder acceder al resultado de los análisis químicos, biológicos y fitosanitarios (agrotóxicos) de las frutas y verduras que se consumen en la ciudad y se comercializan a través del Mercado de Abasto de Río Cuarto (MARC). Como siempre, comenzamos con los procedimientos administrativos correspondientes presentando notas al Secretario de Desarrollo Económico, al MARC y a EDECOM. Ante las respuestas desfavorables que obtuvimos (incluso luego de difundir esta información por las redes sociales), acudimos a la Defensoría del Pueblo, pedimos audiencia con el Intendente y también presentamos la nota a SENASA. Después de todo este tiempo, después de tantas respuestas desfavorables, tantas notas realizadas e información que hemos ido recopilando sobre la situación en otras localidades, estamos analizando posibles vías judiciales ante el hecho de no haber podido acceder a esta información de carácter pública. Vale la pena mencionar que la preocupación principal que nos embarga es que se está ocultando el sistema obsoleto con el que se elaboran los análisis; que se realizan en la provincia de Mendoza y cuando llegan los resultados, el alimento ya está en nuestras mesas. Por lo tanto, es imposible garantizar la inocuidad alimentaria en la ciudad.

En el 2016 las principales actividades fueron una serie de jornadas en el Teatrino de la Trapalanda que comenzó con la disertación

de Darío Aranda sobre “Pueblos originarios y extractivismo: ejes de la problemática ambiental actual” que planteó una serie de reflexiones en torno a algunas preguntas como ¿a qué se debe la aparición de enfermedades inéditas y desconocidas en el medio de la pampa húmeda?, ¿dónde viven las miles de personas desplazadas del campo y que las ciudades no cobijan?, ¿quiénes son los verdaderos dueños de la tierra y qué planes tienen para sus habitantes?, ¿qué relación hay entre la brutalidad del modelo económico extractivo y la defensa de los derechos de los pueblos originarios?, entre otras.

Luego la segunda jornada fue una charla debate sobre los “Movimientos Sociales en la disputa por el territorio: agronegocio, acción colectiva y medios de comunicación” en la que disertaron Lucía Maina, Eugenia Isidro y Nicolás Forlani con el objetivo de analizar los procesos conflictivos y las disputas por el territorio, que los movimientos socioterritoriales en la provincia de Córdoba, en especial los casos de las Asambleas Río Cuarto Sin Agrotóxicos (Río Cuarto) y Malvinas Lucha Por La Vida (Malvinas Argentinas), están llevando a cabo frente a la territorialidad inmanente al “agro como negocio”. La particularidad de dicha actividad fue que justamente un día antes, el primero de septiembre de 2016, se anunció oficialmente la desactivación del proyecto y puesta en venta del terreno o predio de Monsanto en Malvinas Argentinas lo que constituyó un inmenso logro de la movilización popular.

La tercera jornada, desarrollada en el marco de la Feria del Libro, en el Teatrino de la Trapalanda fue la presentación del libro “Invitación a la biología en contexto social, un enfoque integrador para el conocimiento del mundo biológico” a cargo de una de las autoras Alicia Massarini, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA y –como mencionamos anteriormente– compañera de Andrés Carrasco hasta su fallecimiento. Decimos esto ya que su visita también estuvo relacionada con esa parte de la historia ya que trajo una placa de cerámica para colocar en la entrada de la Reserva de bosque autóctono “El espinal”,

donde crece el algarrobo plantado en la jornada de 2015, este fue un momento muy emotivo para todxs nosotrxs.

Volvimos a proyectar el documental “Desierto Verde” en la Biblioteca Popular Mariano Moreno y contamos con la grata sorpresa de que se acercaron vecinxs de pueblos de la zona que padecen las fumigaciones más directamente que en las ciudades y que nos contaron acerca de enfermedades y síntomas. Pudimos generar articulaciones con ellxs para futuras actividades.

Una de las últimas actividades del año fue la presentación de otro libro, en este caso escrito por el periodista Leandro Rossi, titulado “Córdoba respira lucha. El modelo agrario: resistencias y nuevos mundos posibles” donde también participaron Fernando Mañas y Claudio Sarmiento de la UNRC y vecinxs de la localidad de Monte Maiz integrantes del colectivo Red en Prevención en Salud.

También compartimos una hora de clases con un 5° grado del Colegio Galileo Galilei al cual la maestra a cargo nos invitó para contar la experiencia de la Asamblea y hablar de los daños perjudiciales a la salud del agronegocio. Trabajaron la temática buena parte del año por lo que estaban muy informados y la jornada fue muy rica. Desde entonces estamos en permanente contacto y surgen nuevas actividades conjuntas.

En diciembre realizamos una barrileteada en el Día Mundial de Lucha contra el uso de agrotóxicos, en la costanera del río con la intención de visibilizar que con las condiciones climáticas y los vientos que durante todo el año se registran, no existen esas condiciones ideales de las que hablan las “buenas prácticas agrícolas”, además de que no se sigue ni siquiera ese protocolo.

En lo que se refiere a las acciones de la ARCsa durante 2017, también este es un año de intenso trabajo. Participamos y difundimos el Taller Introducción a la Huerta/ Agricultura Biodinámica que dicta Sebastián Iriberry una vez al mes con modalidad teórica y práctica

alternadamente en dos granjas de producción agroecológica en inmediaciones de la ciudad, la Granja Buen Florecer en la localidad Tres Acequias y La libertad en Río Cuarto. En abril participamos del “Festival por la Tierra y la Vida” en el Día Mundial de la Tierra con charlas sobre el Bosque Nativo y el Proyecto de Ordenanza “Río Cuarto Agroecológico” organizado por la feria barrial “Codo a codo” en el Playón de la Escuela Duprat. Conjuntamente con el Vivero Comunitario WichánRanquén, se plantaron ejemplares del bosque nativo en la plaza frente a la institución educativa y también compartimos infusiones de aromáticas y de flora nativa con propiedades medicinales.

Asimismo, durante este mes, participamos de las “III Jornadas de Ecología Política” en San Juan, un evento académico donde se buscó dar voz para que expongan en un espacio exclusivo para presentar los conflictos territoriales y las prácticas de resistencia de las Asambleas y organizaciones de distintos puntos del país. Estuvieron presentes los compañerxs de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, Asamblea Popular por el agua de Mendoza, Asamblea Sanjuanina por la Contaminación y el Saqueo, Asamblea del Buen Vivir de San Luis, Asamblea Riojana Capital. En nuestro caso presentamos parte de nuestra historia; “Desde el No a Monsanto al conflicto por la Ley de Bosques en Córdoba”

En el mes de mayo se desarrolló en la sede local de la Sociedad Rural de Río Cuarto el Segundo Congreso “IMAGINA” de la fundación local de *lobby* del agronegocio FADA (Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario). En el mismo realizamos una intervención silenciosa y de visibilización en el que asistimos con volantes y estampas en nuestra vestimenta en los que estaban plasmados a modo de caricatura las imágenes del evento original. Contamos con el arte del dibujante Ham que gentilmente nos compartió muchas de sus caricaturas a tal fin.

Ese mismo mes, como todos los años, nos sumamos a la Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto; en esta oportunidad con afiches informativos y un maíz transgénico gigante de cartón con los que intervinimos un espacio en la Plaza central. También llevamos y realizamos atrapasueños y ojos de dios (mandalas con lanas) a los que les adheríamos un breve mensaje de la actividad; los colgamos en un árbol y las personas que pasaban se acercaron algunos a aprender a hacerlos y otros los llevaban.

Colaboramos con la elección de la película “Tierra Roja” que se proyectó en el Centro Cultural Leonardo Favio el 22 de mayo y participamos el día de la proyección convocando y promoviendo el debate a su término. Estuvo especialmente dirigida a instituciones educativas, tanto de nivel secundario como terciario, y también al público en general.

El día 16 de junio organizamos la Jornada “Día de la Ciencia Digna” como cada año renovando nuestro compromiso y en homenaje al Dr. Andrés Carrasco. En esta oportunidad fue una charla y debate en la UNRC que estuvo coordinada por el Dr. Marcelo Ruiz y los disertantes fueron el Dr. Fernando Mañas (Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC / Grupo GeMA) y Dr. Santiago Polop (Facultad de Ciencias Humanas, UNRC). A su término compartimos un almuerzo a la canasta y visitamos en la Reserva El Espinal el algarrobo del compañero Andrés, ya referenciado anteriormente.

Acompañamos la iniciativa del ciclo “Cine por la Diversidad” del Centro Cultural Leonardo Favio de proyectar durante cuatro semanas consecutivas películas que forman parte del FINCA (Festival Internacional de Cine Ambiental).

Organizamos y convocamos a una radio abierta y Jornada de visibilización sobre la represión al Pueblo Mapuche y a los Pueblos Originarios el día 4 de agosto tras la brutal represión de gendarmería en la Comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia de Chubut el 1 de agosto, represión tras la cual desapareció Santiago Maldonado.

En esa oportunidad reclamamos por la libertad del referente Wichi Agustín Santillán de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán desde el año 1995. También al Lonko Facundo Jones Huala. Repudiamos el nombre de la Plaza central de Río Cuarto que lleva el nombre del genocida Julio Argentino Roca, hablamos del genocidio que padecen los Pueblos Originarios en esta larga noche de 525 años tras la llegada de los europeos a América y de las injusticias en todos los órdenes que aun hoy siguen padeciendo; sus reclamos, desoídos por los gobiernos de todos los colores partidarios.

De hecho, desde principios de mayo del corriente año, participamos de la creación del Foro por la Libertad y la Democracia, un espacio multisectorial, donde diferentes organismos de Derechos Humanos junto a organizaciones socio-territoriales, y vecinxs autoconvocadxs, nos juntamos para elaborar un informe lo más acabado posible sobre las violaciones a los derechos humanos y el retiro del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Allí fueron sistematizados casos locales, regionales y nacionales en un documento que fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Argentina en junio, ante un contexto donde los gobiernos nacional, provincial y municipal ponen en evidencia el retiro del Estado de Derechos y un recrudecimiento de las represiones, persecuciones, encarcelamientos políticos y desapariciones de personas, como fue el caso emblemático de Santiago Maldonado.

En dicho informe denunciarnos una serie de políticas de Estado que profundizan los discursos y actos fascistas, benefician a los sectores de las economías concentradas, recorta presupuestos en políticas sociales, genera las bases de flexibilización laboral, precarizando aún más el y la asalariada. Ante esta situación el Foro tiene continuidad hasta la actualidad, con una profunda discusión de las políticas de seguridad ciudadana como la local, en la que encuentra serios problemas de reproducción de persecución y criminalización de la pobreza y protesta social, hasta la grave situación de que dentro de una estructura de prevención con dependencia del EDECOM, estuvo presente una per-

sona que perteneció a la Brigada de Investigaciones durante la última dictadura cívico-militar. Sumado a esto la pérdida de operatividad del Registro Municipal de Demoras Policiales y Detenciones arbitrarias por Contravención que venía funcionando, y que con el actual gobierno pasó a otra órbita y perdió su funcionamiento. Situaciones de suma gravedad junto a otras más que hicieron que este espacio multisectorial, permaneciera con reuniones periódicas, generando informes al respecto, posicionamientos y estructurando las instancias de movilización como fueron las marchas por la aparición con vida y posterior pedido de Memoria, Verdad y Justicia por Santiago Maldonado.

El 19 de agosto recibimos la visita del Dr. Guillermo Folguera⁵ y organizamos la charla “Ciencia, modelo productivo y extractivismo” en la sede de la Asociación Gremial Docente de la UNRC.

Participamos del 8° Encuentro provincial de Pueblos Fumigados y 1° de Agroecología en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. En este encuentro, si bien es de Buenos Aires, participamos espacios colectivos y especialistas de otras provincias también, además de los espacios organizadores de este encuentro anual.

En septiembre contamos con la presencia de la Lic. Miryam Gorban⁶ quien dio una charla abierta sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria en la sede del Gremio Docente. Ese día con ella las actividades comenzaron por la mañana en la UNRC donde dio una nota para

5 Es investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Filosofía ‘Dr. Alejandro Korn’ de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esa misma universidad obtuvo sus licenciaturas en Biología y Filosofía, así como un doctorado en Biología. Además realizó estancias postdoctorales en las dos disciplinas en la Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma (México), la Universidad de Valladolid y Universidad del País Vasco (España), y la Universidad Católica (Chile). Actualmente, es también profesor adjunto de Historia de la Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. [N. E.]

6 Licenciada en Nutrición. Coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Secretariado de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN). Presidenta Honoraria de Médicos del Mundo. [N.E.]

el Canal Universidad; luego la acompañamos al Algarrobo de Andrés Carrasco y nos compartió anécdotas. También estuvimos en una reunión con docentes de las distintas facultades en la que Miryam comentó acerca de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) y entre lxs presentes tomamos la decisión de replicar esta experiencia en la universidad local.

A los pocos días de su visita, comenzamos a mantener reuniones periódicas con las personas que trabajamos en la CaLiSA y quienes van sumándose a este proyecto. Ya contamos con los recursos y la aprobación de seis talleres de capacitación que tendrán lugar el próximo año y estamos terminando el proyecto que presentaremos a fin de recibir el aval institucional de la UNRC.

En el marco de la Feria del Libro, contando con el espacio que desde la organización se nos brinda, convocamos a Martín Crespi, docente, artista plástico y escritor de una colección de cuatro libros denominados “Pachamamita Libros”, que abordan el extractivismo y sus consecuencias ambientales y la soberanía alimentaria. En el espacio en el que se desarrolló la Feria del Libro, se realizó la presentación de su proyecto de educación ambiental, mostrando sus libros y contó uno de sus cuentos con la técnica de kamishibai (teatro de papel). Esta misma actividad también la desarrolló en dos espacios educativos: la Escuela Cambón y el Colegio Galileo Galilei. A la noche dio una charla para adultos sobre Educación y Ambiente en la sede de Gremio Docente. Esta fue la primera actividad que promovimos desde la CaLiSA.

También en el marco de la Feria del Libro realizamos una actividad recreativa y de concientización sobre el Bosque Nativo denominada “Seamos Bosque” que tiene como objetivo rescatar ese saber dormido que tenemos cada unx de los que nos sentimos tan urbanxs, pero que si buscamos en nuestra memoria genética nos encontramos hermanadxs con todas las especies que lo habitan. Y también un taller construcción de fanzine que nos enseñó María Touchfeld, parte del proyecto local artístico Azul de Ciervo.

También realizamos nuestro aporte en el Código de Arbolado Urbano que está en elaboración a través de una nueva comisión del Concejo Deliberante llamada “Consejo Municipal de Protección del Arbolado Público”. En conjunto con el Concejo Deliberante Ciudadano (CDC), impulsado por el Partido Respeto⁷ y el Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales de la Defensoría del Pueblo, participamos de la construcción de una compostera comunitaria en Barrio Quintitas Golf.

Conclusión

Encontrándonos nosotrxs mismxs con la sistematización de estos 5 años de proyectos, luchas, resistencias y articulaciones, podemos afirmar que nos encontramos afianzadx y consolidadx tanto en el funcionamiento interno, como en el espacio que ocupamos en la sociedad local y también a nivel nacional.

Habitar el mundo desde este espacio de Asamblea es una forma de caminar que nos es inherente; nos mantenemos en permanente deconstrucción de lo establecido, de lo normado, interpelándonos, y con lo que se desmorona abonamos la tierra para crear mundos que nos alberguen y contengan a todxs. No somos personas acabadas, nos sabemos incompletxs y en constante proceso de creación, y esto es lo que proyectamos hacia el espacio que respiramos. Somos en la fuerza de la vida que se desenvuelve, Vida que defendemos en las semillas libres, semillas de rebeldía, en la tierra para quienes la trabajan, en el bosque nativo que vuelve porque nunca se ha ido, Vida que se reinventa.

⁷ Es un partido político de la ciudad de Río Cuarto integrado por militantes de diferentes organizaciones sociales. Entre sus objetivos se encuentra promover la construcción de una democracia participativa de alta intensidad, basada en la participación directa e igualitaria en asambleas horizontales, sin distinciones, sin preferencias, sin banderas políticas tradicionales, sin privilegios. En las elecciones municipales de 2016, obtuvo más del 9% de los votos con lo que logró dos bancas en el Concejo Deliberante de la ciudad. [N.E.]

Modernización y agricultura familiar. La producción de maíz en Marcos Juárez (1950-1970)

Pablo Iparraguirre

Introducción

En 1970, la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez, creyó importante traducir y difundir un artículo de los Drs. B. A. Krantz y F. J. Hills de la Universidad de California sobre extensión agropecuaria (Krantz y Hills, 1970). El Dr. Krantz tenía relación con los técnicos de la Estación de Marcos Juárez ya que había trabajado en ella asesorando el Programa de Mejoramiento de la Producción de Maíz en 1968 y 1969. En este artículo, Krantz y Hills abordaban las tendencias del desarrollo agrícola en Estados Unidos y los cambios necesarios en el funcionamiento de la extensión agropecuaria para acompañar esos procesos.

En un contexto de evolución hacia chacras con mayor superficie, “más eficientes y con mayor inversión en capital”, los autores sostenían la necesidad de promover un nuevo productor con una nueva mentalidad, y para ello citaban al Decano de Agricultura de la Universidad Estatal de Kansas describiendo al agricultor deseable para el futuro:

“Sus objetivos y actitudes financieras serán más parecidas a las de los industriales. Buscará una combinación de riesgos empresarios y recursos, que produzcan mayores beneficios. Será psicológica y sociológicamente una persona diferente. Ya no aceptará más la agricultura como “estilo de vida”, sino que la mirará como a un negocio complejo y altamente técnico. Se preocupará menos por las reacciones de sus vecinos con respecto a sus decisiones y será más independiente y orientado hacia las ganancias.” (Krantz y Hills, 1970: 1)

La cita expresaba claramente el perfil de productor “deseable” y las características de los cambios que se pretendían. Aunque, en otro pasaje del mismo artículo, se remarcaba que las chacras continuarían siendo “chacras familiares”, su carácter debía cambiar en pos de una “agricultura comercial moderna”. El nuevo productor debía asemejarse a un empresario industrial, con rol de administrador y no de trabajador, que concibiera la tierra sólo como recurso y sin apego sentimental a la misma, y cuyo objetivo principal fueran las ganancias.

Esta “persona diferente” a la que se aspiraba en el discurso modernizador era un productor plenamente capitalista. La tecnificación de las tareas agrícolas y la organización empresaria de la unidad productiva eran proclamadas como las estrategias necesarias para consolidar una agricultura comercial, que abasteciera el mercado de alimentos y materia prima de forma eficiente, y que permitiera la obtención de ganancias regulares. En esta caracterización no queda lugar para pensar las tareas familiares y el estilo de vida rural.

También encontramos este discurso propio de la época que abordamos que enfatizaba “*el crecimiento y el desarrollo*” en las publicaciones extensionistas de la Estación Experimental del INTA Manfredi (Iparraguirre, 2014). Pero, aunque existía este mismo enunciado de la necesidad de pensar “la chacra” como “empresa rural” para su modernización, al mismo tiempo se resaltaban los valores de

la comunidad y la familia rurales, adjudicando al productor familiar un rol fundamental en el desarrollo del agro.

En esa investigación, centrada en la producción de maní en el departamento Tercero Arriba, además pudimos comprobar que existió una importante introducción y adopción de tecnología, sobre todo nueva maquinaria para la cosecha del maní, que permitió reducir el principal costo de producción que era el trabajo asalariado. De esta forma, productores que poseían entre 100 y 200 has. apostaron a aumentar la superficie de la explotación sembrada con maní, frente a otros cultivos, y reforzaron sus estrategias de trabajo doméstico. Concluimos que el gran crecimiento de la producción de maní en el departamento estudiado, estuvo asociado a la consolidación de un sector de productores familiares que invirtió en maquinaria que les permitió ahorrar trabajo asalariado.

Por lo visto, en las diferencias que presentan los discursos extensionistas del INTA, se hace evidente que en este período el enunciado dominante del desarrollo y la modernización técnica estuvo ligado a las estrategias y posibilidades de la agricultura familiar en la región pampeana, y que por lo tanto, por detrás del mismo existen una serie de tensiones y contradicciones al interior de la estructura social agraria en un momento de importantes transformaciones.

Cabría entonces abrir una serie de preguntas que nos permitan pensar los procesos productivos y sociales que estaban ocurriendo en este período en la región, contexto en el cual la dirección de la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez creyó importante difundir el artículo de Krantz y Hills entre sus técnicos extensionistas. Para abordar estas preguntas, en este artículo nos centraremos en la producción de maíz en el departamento Marcos Juárez y en el acelerado proceso de innovación tecnológica que sufre en el período 1950-70, proceso al que muchos especialistas se refieren como una “revolución”.

La producción de maíz en Marcos Juárez

El maíz cultivado en la región pampeana argentina en la primera mitad del siglo XX, a diferencia de otros cereales como el trigo, era un producto que se dirigía principalmente a la exportación. La mayor parte de la producción se destinaba para alimentación de ganado, y en menor medida como alimento humano o como materia prima de distintas industrias. Para este primer destino, el maíz constituye un alimento rico en hidratos de carbono y grasas, pero algo deficiente en cantidad y calidad de proteínas, por lo que su uso debe ser siempre complementado con otros forrajes (Luna, 1946: 194).

Pero en el caso de la ganadería argentina el consumo de maíz era bajo por la existencia y disponibilidad de excelentes pastoreos y por el escaso consumo interno de carne de cerdo. Por lo tanto, no existía el problema de abastecimiento del mercado interno y externo en forma paralela y entonces se podía aprovechar la creciente demanda del mercado internacional.

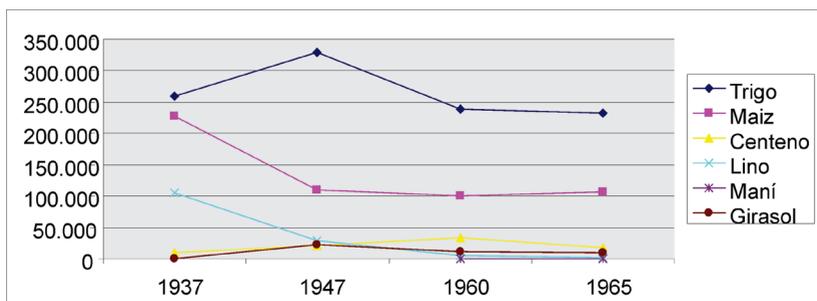
La exportación de maíz de Argentina llegó a representar alrededor del 50% de todo el comercio internacional en las décadas de 1920 y 30, esta producción principalmente se orientaba a los países de Europa Occidental. La Segunda Guerra Mundial habría de constituir una verdadera crisis para la producción maicera en Argentina. En primer lugar, durante la guerra el comercio se vio interrumpido por las acciones bélicas y situaciones de la guerra, y luego, a partir de los primeros años de la post-guerra, EEUU impuso condiciones en el comercio internacional y desalojó a Argentina de la posición que contaba como oferente de granos (Coscia, 1971: 6). Estas distintas trabas, terminaron por desmoronar nuestra producción maicera hasta reducirla a una superficie apenas equivalente al 30% de la existente en la preguerra.

Coscia afirma que recién a comienzos de la década de 1950 se produjo un resurgimiento de los cultivos de maíz, especialmente de la superficie sembrada, hasta configurar lo que denomina “el segundo auge del maíz en Argentina” (Coscia, 1971: 7 y 8).

En el departamento Marcos Juárez del sureste de la provincia de Córdoba, que forma parte de la zona núcleo maicera de la Región Pampeana, se confirma la misma tendencia de la producción a la que se hacía referencia. En la evolución de la superficie sembrada del departamento se aprecia la gran crisis de la producción de maíz durante el período de guerra, donde se perdieron más de 100 mil hectáreas de su cultivo (Gráfico 1).

Luego, a partir de la década de 1950, la superficie sembrada se estabilizó alrededor de 100.000 has. Durante esta década aunque la superficie de maíz no creció de forma significativa, su importancia relativa sí aumentó en relación a los otros cultivos, y sobretodo al trigo que tuvo una caída muy pronunciada entre 1947 y 1960 (Cuadro 1). Finalmente, hacia 1965, el maíz ocupó un 29% de la superficie, ya con una tendencia en alza, y junto al trigo que frenó su caída, conjuntamente representaron más del 90% de la superficie cultivada del departamento. La opción por los cereales principales se volvió a profundizar, desplazando a otras variedades de cultivos como lino o centeno.

Gráfico 1.
Evolución de la superficie sembrada en el
departamento Marcos Juárez



Cuadro 1.
Evolución de la composición de la superficie sembrada en el departamento Marcos Juárez (1937-1965)

	TOTAL	Trigo	Maíz	Centeno	Lino	Maní	Girasol
1937	602.639	43,14%	37,83%	1,49%	17,42%		0,11%
1947	512.310	64,38%	21,53%	4,16%	5,70%		4,23%
1960	387.842	61,72%	25,65%	8,46%	1,17%	0,04%	2,97%
1965	366.423	63,22%	29,10%	4,59%	0,25%	0,05%	2,78%

Fuentes:

Censo Nacional Agropecuario. Año 1937.

IV Censo general de la Nación. Año 1947. Tomo II: Censo Agropecuario

Censo Nacional Agropecuario 1960

Estadística agropecuarias Año 1965. Direc. Gral. de Estadística, Censos e Investigaciones. Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión Social de la Prov. De Córdoba

El proceso de trabajo del Maíz

Los ingenieros agrónomos especialistas de la época entendieron que durante este período se desarrolló una verdadera “revolución” en el cultivo del maíz. Si en la producción de trigo los avances tecnológicos se distribuyeron más regularmente a lo largo del siglo XX, en el cultivo de maíz se produjo una serie de innovaciones encadenadas que se concentraron hacia la década de 1950, y que transformaron radicalmente este cultivo.

Kugler y Godoy escriben que “la parcial sustitución del implemento a sangre por el equipo maicero mecánico integral y armónico, incluyendo la juntada y desgrane simultáneo a máquina, ha operado en nuestro medio una verdadera revolución en el cultivo del maíz” (Kugler y Godoy, 1953: 10). Muchos de estos técnicos encargados de difundir las innovaciones destacaban que los cambios no solamente generaban avances productivos, sino que significaban verdaderos

“progresos” en el aspecto social y económico del agro, por el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los peones rurales. Se referían principalmente a la suplantación de los cosechadores que recogían a mano el maíz y lo embolsaban en extenuantes jornadas en los campos, por la mecanización de la cosecha.¹

Pero la introducción de tecnología en este período no sólo se restringió a los cambios en la cosecha, sino que la “revolución” puede sintetizarse en la complementación de la difusión de semillas híbridas, la introducción de productos químicos en el control de malezas, y la mecanización de las tareas agrícolas (Coscia y Torchelli. 1968).

a) Preparación del suelo

Para todo el período de mi estudio prevalece el paradigma de gran laboreo de la tierra. Los técnicos y especialistas aconsejaban e insistían constantemente en la necesidad de remover bien los suelos para obtener cultivos fuertes y cosechas de buenos rindes. La consigna que se repitió durante años era que las labranzas debían dejar la “tierra mullida como una esponja”.

En los cultivos extensivos de cereales de la región pampeana, la tierra debía ser labrada por varias razones: “combatir las malezas,

1 Entre fines de 1953 y enero de 1954 se publica, dividido en tres partes, en la Revista Anales de la Sociedad Rural Argentina (87 n°12, 13 y 14) un artículo muy completo y detallado titulado “Progresos recientes en la técnica cultural del maíz” de Walter Federico Kugler y Ernesto Godoy, que tomaré como referente en mi reconstrucción del proceso de trabajo. Dicho artículo fue reproducido en parte luego en otras publicaciones –Revista El Surco o Mundo Agrario- donde también publicaron dichos autores otros artículos sobre maíz.

Estos autores fueron ingenieros agrónomos reconocidos en la investigación y producción maicera de la época, así que son palabra autorizada como referencia. Kugler fue Director de la Estación Experimental Pergamino del Ministerio de Agricultura de la Nación desde 1937 (luego la Estación pasa a formar parte de INTA a fines de los ‘50) y Secretario de Agricultura y Ganadería durante la presidencia de Arturo Illia. Godoy fue subdirector de la Estación Pergamino junto a Kugler y luego será el primer director de la EEA del INTA Marcos Juárez de 1961 a 1974.

crear un adecuado ambiente de germinación y desarrollo de las plantas, incorporar al suelo el rastrojo para su humificación, preparar la tierra para almacenaje de las lluvias, mantener una adecuada estructura de la misma y combatir las plagas vegetales y los insectos nocivos” (Ministerio de Agricultura, 1947: 225).

De las razones citadas por el Ministerio de Agricultura, las principales y más reiteradas eran las de combatir las malezas y preparar la tierra para la siembra. El arado, a su paso, invertía la tierra y enterraba el rastrojo de la cosecha anterior o las nuevas malezas para su descomposición, proveyendo materia orgánica y devolviendo nutrientes a los suelos; al mismo tiempo, el laboreo dejaba blando el terreno para la semilla y favorecía la infiltración del agua de lluvia.²

Para los cereales aconsejaban dar por lo menos dos “rejas” cruzadas con sus correspondientes rastreos. La primera para enterrar el rastrojo luego de la cosecha anterior, y la segunda, alrededor de 20 días antes de la siembra (Ricitelli, 1953). Respecto a la profundidad de las aradas, era necesario tener en cuenta que en suelos de consistencia media, ni muy sueltos ni pesados, debía ser tal que permitiera una correcta inversión del pan de tierra o gleba para que la maleza quedara bien enterrada.

Con relación a los tipos de arados utilizados en la zona maicera, el que se empleaba con preferencia era el de rejas de “propósito general”, sobre todo de 3 rejas, aunque la cantidad de rejas o discos dependía de si la tracción era con animales o tractor y su potencia. El tractor simplifica la tarea, ahorra tiempo y esfuerzo de trabajo al abarcar más

2 De los informes técnicos de la época leídos y analizados, he encontrado sólo uno de 1948 que propone, en determinados suelos que han sufrido erosión, un trabajo más conservacionista: el uso del “colchón de rastrojo”. El planteo era no enterrar los residuos de la cosecha anterior y dejarlos sobre la superficie o ligeramente mezclados con el suelo. De esta forma, se buscaban los mismos beneficios que con las tareas de labranza: devolver nutrientes, favorecer que el agua filtre, evitar la erosión. (Ministerio de Agricultura, 1948)

superficie de laboreo por pasada, y asegura mayor regularidad en la calidad de trabajo (profundidad del laboreo, dirección de los surcos, velocidad de la tarea). También se mencionaba la difusión y uso del “arado-rastra”, en suelos más sueltos y livianos, que permitía trabajos más superficiales y cuando era necesaria mayor rapidez en la labor (Riccitelli, 1953: 52).

Es justamente en este momento cuando se asiste al cambio de tracción animal a tracción mecánica en las tareas de trabajo agrícolas, en primer lugar, por la progresiva incorporación de tractores y en segundo lugar, por la introducción de equipos automotrices específicos. Este hecho, tuvo dos consecuencias inmediatas y confluyentes: la tracción mecánica permitió la utilización de herramientas de mayor envergadura (más rejas y discos en el arado, más cuerpos en la rastra, más surcos a cubrir con las sembradoras y juntadoras, etc), y por lo tanto, abarcar más superficie de laboreo en cada pasada, con el consiguiente ahorro de tiempo. (Tort, 1980). Pero además la tractorización permitió liberar campos que antes estaban destinados a la manutención del ganado equino como fuente de la tracción a sangre, y esta disponibilidad de nuevas tierras pudo ser aprovechada, como dijimos, con la nueva tecnología ampliando la superficie cultivada.

b) Siembra

Una vez preparada la superficie del terreno se procedía a la siembra, que en general se llevaba adelante con sembradoras para maíz, girasol, algodón y semillas de hortalizas, que poseían dos o tres tolvas y permitían variar la distancia entre líneas de cultivo entre los 65 y 80 centímetros (Riccitelli, 1953: 52).

Con respecto a la semilla, Kugler y Godoy (1953) afirman que en 1948 se inicia la producción de semilla híbrida de maíz. Hasta este año se sembraban en el país exclusivamente variedades de polinación [sic] libre y maíces comunes, predominando netamente estos últimos. El grano de los maíces comunes correspondía al llamado tipo “colora-

do exportación”, de textura córnea y superficie lisa, y su calidad y aspecto eran muy estimados para la exportación en el comercio mundial.

Ya en 1949, el Tribunal de Fiscalización de Semillas resuelve favorecer “por todos los medios posibles” el cultivo del maíz “dentado” en el país, facilitando la introducción de “híbridos” provenientes de EEUU. La ventaja principal que se aducía es que los híbridos desarrollados en este último país tenían un rendimiento mucho mayor.

En el Almanaque del Ministerio de Agricultura de este año, se rescatan los trabajos que se venían desarrollando en mejoramiento de semillas de maíz en el propio Ministerio, y también en los institutos de las Universidades de Buenos Aires y La Plata y en instituciones provinciales y particulares, así como el gran esmero de los pocos técnicos que trabajaban en esto; pero al mismo tiempo, se advertía que sus resultados aún estaban muy retrasados con respecto a los avances de los híbridos norteamericanos (Ministerio de Agricultura, 1949: 175).

El punto de partida para la difusión de la siembra de híbridos duros y dentados a mayor escala, será recién el año 1952 (Kugler y Godoy, 1953). Por lo tanto, toda la década de 1950 y 60, será de un proceso de difusión, aceptación e introducción por parte de los productores de las semillas híbridas en este cultivo. Para la campaña 1969/70, Coscia calculaba ya en un 90% la superficie sembrada con maíz híbrido en la región específicamente maicera de la pampa en donde existía mayor incentivo y asesoramiento para su adopción (Coscia, 1971).

De forma temprana, los técnicos en Argentina reconocieron que los cultivos de “híbridos” tenían mucho mejor rendimiento y facilitaban la mecanización de los trabajos de cosecha, así como mayor resistencia a ciertas plagas, obteniendo como resultado una mayor producción a un menor costo. Pero también admitían que en cuanto a la sanidad (enfermedades de la planta) y conservación (factor importante para la exportación) el colorado “local” era superior. En este sentido, se insistía constantemente en la importancia de generar híbridos propios, combinando los híbridos norteamericanos con los nuestros, para

lograr mayor adaptación a las particularidades del medio local (Kugler y Godoy, 1953).

Al mismo tiempo, se explicitaba la decisión del Gobierno Peronista de que este tipo de desarrollo de investigación debía estar en manos del Estado. El proceso de búsqueda de líneas básicas de combinación para el maíz era largo y complejo, y sólo el Estado, “que no busca una retribución, sino el bien nacional”, estaba en condiciones de hacerlo.

La otra decisión política que se enunciaba de forma temprana era la de conservar las “excelentes variedades y poblaciones de nuestro maíz como reserva, por su potencial genético, en cuya selección han intervenido rigurosamente y durante mucho tiempo el ambiente y los agricultores locales, y para desarrollos futuros como “patrimonio nacional”. Se exponía así un pensamiento muy avanzado como política pública, incluso en términos actuales (Ministerio de Agricultura, 1949: 177).

A partir de todo lo expresado en los diferentes informes se comprende entonces que mientras se desarrollaba el proceso de difusión, investigación y ensayo de nuevas variedades híbridas, el reemplazo del maíz común fuera paulatino. En aquellos productores que apuntaban su producción al mercado interno, para la industria o para su transformación en carne, el cambio era más velozmente adoptado, en cambio en aquellos otros que perseguían como destino la exportación, el cambio fue más lento y pensado. Para 1959, Kugler y Godoy afirmaban que las variedades híbridas no habían logrado desalojar a los maíces comunes en el corazón de la región maicera y eran sembradas principalmente en la región marginal (Kubler y Godoy, 1959).

Un aspecto central para la adopción de las semillas híbridas era mejorar su resistencia al vuelco, que como veremos era fundamental para perfeccionar la cosecha mecánica. En la medida en que este aspecto pudiera ser observado y comprobado por los productores, y se obtuvieran mejores rindes e ingresos, en comparación con los re-

sultados de lotes de maíces comunes sembrados en las mismas zonas, entonces la incorporación del maíz híbrido se aceleraría.

c) Cuidados culturales

Las labores complementarias tenían el objetivo de contener las malezas y comenzaban con el uso de distintos tipos de rastras de dientes cuando el maíz estaba brotando. En un período más avanzado del cultivo, se continuaba la lucha contra los yuyos con los escardillos, luego con el aporcador para asfixiar el yuyo del surco y finalmente la azada de mano para completar el trabajo al interior del surco.

Varios técnicos confirman que el maíz era más exigente que los otros cultivos extensivos en este aspecto. Eran necesarias para este cereal mayor cúmulo de labores agrícolas que con otros granos, tanto en la preparación del suelo previa a la siembra como en las labores culturales en las primeras fases de ciclo vegetativo (Kugler y Godoy, 1953, Coscia, 1971).

Las tareas de “carpidas” resultaban muy lentas cuando se efectuaban a mano, además de sumamente costosas ya que implicaba muchas veces, según la época y lluvias caídas que reproducían “los yuyos”, la necesidad de contratar jornaleros asalariados para desarrollarlas. Se aconsejaba entonces el empleo de carpidoras o escardillos entre líneas tirados por caballo o montados sobre el bastidor del tractor del tipo triciclo. La introducción de estos instrumentos agilizó la tarea (sobretudo porque permitía realizarla simultáneamente con caballos y tractor, abarcando más superficie) y la hacían más regular, pero seguían manteniendo el inconveniente de la limpieza en las líneas de cultivo, entre plantas.

La solución a todos estos problemas y tareas culturales se encontró con la introducción de herbicidas selectivos, sustancias químicas que destruyen las malezas entre líneas y en las filas de plantas

sin afectar al cultivo, de ahí el nombre de “selectivos”, resultando su aplicación sumamente económica (Riccitelli, 1953: 54).

Según Kugler y Godoy, los llamados vulgarmente “matayuyos” se comenzaron a utilizar en el país desde 1947, y se aplicaban con equipos pulverizadores de herbicidas, de fácil acceso y funcionamiento. Existían equipos pulverizadores de distinto tipo, montados sobre tractor, a tracción del tractor y para caballos.

Los especialistas observaban una rápida difusión de su uso en los primeros años de la década de 1950, más que con otras innovaciones agrícolas, ya que estos productos realmente eran eficientes, “venían a resolver un viejo y grave problema en el cultivo del maíz”, ahorraban una parte fundamental del trabajo del proceso productivo, y no resultaban costosos en su implementación (Kugler y Godoy, 1953 y 1959).

Coscia y Torchelli (1968) calculan que para el empleo de los herbicidas eran necesarios 25 minutos por hectárea, mientras que la forma tradicional de controlar las malezas con “carpidas” y azada requería de 30 horas de trabajo por hectárea. Consideran esta introducción como el hecho más importante en cuanto a reducción de requerimiento de mano de obra del proceso de trabajo del cultivo del maíz.

d) Cosecha

“En el cultivo del maíz, la juntada realizada exclusivamente a mano hasta 1946, ha sido una de las tareas más penosas de nuestra agricultura, comparable a la zafra de la caña de azúcar” (Kugler y Godoy, 1953: 10). La solución a esta “penosa tarea” a partir de una máquina que pudiera arrancar y recoger las espigas o mazorcas del maíz, suplantando el arduo trabajo de la cosecha manual, no era una idea innovadora para mediados de siglo XX. Ya se habían realizado distintas experiencias y ensayos locales por agricultores creativos y mecánico- industriales desde principios de siglo, e incluso durante la

década de 1920 se registraron varias patentes al respecto. Pero todavía no se había encontrado una combinación tecnológica de distintos aspectos mecánicos que la hicieran eficiente y económica.

En la cosecha 1945/46 se vieron en Pergamino las primeras juntadoras de maíz de industria nacional; y en los años 1947 y 48, se prueban las primeras de fabricación norteamericana. “Los tipos de máquinas americanas introducidas primeramente, lo fueron de uno y dos surcos a tracción, estas últimas para distancia de un metro entre surcos; montada sobre tractor de dos surcos a un metro; y automotriz para 3 surcos a 0,7 de separación.” Kugler y Godoy (1953) consideran que a partir de estos primeros modelos, comenzó un período de prueba, adaptación y afianzamiento de la mecanización de la cosecha del maíz en Argentina de 1946 a 1953 aproximadamente.

La apreciación de estos ingenieros agrónomos especializados en las condiciones de la región, es coincidente con otro artículo del mismo año del Ing. Agrónomo José Ricitelli donde afirma que el procedimiento de cosecha más usado aún era el manual, pero que “por lo irracional estaba destinado a desaparecer para dar paso al uso de máquinas arrancadoras de mazorcas, o más correctamente “espigadoras deschaladoras”. Ricitelli (1953) hace mención también al fomento de la fabricación nacional y al desarrollo de las políticas crediticias del Estado Nacional y que, por lo tanto, estaban dadas todas las condiciones para que las prácticas de cosecha con las nuevas maquinarias se difundieran ampliamente.

Evidentemente se asistía a un proceso pleno de innovación en las prácticas productivas, con introducción de nueva maquinaria y ensayos constantes para la adaptación y mejoramiento de la nueva tecnología. Este proceso sólo fue posible a partir de la experiencia acumulada en la actividad productiva cotidiana, que permitió detectar problemas y buscar optimizar la utilización de la nueva tecnología dentro de las condiciones y estructuras específicas de las distintas regiones. Mientras estos problemas se fueran superando y sus resultados

difundidos, las nuevas prácticas se irían adoptando gradualmente por los productores.

Este proceso conocido como “learning by doing”³ se vio reflejado también en las múltiples referencias a nuevos diseños locales de maquinaria que las revistas publican con bastante frecuencia.⁴

El problema principal que presentó la cosecha mecánica, que todos los informes resaltaban en forma constante, y que retrasó su adopción, fue la cuestión de la eficiencia en el rendimiento. Las cosechadoras o “juntadoras” desperdiciaban muchas espigas que se caían y quedaban entre el rastrojo, y esto era, como lo hemos desarrollado anteriormente cuando nos referimos al avance de los maíces híbridos, un problema en relación a la planta del maíz. El avance de la mecanización de la recolección del maíz exigía sembrar maíces “resistentes al vuelco”, que significaba que las plantas fueran más erguidas y fuertes sus espigas para que no se perdieran al paso de la máquina.

La Dirección General de Economía Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, en un folleto publicado en 1953, sostenía que la juntada mecánica era más conveniente que la

3 Para una versión del cambio tecnológico desde el lugar de los países periféricos, se puede consultar el interesante trabajo de Jorge Katz. Este autor define dos fases del proceso de cambio: la fase de adquisición o incorporación de una nueva tecnología al medio productor doméstico, y la fase de asimilación y aprendizaje dentro del marco de una tecnología dada que permite su mejora gradual. (Katz, 1976)

4 El tipo de tecnología mecánica que estamos hablando hace posible que se puedan montar, a partir de un amplio conocimiento de la actividad productiva, pequeñas plantas industriales de producción de maquinaria o de accesorios para las nuevas maquinarias. Es el caso, por ejemplo, de la fábrica de los hermanos Araus en Noetinger, en el departamento Marcos Juárez, que fabricaban cosechadoras automotrices con motores importados. El artículo de la revista Mundo Agrario que trata la noticia describe que la cosechadora de maíz Araus era de 4 surcos, desgranaba, seleccionaba el grano y lo embolsaba igual que al marlo. La fábrica tenía capacidad para producir 40 unidades al año. (Mundo Agrario, 1956). Así como los hermanos Araus, muchas de estas empresas fueron generadas por chacareros que tenían experiencia y conocimientos en mecánica por su propia actividad. Aunque en esta investigación no abordaremos este elemento particular, la conformación de pequeñas empresas y fábricas de diseño y construcción de maquinaria forma parte del proceso de cambio e introducción de tecnología del período.

manual sólo cuando los cultivos producían rendimientos de 1.400 kilos por hectárea o más y que la diferencia a favor de la máquina resultaba más evidente a medida que los rendimientos eran más elevados (Mundo Agrario, 1953).

El desarrollo de los sistemas de las cosechadoras mecánicas y la búsqueda de nuevas variedades de maíces híbridos fue un proceso paralelo e interdependiente. Sábato (1981) se refiere al mismo como un “encadenamiento de las innovaciones” que en este período generó una transformación productiva cualitativa en el cultivo del maíz. Para este autor, este proceso encadenado debe entenderse como una de las claves esenciales de la explicación del posterior crecimiento productivo.

Pero el proceso llevó su tiempo de ajuste y por eso los rendimientos por hectárea del maíz se mantuvieron estables hasta la segunda mitad de la década de 1960. Los híbridos, como ya se afirmó, contribuyeron a incrementar los rendimientos, pero la cosecha mecánica en parte neutralizó ese aumento de producción por las pérdidas en la recolección. Recién hacia fines de esta década se observará un mayor rendimiento por unidad de superficie con la difusión de híbridos resistentes al vuelco y la práctica de la cosecha anticipada (Coscia y Torchelli, 1968).

Por último, deben mencionarse dos innovaciones más que apuntaron a simplificar las tareas de cosecha, y por lo tanto, aumentar la productividad de la mano de obra en el cultivo del maíz. El uso y difusión de “juntadoras desgranadoras” —o sea, maquinaria que realizaba dos tareas simultáneamente: juntar las espigas y separar los granos— que ya dejaban listo el grano recolectado en bolsas y los marlos por otro lado. Esta simultaneidad no sólo ahorra mano de obra, sino tiempo en el proceso de cosecha. Otra versión posterior del mismo tipo de máquina, que tuvo gran repercusión por su practicidad y rápida incorporación, fueron los implementos juntadores para acoplar a cosechadoras de trigo y cereales, fabricados en el país. De esta forma la inversión en maquinaria resultaba más económica ya que podía ser

aprovechada para su uso en distintos cultivos (Coscia, 1971; Kugler y Godoy, 1959).

Un problema que planteaban estos tipos de cosechadoras era el grado de humedad del grano que hacía imprescindible el secado posterior. Los métodos para ello iban desde dejar las bolsas “paradas”, sin amontonar durante un día en el propio rastrojo para que se oreen, y evitar la fermentación, hasta disponer de instalaciones especiales para secaderos (Riccitelli, 1953; Kugler y Godoy, 1953). Cada uno de estos distintos métodos de secado también tenía sus riesgos de pérdida.

La última innovación a fines de la década de 1960 fue la cosecha a granel que evitaba las tareas de embolsar. A su favor tenía nuevamente el ahorro de mano de obra de los peones que controlaban y manejaban las bolsas y la posibilidad de comenzar a cosechar 15 días antes y varias horas más por día; también se disponía de los rastrojos con mayor anticipación y se evitaban las pérdidas que ocurrían cuando las bolsas eran sorprendidas en el rastrojo.

Los estudios sobre costos indicaban que los de la cosecha a granel del maíz eran inferiores a los de la cosecha a máquina con bolsas en un 15% al menos, pero demandaba una inversión inicial diferente. Al igual que se ha destacado para la cosecha en bolsa, en la zona maicera, el grano no podía ser almacenado a granel si su humedad excedía de 14%, lo cual hacía imprescindible una secadora, que se sumaba a dos carritos para transporte del grano, un elevador a sinfín y los silos necesarios.

En consecuencia, se estimaba que 200 hectáreas representaban la superficie mínima que debía tener el maizal para justificar las altas inversiones que demanda la compra de maquinaria para cosecha y secada a granel. Mientras los cultivos fueran más extensos, el margen de beneficios a favor de este sistema sería más amplio (Miles, 1962).

Para sintetizar las grandes innovaciones que se fueron produciendo en el proceso de trabajo del cultivo del maíz, reproduzco en parte el cuadro realizado por Coscia y Torchelli para INTA en 1968.

Cuadro 2.
Síntesis de innovaciones en el proceso de cultivo del maíz (1968)

Nivel de tecnificación	Características
“A”	Tracción animal. Control de malezas con labor manual. Cosecha a mano. Transporte a sangre.
“B”	Tracción mecánica. Control de malezas con labor manual. Cosecha a mano. Transporte automotor.
“C”	Tracción animal. Control de malezas con herbicidas. Cosecha a mano. Transporte automotor.
“D”	Tracción mecánica. Control de malezas con herbicidas. Cosecha a mano. Transporte automotor.
“E”	Tracción animal. Control de malezas con herbicidas. Cosecha mecánica en bolsas. Transporte automotor.
“F”	Tracción mecánica. Control de malezas con herbicidas. Cosecha mecánica en bolsa. Transporte automotor.
“G”	Tracción mecánica. Control de malezas con herbicidas. Cosecha mecánica a granel. Transporte automotor.
“H”	Tracción mecánica. Control de malezas con herbicidas. Cosecha mecánica a granel anticipada, con transporte directo a centro de acopio empleando el tractor.
“I”	Tracción mecánica. Control de malezas con herbicidas. Cosecha mecánica a granel anticipada, con ensillado y secado en chacra. Transporte automotor.
“J”	Tracción mecánica de mayor potencia. Control de malezas con herbicidas. Cosecha mecánica a granel anticipada, con ensillado y secado en chacra. Transporte automotor.

Fuente: Coscia y Torchelli (1968)

Cuadro 3. Requerimientos de horas-hombre por quintal de maíz a través del periodo analizado

Período	Década 1940/50		Década 1950/60				Quinquenio 1960/65		Quinquenio 1965/68		
	A	B	A	D	F	C	E	F	F	G	H
Niveles de tecnificación											
Horas-hombre por Ha.	101.14'	86.59'	101.14'	57.23'	13.53'	69.19'	25.49'	13.53'	13.53'	10.15'	9.15'
Proporción de cada nivel (%)	60	40	10	40	30	20	20	80	20	70	10
Horas –hombre por Ha. (promedio del periodo)	95.30'		51.3'				16.15'		10.51'		

Fuente: Coscia y Torchelli (1968)

En este trabajo los autores compararon las horas hombres necesarias para realizar las tareas de cultivo con distintos “niveles de tecnificación” (combinación de tareas directas utilizando distintas herramientas y maquinarias, desde la preparación de la tierra hasta la entrega del grano al centro de acopio, sin incluir descarga en el mismo)⁵.

Como se aprecia en el cuadro, Coscia y Torchelli sostenían que en la década de 1950 predominaba el nivel de tecnificación “D” (40%) y “F” (30%), que implicaba tracción mecánica, control de malezas con herbicidas, cosecha a mano y mecánica en bolsas respectivamente y transporte automotor.

5 No se computó el trabajo indirecto como la reparación de maquinarias, alimentación y cuidado de los animales de tiro, trabajo de administración, etc.

Mientras en el quinquenio de 1960-65, ya un 80% de los cultivos se realizaba en un nivel de tecnificación “F”, o sea con cosecha mecánica en bolsas; y en los últimos años (1965-68), un 70% en nivel “G” que introdujo la cosecha mecánica a granel.

La principal conclusión de este detallado trabajo era que se había producido un notable incremento de la productividad de la mano de obra. Las horas – hombre de trabajo necesarias para cultivar una hectárea de maíz descendieron de 101,14 horas a 10,15 horas en todo el período. Lo que significaba una disminución del 89%, o que en 1968 se necesitaba casi un décimo del tiempo de lo que se necesitaba en 1940 para cultivar maíz.

Transformaciones en la estructura de Explotaciones Agropecuarias

Abordaremos a continuación el estudio de los datos censales sobre explotaciones agropecuarias, para obtener una primera aproximación a la identificación y caracterización de los productores agrícolas de la región.

En el caso de la región pampeana, el número de las explotaciones desciende un 11,5% a lo largo de todo el período, mientras que en la superficie total de las mismas las variaciones son menores, esto hace que la concentración de la producción sea mayor que en el total provincial y que el tamaño medio de las explotaciones aumente de 230 a 272 has. en 1969.

Por lo tanto, podemos observar un primer indicio que describiría un proceso de desplazamiento ocurrido en la región pampeana cordobesa hacia unidades de explotación de mayor superficie.

Cuadro 4.

Evolución de la cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias en la Región Pampeana Cordobesa (1947-69)

	Explotaciones	Has
1947	40,236	9,268,161
1960	33,134	8,365,571
1969	35,578	9,674,934

Fuentes:

IV Censo general de la Nación. Año 1947. Tomo II: Censo Agropecuario

Censo Nacional Agropecuario 1960

Censo Nacional Agropecuario 1969.

Si observamos ahora más detenidamente las características de la evolución de la cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias de la Región Pampeana Cordobesa según escala de tamaño, las explotaciones que más crecieron hasta 1969 son aquellas ubicadas entre las 400 y 2500 has; mientras que descende la importancia relativa de aquellas entre 100 y 400 Has. En cuanto a superficie que ocupaban, el descenso de la escala entre 100 y 400 has, se trasladó al aumento de la superficie de las explotaciones entre 400 y 2500.

En particular, el segmento de 400 a 1000 has. creció en términos absolutos más de 1000 unidades, pasando a representar en 1969 el 20,11 % de la superficie total.

En un análisis más detallado, podemos recuperar que en 1947, los estratos entre 25 y 500 has concentraban el 81,61% de las explotaciones de los departamentos de la región pampeana de la provincia; en 1960, los estratos entre 25 y 400 has concentraban el 80,46% de las explotaciones y el 50,99% de la superficie, mientras aquellos de 400 a 2500 conformaban el 8,74% y 27,13% respectivamente.

En 1969, los estratos entre 25 y 400 has concentraban el 74,69% de las explotaciones y el 43,51% de la superficie; dentro de este descenso, la caída más marcada fue aquella de la escala de 100 a 200 has. Para este mismo año, los estratos de 400 a 1000, y de 1000 a 2500 has. aumentaron su porcentaje conformando un 11,78% de las explotaciones y 34,36% de la superficie, subiendo más de 7% su participación en la superficie total.

En Marcos Juárez podemos observar que, en forma general, se produce el mismo descenso de explotaciones entre 1947 y 1960 que en la provincia, pero luego hay cierta recuperación en su número para 1969, definiendo un descenso total para todo el período de más del 7%; mientras la superficie total muestra una caída y recuperación prácticamente igual entre los períodos intercensales y, por lo tanto, la superficie total logra mantener la cantidad de hectáreas a lo largo de toda la etapa. En consecuencia, el tamaño medio de las explotaciones se incrementa un 7,5%, de 188 a 202 has.

En cuanto a la evolución según el tamaño de las explotaciones, mientras caen de forma pronunciada (30%) las explotaciones de 100 a 200 has, aquellas de 400 a 1000 se incrementan, pasando a ocupar del 13,27% al 19,47% de la superficie entre 1960 y 1969, al mismo tiempo las anteriores bajan el mismo porcentaje.

En resumen, este primer análisis nos muestra una tendencia general al aumento del tamaño de las explotaciones, principalmente crecen aquellas entre 400 y 1000 has., mientras descende el número y superficie relativa de las explotaciones comprendidas entre las 100 y 200 has.

Cuadro 5.
Evolución de la cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias clasificadas
por escala de extensión en la Región Sureste (1947-1969)

1947		1960			1969		
	Explotaciones	Explotaciones	Superficie	Explotaciones	Superficie	Explotaciones	Superficie
Hasta 5 has	1,406	746	2,314	1,493	4,085	4,20%	4,085
De 5 a 25 has	3,601	2,412	38,983	2,931	41,538	8,24%	41,538
De 25 a 100	10,191	8,536	585,743	8,975	604,217	25,23%	604,217
De 100 a 200	12,796	10,760	1,648,558	10,252	1,547,785	28,82%	1,547,785
De 200 a 500	9,850	7,365	2,031,122	7,342	2,057,074	20,64%	2,057,074
De 500 a 1000	1,055	2,259	1,311,546	3,283	1,945,531	9,23%	1,945,531
De 1000 a 3000	574	637	958,841	908	1,378,268	2,55%	1,378,268
De 3000 a 5000	155	191	668,500	254	880,579	0,71%	880,579
5000 a 10000	92	81	562,440	106	705,509	0,30%	705,509
Mas de 10000	48	39	557,524	34	510,315	0,10%	510,315
Sin determinar	468	108					
Total	40,236	33,134	8,365,571	35,578	9,674,901	100,00%	100,00%

Fuentes:

IV Censo general de la Nación. Año 1947. Tomo II: Censo Agropecuario

Censo Nacional Agropecuario 1960

Censo Nacional Agropecuario 1969.

Cuadro 6.
Evolución de la cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias clasificadas por escala de extensión en el Departamento Marcos Juárez (1947-1969)

	1947				1960				1969			
	Explotaciones		Superficie		Explotaciones		Superficie		Explotaciones		Superficie	
	Hasta 5 has	De 5 a 25 has	Hasta 5 has	De 5 a 25 has	Hasta 5 has	De 5 a 25 has	Hasta 5 has	De 5 a 25 has	Hasta 5 has	De 5 a 25 has	Hasta 5 has	De 5 a 25 has
Hasta 5 has	211	4.26%	88	2.03%	265	0.03%	232	5.04%	578	0.06%		
De 5 a 25 has	360	7.26%	273	6.31%	6,552	0.76%	402	8.74%	5,960	0.64%		
De 25 a 100 has	1452	29.29%	1,333	30.82%	92,806	10.73%	1,519	33.02%	99,592	10.71%		
De 100 a 200	1843	37.17%	1,586	36.67%	234,337	27.09%	1,287	27.98%	188,916	20.32%		
De 200 a 500	912	18.39%	754	17.43%	207,144	23.94%	741	16.11%	208,236	22.40%		
De 500 a 1000	70	1.41%	197	4.55%	114,785	13.27%	310	6.74%	180,979	19.47%		
De 1000 a 3000	51	1.03%	52	1.20%	80,715	9.33%	78	1.70%	119,858	12.89%		
De 3000 a 5000	18	0.36%	17	0.39%	58,437	6.75%	25	0.54%	86,332	9.29%		
5000 a 10000	7	0.14%	7	0.16%	42,034	4.86%	6	0.13%	39,290	4.23%		
Mas de 10000	3	0.06%	2	0.05%	28,061	3.24%	0	0.00%	0	0.00%		
Sin determinar	31	0.63%	4	0.09%								
Total	4958	100.00%	4,325	100.00%	865,136	100.00%	4,600	100.00%	929,745	100.00%		

Fuentes:

IV Censo general de la Nación. Año 1947. Tomo II: Censo Agropecuario

Censo Nacional Agropecuario 1960

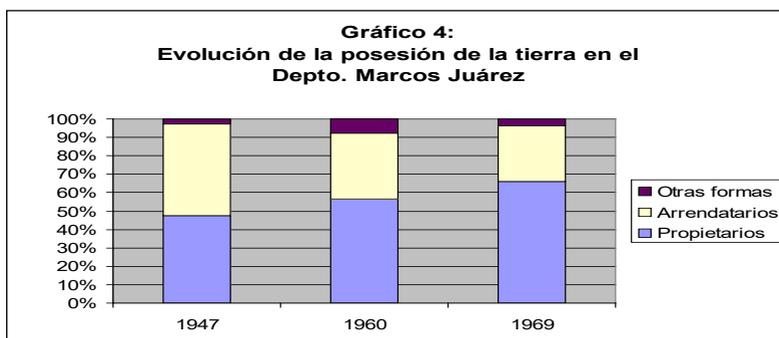
Censo Nacional Agropecuario 1969.

Por otro lado, como estudios regionales y nacionales ya lo han destacado, aumentó la proporción de productores propietarios en todo el país. En toda la región pampeana de Córdoba, la superficie en posesión de propietarios se incrementó un 40%, llegando a alcanzar el 71,9% de la superficie de las explotaciones agropecuarias en 1969. Mientras la proporción arrendada descendió al 25%. (Gráfico 2)

Por último, en Marcos Juárez (Gráfico 4) la tierra en posesión de propietarios pasó del 47,4% al 66% en este período, y la superficie arrendada decreció del 49% al 30%.

La proporción creciente de tierra en manos de propietarios indica que el acceso a la propiedad de la misma existió en todo el período. Sin embargo, si tenemos en cuenta el descenso de las explotaciones y su superficie en el primer período intercensal, entonces el número de hectáreas que pasan en propiedad es mucho mayor en la década de 1960, en donde el aumento será de alrededor del 30% en toda la región.

Gráfico 2.
Evolución de la posesión de la tierra en el departamento
Marcos Juárez



Fuentes:

IV Censo general de la Nación. Año 1947. Tomo II: Censo Agropecuario

Censo Nacional Agropecuario 1960

Censo Nacional Agropecuario 1969.

Consideraciones finales

Quisiera retomar el discurso sobre desarrollo y modernización con el que comenzamos el análisis de esta problemática y la definición de la formación de un productor diferente “psicológica y sociológicamente” que se construye en conflicto con la tradición de la agricultura familiar. Evidentemente el discurso enfatiza la oposición de las características de los sujetos agrarios para lograr los cambios deseados, aunque los procesos económico-sociales que sirven de condición de producción del mismo, y los sujetos con los cuales contacta, son muchos más complejos y contradictorios.

La agricultura familiar abarca a productores con diferente disponibilidad de recursos, diversas orientaciones en la producción, variados niveles tecnológicos y formas de tenencia de la tierra. Cabe incluso la posibilidad de que incluya a segmentos que logran una reproducción ampliada, que logran capitalizarse a lo largo de los diferentes ciclos agrícolas, sea accediendo a la propiedad de la tierra, incorporando nuevas tierras en arriendo o nueva maquinaria.

El debate, sobre cómo caracterizar a estos productores, es una discusión rica y de vieja data. Su dificultad reside, creo, en poder aprehender en una categoría a sujetos sociales que se encuentran en permanentes procesos de movilidad social en la estructura rural. Sujetos que, al mismo tiempo que es innegable su permanencia a través de la historia, presentan en su seno constantes procesos de descomposición ascendente y descendente, que constituyen una gran diversidad y heterogeneidad según períodos y regiones. (Cloquell y otros, 2005)

La introducción de innovaciones tecnológicas, y específicamente maquinaria, es una cuestión clave en el análisis de estos procesos y sujetos, ya que la mecanización de las tareas agrícolas no puede desvincularse de las posibilidades de capitalización de los productores y por lo tanto del desarrollo de una agricultura familiar relativamente capitalizada a partir, entre otras cosas, de las posibilidades de acceso a la propiedad del suelo y –vinculada con esto– al crédito.

En el departamento Marcos Juárez, la lenta recuperación de la superficie cultivada a partir de 1960, muestra una nueva apuesta por el cultivo de los cereales tradicionales (trigo y maíz), que ganan cada vez más terreno a costa de otros cultivos como centeno y girasol. Dentro de este panorama productivo, la reconstrucción del proceso de trabajo del cultivo del maíz reveló un proceso sumamente dinámico de introducción de tecnología de variado tipo.

Los datos que hemos podido recoger sobre las características de estas innovaciones (tractor, cosecha mecánica, herbicidas, granel, transporte automotor) tuvieron efectos en dos sentidos definidos. Primero, se logró un notable aumento de la productividad de la mano de obra, ahorrando trabajo no sólo en la cosecha, sino también en el trabajo de desmalezado de los cultivos con la introducción de herbicidas. Segundo, el empleo de maquinaria de mayor potencia y costo exigió una escala mayor de producción.

Paralelamente, el análisis de las explotaciones productivas en los censos nos muestra un proceso de transformación de la estructura productiva hacia unidades de mayor tamaño (400 a 1000 has). Esto es coincidente con un artículo que analiza los costos de recolección para la campaña 1950/51 que sostiene que las máquinas en uso en ese momento de dos o tres surcos tenían una capacidad de trabajo de 240 y 300 hectáreas anuales respectivamente (Mundo Agrario, 1953). También pudimos ver con respecto al sistema de cosecha a granel, que se estimaba en 200 hectáreas de maíz la superficie mínima para que conviniera la inversión en silos y secadoras.

Todos los indicios evidencian que la introducción de estas maquinarias era rentable a una determinada escala de producción, o en manos de contratistas. Coscia y Torchelli (1968) ratifican esta apreciación al sostener que “hasta hace una o dos décadas el maíz era un cultivo desarrollado casi exclusivamente por productores pequeños y medianos”, pero que en los últimos años se había manifestado una cierta tendencia entre los productores con grandes extensiones de

tierra a incorporar este tipo de tecnología e incrementar el área con cultivo de maíz. El uso de herbicidas y el proceso de mecanización lo hacían posible al ahorrar el principal costo de mano de obra asalariada del desmalezado y la cosecha, con lo cual convenía para más grandes extensiones que además contaban, por la misma razón hasta ese momento, con tierras no cultivadas y de alta fertilidad natural, lo que permitía un aumento de los rendimientos unitarios.

Sintetizando lo analizado hasta aquí, la introducción de nueva tecnología en la producción de maíz conduciría a economías de mayor escala al incrementar los requerimientos de extensión mínimos para el pleno uso de la maquinaria, como así también de la mano de obra ya que mejora la productividad del trabajo.

Por lo mismo, la adopción de estas innovaciones por la agricultura familiar permitió que muchas de las tareas de desmalezado y cosecha se pudieran realizar con mano de obra familiar, cuestión que resultaba imposible de efectuar en explotaciones de tamaño comercial cuando las “carpidas” se efectuaban a mano o el sistema de cosecha requería la utilización de trilladoras y la recolección manual del maíz. Estas medianas explotaciones optarían entonces por estrategias que priorizaban el trabajo familiar al asalariado, evitando así los costos y los conflictos laborales a que dio lugar la legislación de la década de 1940.

Pero al mismo tiempo, se incrementaron los requerimientos de capital y tierra necesarios para incorporar las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el tipo de desarrollo y capitalización que implicó esta modernización para los productores no fue posible para todos y muchas unidades de 25 a 200 hectáreas desaparecieron.

Además, las explotaciones menores pudieron sufrir problemas de desocupación de mano de obra familiar, sumando otro problema a su viabilidad como sector (Pizarro, 2003). De acuerdo a estudios efectuados en la zona de Pergamino, en el año 1961, en las chacras de 20 a 50 hectáreas existían en promedio dos hombres aptos para trabajar

y las tareas que se realizaban insumían el trabajo de uno. Para las que tenían, a su vez, entre 50 y 200 hectáreas la disponibilidad promedio era de dos hombres y medio y las tareas absorbían el trabajo de un hombre y medio. (Coscia, 1965: pag.8)

A partir de las 200 hectáreas, entonces, las innovaciones ahorradoras de trabajo en el cultivo del maíz favorecían la persistencia del trabajo familiar, recortando las necesidades de trabajo asalariado, y posibilitando incluso un excedente de trabajo en las chacras para ser utilizado en estrategias de ampliación de escalas.

Si bien una mayor capitalización, expresada en gran medida en una mayor dotación de maquinaria, puede transformar a los sujetos de la agricultura familiar, generando una organización de la producción de tipo empresarial y productores más orientados a la búsqueda de ganancias, también, paradójicamente, a otros los afianza en su carácter campesino/familiar justamente al expresarse esa capitalización en una mecanización ahorradora de fuerza de trabajo, permitiendo consolidar la participación del núcleo familiar en las principales tareas productivas. (Azcuay Ameghino y Martínez Dougnac, 2014: 36)

La cuestión es cómo inciden estos bienes de capital en la organización social de la producción, hasta dónde este proceso de acumulación de riqueza condiciona el desarrollo del ciclo productivo de las unidades familiares. Cuando esta acumulación funciona como capital, la mano de obra familiar está presente en el proceso directo pero utilizando también mano de obra asalariada con un papel decisivo (Murmis, 1980). Entonces, el proceso de desarrollo histórico, siempre dinámico, nos plantea la discusión de las transformaciones en los procesos de reproducción social. Ya que en la medida en que la contratación de fuerza de trabajo ajena a la unidad doméstica contribuya significativamente a un proceso de acumulación sostenido; es decir, en la medida en que el excedente o “plustrabajo” aportado por los trabajadores contratados se convierta en nuevos medios de producción ampliando así la escala del proceso productivo, se estaría en presencia ya no de una

unidad “campesina” [familiar] sino de una auténtica empresa capitalista (Llambí, 1981: 129).

Para concluir, mientras la producción de maní en Tercero Arriba en este período estuvo asociada a la consolidación de un sector de productores familiares “tradicionales” de entre 100 y 200 hectáreas que invirtieron en maquinaria ahorradora de mano de obra, la producción de maíz en Marcos Juárez produjo condiciones para un período de crecimiento y diferenciación de los productores familiares, con inversión tecnológica y ampliación de escalas productivas superiores a las 200 hectáreas.

Las características del proceso en este último departamento y las transformaciones sociales que fueron ocurriendo, fueron acompañadas por políticas que sostenían un discurso modernizador y que promovían un nuevo productor capitalista, que debía semejarse a un empresario industrial, con rol de administrador y eficiente en la búsqueda de ganancias.

Referencias bibliográficas

- Azcuy Ameghino, E. (2007). Propiedad y renta de la tierra en Argentina a comienzos del siglo XXI. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, XXVII (27).
- Azcuy Ameghino, E. & Martínez Dougnac, G. (2014). La agricultura familiar pampeana: notas sobre historia y actualidad. *Eutopía*, n° 6, pp. 41-52.
- Cloquell, S. Albanesi, R., De Nicola, M., Preda, G. & Propersi, P. (2005). La agricultura a escala y los procesos de diferenciación social. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, n° 23.
- Coscia, A. (1965). La desocupación y el éxodo en el medio rural. *Informe Técnico*, n° 44. Córdoba: INTA.
- Coscia, A. (1971). El maíz. Cultivo que resurge. *Informe Técnico*, n° 102. Córdoba: INTA.
- Coscia, A. & Torchelli, J. (1968). La productividad de la mano de obra en el maíz. *Informe Técnico*, n° 79. Córdoba: INTA.

- Forni, F. & Tort, M. (1980). La tecnología y el empleo en un nuevo enfoque del desarrollo agropecuario. El caso argentino. *Revista Desarrollo Económico*, XIX (76).
- Iparraquirre, P. (2014), “Promoción agrícola regional y productores familiares. La producción de maní en la provincia de Córdoba en las décadas de 1950 y 1960”, en Olivera, G. y otros. *El agro cordobés en el siglo XX: entramados productivos, políticos y sociales desde una perspectiva histórica*. Córdoba: Editorial Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.
- Krantz, B. & Hills, F. (1970). Papel de la extensión en la investigación con una misión. *Miscelánea*, n° 33. Estación Experimental Regional Agropecuaria Marcos Juárez. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación. INTA.
- Kugler, W. & Godoy, E. (1953). Progresos recientes en la técnica cultural del maíz. *Anales de la Sociedad Rural de Argentina*, 87, n° 12, 13 y 14.
- Kugler, W. & Godoy, E. (1953). Maíz Híbrido en la Argentina. *Revista El surco*, n° 1.
- Luna, J. (1946). “Maíz. Aspectos de la utilización”, en *Almanaque del Ministerio*. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura.
- Llambi, L. (1981). Las unidades de producción campesina en un intento de teorización. *Estudios Rurales Latinoamericanos*, IV (2), pp. 125-153.
- Miles, A. (1962). Costos de cosecha de maíz. *Revista El surco*, n° 2.
- Ministerio de Agricultura (1947). “Necesidad y modo de labrar la tierra”. *Almanaque del Ministerio*. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura de la Nación.
- Ministerio de Agricultura (1948). “Uso del colchón de rastrojo”. *Almanaque del Ministerio*. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura de la Nación.
- Ministerio de Agricultura (1949). “Los Maíces Híbridos”. *Almanaque del Ministerio*. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura de la Nación.
- Murmis, M. (1980). Tipología de pequeños productores campesinos en América Latina. *Documento PROTAAL*, n° 55.
- Pietrarelí, J. (1959). *El cultivo del maní en la provincia de Córdoba*. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Córdoba: INTA.
- Pizarro, J. (2003). La evolución de la producción agropecuaria pampeana en la segunda mitad del siglo XX. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, n° 18.
- Riccitelli, J. (1953). El buen uso de las máquinas en el maizal. *Mundo Agrario*, n° 52.

- Sabato, J. (1981). *La pampa pródiga: Claves de una frustración. El agro pampeano argentino y la adopción de tecnología entre 1950 y 1978: un análisis a través del cultivo del maíz*. Buenos Aires: CISEA.
- Tort, M. y otros, (1980) Tecnología y Empleo en el agro. El caso Argentino. Recopilación de ensayos. *Documento de Trabajo*, I-II (8).

**Modernidad, agronegocio y pensamiento único en
Argentina:
entidades agrarias e instituciones estatales**

Gina Lucía Aichino

Gabriela Inés Maldonado

“Los muertos vivientes de la revolución del mercado libre continúan caminando por la tierra, aunque con cada resurrección de su marcha la falta de coordinación se hace cada vez más errática” (Peck, 2011)

Introducción

Universalizado, globalizado y naturalizado, el pensamiento occidental de la modernidad se ha impuesto como única racionalidad –conocimiento técnico y experto- y modelo a seguir, invisibilizando otras formas de apropiación espacial. Posicionados desde abordajes que analizan al espacio como construcción (Lefebvre, 1991; Santos, 2002) y desde concepciones críticas de la modernidad-decolonialidad y colonización (Lander 2000, Mignolo 2003, Quijano 2007, Escobar 2007, Cusicanqui 2010), consideramos que dicho modelo reproduce la mercantilización del espacio, transformándolo en recurso a ser explotado y a ciertos hombres (blancos, universitarios) como únicas fuentes de conocimiento capaces de dominarlo.

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca de estas relaciones de poder a través de un acercamiento al abordaje de la influencia del conocimiento tecno-científico-informacional y organizacional en los discursos y representaciones de cooperativas agrícolas e instituciones estatales, vinculadas a procesos de modernización agropecuaria. Por medio de la investigación de esta influencia en la realidad productiva de Argentina, se analizarán las tensiones existentes entre las búsquedas por imponer un pensamiento único, por un lado, y visibilizar necesidades de discursos alternativos, por otro. Este trabajo si bien recupera algunos previos, busca desarrollar más en profundidad los procesos neoliberales de los últimos treinta años. Dicho rastreo permite a su vez visibilizar los agentes más influyentes en las políticas nacionales y el rol asumido por las instituciones estatales, dando cuenta de las orientaciones que asumen las mismas a partir de la influencia de los intereses corporativistas.

Se realizará un abordaje del concepto de estado desde una visión dinámica y relacional, como campo de lucha al interior del cual múltiples actores disputan su sentido. En la búsqueda por evitar el fetichismo teórico, nos oponemos así a abordajes que ven al accionar del Estado como monocromático y unidimensional. De esta manera realizaremos un acercamiento al concepto “desde adentro”, evitando personalizaciones, generalizaciones y centralizaciones, en la búsqueda por revalorizar la importancia de las relaciones y tensiones intraestatales (Bohoslavsky y Soprano, 2010). A fin de realizar algunas aproximaciones a las transformaciones ocurridas en el aparato estatal en el período bajo estudio, adherimos a Iazzetta (2007 en Bohoslavsky y Soprano 2010), quien plantea que para la delimitación de las formas y funciones estatales se debe remitir a su tamaño, capacidad de acción, autonomía, tipo y grado de penetración en la sociedad civil o alcance del poder infraestructural para operar sobre la población de un territorio.

Con el fin de cumplimentar el objetivo planteado se analiza material bibliográfico pertinente. Además se realizan entrevistas a in-

tegrantes de cooperativas agropecuarias y a agentes de instituciones estatales que participan de proyectos, planes y programas en desarrollo en algunas localidades de la provincia de Córdoba. El análisis bibliográfico permite identificar la racionalidad presente en instituciones tales como la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Dicha bibliografía posibilita, a su vez, presentar algunos discursos reproducidos por productores agropecuarios de dos localidades de Buenos Aires. Por su parte, las entrevistas realizadas a técnicos de instituciones estatales y cooperativas agrícolas¹ nos permiten dar cuenta del proceso de “modernización” presente en la actualidad, sus impactos y el rol del estado argentino frente a estos procesos.

La bibliografía con la que se trabajará analiza casos en Argentina pero, a través de las entrevistas,² el trabajo hace foco en la provincia de Córdoba, en los departamentos Río Cuarto, Unión y Cruz del Eje. La selección de estos territorios se debe a los contrastes que presen-

1 Fueron entrevistados técnicos extensionistas rurales de instituciones estatales -INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) Unidad Extensionista Cruz del Eje, INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Unidad Extensionista Río Cuarto- e integrantes de la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz. La selección de los entrevistados integrantes de instituciones estatales se realizó a partir de la participación de los mismos en proyectos de los que fueron parte las autoras de este artículo. Por un lado fueron seleccionados a partir de su pertenencia a una Red de Coordinación Territorial, con la que ambas estuvimos trabajando entre los años 2014-2016 desde el proyecto de investigación titulado “Condiciones socio-económico-ambientales de la producción agropecuaria en Córdoba, Argentina, durante el período 1980-2010: análisis comparativo de dos realidades contrastantes y propuestas de ordenamiento territorial”, Cátedra de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (Proyecto categoría A con financiamiento de Secyt). Por otro lado, los integrantes de las cooperativas agrícolas fueron seleccionados a partir de un trabajo de extensión titulado “Evaluación de la salud colectiva socio-ambiental de Monte Maíz” del que participó una de las autoras de este artículo a fines del año 2015. <http://reduas.com.ar/wp-content/uploads/downloads/2015/03/%C3%BAItimoMMM.pdf>

2 Realizadas en el marco de la tesis doctoral en geografía que se encuentra desarrollando una de las autoras de este artículo.

tan en su trascendencia económica, social y ambiental en el contexto provincial y nacional -Córdoba ostenta, entre otros aspectos, la mayor producción sojera de Argentina, a la vez que las mayores tasas de deforestación y desaparición de ambientes naturales-. Por trascendencia entendemos que la producción agrícola es la principal actividad económica en estos departamentos, ya que tanto el aporte de Río Cuarto como el de Unión al PBI provincial son altamente significativos en comparación con Cruz del Eje.³ Esto se debe en gran parte a las características ambientales, en la medida en que los primeros departamentos se ubican en el ambiente pampeano, cuyas características edáficas y climáticas son más beneficiosas para el desarrollo de la producción agrícola. A su vez, estos departamentos fueron seleccionados debido a que, si bien ocurrió en distintos momentos históricos –los primeros a mediados del siglo XX y el tercero en las últimas décadas-, registran profundas transformaciones producto del avance del proceso de modernización agropecuaria. Ello implica transformaciones en las formas de producción: introducción de paquetes tecnológicos, conflictos por el uso y tenencia de la tierra, generación y/o profundización de procesos de exclusión campesina, competencia por la apropiación de recursos, como la tierra y el agua, entre otros. La llegada de estos procesos de modernización ha desestabilizado la articulación territorial previa entre actores y territorio, para orientarla hacia un nuevo patrón que encuentra su dinámica sobre impulsos exógenos y sobre el ingreso de nuevos actores sociales.

Este trabajo brinda una reflexión sobre la presencia hegemónica de un pensamiento único vinculado a la visión de *modernidad tecno-científica-informacional*, *progreso y desarrollo* en el agro. A su vez, pretende, en los últimos apartados, realizar algunas reflexiones analizando el “rostro humano” del estado, surgidas de los discursos y estrategias llevadas adelante por técnicos del oeste de la provincia de

3 <http://estadistica.cba.gov.ar/>

Córdoba, los que buscan promover otros paradigmas y otras racionalidades.

Por último, presentamos algunas conclusiones en las que proponemos continuidades del presente trabajo vinculadas al análisis de prácticas y estrategias concretas implementadas por los actores del estado analizados. Planteamos, a su vez, la necesidad de desnaturalizar el modelo tecno-científico-informacional imperante en la actualidad en Argentina, promoviendo la generación de otros paradigmas.

Contextualización: desarrollo y crecimiento económico

Característico del proceso de acumulación por desposesión del período de dominio del capital financiero (Harvey, 2004) y denominado extractivismo por algunos autores (Machado Araújo, Gudynas) el actual modelo agropecuario se enmarca en una ideología de la modernidad que está embebida de colonialidad (Mignolo, 2007) en la medida en que surge el llamado *desarrollo* como “fuerza propulsora, portadora de la llave modernizadora universal” para que “el colonialismo y el imperialismo europeos hagan que otros pueblos salgan de la barbarie (...) hacia la civilización” (Porto Gonçalves, 2013, p. 69). Este concepto ha sido ampliamente mencionado y analizado tanto en investigaciones académicas como en planes y programas de gestión. La mixtura entre teoría y praxis, articuladas en distintos contextos y disputas de sentido, hacen del desarrollo un término polisémico. La intención del presente trabajo no es detenerse en esta compleja discusión, sino que nos interesa abordar el sentido que el modelo económico neoliberal le ha asignado. La captura conceptual realizada por el mismo se vincula con la búsqueda de un *crecimiento económico* concebido ampliamente como un medio para reducir la pobreza y mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto. A pesar de esto, se observa que lo que se ha producido como consecuencia de la aplicación de este modelo es la profundización de la vulnerabilidad socio-territorial.

La *economía del desarrollo* se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta frente a los desafíos de la pobreza y la distribución de la riqueza (Gudynas, s/a). Recuperando abordajes que enmarcan a este modelo dentro de la ideología de la modernidad, consideramos que la misma se encuentra embebida de colonialidad en la medida en que surge el llamado *desarrollo* como concepto que apunta a los avances y progresos en el campo económico y social (Escobar, Mignolo, Quijano, Cusicanqui, entre otros). Desde esta perspectiva, y realizando un recorrido por el surgimiento y evolución del concepto de desarrollo, nos encontramos con que a través de éste se concibe a la historia como un proceso lineal que promueve el traspaso de condiciones pasadas de atraso a un futuro moderno (Gudynas, s/a). Cuestionado luego por la teoría de la dependencia y posteriormente complementado con el concepto de desarrollo sustentable, que buscó incluir aspectos considerados residuales para el desarrollo industrial, incorpora discursivamente algunas cuestiones relacionadas con la biodiversidad, la conservación del ambiente, la importancia de los sistemas no occidentales de conocimiento, entre otros aspectos (Castro Gómez, 2005). Sin embargo, alejado de retos y cercano a las búsquedas por colonizar el poder, consideramos que tanto el concepto de desarrollo como el de desarrollo sustentable se encuentran bajo el modelo de mercantilización y cuantificación de los territorios. Sostenemos a su vez que los mismos se presentan como conceptos que se vinculan con lógicas de acumulación del capital -obtención de ganancias monetarias como único objetivo final- y son apropiados por el pensamiento hegemónico.

Respecto a los proyectos vinculados al desarrollo que se han aplicado en Argentina, destinados a aquellos actores que están siendo expulsados del actual modelo productivo, algunos autores afirman que los mismos presentan serias limitaciones ya que, en general, no articulan el nivel de producción “microeconómico” con el nivel “macroeconómico” (Manzanal y Nardi, 2008). Los mismos afirman que esto produce una “tendencia a no tratar integralmente los objetivos de carácter

económico-productivo, de desarrollo institucional y los orientados al logro de bienestar y de cohesión social” (Schejtman y Barsky, 2008, p. 29). Sostienen que esto los lleva a su fracaso o a la generación de pocas transformaciones positivas en los territorios donde se instalan.

Como consecuencia nos hacemos las mismas preguntas que Manzanal (2010): ¿de qué *desarrollo* se trata?, ¿para quién y para qué?, ¿puede separarse el desarrollo de la dominación y el poder que implica el control de los territorios en cuestión? Esta autora señala que el concepto desarrollo debe ser “destronado”, puesto que los países latinoamericanos tienen más de cuarenta años de aplicación de políticas de desarrollo sin resultados positivos para el grueso de la sociedad (Manzanal, 2010).

Racionalidad y búsquedas por imponer un *pensamiento único* en el agro

El espacio rural no es ajeno a esta captura conceptual puesto que tanto discursos como prácticas promueven la linealidad del *crecimiento económico* (traducido en eficiencia productiva), *progreso* y *desarrollo*. Esto se relaciona con la racionalidad del período técnico-científico-informacional de la modernidad⁴ asociada a las dinámicas ocurridas desde mediados del siglo XIX a nivel mundial presentes en las formas de producción agropecuarias.

Análisis históricos (Barsky y Gelman, 2005) afirman que a principios del siglo XIX en Argentina existían retrasos tecnológicos

4 Utilizamos el término modernidad y no modernización en la medida en que se busca contextualizar el presente trabajo en el marco del surgimiento y desarrollo de un período histórico en Europa donde se produce el predominio de la racionalidad –conocimiento técnico y experto-. Posteriormente se produce una globalización de la modernidad, en la medida en que se universaliza y globaliza dicho pensamiento a nivel mundial (Escobar en Alimonda 2005, Coronil en Lander 2000).

que no influían en la rentabilidad económica de los productores debido a que la expansión horizontal del área sembrada en el país se mantenía constante. Deficiencias en el sistema de transporte de granos, luchas contra plagas y malezas, debilidad de la industria proveedora de maquinaria agrícola, ausencia de políticas a largo plazo en el ámbito de la generación tecnológica, caracterizaron al período según estos autores y profundizaron la brecha tecnológica con países como Estados Unidos, Canadá y Australia. En consecuencia, el modelo adoptado por el país profundiza una lógica de dependencia en la medida en que comienza a tener un fuerte peso la importación de segadoras, cosechadoras y sembradoras. Finalizada la Segunda Guerra Mundial se consolidó y expandió un modelo que predominará hasta la actualidad, denominado por algunos autores como “segunda revolución agrícola de Occidente”, caracterizada por un amplio uso de herbicidas y pesticidas, fuerte utilización de abonos químicos, perfeccionamiento de técnicas de irrigación, generación de variedades de cultivos de alto rendimiento, mecanización a gran escala, entre otros (Barsky y Gelman, 2005).

Santos (2000) denomina a esta forma de producción *agricultura científica*, en la medida en que ésta se caracteriza por la introducción de insumos agropecuarios artificiales de origen industrial. La expansión de este tipo de agricultura produce el reemplazo del medio natural y técnico por el medio *técnico-científico-informacional*, llevando al aumento de la racionalización del espacio rural.

La introducción de estos factores se produjo debido a condiciones internacionales favorables vinculadas a la difusión de *normas y estándares de producción*, establecidos por firmas globales y apoyadas por el sector tecno-científico. Este último, legitima el discurso global por medio de la construcción de *mecanismos tecnológicos* que promueven la dispersión e internacionalización de *normas de estandarización* (Maldonado, 2013).

La racionalidad en la que se enmarca este proceso de modernización de la producción agropecuaria se apoya en la construcción de una visión de mundo que potencia la creación de escasez tanto en el presente como en el futuro. Así, las empresas promueven una visión del mundo de corte neomalthusiano, que relaciona el incremento “drástico” de la población con la necesidad de provisión de alimentos (Maldonado, 2013). Al respecto es interesante el rol asignado a Argentina y otros países por las empresas vinculadas al sector. Steve Elmore, jefe de Economía Agrícola de *Pioneer* a nivel mundial, señala que “la Argentina tiene un inmenso potencial para producir alimentos [...] este potencial no se trata de una cualidad envidiable, sino de una obligación por cumplir”. Porque para Elmore, “sólo Brasil, la Argentina y Estados Unidos tienen en sus manos la solución para alimentar a los millones de nuevos ciudadanos que nacen por día y que seguirán aumentando la presión sobre la demanda alimenticia año tras año”. De esta manera, la noción de innovación jugaría un doble papel: moral, al instaurar la dinámica de cambio como *deseable* y hasta *necesaria*; y performativo en la medida en que se innova *sólo si* se incorpora a las prácticas la visión de los agronegocios (Hernández, 2009, p. 45).

En este contexto surgen, se adaptan y asocian diversos actores que participan del proceso de modernización. Las “*firmas globales* producen insumos agropecuarios -semillas transgénicas, fertilizantes y biocidas- y promueven, subsidian o generan el desarrollo científico y tecnológico necesario para la fabricación de tales insumos; las *universidades* -en su mayoría nacionales- realizan convenios de investigación con empresas transnacionales para el desarrollo de nuevos insumos; las *firmas globales y nacionales* fabrican maquinaria agrícola y repuestos; se crean los *sistemas de consultoría y servicios técnicos* para las distintas etapas del proceso de producción; surgen *empresas de acopio y comercialización* de granos, entre otros” (Maldonado, 2013, p. 6).

A su vez, los espacios de divulgación cumplen un rol importante en la construcción de esta visión al difundir una imagen de produc-

tor agrícola como empresario flexible, innovador, estratégico capaz de realizar un manejo exitoso de su explotación. “El conocimiento se convierte en el factor productivo por excelencia” (Maldonado, 2013, p. 21). En este escenario las organizaciones rurales adoptan discursos y estrategias que se constituyen en centro de irradiación de tal racionalidad.

Este pensamiento profundiza y fortalece una realidad que invisibiliza formas alternativas de producción por encontrarse “del otro lado de la línea” que establece el *pensamiento occidental abismal* (Santos, 2010). Según este autor esta línea determina el límite entre lo *civilizado* y lo *no civilizado*, entre el *progreso* y el *atraso*. En el campo del conocimiento, el pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia moderna el monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso y los conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas al otro lado de la línea desaparecen como conocimientos relevantes o conmensurables porque se encuentran más allá de la verdad y de la falsedad (Santos, 2010, p. 13). Entonces sólo se convierten en *racionales* los cambios acontecidos de acuerdo a las pautas del *progreso* establecido en el marco del pensamiento occidental. Así, la lógica que se introduce es la de una constante aceleración y reproducción del proceso de acumulación de capital, quedando excluidos del progreso los actores que no se adapten a tales imperativos.

Frente a la aparición de nuevos actores, el estado juega un papel no menor, en la medida en que se convierte en el promotor e intermediario para algunas de las operaciones necesarias para el sistema económico global, produciendo a su vez los instrumentos requeridos para que éste funcione. Sassen (1999) denomina a este proceso *desnacionalización de lo nacional*.

Estado, corporaciones y poder

En este escenario, enmarcado en un contexto capitalista, el estado⁵ se presenta como un campo de relaciones y luchas de poder (Peyreya, 1988). Esto se va a ver reflejado en la sucesiva tendencia a la reproducción económica promovida por funciones asignadas globalmente. En Argentina, en la década de 1990 el surgimiento y desarrollo del modelo neoliberal se traduce en una clara pérdida de autonomía y deterioro de las capacidades técnicas del estado (Palermo y Novaro, 1996). Al respecto, Morresi (2007 en Bohoslavsky y Soprano 2010) afirma que las políticas neoliberales aplicadas en Argentina durante este período estuvieron lejos de configurar un “estado mínimo”, promovieron, por el contrario, cambios radicales en las relaciones laborales y en la reprimarización, apertura y privatización de la economía. Azpiazu y Nochteff (1994) y Basualdo (2000 y 2011) adhieren a esta postura, denominando este último autor *transformismo argentino* a este proceso, puesto que los grupos dominantes que ejercían la hegemonía durante ese período se empoderaron a través de procesos de *valorización financiera*.

El modelo cientificista agropecuario comenzó a perfilarse a mediados del siglo XIX y se terminó de consolidar durante fines del siglo XX con la aplicación de políticas neoliberales (Paruelo, 2005). Este modelo está centrado en la agro-producción de *commodities*. Esto profundizó la incorporación de cambios tecno-científicos-informacionales en la producción agropecuaria, de la que participaron instituciones del agro a través de la difusión de un discurso y estrategias *tecnologizantes* que influyeron en las decisiones tomadas por el estado.

5 Destacamos la escritura de la palabra estado con letra minúscula para distanciarnos de conceptos que construyen una imagen de estado como “un ser en sí mismo, animado, con voluntad y entendimiento propio” (Taussig 1995).

De esta manera, la política económica de Argentina se fue adaptando, en el transcurso de su historia, a los estándares de producción mundial a través de impulsos exógenos de modernización que la orientaron hacia un modelo de crecimiento inducido por los cambios en el desarrollo de las economías extranjeras (Nochteff, 1995). El funcionamiento de las relaciones sociales, económicas y estatales de la Argentina a partir de mediados de 1970 es caracterizada por Palermo y Novaro (1996) como *asistida y opaca*. Asistida porque “la acumulación privada descansaba básicamente en la captura privada de recursos sociales vía regulaciones estatales” (p. 46), donde la capacidad financiera del Estado era un factor muy importante y opaco por la existencia de vínculos y negociados realizados por fuera de las “arenas formalmente constituidas” y porque los “costos económicos y sociales de la acumulación privada y pública” y la captura del estado por parte de ciertos grupos, ocurrían a espaldas de la sociedad y a costa del desconocimiento de su estructura, distribución y evolución” (p. 47).

Centrados en el período bajo estudio, nos encontramos con que el gobierno de Néstor Kirchner se caracteriza por convalidar el poder de la fracción del capital transnacional, que fomentó los procesos de especulación financiera durante la década de 1990. La *autonomía relativa* (Ansaldi y otros 1995) del gobierno, al asumir una postura de enfrentamiento con los acreedores externos como el FMI, posibilita la retención del excedente económico. Recurrimos a Basualdo (2002) para definir lo anterior como la restauración de la vigencia de una hegemonía clásica en la medida en que, según el autor, ésta consiste en promover procesos de inclusión política y social de algunos sectores sociales mediante la consolidación de una “burguesía nacional”,⁶ con-

6 Basualdo utiliza el término oligarquía en la medida en que considera que las características de este sector se han mantenido a lo largo de los años. Barsky y Lattuada, por el contrario, sostienen que las transformaciones ocurridas en Argentina implican diferentes etapas de intervención y avance del espacio del capital que dan lugar a nuevos actores con características diferentes. En el presente trabajo haremos referencia a este sector denominándolo burguesía agropecuaria (Halperin Dongui, 2004) o grupos agropecuarios

formada por grupos económicos locales diversificados. “Es imposible consolidar el proceso de una dirigencia nacional, es imposible consolidar un proyecto de país, si no consolidamos una burguesía nacional verdaderamente comprometida con los intereses de la Argentina, un fuerte proceso de capitalismo nacional que nos permita recuperar decisiones perdidas en todas las áreas de la economía” (Néstor Kirchner, 29/9/2003).⁷ La apuesta a la conformación de una “burguesía nacional” fue profundizada por los dos períodos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que lo prosiguieron. Gaggero y otros (2014) sostienen que dicho empoderamiento sentaría las bases para un proyecto de país donde el interés de la clase empresarial pasaría por el “desarrollo económico autocentrado”, y esto posibilitaría una “mayor inclusión social y menor dependencia económica” (p.14). Sin embargo, continúan estos autores, en la última década se han producido elevados niveles de concentración y extranjerización de la economía debido principalmente a que el gran capital se replegó a sectores con ventajas comparativas basadas en bienes naturales o a otras actividades que no están expuestas a competencia. Dichos procesos denotan la inexistencia de una burguesía que se haya convertido en “campeón nacional” y permita complejizar el perfil productivo, impulsando un proceso de desarrollo económico con inclusión social, y posicionando de otra manera a la Argentina en el mundo (Gaggero y otros, 2014).

Los sectores dominantes que van a ejercer presión sobre los dos períodos de presidencia de Fernández de Kirchner van a buscar subordinar y disciplinar el nuevo gobierno a sus intereses, buscando el abandono de políticas distribucionistas (Basualdo, 2011). El sector económico dominante durante estos años será la burguesía agropecuaria, con la cual se producirá un enfrentamiento en el 2008 que será

hegemónicos, en la medida en que sus estrategias de dominación han variado a lo largo de los años.

7 http://www.presidencia.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=24456&catid=28:discursos-ant (consultado el 21/1/2014). En Gaggero, Schorr y Wainer 2014.

una “divisoria de aguas cuyos resultados continúan expresándose en la actualidad” (Basualdo, 2011: 152).⁸ Dicho conflicto se origina con la intención de aplicar retenciones móviles a la exportación de soja – ante el aumento del precio internacional de dicho grano, alrededor del 45% respecto a la campaña anterior– lo que trae como consecuencia la realización de un paro agrario que se extendió por varios meses realizado por la “mesa de enlace”, formada por entidades agropecuarias de representación nacional (SRA, CRA, FAA⁹ y CONINAGRO).¹⁰ Basualdo (2011) resalta que las razones de esta fuerte oposición no se originan en la existencia de situaciones económicas críticas en dichas fracciones de capital, sino que por el contrario las mismas atraviesan situaciones notablemente favorables. Lo que está en disputa, según este autor, son los intentos por recuperar su hegemonía y definir un nuevo patrón de acumulación de capital que los reconozca como núcleo central. Si bien estas políticas no pudieron implementarse, ya que dicho enfrentamiento culminó en el Congreso con el voto del vicepresidente en rechazo de dicho proyecto, los hechos dieron cuenta de una derrota para una fracción del capital que había detentado su hegemonía durante la valorización financiera. Esta derrota se vincula con el avance de un modelo vinculado a la producción agroindustrial bajo el paradigma sojero, alejándose del bloque de poder favorecido durante el menemismo, pero favoreciendo al capital extranjero industrial (Basualdo, 2011).¹¹

8 Dicha oposición se produce también con los grupos económicos que controlan los medios de comunicación, en la medida en que la presidente alega parcialidad en la difusión de los hechos (Basualdo 2011).

9 Tradicional representante de pequeños y medianos productores que se alinea con intereses de los grandes terratenientes de la pampa húmeda. Para ampliar ver cita 12.

10 El presente trabajo no busca profundizar sobre el desarrollo de dicho conflicto, para más información al respecto consultar Giarraca N. y Teubal M. (2010). Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates. Editorial Antropofagia. Buenos Aires.

11 El segundo gobierno de Fernández de Kirchner se caracterizará a su vez por el enfrentamiento que deberá mantener con empresas oligopólicas en el establecimiento de precios, frente a procesos de inflación por los que atraviesa el país. Dicho análisis excede este trabajo razón por la cual no será profundizado.

En consecuencia, Gaggero (2014) y Basualdo (2011) coinciden en señalar que los gobiernos Kirchneristas que se sucedieron desde el 2003 hasta el 2015 –si bien se enfrentaron con acreedores externos, grupos económicos locales y capitales extranjeros prestadores de servicios públicos- se caracterizaron por una confluencia en el proyecto de país de intereses del empresariado internacional –favoreciendo el *translatino*, si se quiere- y diferentes sectores del gran capital nacional, profundizándose de esta forma un perfil de especialización internacional regresivo y una inserción pasiva y subordinada al mercado mundial.

Desde un abordaje relacional, se afirma que el estado cumple una función activa y no reactiva en la acumulación del capital debido a las estructuras históricas heredadas que lo llevan a “defender lo que existe” y a escuchar unos intereses más que otros (Cantamutto, 2015). Si bien coincidimos en la importante influencia que ejercen las estructuras heredadas y el contexto mundial, sostenemos, por el contrario, la necesidad de distanciarse de abordajes que esencializan y homogeneizan el concepto de Estado. Buscamos visibilizar otras estrategias que están siendo implementadas por agentes estatales que son críticos del modelo hegemónico y buscan promover racionalidades otras. Profundizaremos al respecto en el último apartado.

Transformaciones en el agro argentino: *lo público versus lo privado*

Martínez Nogueira (1988) centra su análisis histórico en lo ocurrido en Argentina durante los períodos de gobiernos conservadores de fines del siglo XIX y principios del XX, donde existía un “grupo hegemónico asentado en la gran propiedad que monopolizaba los recursos de poder” (p. 312). El autor sostiene que la *problemática del agro* tiene una dimensión institucional debido a que se imponen intereses de

sujetos que históricamente se han nucleado, los que restringen la capacidad de acción de los gobiernos. Afirmo a su vez, que estos últimos se presentan como un actor que otorga un privilegio a corporaciones al acceso a la información y la decisión y a la atención preferente de demandas y planteos. En la búsqueda por realizar abordajes del estado “desde adentro”, evitando caer en personalizaciones, generalizaciones y centralizaciones (Bohoslavsky y Soprano, 2010), nos acercamos a Poulantzas¹² (1970 y 1978 en Ramírez, 2007) a fin de definir como “autonomía relativa” al accionar de este actor. El autor sostiene que esto ocurre en la medida en que no existe una total autonomía y neutralidad en la estructura estatal, ya que funciona como una arena de lucha entre intereses donde predominan los de grupos dominantes.

Este proceso de penetración ocurrido por parte de organizaciones rurales en el aparato del estado produce una *privatización de un ámbito de la política pública* (De Olariaga 1948 en Martínez Nogueira 1988). Al respecto, menciona a la Sociedad Rural Argentina (SRA) como institución de primer grado que por entonces concentraba la representación ante el estado y se convierte en “voz exclusiva por la que se expresa la problemática agropecuaria”, enunciando un régimen político de “participación restringida” y un “marco social de dominación” (p. 296).

En las décadas posteriores a los procesos antes expresados, estudios sobre el agro con visiones tradicionales sostienen que, pasado el siglo XIX donde el agro era el principal motor de crecimiento económico argentino, la actividad agrícola deja de ocupar el mismo lugar en el PBI. Afirman que se produce una subordinación de la agricultura a las estancias ganaderas (Sábato, 1991, p. 17-37 en Olivera, 2008). Sin embargo, estudios rurales de la década de 1980 cuestionaron esta visión afirmando la existencia del carácter capitalista del sector deno-

12 Este autor se enmarca en la tradición marxista clásica al analizar el rol del estado en la generación de los intereses de las clases dominantes (Cantamutto 2015).

minado “chacarero”, a partir de la combinación entre renta y ganancia (Olivera, 2008). Sábato (1989) sostiene que desde la segunda mitad del siglo XIX se conformó un mercado de tierras dinámico vinculado al sector chacarero y a la expansión de la frontera agraria, la valorización de la tierra y las conexiones con mercados externos e internos. En este contexto, y debido a las desfavorables condiciones pactadas para los arrendatarios en comparación con los terratenientes, se produce el surgimiento de un “movimiento agrario cooperativo (...) entrelazado al movimiento reivindicativo chacarero” (Olivera, 2008, p. 34). Olivera (2008) a través de un estudio de reconstrucción histórica micro-regional, afirma que este cooperativismo otorgará “incentivos simbólicos y materiales” al sector chacarero (p. 42).

Al respecto, y vinculado con lo desarrollado en el apartado anterior, Martínez Nogueira (1988) reafirma la presencia de un fuerte tono intervencionista durante la década de 1940 en la legislación argentina, momento en el cual el movimiento cooperativo crece notablemente en significación y las organizaciones establecidas procuran cerrar las puertas de acceso al estado a las nuevas entidades que estaban surgiendo. Por estos años, en la nueva realidad productiva la tecnología desempeña un papel crítico para explicar la productividad y rentabilidad del sector agropecuario. Como consecuencia se produce un aumento de las demandas que calificamos como de *modernización* y una profundización en la fijación de precios al sector, donde el autor afirma que los protagonistas de los conflictos pasan a ser las entidades y el estado en constante tensión. Por un lado los reclamos de estas organizaciones se dirigen hacia un cuestionamiento al modelo de sociedad y al papel del estado y, por otro lado, sus afiliados le exigen mayor especificidad en sus reclamos, identificación de necesidades concretas y contenidos más técnicos en sus propuestas (Martínez Nogueira, 1988).

Pasadas estas décadas de estancamiento, y retomando la perspectiva de políticas estatales que “castigaban al campo”, recurrimos a Lattuada (2006) al afirmar que durante los años noventa se produjo un cambio en lo que llamamos *lo público* y *lo privado*. De una inter-

vención y redistribución directa del excedente intersectorial, el estado desplaza ese “rol conflictivo” al mercado (Lattuada, 2006, p. 177) y se reserva acciones tales como promoción de competitividad, prestación de servicios, articulación de la cadena agroalimentaria y la prestación de asistencia a los sectores más vulnerables.

Como consecuencia de este cambio de rol del estado, Lattuada (2006) afirma que las entidades rurales desplazan su discurso defensivo de confrontación y presión por uno *colaborativo y propositivo*¹³ –con la tecnología como una de las temáticas vinculadas a éstas-. A su vez, esto los obliga a redefinir su relación con los asociados alejándose de funciones políticas y acercándose a las de capacitación técnica y desarrollo de actividades de promoción, comercialización y servicio (Lattuada, 2006).

Estas transformaciones gremiales se produjeron principalmente debido a pérdidas de representatividad y cuestionamiento de sus dirigentes, ocurridas durante la década de 1990.¹⁴ La disminución del número de afiliados a estas entidades estaba vinculado con reclamos sectoriales por cambios en la orientación de las acciones y servicios. Dichos reclamos estaban encabezados por productores cuya rentabilidad estaba asentada en la escala, la tecnología y la gestión empresarial. Por esta razón durante esta etapa las asociaciones propiamente técnicas (AACREA, APRESID) eran las más valoradas por los productores (Lattuada, 2006).

Una mirada “desde adentro” (Bohoslavsky y Soprano, 2010) nos permite identificar que el vínculo entre el aparato estatal y las enti-

13 En el caso concreto de la Sociedad Rural Argentina, el accionar de esta entidad estuvo directamente relacionado con el apoyo al modelo impulsado por los gobiernos de facto (Martínez Nogueira, 1988) y al que ocupó la presidencia a partir de 1989, este último vinculado a la obtención de condiciones de libre mercado, privatizaciones, etc. “Su actitud fue de respaldo total a la orientación del modelo” (Lattuada 2006: 203).

14 La disminución de afiliados lleva a una reducción en la recaudación de fondos de las entidades y varias se aglutinan para demandar al estado la creación de algún mecanismo basado en un aporte obligatorio de los productores.

dades agrarias se ve reflejado en el hecho de que, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad inclusive, representantes de dichas instituciones se conviertan en miembros de espacios gubernamentales como agencias, secretarías, comisiones, consejos, entre otros (Martínez Nogueira 1988, Lattuada 1992). Dichas participaciones les otorgaron privilegios a la hora de tomar decisiones respecto a las políticas aplicadas en el sector. Esta tendencia presenta una constante en el accionar de las entidades agrarias, representando intereses sectoriales hegemónicos e imponiendo lo que denominamos *pensamiento único*.

Corporaciones rurales y discurso *hegemónico*

La hegemonía puede presentarse como la capacidad de controlar o disponer de los instrumentos necesarios para obtener un logro o resultado, pero también como la capacidad de controlar los aparatos productores de ideologías y tomadores de decisiones que operan para crear y mantener ciertas creencias. Esta concepción institucionalista de hegemonía permite dar cuenta de la existencia de una “dirección política mediada”, en la medida en que la aceptación de la dirección política no se vincula directamente a la clase dominante sino que “sólo se aceptan a sus intelectuales orgánicos”, es decir, intelectuales, profesionales o políticos que comparten la defensa de los intereses de la clase dominante (Balsa, 2006, p. 154). A su vez, Cantamutto (2015) afirma que la construcción de hegemonía no se da en el Estado o en la sociedad civil, sino que abarca al conjunto de la sociedad, incluyendo y excediendo el estado. Desde un enfoque corporatista,¹⁵ organizaciones formales actúan como actores colectivos representantes de la clase

15 Lattuada (2006) afirma que los autores que adhieren a este enfoque establecen un cierto paralelismo entre las corporaciones de las sociedades de fines del siglo XX y las viejas dinámicas corporativas aunque reconocen su diferente naturaleza –autoritaria y cerrada en los regímenes dictatoriales, abierta y voluntaria en las democracias contemporáneas–.

dominante en los procesos de intermediación social. Este enfoque se caracteriza por la presencia de grandes corporaciones, “organizaciones cúpula”, que interaccionan entre sí y con el estado para mediatizar la representación de intereses.

Diversos trabajos (Martínez Nogueira 1988, Lattuada 2006, Balsa 2007, Gras 2009, Maldonado 2013, entre otros) dan cuenta de la presencia de un discurso sustentado por las entidades rurales que se impone como hegemónico. El trabajo de Martínez Nogueira (1988) indaga en las lógicas, características y racionalidades presentes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en instituciones tales como la SRA, la FAA, la CONINAGRO y la CRA. Siguiendo la misma línea de análisis pero con datos más actuales Lattuada (2006) y Balsa (2007) nos permitirán analizar el discurso, representatividad y estrategias de estas y otras entidades rurales. Los tres autores analizan a su vez el nuevo rol del estado frente al accionar de las instituciones agrarias.

Por medio de un análisis de los discursos y estrategias de las organizaciones rurales y de *lo político*, Martínez Nogueira (1988) menciona como factor común la visualización de *lo agropecuario* como central para el desarrollo nacional. Esta afirmación se relaciona con lo que sostiene Lattuada (1992) cuando explica la existencia de una *supuesta legitimidad* del discurso del sector agropecuario debido a las “ventajas comparativas naturales” (Martínez Nogueira, 1988) o “condiciones ecológicas” (Lattuada, 1992) favorables con las que cuenta Argentina. A través de este discurso reclaman un tratamiento preferencial, justificando sus demandas en pos de la preservación de un “estilo de vida o de la familia rural” (Martínez Nogueira, 1988, p. 304) que sería característica de nuestro país.

Martínez Nogueira (1988) presenta a las organizaciones corporativas, durante el período que analiza, no sólo como representantes de intereses sectoriales sino también como aquellas que identifican, estructuran y dan significado en el ámbito público. Proyectan, de esta

manera, los intereses de un grupo minoritario sobre el resto de los miembros de la organización.

Por su parte, Balsa (2007) analiza, en un período histórico posterior, la hegemonía a partir de la disputa intersubjetiva presente en la cuestión agraria pampeana durante las últimas décadas. A partir del estudio del discurso público y del análisis de opiniones obtenidas a través de encuestas realizadas a productores rurales, detecta tres formas discursivas: “liberal-conservadora”, “tecnologizante” y “agrarista”. Para el presente trabajo analizaremos el segundo de los discursos, en la medida en que se vincula con el concepto de *modernización y progreso* desarrollado en el presente trabajo.

Vinculado a la celebración del avance tecnológico como elemento importante en las virtudes y los problemas del sector, este discurso presenta a la tecnología como factor de gran importancia para la coyuntura agrícola actual –últimas décadas-. Éste se presenta como central en las declaraciones de entidades rurales tales como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (ACSOJA) y en revistas agrícolas como La Chacra, Clarín Rural y El Campo (La Nación). Bajo la presencia de una mentalidad empresarial centrada en el conocimiento, empresarios como Grobocopatel y Becco afirman que “la llave es el conocimiento” y que “hoy en el campo argentino el más competitivo (...) es el que mejor sabe hacer” (Balsa, 2007, p. 154).

Lattuada (2006) da cuenta de un cambio ocurrido en el discurso de algunas entidades agrarias. En el caso de la FAA,¹⁶ ésta pasa a com-

16 Esta organización surge como representante de los intereses de los productores de menor y mediana escala, grupos “marginados” de los esquemas de articulación de poder y de representación (Martínez Nogueira 1988). Sin embargo a partir de 1996 esta entidad cambia de dirigencia y esto implica un cambio de imagen que fomenta una “nueva generación de servicios acorde a las necesidades de los nuevos tiempos” (Lattuada 2006: 199). En este momento comienzan a promoverse jornadas y congresos técnicos empresariales.

binar al típico discurso “neo-rural” con uno de corte empresarial. Así, con el objetivo de “apoyar a una reconversión de los productores y sus explotaciones para dotarlos de condiciones competitivas” (p. 188) en sus propuestas de acción comienzan a instalarse progresivamente aquellas que tienen que ver con la prestación de servicios de información, capacitación y asistencia técnica y comercial a los asociados.

En el caso de la SRA, también ve afectado su número de afiliados. Dentro de las razones por las cuales habría ocurrido esto se encontraría el “cambio de actitud en las nuevas generaciones de asociados” (Lattuada, 2006, p. 191), quienes ya no estarían tan interesados en el estatus social otorgado por la pertenencia a dicha institución -como sus antepasados-, sino en las contraprestaciones ofrecidas por ésta. Como consecuencia esta entidad comienza a darle mayor impulso a los procesos de *modernización* agrícola. Lo mismo ocurrió en otras entidades (CRA y CONINAGRO), quienes adoptaron reestructuraciones institucionales profundas a través de la incorporación de servicios tales como áreas de asesoramiento, consultorías técnicas, gestión de préstamos, etc. (Lattuada, 2006).

Con el objetivo de recuperar legitimidad de representación en sus dirigentes y una “mayor cuota de poder en el proceso de toma de decisiones” (Lattuada, 2006, p. 201), las entidades rurales unificaron su discurso y acción colectiva frente al estado. Bajo un discurso de “supuesta homogeneidad” (p. 201), abandonaron la demanda de un tratamiento igualitario al de los restantes sectores de la economía para pasar a reclamar una política de protección especial, bajo lo que denominaban *síndrome de marginalidad*. Éste a su vez era funcional para contrarrestar al *síndrome de competencia* institucional, frente a las dinámicas interinstitucionales vinculadas no sólo con el sustrato ideológico de cada entidad sino también estratégico para ganar posiciones frente a las otras organizaciones buscando competir por las bases sociales (Lattuada, 2006).

Cabe destacar que si bien la representatividad que ocupan estas instituciones ya no es la misma que hace algunas décadas, su discurso sigue siendo el hegemónico. Estas entidades han reproducido un discurso homogeneizador de los productores, invisibilizando otros actores del agro e imponiéndoles a los mismos la necesidad de “reconvertirse” para ser “competitivos”. Imponen, de esta manera, un pensamiento único que condena lo tradicional como “atrasado” y promueve un futuro “modernizante”.

Discursos de técnicos pertenecientes a entidades e instituciones estatales del agro en la actualidad: reproducciones discursivas y críticas

El concepto de hegemonía se vincula con conductas socialmente construidas en el marco de “múltiples procesos de socialización que nos enseñan lo que debemos hacer”. En este proceso “no está ausente la coacción”, en la medida en que el poder imprime deseos presentes o guardados en la memoria de las sociedades (Balsa, 2006, p. 149). Contrastar encuestas y entrevistas realizadas a productores y técnicos de entidades e instituciones gubernamentales vinculadas al agro nos permite tener un acercamiento a una caracterización de la realidad agropecuaria actual y a la influencia del discurso tecno-científico antes desarrollado.

Nos permite, a partir del análisis de discursos y representaciones de técnicos que trabajan en instituciones estatales, realizar algunas reflexiones analizando el “rostro humano” del estado, en la medida en que los discursos de algunos de ellos buscan promover otros paradigmas y otras racionalidades. Como mencionamos, nos basamos para ello en Bohoslavsky y Soprano (2010), quienes se preguntan “¿por qué volver a pensar al estado argentino hoy?, ¿desde qué coordenadas se lo puede imaginar o interpelar, cómo construir saberes sobre él que

contribuyan a su posible reforma?” (p. 29). Con este objetivo planteamos el siguiente análisis buscando relativizar las perspectivas más duras, estructurales y normativas de acercamiento al estudio de los actores del estado, asumiendo una mirada que repare en los posicionamientos críticos presentes en sus relatos. Nos encontramos así con críticas vinculadas a la imposición de la tecnología como única lógica de producción, con la necesidad de incorporar a las formas de producción conocimientos otros que no sean únicamente universitarios, a los impactos ambientales negativos que producen las actuales formas de producción agrícola, a la exclusión social que trae la misma como consecuencia de su expansión, a la dependencia que genera este modelo productivo y a la visión de la agricultura como negocio.

En este apartado se presenta, por un lado, un trabajo elaborado por Balsa (2007) a partir de encuestas¹⁷ realizadas a productores de dos localidades de la provincia de Buenos Aires que representan la región pampeana (Ayacucho y Pehuajó). Por otro lado, se analizan entrevistas¹⁸ realizadas a técnicos extensionistas rurales de instituciones estatales y a técnicos integrantes de cooperativas agrícolas de la provincia de Córdoba. Respecto a estas últimas, y con el fin de comparar dos territorios en las que se desarrollan actividades agropecuarias bajo formas de producción contrastantes, entrevistamos a técnicos que trabajan en departamentos ubicados al oeste de la provincia: Cruz del Eje; y al sur: Río Cuarto y Unión. La selección de estos departamentos se debe a nuestro interés por realizar aproximaciones en territorios con características socio-productivas contrastantes. Por un lado, en Cruz del Eje la principal actividad económica es la ganadería bovina y caprina, y presenta una alta concentración de la tierra. Esta región ha

17 Las mismas se realizaron durante el mes de agosto de 2006 y consistieron en preguntas cerradas y abiertas que se centraron en su identificación social (autodescripción laboral, gustos y preferencias), su discurso sobre algunas cuestiones agrarias y la toma de posición frente a una serie de frases típicas de discursos “liberal-conservador”, “tecnologizante” y “agrarista”.

18 Realizadas durante el mes de julio de 2015.

ocupado una posición periférica en el PBI provincial en años anteriores pero la aplicación del modelo neoliberal y la posterior intensificación de la tecnificación agrícola llevaron a la expansión de la frontera agropecuaria, generando nuevas prácticas socio-productivas que influyeron en los patrones de uso del suelo y tenencia de la tierra, de la mano de nuevos agentes sociales. Por otra parte, Río Cuarto y Unión están ubicados al sur de la provincia y son dos de los departamentos que tienen mayor participación en el PBI de Córdoba, ya que su aporte a la producción agrícola es altamente significativo en el contexto provincial en la medida en que en ellos se cultivan en gran parte soja, maíz y trigo, los principales cultivos de exportación. Debido a su ubicación dentro de la región pampeana, ambos departamentos sufrieron una importante e histórica transformación productiva caracterizada por un proceso de agriculturización y tecnificación.

Consultados a cerca de la percepción de la realidad rural, en las encuestas realizadas por Balsa (2007) se percibió la influencia del discurso tecno-científico en los productores dado que un alto porcentaje de encuestados menciona al “avance tecnológico” como “una de las cosas más importantes que ha ocurrido en el sector agropecuario en los últimos veinte años”. A su vez, técnicos de cooperativas del sur de la provincia de Córdoba entrevistados afirman que en la actualidad la producción agropecuaria ya no se encuentra relacionada con la participación familiar sino que tiene un “perfil empresarial”, que profundiza su “carácter capitalista, basado en la incorporación de nuevas tecnologías e insumos” (Franco, Cooperativa Agrícola). Técnicos del oeste provincial coinciden en señalar a la modernización como el aumento en la mecanización y la “gran” necesidad de insumos externos a los sistemas pero vinculan dichos procesos a la implementación de monocultivos, en la medida en que esto último genera “nichos ecológicos” para plagas, enfermedades y malezas, “que van necesitando cada vez más insumos y todo eso es un círculo vicioso (...)” (Manuel, INTA Cruz del Eje). Estos técnicos mencionan a su vez dos factores más que caracterizan el proceso de modernización: el incremento en la di-

mención de los sistemas productivos, y la disminución o búsqueda por disminuir la contratación de mano de obra. Se destaca de este relato la mención de este último factor como parte integrante de la modernización y no como consecuencia de la misma, planteándose como condición para acceder a dicho proceso.

En la caracterización del sujeto agrario realizada por los encuestados, observamos la presencia del discurso tecno-científico en la medida en que la mayoría de los discursos de los productores de las localidades de Buenos Aires coinciden en señalar que “hoy en el campo argentino el más competitivo no es el más grande sino el que mejor sabe hacer”. Esto se vincula con lo que más arriba se hizo alusión a través del discurso de Grobocopatel, Becco y Hary. Respecto a esto, algunos técnicos presentan una postura crítica vinculada al tipo de formación que reciben hoy en día los profesionales y productores. Algunos técnicos del INTA Cruz del Eje sostienen que la misma no presenta una postura crítica respecto a los procesos de modernización que se han venido desarrollando en el país, “los agrónomos tenemos también una cabeza bastante (...) cuadrada, y nos la hacen bastante cuadrada, y pensamos que la única manera de resolver los problemas es con lo tecnológico (...)” (Manuel, INTA Cruz del Eje). Algunos entrevistados hacen referencia concretamente a los agrónomos egresados en la década del noventa, “de la generación que nos recibimos en los noventa... nos abrieron la puerta para salir a jugar (...) un montón de recursos naturales ahí, sin tocar, un marco de fertilidad, y un marco tecnológico para usarlo (...) todo (...)” (Miguel, INTA).

Otra característica del proceso de modernización mencionada por los técnicos hace referencia a la “invasión mediática” que reciben muchos de los productores. Ante esto, algunos técnicos afirman que en la zona del oeste de la provincia de Córdoba, si bien no tienen acceso a radios ni a diarios “ven canal rural por *Direct tv* (...) y tienen una capacidad para sintetizarte cómo se maneja el trigo en la provincia de Buenos Aires, y no tiene nada que ver con lo que ellos practican en el manejo caprino (...)” (Manuel, INTA Cruz del Eje).

Todos los técnicos entrevistados, si bien coinciden en señalar la presencia de procesos de “modernización” en la producción agropecuaria, admiten que éstos se encuentran distribuidos de forma desigual. Su discurso se diferencia en la medida en que uno de los productores del sur provincial afirma que dicha desigualdad se debe a las diferentes condiciones productivas, “particularmente en nuestra zona el acceso a la modernización se ha dado de una manera muy homogénea, entendiendo que nos encontramos en el corazón productivo del país (...) [sin embargo] creo que en las zonas marginales del país el acceso a la modernización muchas veces se da de una manera muy lenta, no generalizada y estratificada” (Franco, Cooperativa Agrícola). Por el contrario los otros técnicos destacan que “el acceso a la modernización es inequitativo” (Juan, INTA) para los productores de todo el país por igual. Otros técnicos afirman que, ante la imposibilidad de muchos productores de acceder a esos insumos externos o por elección, existen otras formas de producir que no se enmarcan en los procesos de modernización tecno-científico-informacional. Esto los posiciona de manera diferente como técnicos en la medida en que deben poner en juego otros conocimientos, no siempre adquiridos en la universidad, “entonces a mí no me queda otra que agarrar mi manual de zoología y prenderle fuego ante eso (...) porque tampoco quiero ir en contra de eso (...)” (Manuel, INTA Cruz del Eje).

Respecto a los impactos ocurridos como consecuencia de la introducción de la racionalidad tecno-científica, se presentan dos posturas. Por un lado, uno de los entrevistados del sur provincial afirma que esto permitió “expandir la frontera agrícola a zonas marginales”, lo que provocó una “influencia relevante en los volúmenes de producción” (Franco, Cooperativa Agrícola). Pero, por otro lado, técnicos de la misma región y del oeste de Córdoba sostienen que este “paradigma de trabajo” ha generado ingresos pero también costos. Uno de ellos afirma que “(son) bienes que generan males (...) en función de maximizar los beneficios se destruye el ecosistema” (Juan, INTA); y otro de ellos afirma que los costos no son “sólo los ambientales sino

los sociales, que en algunas veces se han tenido en cuenta (...) y otras veces no (...)" (Manuel, INTA).

Estas transformaciones sociales se hacen presentes al analizar que el avance de la frontera agrícola impactó de manera diferente en ambas regiones de la provincia de Córdoba. Los departamentos del oeste provincial han sufrido los impactos de este avance recién en las últimas décadas, y como consecuencia de este se hacen presentes "pujas y conflictos por el acceso a los recursos productivos básicos entre los actores más innovadores y los tradicionales" (Luis, INTI). Por otra parte en la región pampeana, si bien los técnicos afirman que el acceso a la modernización es inequitativo, sostienen que la "lógica de producción capital intensivo" es la predominante (Juan, INTA), produciendo de esta manera la exclusión de algunos productores del modelo productivo predominante. En las encuestas realizadas por Balsa (2007), en localidades ubicadas dentro de la región pampeana, los productores manifiestan no estar de acuerdo en que "las nuevas tecnologías han perjudicado a los pequeños". La mayor parte de los productores encuestados sostienen, por el contrario, que "las nuevas tecnologías mejoraron mucho la situación de todos los productores rurales".

Otra de las consecuencias expresadas por algunos de los entrevistados del oeste provincial hace referencia a la dependencia generada por el uso intensivo de insumos externos. Afirman que muchas malezas, plantas, animales, parásitos, etc. se están volviendo resistentes y que "por eso los paradigmas se están rompiendo (...)" (Manuel, INTA Cruz del Eje).

Según los técnicos del sur provincial consultados, el proceso de "modernización" debe ser medido no sólo "bajo parámetros de producción y productividad" (Franco, Cooperativa Agrícola y Juan INTA) sino también mediante las transformaciones en diversos aspectos del sistema productivo tales como la estructura de las explotaciones, las relaciones económicas y sociales. Con esto último hacen referencia a cambios ocurridos en la "mano de obra, en el tiempo libre disponible,

en la estructura agraria y en las superficies destinadas a cada actividad” (Franco, Cooperativa Agrícola). Estas transformaciones también son mencionadas por los técnicos del oeste provincial al hacer referencia al mercado agropecuario como aquel que, en el marco del aumento de rentabilidad, “pasó de ser un espacio de producción a un espacio de inversión” (Manuel, INTA Cruz del Eje). Afirman de esta manera, que en la actualidad, y frente al proceso de modernización, muchos inversores deciden colocar sus ahorros en la producción de soja, que es lo que tiene una alta cotización en el mercado internacional.

Vinculados con la capacitación técnica que reciben los técnicos, algunos de los que trabajan en el departamento Cruz del Eje afirman que muchas de las veces que iban al campo para llevar propuestas de manejo elaboradas por sus instituciones se encontraban con productores que se negaban a aceptarlas porque tenían otra racionalidad en la forma de producción. “me pasó de comerme el libro (...) de un productor que te diga yo no quiero una chancha que tenga veinte, quiero una chancha que tenga siete (...) pero ¿por qué? quiero eso porque lo puedo manejar, lo puedo vender (...) si la chancha tiene catorce se me muere, yo quiero que tenga siete y que siga viva (...) ah (...) y te comes el sapo (...) si cuantos más chanchos tenga la chancha mejor (...) no, no es esa la racionalidad, de esta persona (...)” (Manuel, INTA Cruz del Eje).

Los vínculos existentes entre el discurso de las entidades rurales y el de los entrevistados se hacen presentes también en la caracterización de las condiciones naturales de la Argentina (calidad del suelo, radiación, disponibilidad de agua, entre otros). Esto se relaciona con el discurso hegemónico levantado por las corporaciones rurales vinculado con la concepción de lo *agropecuario como central para el desarrollo del país*. Calificándolas como “excelentes”, un productor del sur provincial homogeneiza el territorio destacando a nuestro país como poseedor de “ventajas comparativas respecto a otros países” (Franco, Cooperativa Agrícola). Por esta razón, este entrevistado afirma que la producción agropecuaria en Argentina “ocupa un lugar importante y

estratégico”. Sin embargo, afirma que el Estado “hoy no cumple con la función vital para el sector productivo, porque no han entendido la importancia del sector para la economía del país (...), los argentinos en general deberíamos entender el rol fundamental del sector agropecuario como generador de divisas, y la importancia en la estructura económica” (Franco, Cooperativa Agrícola). A pesar de esta percepción, otro técnico del sur provincial manifiesta que el Estado se encuentra cegado por el “cortoplacismo y los records productivos que impiden ver más allá de una gestión política” (Juan, INTA). A su vez, considerándolo como principal actor protagónico que debería “equilibrar, contener y/o promover acciones estratégicas” el entrevistado del oeste provincial afirma que sólo se realizan acciones puntuales, paliativas, clientelares y con escasa articulación de “cadenas de valor locales/regionales” (Luis, INTI).

Todos los técnicos coinciden en señalar que las políticas encabezadas desde el estado Nacional están “quizás demasiado focalizados en la producción primaria, con poco énfasis en la articulación de cadenas de valor locales/regionales, y con baja incidencia en la investigación de aspectos de mercadeo y comercialización hacia nichos extra-regionales”. Sostienen la necesidad de fomentar la industrialización del sector agropecuario, “somos exportadores de *commodities* y creo que deberíamos ser exportadores de valor agregado en origen, esto generaría un incremento de los puestos de trabajo por hectárea, mayor integración vertical de los productores a las cadenas agroalimentarias asociados estratégicamente en las diferentes etapas de las mismas” (Franco, Cooperativa Agrícola); “si pensamos que no queremos ser un país agroexportador, en principio, deberíamos tener un marco de industrialización (...)” (Miguel, INTA Cruz del Eje). Frente a estos hechos, algunos técnicos del INTA Cruz del Eje, advierten sobre la incidencia del mercado en el “direccionamiento de las producciones”. Afirman que si bien “en algunos sectores se discute la calidad del alimento, lo cierto es que el 99% es unidireccional (...) marcado por las grandes superficies (...)” (Manuel). Dichos técnicos profundi-

zan esta crítica al sostener que esto dificulta las mejoras en la calidad de vida de la población y lleva a cuestionar el modelo de desarrollo, “empezamos a pensar que nuestro proyecto de desarrollo integral no contempla algunas cosas que deberían estar contempladas (...) a largo y mediano plazo (...) el ambiente a largo plazo y el nivel de vida a corto plazo” (Manuel, INTA Cruz del Eje).

Consultados acerca de la presencia estatal en la realidad agropecuaria argentina actual y el rol que debería asumir el estado, uno de los técnicos del oeste provincial sostiene que en los últimos años se han realizado inversiones en la región pero que han habido desencuentros y desacuerdos vinculados a la pertenencia político-partidaria. Dicha pertenencia, manifiestan, determina la existencia o no de inversiones en dichas localidades y las características de las mismas. Afirma a su vez la necesidad de implementar “acciones equilibrantes diferenciadas” para el acceso a los recursos productivos como tierra, agua, tecnología, insumos, financiación, etc. (Luis, INTI). Al respecto, uno de los técnicos del departamento Río Cuarto afirma que a los pequeños productores se les complica el acceso a créditos, manifestando que a los grupos del Programa Cambio Rural con los que trabajan “no les han otorgado ninguno” (Juan, INTA).

Dentro de los puntos estratégicos que desde el estado se deberían potenciar en un futuro, los técnicos gubernamentales mencionan el “mayor énfasis en la investigación y difusión de tecnologías” (Luis, INTI). Mientras el del oeste sostiene que las tecnologías deberían ser “de pequeña escala y eficientes para mejorar las condiciones de esfuerzo/trabajo de las unidades de producción familiar” (Luis, INTI). El técnico de la cooperativa del sur afirma que dichas inversiones deben ir destinadas a “garantizar la comercialización abriendo los mercados al exterior (...) [y] permitir la adopción de recursos externos como fertilizantes, agro insumos, maquinaria, biotecnología y créditos” (Franco, Cooperativa Agrícola). Uno de ellos afirma que, sin embargo, “la fundamentación técnica no es tenida en cuenta para los proyectos” ya que siempre priman los “intereses económicos y políticos” (Juan,

INTA Río Cuarto). La diversificación de la producción es una de las características que sólo los técnicos del oeste provincial mencionaron como importante a ser incentivada por el estado, “pienso que deberíamos tener una mirada más heterogénea (...)” (Miguel, INTA Cruz del Eje). Estos discursos nos permiten aproximarnos a algunas reflexiones que abordaremos como cierre de este trabajo en el próximo apartado.

Consideraciones finales

Las aproximaciones realizadas en el presente estudio exploratorio permiten realizar una lectura de algunos discursos presentes en la dinámica espacial productiva argentina desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. En los mismos se observa la predominancia de una visión de *progreso y modernización* en el discurso de las entidades rurales vinculada a los avances tecno-científico-informacionales y la reproducción de algunos de estos discursos en los relatos de determinados productores y técnicos entrevistados.

Presentar el rol hegemónico que juegan en este proceso las entidades agrarias representadas por sociedades, corporaciones y cooperativas permite dar cuenta de la influencia que ha tenido su discurso en el sector agrícola. Esto a su vez brinda una reflexión respecto de la presencia por parte de entidades agropecuarias y de productores y técnicos de un discurso modernizante que caracteriza al modo de producción agropecuario y a los actores agrarios.

Si bien los discursos y representaciones de los distintos actores estatales cambió en las diferentes etapas económicas del país, se puede dar cuenta de una penetración continua de *lo privado* en *lo público* por parte de entidades, instituciones, organizaciones rurales o miembros de las mismas en el aparato estatal, produciendo lo que Martínez Nogueira (1988) denomina *privatización de un ámbito de la política pública*.

Frente a la predominancia de estas relaciones de poder retomamos las preguntas que nos hacíamos al principio del trabajo: ¿desarrollo para qué y para quiénes?, a fin de reconocer la existencia de algunos discursos críticos a dicho modelo levantados por técnicos pertenecientes a instituciones estatales. Esto si bien nos permite realizar un abordaje desnaturalizador del aparato estatal, consideramos necesario profundizar el análisis de estas racionalidades y concepciones, buscando reflexionar sobre la capacidad de agencia de las mismas para revertir las lógicas dicotómicas entre sociedad-naturaleza y desarrollo-atraso imperantes.

Planteamos a su vez como continuidades posibles y necesarias del presente trabajo el análisis de acciones, prácticas y estrategias implementadas por los actores del estado abordados, más allá de los discursos y representaciones sustentadas, a fin de acercarnos también a los “contactos sociales intraestatales” que Bohoslavsky y Soprano (2010) plantean.

Como reflexión final consideramos fundamental la importancia de desnaturalizar los abordajes del modelo tecno-científico-informacional imperante ya que, como algunos autores sostienen (Porto Gonçalves, Lander, Coronil, entre otros), la introducción de la técnica en los modos de producción mercantiliza, legitima y reproduce relaciones de poder. Afirmamos, por último, que si bien Escobar (2005) sostiene que la “tecnociencia” opera a gran velocidad y provoca una erosión del valor del aquí y ahora, nos parece interesante realizar una reflexión del espacio como yuxtaposición y punto de encuentro.

Referencias bibliográficas

- Ansaldi, W., Pucciarelli, A. & Villarruel, J. C. (Eds.) (1995). *Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912-1946*. Buenos Aires: Biblos.
- Alimonda, H. (Coord.) (2006). *Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO.
- Barsky, O. & Gelman, J. (2005). *Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Basualdo, E. (2000). *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa. Una aproximación a través de la reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y los capitales extranjeros*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes / FLACSO / IDEP.
- Basualdo E. (2011). *Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la argentina actual*. Buenos Aires: Atuel.
- Balsa, J. (2006). Notas para una definición de la hegemonía. *Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico*, n° 3, pp. 145-165.
- Balsa, J. (2007). “Las disputas hegemónicas en torno a las cuestiones sociales agrarias de la pampa argentina en la actualidad”, en Girbal-Blacha N. y Mendonça S. (Coords.). *Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil*. Buenos Aires: Prometeo.
- Bisang R. & Gutman G. (2005). Acumulación y tramas agroalimentarias en América Latina. *Revista de CEPAL*, n° 87, pp. 115-129.
- Bohoslavsky, E. y Soprano, G. (2010). “Una evaluación y propuestas para el estudio del Estado en Argentina”, en Bohoslavsky, E. y Soprano, G. (Eds.), *Un estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad)*. Buenos Aires: Prometeo/UNGS.
- Cantamutto, F. (2015). Construcción de hegemonía y Estado: algunas bases teóricas. *Revista Estudios Sociales del Estado*. Volumen 1. Número 1. Primer semestre 2015.
- Castro Gómez, S. (2005). *La Poscolonialidad explicada a los niños*. Popoyan: Editorial Universidad del Cauca.

- Elias, D. (2005). Reestructuración productiva da agropecuária e novas dinâmicas territoriais: a cidade do campo. *Actas de X Encontro de Geógrafos da América Latina*, 20 a 26 de mayo. San Pablo. p. 4475-4487,
- Escobar, A. (2005). Depois da Natureza. Passos para uma Ecologia Política Antiesencialista. Parreira-Alimonda (orgs.). Políticas Públicas Ambientais Latino-Americanas, Ministerio do Meio Ambiente (Brasil)-FLACSO. Brasília.
- Gaggero A., Schorr M. & Wainer A. (2014). *Restricción eterna. El poder económico durante el Kirchnerismo*. Buenos Aires: Futuro Anterior.
- Giarraca, N. & Cloquell S. (Comps.) (1998). *Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales*. Buenos Aires: La Colmena.
- Gras, C. (2009). “El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y los dilemas de sus organizaciones”, en Gras, C. & Hernández, V. (Coord.). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos.
- Gudynas, E. S/D. Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa.
- Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.
- Halperin Dongui, T. (2004). *Historia Contemporánea de América Latina*. Madrid: Alianza.
- Hernández, V. (2009). “La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pampas gringas”, en Gras, C. & Hernández, V. (Coord.). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos.
- Lattuada, M. (1992). Notas sobre corporaciones agropecuarias y estado. Tendencias históricas y cursos de acción posibles en la experiencia democrática contemporánea. *Estudios Sociales*, (II) 2.
- Lattuada M. (2006). *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Lattuada M., Márquez S. & Neme J. (2012). *Desarrollo rural y política*. Buenos Aires: CICCUS.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Donaldson-Smith. Oxford: Basil Blackwell.

- Maldonado, G. (2013). El agro en la urbe. Expresión del circuito superior de la producción agropecuaria pampeana en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). *Scripta nova*, XVII (452).
- Manzanal, M. & Nardi, A. (2008). “Modelos de intervención de los proyectos de desarrollo rural en la Argentina a partir de 1995”, en Schejtman A. & Barsky O. (Comps.). *El desarrollo rural en la Argentina. Un enfoque territorial*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Manzanal, M. (2010). “Desarrollo, poder y dominación. Una reflexión en torno a la problemática del desarrollo rural en Argentina”, en Manzanal M. & Villarreal F. *El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino*. Buenos Aires: CICCUS.
- Martínez Nogueira, R. (1988). “Las organizaciones corporativas del sector agropecuario”, en AA.VV. *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales*. Buenos Aires: FCE, IICA, CISEA.
- Murmis, M. (1998). “Agro argentino. Algunos problemas para su análisis”, en Giarraca, N. & Cloquell, S. (Eds.). *Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales*. Buenos Aires: La Colmena. Muzlera, Miguel (2009). *Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la pampa gringa*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Murmis, M. (1980). Tipología de pequeños productores campesinos en América Latina. *Documento PROTAAL*, n° 55.
- Nochteff, H. (1995). “Los senderos perdidos del desarrollo. Elite económica y restricciones al desarrollo en la Argentina”, en Aspiazu, D. & Nochteff, H. *El desarrollo ausente*. Buenos Aires: FLACSO.
- Olivera, G. (2008). El cooperativismo agrario, los chacareros y la renovación de la historia rural. *E-I@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, VI (22).
- Palermo, V. & Novaro, M. (1996). *Política y poder en el gobierno de Menem*. Buenos Aires: Norma.
- Paruelo, J.M., Guerschman J.P & Verón, S.R. (2005). *Expansión agrícola y cambios en el uso del suelo*. Buenos Aires: Ciencia Hoy.
- Peck, J. (2011). Neoliberalismo Zombie y el Estado ambidiestro. *Prohistoria*, vol.16

- Porto Gonçalves, C. W. (2013). Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Lina: IGU-UGI.
- Ramírez, H. (2007). *Corporaciones en el poder. Institutos económicos y acción política en Brasil y Argentina: IPÉS, FIEL y Fundación Mediterránea*. Buenos Aires: Lenguaje Claro.
- Sábato, H. (1993). *Estructura productiva e ineficiencia del agro pampeano, 1850-1950. Un siglo de historia en debate*, en Bonaudo M. & Pucciarelli J. C. (Comps.). *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones*. Buenos Aires: CEAL.
- Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Barcelona: Ariel.
- Sassen, S. (2007). El reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una economía global: ampliando las opciones políticas y gobernanza. *Eure*, XXXIII (100), pp. 9-34.
- Schejtman, A. & Barsky, O. (2008). “Fundamentos de la necesidad y de la posibilidad de una estrategia nacional de desarrollo rural”, en Schejtman, A. & Barsky, O. (Comps.). *El desarrollo rural en la Argentina. Un enfoque territorial*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Van Der Ploeg D. (1992). “El proceso de trabajo agrícola y la mercantilización”, en Sevilla Guzmán E. y González De Molina M. (comps.). *Ecología, campesinado e historia*. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta.

El “modelo sojero” de desarrollo. Contexto histórico, consecuencias y resistencias

Fernando Barri

Introducción

En década del noventa se introduce en Argentina un modelo de desarrollo económico basado en la producción intensiva del monocultivo de la variedad de soja transgénica *RR* (Roundap Ready, por su sigla en inglés), *commoditie* de alto valor en el mercado internacional (CME Group, 2013). Este modelo produjo un profundo cambio en la estructura agraria del país (Latarroca *et al*, 2004).

Un actor central en este modelo de desarrollo son las empresas semilleras y de agroquímicos, por ejemplo, la semilla de soja transgénica y el agroquímico que se utiliza sobre la misma (el herbicida glifosato) son producidas por Monsanto, empresa multinacional seriamente cuestionada por sus prácticas extorsivas y la contaminación del medio ambiente (Robin, 2008). Otros actores importantes -que dan sustento a la producción masiva intensificada de la soja transgénica- son los denominados *pools* de siembra (fondos de inversión que arriendan grandes extensiones de tierra para sembrar soja transgénica por medio de los avances agro-tecnológicos) y los *contratistas* (sociedades anónimas que realizan los contratos e intercambios de servicios para la producción de cultivos transgénicos a gran escala, quienes tercerizan los servicios de cosecha, siembra y traslado de granos). Ambos, en

conjunto, son quienes concentran alrededor del 70% de la producción de granos en todo el país (Teubal, 2003).

Para comprender la magnitud del fenómeno de la “sojización” en Argentina, basta con señalar que la producción de soja transgénica pasó de 15 millones de toneladas en el año 1996 a 55 millones de toneladas para la campaña 2009/2010 (Morandi & Pioli, 2010), cubriendo la mayor parte de la superficie de la región pampeana y avanzando en forma expansiva hacia otras regiones del país, fundamentalmente el noroeste (Bartra, 2008a), ubicando a la Argentina entre los principales países productores de cultivos transgénicos a escala mundial (Carreño *et al.*, 2009). Este proceso incrementó el avance de la frontera agropecuaria, haciendo desaparecer cientos de miles de hectáreas de bosque nativo por año, lo que llevó a nuestro país a registrar una de las tasas de deforestación más altas del mundo para las últimas décadas (Barchuk *et al.*, 2010; SAyDS, 2013).

La lógica de este modelo de desarrollo económico se sustenta en el crecimiento de los agronegocios (Giarracca & Teubal, 2008) y ha sido denominado como el “modelo sojero de desarrollo” (Domínguez & Sabatino, 2006). Ello implica, entre otros, consecuencias muy negativas para el futuro socio-ambiental del país (Silva, 2008; Barri & Wahren, 2010; Barri, 2011).

En el caso de la Provincia de Córdoba, de las otrora 12 millones de hectáreas de bosque nativos con las que contaba a principios del siglo XX, para el año 2004 solo quedaban cerca de 600 mil hectáreas. Lamentablemente ni siquiera las Leyes de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos lograron frenar la destrucción de nuestro capital natural, actualmente queda poco más de 300 mil hectáreas de bosques nativos bien conservados (Barri, 2017).

El modelo sojero en Argentina, antecedentes y características generales: de la revolución verde a la era de los agronegocios

El modelo de desarrollo sojero se encuentra ligado a profundas y complejas transformaciones del sistema agroalimentario nacional y mundial de larga data. En las décadas del 60' y el 70' irrumpe en el mundo la denominada “revolución verde” (que implicaba el uso masivo de fertilizantes, agroquímicos y moderna maquinaria agrícola), impulsada por las potencias capitalistas bajo el argumento de que así se lograría una mayor producción mundial de alimentos (Altieri, 2001; Sevilla Guzmán, 2006). En Argentina, la “Revolución Verde” fue fomentada principalmente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, creado durante el gobierno militar de 1956), y adoptada acriticamente tanto por los sectores terratenientes como los medianos productores pampeanos y extra pampeanos (tabaco, azúcar, yerba mate, frutales, etc.) ligados a la agroindustria (Teubal *et al*, 2005). Sin embargo, el tiempo demostraría que lo que en realidad generó la “Revolución Verde” en la Argentina fue un proceso de transformación de las relaciones productivas del campo -que pasaron a regirse por la lógica de la agroindustria- siendo la consecuencia directa de esta transformación el deterioro de las condiciones de vida del campesinado, provocando también la migración cientos de miles de trabajadores rurales y pequeños campesinos que terminarían expulsados hacia los suburbios de las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba (Giarracca & Teubal, 2005).

La consolidación del modelo sojero comienza a principios de la década del noventa, cuando se producen una serie de transformaciones tanto institucionales como estructurales en el sistema agropecuario argentino. En 1991, el decreto de desregulación de la actividad agropecuaria implicó un giro radical en las políticas públicas en torno al desarrollo agropecuario, librando a las reglas del mercado la regu-

lación de la actividad comercial, financiera y productiva del sistema agropecuario (Giarracca & Teubal, 2008). En concordancia con estas recetas neoliberales aplicadas al sector agrario que provocó, entre otras consecuencias, el endeudamiento y posterior remate de campos de los pequeños productores, quienes tomaron créditos usurarios que luego no pudieron afrontar. En efecto, al realizarse el Censo Nacional Agropecuario del año 2002 la cifra de los pequeños y medianos productores (poseedores de entre 0,5 y 50 has y entre 51 y 500 has, respectivamente) había disminuido en 82.854 con respecto al censo de 1988 (Teubal *et al*, 2005). Simultáneamente, en 1996, la Secretaría de Agricultura autoriza la propagación de la soja *RR* (Perelmuter, 2007); dejando de lado el “principio de precaución”, por el cual si aún no se han podido comprobar que existen riesgos para la salud de las personas o el ambiente, se sugiere no utilizar masivamente tales avances tecnológicos (Barri, 2011). Además, el “paquete tecnológico” que indefectiblemente acompaña a la producción de soja *RR* provocó una gran dependencia por parte de los productores y, aunque disminuyó los costos de mano de obra, incrementó enormemente el de los insumos (López Monja *et al*, 2008).

En este escenario, creció en nuestro país la injerencia sobre las políticas públicas para el campo de multinacionales de los agronegocios como MONSANTO y SYNGENTA, y de grandes compañías monopólicas de origen nacional como BIOSIDUS, BIOSERES y Aceitera General Deheza, todas ligadas directamente con las empresas contratistas y los *pools* de siembra. Entre las mayores empresas de agronegocios se encuentra el grupo “Los Grobo” (<http://www.losgrobo.com.ar/>) que gestiona cientos de miles de hectáreas en el país y posee facturaciones millonarias (Pengue, 2009).

El paradigma “cientificista-tecnológico” que sustenta el modelo sojero de desarrollo

El neocolonialismo naturaliza el saber científico como el único conocimiento viable y universal, es decir, impone a éste como la tendencia espontánea del desarrollo del conocimiento humano, aquél que es el un conocimiento situado, eurocéntrico. Esta tradición científica y tecnológica, si bien es válida y ha generado aportes en lo que refiere a mejorar determinados aspectos de la calidad de vida de las personas, no siempre aparece como el modelo deseable para el desarrollo equitativo y sustentable de la sociedad (Escobar, 2003; Quijano, 2003). Es en esta perspectiva epistemológica que se sitúa el modelo sojero en la Argentina y se traduce a través del paradigma hegemónico científico-tecnológico, que a su vez es el sustento principal de los agronegocios.

En este sentido, la soja transgénica es la herramienta que ha permitido avanzar con la frontera agropecuaria a partir de las “bondades de la biotecnología” es en la región de los bosques chaqueños del Noroeste. Lo que otrora fueran bastas superficies de bosques, habitados por comunidades campesinas e indígenas, sin mayor interés para el mercado internacional, hoy se han convertido en un territorio capaz de saciar el voraz apetito del moderno capitalismo internacional. Pero para ello son necesarios Estados Nacionales como el de la Argentina, que no solo permiten la explotación de estas regiones, sino que además “ayudan” a los grupos monopólicos a poder superar las limitaciones productivas de las regiones a explotar.

En el año 2007, gracias a la presión popular y la colecta de un millón de firmas, el Congreso de la Nación se vio obligado a aprobar la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección del bosque nativo. La Argentina ya había sufrido la pérdida de más del 70 por ciento de sus bosques nativos en el siglo pasado y los pocos remanentes en la región Noroeste estaban siendo diezmados para la implanta-

ción del monocultivo de la soja (Morello *et al*, 2009). Sin embargo, a pesar de las restricciones a los desmontes que imponía la Ley (que a su vez debía ser cumplida por todas las provincias), la realidad indicó que la frontera agropecuaria avanzó sin limitaciones, habiéndose desmontando desde entonces 700 mil hectáreas de bosques nativos, fundamentalmente en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Salta (SAyDS, 2013). Inclusive, en algunas provincias como Córdoba, que presentó las mayores tasas de deforestación del planeta, no solo no se protegieron los bosques nativos, sino que se alteró el espíritu de Ley Nacional para favorecer el avance de la frontera agropecuaria (Barchuk *et al*, 2010).

Con el modelo sojero el pueblo argentino también ha ido perdiendo soberanía alimentaria. Un informe reciente de la Cátedra Nacional de Economía “Arturo Jauretche” muestra que el incremento en el precio interno de los alimentos registrado entre 2006 y 2012, se explica en gran medida por el alza internacional de las cotizaciones de los granos y oleaginosas de exportación (Página 12, 2012). Por su parte, también se siguió incrementando la producción de agroquímicos (Agroquímica, 2013) y el desmonte en zonas que debían haber sido protegidas en base a la Ley Presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos en la región chaqueña para incrementar la superficie sembrada con las nuevas variedades de soja transgénica (SAyDS, 2013; Palacios *et al*, 2013), todo ello con el fin de fortalecer aún más a los grupos de poder vinculados a los agronegocios. Tanto es así que el gobierno nacional pretende aprobar una nueva Ley de semillas, acorde a los intereses de las empresas monopólicas, la cual seguramente impedirá además usar semillas nativas a los pequeños campesinos y todo aquel productor que quiera desprenderse de los tentáculos del modelo del agronegocio, incrementando así la dependencia neocolonial que se impuso al campo argentino.

Consecuencias socio-ambientales del modelo sojero en la región chaqueña

La deforestación es una de las principales amenazas en diversos ecosistemas del mundo en general y en los bosques neotropicales en particular (Brook *et al*, 2006, Laurance *et al.*, 2006; Gibson *et al.* 2011). En los últimos años, y fundamentalmente durante la década de 1990, se produjo un notable avance de la agricultura industrial sobre ecosistemas nativos tradicionalmente utilizados por productores campesinos dedicados a la ganadería extensiva (Cáceres *et al.*, 2010; Cáceres, 2015). Ligado al fenómeno anterior, se ha producido una dramática reducción y fragmentación de los bosques nativos por desmontes totales, tala selectiva para implementación de sistemas silvopastoriles, sobrepastoreo e incendios (Cabido y Zak, 1999; Zak y Cabido, 2002; Barchuk *et al.*, 2010). Estos fenómenos impactaron en la disponibilidad de hábitats, los que han disminuido rápida y drásticamente y con ello la diversidad y/o abundancia de la fauna silvestre asociada (Atala *et al*, 2008; Harrison *et al*, 2013).

Más de una tercera parte de la deforestación mundial entre 2000 y 2005 tuvo lugar en América Latina y el Caribe (FAO 2015). Siendo la Argentina el país que ha presentando algunas de las tasas de deforestación más altas para la región durante dicho período (Zak *et al*, 2004; Zak *et al*, 2008; Gasparri & Grau 2009; Zak & Cabido 2010). Las consecuencias ambientales que provoca la pérdida de bosques nativos para el país se pueden percibir a diferentes escalas, estas pueden ir desde la desaparición de especies de la vida silvestre (Giraudó, 2009), la escases de determinados recursos, bienes y servicios brindados por los bosques nativos (Morello *et al*, 2009), el incremento de la desertificación (Abraham *et al*, 2005; SAyDS, 2013) y la reducción del rendimiento hidrológico de las cuencas (disminución de los caudales), ya sea por reducción de bosque nativo (Cingolani *et al*, 2010) como por el reemplazo de la vegetación nativa por forestaciones exóticas (Farley

et al, 2005); hasta el incremento del riesgo de inundaciones en áreas urbanas (Seggiaro *et al*, 2009). Así, de no revertirse las actuales tasas de deforestación o implementarse un efectivo ordenamiento territorial de los bosques nativos con base científica, se pone en riesgo un futuro ambiental del país (Pengue, 2009; Morello & Rodríguez 2009; Barri & Wahren 2010). Todo ello hace necesario un análisis profundo y complejo por parte de la comunidad científica de la problemática que implica la pérdida de bosques nativos, que también se vea reflejada en la opinión pública, de manera que pueda ser tenida en cuenta tanto por la sociedad en su conjunto como por los tomadores de decisión para el abordaje integral de la misma. Los ecólogos podemos, en ese sentido, jugar un rol importante que ayude a revertir, en base a la información que aportemos de manera activa, este tipo de problemáticas ambientales (Gurvich *et al*, 2009).

Para comprender las consecuencias que trae aparejado la extensión del modelo sojero de desarrollo en la región chaqueña, no solo hay que observar la dimensión ambiental, sino también la marginación de la población rural y la pérdida de soberanía alimentaria. Para producir 1000 hectáreas de soja transgénica se necesita como mucho una persona. Por contrapartida, en 100 hectáreas de bosques pueden subsistir varias familias campesinas, capaces de proveer a la sociedad de una diversidad de productos agroecológicos, que van desde carne, cueros, huevos, verduras y mieles hasta madera, plantas aromáticas y medicinales, entre otros. Algo similar ocurre con los sistemas de cría intensivo de ganado que impulsa por el gobierno en el noreste provincial (donde se continúan autorizando desmontes). Estos sistemas buscan, una vez desplazados los campesinos, “limpiar” la mayor parte del bosque (cientos de especies vegetales y animales), dejando solo algunos pocos árboles viejos para sobra e implantando especies exóticas nocivas para el ecosistema original. Eso no pasaba antes que los agronegocios liberaran sus tentáculos para ampliar la frontera agropecuaria a las otrora “regiones marginales”, que no presentaban mayor interés económico para los terratenientes y empresarios.

La Red Agroforestal del Chaco relevó que entre las 6 provincias que representan la región chaqueña, hay 153 casos de conflictos por la tierra, con 97.995 personas afectadas y un total de 1.720.158 hectáreas involucradas. En la Provincia de Córdoba en particular, a medida que se fue corriendo la frontera agropecuaria se fueron incrementando los desalojos de campesinos, aumentando el grado de conflictividad social, con la represión y procesamiento de campesinos. Este proceso fue impulsado por políticas de Estado como El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010/2020 (PEA), impulsado por el gobierno nacional junto con algunos sectores académicos y los principales grupos económicos del país, cuyo objetivo fue aumentar la superficie sembrada de granos de 32 millones de hectáreas a 41 millones entre 2010 y 2020, es decir un 27% más de territorio cultivado. Ello implica necesariamente continuar con la deforestación y el desalojo de campesinos, la desorganización de formas productivas existentes y la desaparición de comunidades rurales.

Además de las consecuencias antes mencionadas del modelo sojero de desarrollo, tal vez una de las más dramáticas, por sus efectos directos sobre la salud de la población humana, sea la contaminación por agroquímicos de cientos de miles de personas, que viven en los pueblos del interior del país o áreas peri-urbanas de las grandes ciudades. Si bien nuestro país sigue autorizando el uso indiscriminado de glifosato, ya Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha categorizado como probable cancerígeno. Aunque desde los sectores de poder vinculados al modelo sojero de desarrollo se ha intentado poner en duda la toxicidad crónica del glifosato, día a día se suman evidencias que lo demuestran. Entre los efectos probados del glifosato sobre la salud humana se puede mencionar que: induce divisiones y mutaciones en células de mamíferos (Bolognesi, 2003; Marc *et al*, 2004; Anadón *et al*, 2009; Paz y Miño *et al*, 2007; Mañas *et al*, 2009; Mladinic *et al*, 2009); es un potente disruptor hormonal e incluso puede ser letal para células placentarias (Walsh *et al*, 2000; Benachour & Séralini, 2009); genera alteraciones en el desarrollo embrionario de

vertebrados (Bell *et al*, 2001; Paganelli *et al*, 2010), sus co-adyuvantes inducen la necrosis celular (Mesnage *et al*, 2013); posee un potencial cancerígeno (López *et al*, 2012); y el consumo prolongado de semillas transgénicas rociadas con glifosato puede provocar la aparición de procesos neoplásicos como cánceres y malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas (Séralini *et al*, 2012). Además se ha observado que la exposición de las poblaciones rurales al glifosato acumulado en el ambiente genera síntomas que incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y falla renal (Mantilla & Durán, 2007), así también como daños en el material genético (Simoniello *et al*, 2007).

Por su parte, estudios realizados en los últimos años demuestran que los residuos de glifosato se pueden encontrar por bioacumulación a largas distancias de donde fue aplicado, siendo el mayor riesgo para la población la exposición por vía oral, a través del consumo de alimentos y/o agua contaminados con sus residuos. Por ejemplo, en el norte de la provincia de Buenos Aires se realizó una investigación que demostró que los niveles de glifosato en suelo son superiores a los 4 mg/kg, los que luego de las lluvias y por simple dilución hacia los cursos de agua al cabo de poco tiempo alcanzaron niveles que variaron entre 0,10 y 0,70 mg/l, valores que incluso podrían estar subestimados (Peruzzo *et al*, 2008).

Resistencias al modelo sojero de desarrollo

“El bosque es vida”, “bosque en muchas manos alimentos sanos para todos”. Esas fueron algunas de las consignas que mantuvieron cientos de miles de campesinos en las largas marchas que realizaron desde el interior profundo de nuestra provincia para reclamar una ley

de bosques que les permitiera seguir existiendo en 2010. Si bien no fueron escuchados por el gobierno provincial, sí fueron acompañados por muchos sectores sociales que se animaron a cuestionar el modelo de desarrollo imperante. Mientras queden campesinos podremos mantener esperanzas de que sigan existiendo los bosques nativos, ya que, a pesar de todos los reveses que han sufrido, por el bien de todos los habitantes de la provincia, ellos seguirán defendiendo las tierras donde siempre han vivido y en las que quieren seguir viviendo, en compañía de los algarrobos, quebrachos, mistoles y tantas otras especies de plantas y animales de nuestros bosques. A pesar del contexto desfavorable, el Movimiento Campesino viene defendiendo la vida campesina y los bosques nativos, a partir de múltiples estrategias, tales como facilitar el acceso a los Planes de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, mejorar la producción y la comercialización de los alimentos agroecológicos que generar las familias campesinas. En la medida que las políticas públicas favorezcan a los sectores concentrados del agro en detrimento de la agricultura familiar, el futuro del campesinado seguirá en riesgo, dependerá del apoyo de la sociedad cordobesa que los campesinos puedan seguir viviendo en sus tierras y protegiendo el monte.

Actualmente, el intento por parte de los grupos monopólicos dueños de gran parte de la tierra en Argentina, mediante la máscara de sus empresas de agronegocios, están muy cerca de lograr que el Congreso Nacional apruebe una Ley de Semillas a su medida. Es decir, una Ley que impida el uso de las semillas nativas por parte de los pequeños productores y campesinos, y que obliga a comprar y producir en el campo solamente las semillas transgénicas de Monsanto & Bayer. De concretarse esta avanza de los sectores de poder sobre la vida campesina, no solo terminará de destruir las bases de resistencia que se fueron construyendo en los últimos años para salvar las familias campesinas, la agricultura familiar y la producción agroecológica, sino que además será el fin de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y el inicio de dependencia total de nuestra población,

que estará condenada a consumir únicamente los alimentos (contaminados) que produzca la agroindustria. Por suerte, la resistencia contra este proyecto de Ley, así como otros que intentan avanzar con el uso indiscriminado de agroquímicos, ha crecido, y no solo en el ámbito rural sino también urbano, con ciudadanos conscientes de lo que implica se apruebe y aplique la Ley de Semillas del gobierno. De cómo se libere esta batalla está gran parte de nuestro futuro como pueblo.

A pesar de los riesgos sanitarios que implica el uso indiscriminado de glifosato, los gobiernos locales y nacionales no han tomado medidas concretas para regular su uso. Sin embargo han sido las poblaciones afectadas las que comenzaron a cambiar el rumbo de la historia. Uno de los casos más emblemáticos ha sido el del Barrio Ituzaingó Anexo, en la periferia sureste de la ciudad de Córdoba. A mediados de la década de 1990 comenzaron a incrementarse en esta comunidad, de cerca de 5000 habitantes, el número de casos de enfermedades relacionadas al sistema inmunológico y circulatorio y de personas afectadas por irritaciones dérmicas y oculares. A fines del año 2001, un grupo de madres se preocupan por la salud del barrio al advertir la frecuencia inusual de mujeres con pañuelos en la cabeza y niños con barbijo, concentrados sobre todo en la porción de casas colindantes con campos cultivados con soja transgénica. Así, el primer abordaje epidemiológico de la situación sanitaria de la población del barrio fue llevado adelante por un grupo de mujeres mayores, muchas de ellas amas de casa, que, sin conocer acabadamente los riesgos que los agroquímicos generan sobre la salud, tomaron cartas en el asunto, relevaron los casos de personas afectadas y comenzaron a partir de ello a exigir (en muchos casos mediante acciones directas de protesta como los cortes de ruta), la intervención de las autoridades competentes para el análisis de las enfermedades y de los posibles contaminantes.

Si bien en una primera instancia hubo resistencia por parte del Gobierno provincial para aceptar la problemática sanitaria en el Barrio, incluso negándola como tal desde las máximas autoridades del

Ministerio de Salud de la Provincia, la convicción, persistencia y trabajo comunitario de las “Madres de Ituzaingó”, hicieron que al cabo de unos años, y con el aporte de numerosas instituciones e investigaciones independientes, se llegara a determinar, entre otras cosas, que: en 2003 se detectara la presencia de 40 casos de patología oncológica entre 4870 personas (8,22%, es decir una tasa superior a la media nacional), llamando la atención la alta frecuencia de tumores linfoproliferativos (15 casos) agrupados en el área de mayor exposición a los agroquímicos; se observara una tendencia creciente de la morbilidad y mortalidad en los años 2004 y 2005; la presencia de agroquímicos en el agua de boca de consumo y tanques de distribución; en 2004 un estudio epidemiológico-ambiental comparativo con otro barrio colindante de reciente formación, sobre una muestra superior al 30%, demostrara que las causas de las altas tasas de enfermedades graves registradas en Ituzaingó Anexo no podían ser atribuidas a factores socioculturales, sino que debían estar provocadas por factores ambientales; y un estudio llevado a cabo en septiembre de 2005 sobre una población infantil de 30 niños, detectara en 23 de ellos plaguicidas en concentraciones muy superiores a la mínima tolerada por los estándares internacionales (Schinder, 2004; Depetris, 2007).

La histórica lucha de las Madres de Ituzaingó llevó a que en el año 2012 la justicia sentara en el banquillo de los acusados a los dos productores sojeros de los campos colindantes al barrio y al aero-aplicador que roció con glifosato y otros químicos las cercanías del barrio durante muchos años. Este juicio, que fue seguido con mucha atención por la sociedad cordobesa (y también la nacional), se desarrolló en el marco de tensiones políticas que implicaron, entre otras cosas, movilizaciones por parte de los sojeros para que el juicio no prosperara, e intentos mediáticos de sectores del Gobierno y académicos vinculados con los agronegocios para deslegitimar el proceso judicial (Cavallo, 2012). Sin embargo, las irrefutables evidencias que se fueron acumulando, llevaron a la condena del aero-aplicador y del productor sojero más cercano al barrio. La importancia de este juicio no solo estuvo en

el hecho de haber sido el primero que llega a una instancia penal y que los acusados fueron encontrados culpables por contaminar y afectar la salud de la población, sino que además deja el precedente de que fumigar con agrotóxicos es un delito.

En las últimas cinco décadas, la degradación -y en muchos casos hasta la desaparición- de los ecosistemas de la provincia de Córdoba ha significado una pérdida sustancial y parcialmente irreversible de la biodiversidad, la productividad biológica y agropecuaria y los servicios ecosistémicos que éstos bosques nos brindan (regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, fijación de gases de efecto invernadero, diversificación y belleza del paisaje, y mantenimiento de la identidad cultural, entre otros). Dado que esta problemática es nacional, y que mantener los bosques nativos es sumamente importante para el futuro de nuestro país, en 2007 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 26.331, cuyo objetivo es fijar los estándares mínimos de protección que deben establecer las provincias con bosques. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y sobre todo en la Provincia de Córdoba, ocurrió todo lo contrario. En el año 2010 la Legislatura Provincial, luego de traicionar un amplio proceso participativo y con gran fundamento científico, aprobó de la noche a la mañana la Ley Provincial n° 9814, que si bien debía realizar un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), en la práctica se convirtió en una herramienta para que continuaran los desmontes. Es así que se autorizó desde entonces el desmonte de cerca de 50 mil hectáreas más a ese pequeño parche de verde que aún nos quedaba.

A pesar de ello, y gracias a la lucha incesante de ONGs y sectores académicos, se logró que se modificaran los artículos que claramente atentaban contra el espíritu de la Ley Nacional, y se controló un poco que se continuara desmontando a la acelerada tasa (de las más altas del mundo) que se venía realizando. Ese hecho, sumado que le propia norma obliga a una actualización del mapa de OTBN Provincial cada cinco años, llevó que el Gobierno de Córdoba presentara en

la Legislatura un ante proyecto que, no solo no protege nuestros bosques, sino que por el contrario permite que éstos continúen sin control. Entre las arbitrariedades e incongruencias que plantea la propuesta del oficialismo, están: reducir considerablemente el número de hectáreas a proteger y aumentar las que podrán ser desmontadas, incluso con métodos peligrosos como el uso de agroquímicos, reduce las penas para los infractores de la ley de formar irrisoria, y hasta genera una amnistía para aquellos que desmontaron ilegalmente en los últimos años.

Es evidente que la intención de nuestros actuales funcionarios y legisladores del partido de gobierno es seguir favoreciendo a sectores concentrados de poder (vinculado a los agronegocios e inmobiliario), en detrimento de los intereses comunes de todos los cordobeses. Pero lo que no se imaginaban era que la sociedad iba a tener una reacción masiva de rechazo a su propuesta. Desde que se conoció el proyecto del oficialismo fue creciendo el número de voces contrarias al mismo, desde sectores académicos, ambientalistas, campesinos y vecinos de zonas serranas, las manifestaciones de rechazo al intento del aprobar el proyecto de Unión Por Córdoba se multiplicaron hasta culminar el 28 de diciembre del año pasado en una masiva marcha por el centro de la ciudad de Córdoba, con cerca de 10 mil personas diciéndole NO a la ley del desmonte.

Esta reacción no fue solamente producto de una toma de conciencia colectiva, en el medio ocurrieron hechos lamentables que abrieron los ojos de nuestra población, como la tragedia de las inundaciones de Sierras Chicas en febrero de 2015. Ese hecho marcó un antes y un después en el entendimiento de porqué era importante conservar los bosques nativos y que lo que indicaban hace años los investigadores era real. Si hacemos desaparecer al vegetación nativa de nuestras cuencas, las mismas dejan de cumplir el “efecto esponja” (que absorbe buena parte de las lluvias estivales y permite que el agua esté disponible en los período de sequía) y se pasa a un “efecto tobogán” (que genera destrucción cuando llueve y pérdida del vital recurso cuando más lo necesitamos).

A pesar de ello, el riesgo del partido de gobierno apruebe su proyecto de Ley sigue latente, ya que aunque son insistentes los reclamos para que se realice un proceso participativo con fundamentación técnica y científica, los legisladores de Unión por Córdoba se niegan a archivar su propuesta. Para ello, es fundamental que no solo unos miles se movilicen, sino todo el conjunto de la sociedad cordobesa, porque como ya hemos señalado, nuestra calidad de vida está en juego. Es fundamental que comprendamos que cuidar nuestro ambiente no es simplemente mantener algunos árboles y flores. Sin cuencas bien conservadas no hay agua, sin suelos no hay producción, sin agua y sin producción no se desarrolla la economía, con una economía deprimida se incrementa la pobreza, el incremento de la pobreza genera conflictos sociales y los conflictos sociales incrementan la inestabilidad política.

La defensa de nuestros bosques nativos no debe ser solo una lucha de sectores ecologistas, en términos ecológicos y sociales estamos transitando límites o umbrales de colapso, y las decisiones que tomemos como sociedad hoy pueden llevarnos a recuperar nuestro ambiente o a caer en cascada hacia situaciones de degradación irreversibles (ya la mitad de nuestros suelos sufre procesos de desertificación que los hacen improductivos). Por su parte, los cada vez más recurrentes eventos catastróficos están poniendo a prueba la capacidad de nuestros sistemas naturales de absorber las perturbaciones generadas por el ser humano, afectando de manera directa nuestra economía, salud e incluso poniendo en riesgo nuestras propias vidas (los costos que en tal sentido produjeron las inundaciones en Sierras Chicas son aún incalculables).

La resistencia social a las consecuencias socio-ambientales que acarrea este modelo sojero son crecientes y continuas. Los pueblos fumigados en Córdoba y otras provincias promueven cada vez más denuncias contra el uso de los agroquímicos y se multiplican las voces críticas hacia el modelo sojero y sus consecuencias sociales y ambientales, se multiplican las ferias de semillas y de productos agroecológi-

cos tanto en las zonas rurales como en los grandes conglomerados urbanos, los movimientos campesinos impulsan sus propias universidades que formarán a sus propios técnicos agroecológicos, por otro lado surgen también diversas voces académicas que cuestionan el modelo sojero, desde diferentes disciplinas como la biología, la medicina, la agronomía, la sociología, la antropología, veterinaria, etc. Estas voces y acciones aún dispersas, se encuentran tejiendo redes subterráneas que pocas veces adquieren visibilidad, sin embargo, estos procesos conforman potencialmente la posibilidad de que otro modelo de producción y utilización de los bienes comunes es posible para nuestro país.

Otro modelo de desarrollo es posible

Desde la década de 1960 a la actualidad, en promedio la productividad mundial por hectárea se cuadruplicó de la mano de la “biotecnología”, lo suficiente como para alimentar a 8 mil millones de personas (Toledo, 1993; Altieri, 2001). Sin embargo, en el mismo período el número de seres humanos que pasan hambre en el mundo aumentó de 80 millones a cerca de 1000 millones (Sevilla Guzmán, 2006; FAO, 2015). Coincidentemente, en el mismo período, esta que ha sido dada en llamar “la tercera revolución del capital o revolución ambiental” (luego de la agraria y la industrial) (Max-Neef, 2001), ha provocado la degradación de los ecosistemas y la sobreexplotación de los recursos naturales, llevando al planeta a un colapso de magnitudes insospechadas (Costanza *et al*, 1997; Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Por su parte, ha sido demostrado que la “revolución agrícola” que prometía la baja del precio de los alimentos está llegando a su fin (Moore, 2010). Hoy más que nunca queda en evidencia que estas denominadas “revoluciones del capital” no son más que el origen de los procesos más destructivos de un sistema económico-social que, como pronosticaba Marx, “así como esquilma al obrero, también esquilma

la naturaleza (...) la gran agricultura y la gran industria forman una unidad (...) la primera devasta y arruina la fuerza natural del hombre y la segunda la fuerza natural de la tierra" (Bartra, 2008b).

En este contexto histórico, es importante destacar que el modelo sojero en Argentina, no es otra cosa que la expresión actual de la agricultura capitalista latifundista (Fernández, 2005), insertado en el marco de la actual crisis de la modernidad (Sousa Santos, 2006; Sevilla Guzmán, 2006). Este modelo económico de desarrollo ligado a los agronegocios se instaló con fuerza gracias al contexto "propicio y planificado" de la década de los noventa en Argentina, y hoy se expande rápidamente por otros países Latinoamericanos como Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con las mismas consecuencias sociales y ambientales que se observan en nuestro país (Goldfarb, 2007, Rulli & Boy, 2007; Robin, 2008). Además, muchos estudios desmitifican a los agronegocios como grandes productores de alimentos, empleadores de mano de obra y tecnologías (García, 1988; Toledo, 1993; Altieri, 1999; Sevilla Guzmán, 2006). Se está generando a partir del modelo sojero, como plantea Armando Bartra (2008b), "un mecanismo en el que los pequeños agricultores son inducidos por el mercado a emplear tecnologías y estrategias productivas insostenibles, donde acciones como la piratería genética y la privatización de los códigos de la vida no son sólo mecanismos de enriquecimiento especulativo del capital ligado a los agronegocios, sino además un verdadero ecicidio, un atentado a la biodiversidad, un suicidio planetario".

Paradójicamente, el sostén ideológico del modelo sojero en Argentina estuvo dado no sólo por sus impulsores, como Monsanto y el grupo Los Grobo, sino que este paradigma de la "sociedad del conocimiento" ha sido sistemáticamente avalada por funcionarios del Estado Nacional, y miembros de instituciones como el CONICET y el INTA, y, lamentablemente, también algunos sectores de las Universidades Nacionales avalan ideológicamente el modelo sojero, como la Facultad de Agronomía de la UNC. Combatir el neocolonialismo científico-tecnológico no implica combatir a la tecnología per se, sino,

como bien señala Armando Bartra (2008b) comprender que “el problema del capitalismo moderno no radica tanto en la propiedad de los medios de producción como en la naturaleza de esos medios, que está determinada por que su propósito es la valorización y esto los lleva a la especialización e intensificación productiva, es decir a la erosión de la diversidad humana y natural”. Ante este proceso ecológica y socialmente destructivo fundado en la racionalidad económica y el paradigma cientificista-tecnológico, como bien señala Enrique Leff (1998), “hay que contraponer un principio ecotecnológico de producción orientada por otros objetivos y valores, es decir, generar en todo caso una tecnología de procesos y no de insumos”. Este nuevo modelo económico de desarrollo, como bien plantea Walter Pengue (2009), debe basarse en otra lógica de cálculo que internalice los costos socio-ambientales, y permita un desarrollo armónico de la vida de nuestra sociedad presente y futura con su medio natural.

El modelo sojero en la Argentina se ha instalado con más fuerza que nunca y no se avizoran posibilidades de cambio a futuro, más allá de la resistencia que le plantean diversas organizaciones sociales, campesinas e indígenas. Con la aceptada planificación de la década de 1990 y el triunfo político de 2008 de los grupos económicos que concentran la ganancia de la producción del monocultivo de soja transgénica, lejos quedaron las chances de que la Argentina construya un camino de real sustentabilidad en términos ambientales, sociales y económicos. Para construir esta alternativa resulta imprescindible comenzar a transitar el camino del uso racional y planificado de nuestros recursos naturales, en el marco de un indispensable ordenamiento socio-ambiental de nuestro territorio, que promueva a la vez a las economías regionales y la soberanía alimentaria.

Referencias bibliográficas

- Abraham, E., Macagno, P. y Tomasini, D. (2005). Desertificación: indicadores y puntos de referencia en América Latina y el Caribe. Mendoza, Argentina: SAyDS, GTZ, UNDC y IADIZA.
- Altieri, M. (1999) Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo, Uruguay: Nordan.
- Altieri, M. (2001). *Bioteología agrícola. Mitos, riesgos ambientales y alternativas*. Oakland, California, U.S.: CIED/PED-CLADES/ FOOD FIRST.
- Anadon, A., Martínez, M., Martínez, M. Castellano, V., Martínez, M.; Martín, M.; Nozal, M. y Bernal, L. (2009). *Toxicokinetics of glyphosate and its metabolite aminomethyl phosphonic acid in rats*. Toxicology Letters, 190, pp. 91-95.
- Atala, D., Baudo, F., Álvarez Igarzabal, M., Fernández, F. y Medina, A. (2008). *Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba*. Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Córdoba, Argentina: Secretaria de Ambiente.
- Barchuk, A., Barri, F., Britos, H., Cabido, M., Fernández, J. y Tamburini, D. (2010). *Diagnóstico y perspectivas de los bosques en Córdoba*. Revista Hoy la Universidad, 4, pp. 52-73.
- Bartra, A. (2008a). *Argentina: ¿hacia una agricultura sin agricultores?* México: La Jornada del campo.
- Bartra, A. (2008b). *El hombre de hierro: los límites sociales y naturales del capital*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Barri, F. (2011). *Pueblos fumigados en Argentina: resistencia epidemiológica comunitaria al modelo económico de los agronegocios*. Ecología política, 40, pp. 67-72.
- Barri, F. (2017). *Desmontes y pérdida de calidad de vida en Córdoba*. Revista Harmatia, 6 (24), pp. 18-20.
- Barri, F. y Wahren, J. (2010). *El modelo sojero de desarrollo en la Argentina: tensiones y conflictos en la era del neocolonialismo de los agronegocios y el cientifismo-tecnológico*. Realidad económica, 255, pp. 43-65.
- Bell, E., Hertz, I. y Beaumont, J. (2001). A case-control study of pesticides and fetal death due to congenital anomalies. Epidemiology, 12, pp. 148-156.

- Benachour, N. y Seralini, G. (2009). Glyphosate formulations induce apoptosis and necrosis in human umbilical, embryonic, and placental cells. *Chemical Research Toxicology*, 22, pp. 97-105.
- Bolognesi, C. (2003). Genotoxicity of pesticides: a review of human biomonitoring studies. *Mutation Research*, 543, pp. 251-272.
- Brook, B., Bradshaw, C., Koh, L. y Sodhi, N. (2006). Momentum drives the crash: mass extinction in the tropics. *Biotropica*, 38, pp. 302-305.
- Cabido, M. y M. Zak. (1999). *Vegetación del Norte de Córdoba*. Córdoba, Argentina: Agencia Córdoba Ambiente.
- Cáceres, D. (2015). Accumulation by Dispossession and Socio-Environmental Conflicts Caused by the Expansion of Agribusiness in Argentina. *Journal of Agrarian Change*, 15, pp. 116-147.
- Cáceres, D., Soto, G., Ferrer, G., Silvetti, F. y Bisio, C. (2010). La expansión de la agricultura industrial en Argentina Central. Su impacto en las estrategias campesinas. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 7(64), pp. 91-119.
- Cavallo, A. (2012). Cambiemos temores por conocimiento. Nota de opinión en el diario *La Voz del Interior*. En: <http://www.lavoz.com.ar/opinion/cambiemos-temores-conocimiento>.
- Carreño, L., Pereyra, H. y Viglizzo, E. (2009). Los servicios ecosistémicos en áreas de transformación agropecuaria intensiva. En: Morello, J. y Rodríguez, A. (Comp.). *El Chaco sin bosques: La Pampa o el desierto del futuro* (pp. 229-246). Buenos Aires, Argentina: GEPAMA, UNESCO.
- Cingolani, A., Gurvich, D., Zeballos, S. y Renison, D. (2010). Sin ecosistemas saludables no hay agua segura. El caso de Córdoba. *Revista Única*, 111, pp. 48-52
- CME Group (2013). Soybeans futures. En: <http://www.cmegroup.com>.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot., *et al.* 1997. The value of the world ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387, pp. 253-260.
- Depetris, A. (2007). Evaluación ambiental y epidemiológica de B° Ituzaingó Anexo en la Ciudad de Córdoba, estudio de posibles fuentes de contaminación. Informe para la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba.
- Domínguez, D. y Sabatino, P. (2006). Con la soja al cuello: crónica de un país hambriento productor de divisas. En: Alimonda, H. (Comp.). *Los tormentos de la*

- materia, aportes para una ecología política latinoamericana (pp. 249-274). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Escobar, A. (2003). El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo? En: Lander, E. (Comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 113-143). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Farley, K., Jobbágy, E. y Jackson, R. (2005). Effects of afforestation on water yield: a global synthesis with implications for policy. *Global Change Biology*, 11, pp. 1565-1576.
- Food Agricultural Organization (FAO). (2015). Action on Food Crisis. En: <<http://www.fao.org>>.
- Fernández, B. (2005). Movimientos socio – territoriales y movimientos socio – espaciales. Observatorio Social de América Latina. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- García, R. (1988). Deterioro ambiental y pobreza en la abundancia productiva: el caso de la Comarca Lagunera. México: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
- Gibson, L., Lee, T., Koh, L., *et al.* (2011). Primary forests are irreplaceable for sustaining tropical biodiversity. *Nature*, 478, pp. 378–383.
- Giarracca, N. y Teubal, M. (2005). El campo argentino en la encrucijada. Buenos Aires, Argentina: Alianza.
- Giarracca, N. y Teubal, M. (2008). Del desarrollo agroindustrial a la expansión del agronegocio: el caso argentino. En: Mançano Fernández, B. (Comp.). *Campepinado y Agronegocio en América* (pp. 32-54) . Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Giraudó, A. (2009). Defaunación como consecuencia de las actividades humanas en la llanura del chaco argentino. En: Morello, J. y Rodríguez, A. (Comp.). *El Chaco sin bosques: La Pampa o el desierto del futuro* (pp. 315-345). Buenos Aires, Argentina: GEPAMA, UNESCO.
- Goldfarb, Y. (2007). A luta pela terra entre o campo e a cidade: as comunas da terra do MST, sua gestão, principais atores e desafios. São Paulo, Brasil: Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Departamento de pós-graduação em Geografia Humana, Universidade de São Paulo.

- Gurvich, D., Renison, D. y Barri F. (2009). El rol del ecólogo ante la actual crisis ambiental. *Ecología Austral*, 19(3), pp. 233-238.
- Harrison, R., Tan, S., Plotkin, J., Slik, F., Detto, M., Brenes, T., Itoh, A. y Davies, S. (2013). Consequences of defaunation for a tropical tree community. *Ecology Letters*, 16, pp. 687-694.
- Latarroca, M., Martínez, M. y Montero, H. (2004). Hambre en el país de la Tierra. Imparable proceso de concentración en el campo argentino. *Le Monde Diplomatique*, N° 62.
- Laurance, W., Nascimento, H., Laurance, S., *et al.* (2006). Rain forest fragmentation and the proliferation of successional trees. *Ecology*, 87, pp. 469-482
- Leff, E. (1998). *Ecología y Capital, Racionalidad Ambiental, Democracia Participativa y Desarrollo Sustentable*. México: Siglo XXI.
- López Monja, C., Perelmutter, T. y Poth, C. (2008). ¿Progreso científico o mercantilización de la vida? Un análisis crítico a la biotecnología agraria en la Argentina. Buenos Aires, Argentina. Centro Cultural de la Cooperación.
- López, S., Aiassa, D., Benítez-Leite, S., Lajmanovich, R., Mañas, F., Poletta, G., Sánchez, N., Simonello, M. y Carrasco, A. (2012). Los pesticidas usados en América del Sur en la Agricultura OGM: una revisión de sus efectos sobre los seres humanos y en modelos animales. *Avances en Toxicología molecular*: Elsevier.
- Mañas, F., Peralta, L., García, H., Weyers, A., Ugnia, L., Larripa, I., González, M. y Gorla, N. (2009). Genotoxicity of of glyphosate assessed by the comet assay and cytogenetic tests. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 28, pp. 37-41.
- Mladinic, M., Perkovic, P. y Zeljezic, D. (2009). Characterization of chromatin instabilities induced by Glyphosate, Terbutylazine and Carbofuran using cytome FISH assay”, *Toxicology letters*, 189, pp. 130-137.
- Mantilla, M. y Durán, V. (2007). Pesticidas: un remedio peor que la enfermedad. *Ciencia y Trabajo*, 26, pp. 93-99.
- Marc, J., Mulner, O. y Belle, R. (2004). Glyphosate-based pesticides affect cell cycle regulation. *Biology of the Cell*, 96, pp. 245-249.
- Mesnage, R., Bernay, B., Séralini, G. (2013). Ethoxylated adjuvants of glyphosate-based herbicides are active principles of human cell toxicity. *Toxicology*, 16; 313(2-3), pp. 122-8

- Max-Neff, M. (2001). *Desarrollo a escala Humana*. Montevideo, Uruguay: Nordan.
- Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and human well-being. Current state and trends—findings of the condition and trends working group*. Washington D.C., U.S.: Island Press.
- Moore, J. (2010). The End of the Road? Agricultural Revolutions in the Capitalist World-Ecology, 1450–2010. *Journal of Agrarian Change*, 10(3), pp. 389–413
- Morandi, E. y Pioli, R. (2010). *Proyecto Estratégico Agropecuario Agroalimentario Participativo y Federal 2010 – 2016: generación y transferencia de conocimiento para la implementación de estrategias de producción sustentable de soja*. Rosario, Argentina: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.
- Morello, J. y Rodríguez A. (2009). Como será el Chaco si se queda sin bosques. En: Morello, J. y Rodríguez, A. (Comp.). *El Chaco sin bosques: La Pampa o el desierto del futuro* (pp. 12-18). Buenos Aires, Argentina: GEPAMA, UNESCO.
- Morello, J., Rodríguez, A. y Pengue W. (2009). Análisis descriptivo del proceso de desmonte y habilitación de tierras en el Chaco Argentino. En: Morello, J. y Rodríguez, A. (Comp.). *El Chaco sin bosques: La Pampa o el desierto del futuro* (pp. 291-312). Buenos Aires, Argentina: GEPAMA, UNESCO.
- Paganelli, A., Gnazzo, V., Acosta, H., López, S. y Carrasco, A. (2010). Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling, *Chemical Research in Toxicology*, 23, pp. 1586-1595.
- Palacios, F., Cardoso, R., Caballero, J., Paradedá, C. y Yanosky, A. (2013). *Resultados del monitoreo de los cambios de uso de la tierra, incendios e inundaciones Gran Chaco Americano*. Asunción, Paraguay: Guayra Paraguay.
- Paz y Miño, C., Sánchez, M., Arévalo, M., Muñoz, M., Witte, T., Oleas, G. y Leone, P. (2007). Evaluation of DNA damage in an Ecuadorian population exposed to glyphosate. *Genetics and Molecular Biology*, 30, pp. 456-460.
- Pengue, W. (2009). *Fundamentos de Economía Ecológica*. Buenos Aires, Argentina: Kaicron.
- Perelmuter, T. (2007). *El Acuerdo de la OMC sobre Propiedad Intelectual (TRIPS) y el nuevo modelo agroalimentario argentino. Sus incidencias sobre la autonomía de los productores agrarios*. Montreal, Canada: Congreso LASA 2007.

- Peruzzo, P., Porta, A. y Ronco, A. (2008). Levels of Glyphosate in surface waters, sediments and soils associated with direct sowing soybean cultivation in north pampasic region of Argentina. *Environmental Pollution*, 156, pp. 61-66.
- Quijano, A. (2003). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Lander, E. (Comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 41-52). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Robin, Marie-Monique. 2008. *El mundo según Monsanto*. Paris, Francia: Arte.
- Rulli, J. y Boy, A. (2007). *Repúblicas Unidas de la soja: realidades sobre la producción de soja en América del Sur*. Buenos Aires, Argentina: Scorza.
- Schinder, E. (2004). *Estudio de prevalencia epidemiológico clínico sobre Barrio Ituzaingó Anexo*. Córdoba, Argentina: Municipalidad de Córdoba.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). (2013). *Informes sobre deforestación de bosque nativo en Argentina e implementación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos*. Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
- Seggiano, R., Baumann, V., Azcarray, D. y García, V. (2009). Inundación de detritos en la ciudad de Tartagal. *Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas, Peligrosidad Geológica*, 15, pp. 24-38.
- Séralini, G., Clair, E., Mesnage, R., Gress, S., Defarge, N., Malatesta, M., Hennequin, D. y Spiroux de Vendômois, J. (2012). Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. *Food and Chemical Toxicology*, 50(11), pp. 4221-4231.
- Sevilla Guzmán, E. (2006). *De la sociología rural a la Agroecología*. Barcelona, España: Icaria.
- Silva, M. (2008). Los desafíos de la Argentina en torno al crecimiento rural a espaldas del medioambiente y la salud. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 92: 1-31.
- Simoniello, M., Scagnetti, J. y Kleinsorge, E. (2007). Biomonitorio de población rural expuesta a plaguicidas. *Revista FACIBI*, 11, pp. 73-85.
- Sousa Santos, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*, Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

- Teubal, M. (2003). Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario argentino. *Revista Realidad Económica*, 196, pp. 16-26.
- Teubal, M., Domínguez, D. y Sabatino, P. (2005). Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema agroalimentario. En: Giarracca, N. y Teubal, M. (Comp.). *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (pp. 64-85). Buenos Aires, Argentina: Alianza.
- Toledo, V. (1993). Modernidad y Ecología: la nueva crisis planetaria. *Ecología Política*, 3, pp. 52-55.
- Walsh, L., McCormick, C., Martin, C. y Stocco, D. (2000). Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic acute regulatory (StAR) protein expression. *Environmental Health Perspectives*, 108, pp. 769-776.
- Zak, M. y Cabido, M. (2002). Spatial patterns of the Chaco vegetation of central Argentina: Integration of remote sensing and phytosociology. *Applied Vegetation Science*, 5, pp. 213–226
- Zak, M., Cabido, M. y Hodgson, J. (2004). Do subtropical seasonal forests in the Grand Chaco, Argentina, have a future? *Biological Conservation*, 120, pp. 589-598.
- Zak, M., Cabido, M., Cáceres, D. y Díaz, S. (2008). What drives accelerated land cover change in central Argentina? *Environmental Management*, 42(2), pp. 181-189.

**Un nudo que se desata:
la ruptura entre la Federación Agraria Argentina y el
Partido Socialista (primer trienio del siglo XX)**

María Inés Dellavale

Introducción

La Federación Agraria Argentina (FAA) surgió al calor de las luchas llevadas a cabo por los chacareros en 1912. Si bien eran una prolongación de las que ya venían recorriendo el territorio pampeano desde tiempo atrás, la de ese año no se limitó solo a la protesta sino que tuvo como consecuencia la estructuración de una organización para la defensa de sus intereses de los productores agropecuarios.

El presente trabajo continúa anteriores (Dellavale, 2012 y 2013) de los cuales recuperaremos algunos aspectos relacionados con el accionar de FAA en su surgimiento. La vinculación del Partido Socialista (PS) y la FAA tuvo altibajos en la primera década de funcionamiento de la mencionada entidad gremial, pero existió efectivamente, es más, desde 1918 hasta 1921-1922 dicha relación fue estrecha notándose la presencia de muchos socialistas desempeñando cargos o trabajando como empleados. Algunos ejemplos de lo dicho son Narciso Gnoatto, militante de reconocida trayectoria; Cristóbal R. Solari, Síndico de la Federación alrededor de 1921; Juan Torres dejado cesante en 1921.

En un texto para nada proclive al PS se lee: “Desde tiempo la atmósfera, en el seno de la FAA, había comenzado a hacerse irrespirable. El contador y ayudante eran socialistas y el síndico también (...) En “La Tierra” el redactor principal era socialista y los artículos anticlericales y contra partidos políticos creaban una situación difícil a los directores” (Boglich, 1939, p. 57). En este análisis se deja traslucir una competencia en los juegos de poder horizontales, es decir entre líderes que tenían más o menos el mismo rango.¹ Se afianza una postura abiertamente desafiante por parte de Esteban Piacenza que le permitió construir una relación tal con los seguidores que lo pusieron en un rol de líder casi absoluto. El haber sacado a la Federación del estado de quebranto en que se encontraba fue presentado como un mérito personal y exclusivo, nunca como el accionar de un conjunto de activos militantes que actuaron tanto desde dentro de la organización como desde el PS u otros actores políticos que en el Parlamento impulsaban una legislación favorable a los sectores agrarios.

Nuestro presente objetivo es reflexionar acerca del nudo conflictivo de la relación entre una recientemente creada entidad gremial, la Federación Agraria Argentina y un partido político, el Socialista, caracterizando a cada uno de ellos en sus especificidades y en los posibles rasgos compartidos. Los aspectos endógenos a analizar se relacionan estrechamente con las lógicas de funcionamiento de ambos tipos de organización y aspiramos a encontrar respuesta acerca de cuáles podrían haber sido las causas de un rompimiento entre dos organizaciones que durante varios años, los de consolidación de la entidad agraria, habían trabajado en conjunto, compartiendo puntos de vista y metodologías de acción.

La temática a abordar en el presente trabajo tiene una articulación directa con acontecimientos tanto del campo de la política como

1 Panebianco (1991, p. 65) aborda el sistema de funcionamiento de juegos de poder horizontales, entre líderes, y juegos de poder verticales entre líder-seguidores.

del de la economía que recortaremos del siguiente modo: por un lado la sanción y entrada en vigencia de la Ley Sáenz Peña y por otro, un panorama internacional condicionante para cualquier economía con crecimiento hacia afuera. En cuanto al primer punto, la ley de marras brindó una mayor garantía de participación electoral y coadyuvó para que la Unión Cívica Radical levantara su abstención y participara en los comicios propuestos en adelante.² Respecto del PS, la entrada en vigencia de la ley incrementó las posibilidades de obtener resultados favorables en la competencia electoral lo que se confirmó con el arribo al Parlamento Nacional y a algunas Legislaturas provinciales de integrantes de este partido. La trascendencia que le damos a este hecho radica en que las bases sociales representadas por la FAA podrían suponerse en condiciones más favorables ya que ambos partidos la representarían. En cuanto a lo económico, el crecimiento hacia afuera característico del modelo agroexportador tuvo importantes desacoples y reacomodamientos al compás de trascendentes acontecimientos internacionales: la primera guerra mundial y la inseguridad en el transporte marítimo durante ese período; la recuperación de la economía en los años subsiguientes y el impacto de la brutal crisis del capitalismo de 1929.

El PS y su acercamiento a los sectores agrarios

El marco estaba dado por un país que crecía de cara a los dictados de la división internacional del trabajo, con una riqueza que emanaba desde los campos hacia los puertos, dando la espalda a su ya importante masa de trabajadores urbanos y rurales, con una notable penetración y difusión de las ideas anarquistas, socialistas y sindi-

2 A pesar de haber desistido de abstenerse de participar en elecciones en los años posteriores a la sanción de la ley Sáenz Peña, en lo sucesivo el partido haría uso reiterado de esta actitud como modo de protesta por la continuidad del fraude electoral.

calistas traídas por inmigrantes que aspiraban a construirse un futuro mejor pero que en algunos casos, bastantes, huían de las persecuciones de que eran objeto en sus países de origen. Ansaldi (1991, p. 2) habla de debilidad del sistema político argentino, y situándose en el período 1880-1912/1916, de hegemonía burguesa organicista. Manifiesta que “el sistema político es cerrado” porque a las formaciones partidarias se les permitían pocos márgenes de acción y tenían como debilidad un escaso nivel organizativo. Por su parte, en cuanto a las instituciones de la sociedad civil que aspiraban a tener representación, capacidad de negociación y resolución de conflictos, se daba una marcada asimetría entre las que representaban a las patronales y aquellas como los sindicatos obreros,³ que se encontraban tanto o más constreñidos que los mismos partidos políticos. Durante el período de los gobiernos radicales, 1916-1930, surge una democracia pluralista ya que se ha roto la unidad monolítica de la burguesía, y han surgido enfrentamientos al interior de la clase sin llegar a perder su papel hegemónico. Se daría un entramado de mediaciones entre sociedad civil y Estado caracterizado por un doble canal: mediación partidaria y mediación corporativa, lo cual implica también una doble lógica de funcionamiento. Ambas lógicas y canales no se repartirían en forma equitativa sino con predominancia de lo corporativo en desmedro de lo partidario.

A pesar de que lo mencionado es recurrente y sostenido por buena cantidad de investigadores, no hay muchos estudios empíricos que den cuenta de cómo se construye la relación entre organizaciones corporativas, cuya finalidad es la representación de intereses sectoriales, y organizaciones partidarias que tienen al menos la intención de una representación socialmente mucho más inclusiva.

3 Sabido es el grado de persecución y represión de las protestas sindicales en el fin y comienzo de siglo, con el pretexto de que eran portadores de ideas que subvertían el “pacífico” orden establecido en estas tierras.

El PS, creado en 1896, no incluyó en su programa inicial los lineamientos de una política agraria. Deberán pasar unos años para el surgimiento de una propuesta por parte de su principal dirigente, Juan B. Justo, a través de una conferencia cuyo nombre fue “Programa Socialista del campo” dada el 2 de abril de 1901 en el salón del Club *Vorwärts*, en que hizo una muy acertada descripción de la situación agraria de la pampa húmeda, principal fuente de divisas para el país por esos días. Reflexionaba el autor acerca de las características de la agricultura en Argentina, donde una de las principales trabas para el desarrollo agrario era la forma en que había evolucionado la apropiación de la tierra en grandes latifundios, muchos de los cuales permanecían incultos o insuficientemente trabajados. Ese era el escollo mayor para un desarrollo racional de la agricultura, mientras la tierra permaneciera en manos de propietarios absentistas y quienes la trabajaban no tuvieran certeza de permanencia por más de dos o tres años, ninguna mejora se operaría ni en las formas de cultivo, ni en las viviendas, ni en la infraestructura vial, etc. Justo se explayó exponiendo casos de distribución de la tierra en países que él admiraba como Canadá o Nueva Zelandia y proponía para Argentina reformas impositivas que desalentaran a los tenedores de grandes extensiones, ya fuesen productivas o improductivas.

Meses más tarde, el IV Congreso ordinario del partido reformó el Programa Mínimo incorporando varios artículos relacionados con la temática agraria. Los transcribimos a continuación:

Art. 2º-Abolición de los impuestos que gravan la producción agrícola y ganadera, y el ejercicio de los ramos de comercio y profesiones útiles.

Art. 3º-Contribución directa y progresiva sobre la renta de la tierra.

Art. 4º-Exención de la contribución directa para las casas modelos para obreros y para la pequeña propiedad rural.

Art. 6°-Indemnización a los arrendatarios por las mejoras que estos dejen en los campos.

Art. 9°-Reglamentación higiénica del trabajo industrial y agrícola.

Art. 10°-Obligación de dar alojamiento higiénico a los trabajadores del campo.

Art. 11°-Responsabilidad de los patrones en los accidentes del trabajo. (Odone, 1934, T. I, pp. 172-173)

Seguramente la apuesta del PS se direccionaba a captar el voto de la gran masa de obreros rurales, pero también y muy especialmente, de los arrendatarios, medieros y pequeños propietarios perjudicados ostensiblemente por el modelo agroexportador al cual se había acoplado Argentina. A pesar del gran crecimiento económico del país logrado hacia el fin de la primera década del siglo XX, las asimetrías de dicho crecimiento eran notables al punto que se extendía un clima de protesta por toda la pampa húmeda en contra de los montos elevados de los arrendamientos y los demás costos de la producción. No obstante el apoyo que el PS brindaba a estos movimientos, era escaso el caudal de votos obtenidos, sobre todo comparándolo con el otro partido, la Unión Cívica Radical (UCR), con el que disputaba el mismo segmento de votantes. Producida la gran movilización de 1912 en Alcorta, provincia de Santa Fe, y creada la FAA, se da un notable acercamiento entre dicha entidad y el PS al punto de que los postulados de éste inciden evidentemente en los primeros estatutos y las Comisiones Directivas tienen una importante presencia de socialistas.

La Federación Agraria Argentina

El período que vamos a abordar abarca el de la consolidación de la FAA y se asiste a una fuerte competencia entre sectores reflejo de

la heterogeneidad de los actores involucrados. El liderazgo de los tres primeros presidentes es causa y efecto de esta lucha que finalizó en la década del '20 cuando se impuso decididamente la tendencia liderada desde hacía varios años por un Esteban Piacenza ya definitivamente alejado del PS. Dice Panebianco (1993) “La institucionalización es en efecto el proceso mediante el cual la organización incorpora los valores y fines de los fundadores del partido”. Aunque aquí se está refiriendo a los partidos políticos, es aplicable a otras organizaciones como el caso que nos ocupa, la cuestión es determinar cuáles fueron los fines y valores que finalmente se impusieron en la FAA, no sin antes haber sido arena de una dura disputa interna que se manifestó desde sus mismos inicios. Nos interesa destacar que en esos cruciales momentos del nacimiento de la entidad la misma fue el producto de una especie de clamor que recorría las pampas argentinas: los arrendatarios se sentían ahogados por las deudas y la incertidumbre propia de su actividad, y lo que reclamaban eran beneficios que les permitieran mejorar sus condiciones de vida, es decir, agremiarse para poder presionar con más fuerza a su oponente, los terratenientes a los que alquilaban sus lotes. Carecían en esos momentos del poder necesario para interpelar monolíticamente a los aparatos estatales, tal como lo hacían y lo siguieron haciendo los sectores agrarios más poderosos enrolados en una asociación con fuerte componente corporativo, la Sociedad Rural Argentina. Por ello preferimos hablar de gremio agrario, tal como ellos mismos se definían y no de corporación tal como lo era la otra entidad que reunía a los grandes propietarios.

Dijimos que los conflictos aparecieron desde el momento mismo de la constitución de la Federación, cuando la puja se dio entre al menos tres sectores bien definidos:

* el de tendencia más conservadora fue el encabezado por Daniel Infante, aliado del recientemente elegido gobernador radical de Santa Fe, Manuel Menchaca;

* en el punto opuesto de este arco representativo estaba un sector ligado al anarquismo involucrado en numerosas protestas que ya se venían llevando adelante. Desde el vamos se bloqueó la llegada de este grupo al control del organismo dejándolo sin chances de intervenir en la lucha por el control de la Federación, su anulación fue contundente y temprana;

* un tercer grupo contrincante era el encabezado por dirigentes ligados al socialismo que durante los meses y hasta años anteriores, venían encabezando —junto a grupos de tendencia anarquista— la protesta de los chacareros, en especial los arrendatarios contra los terratenientes. Este tercer grupo fue el que finalmente se impuso pero, como vamos a analizar, estaba muy lejos de ser homogéneo (Dellavalle, 2012, pp 14-15).

Los difíciles primeros años

Desde el comienzo, el desenvolvimiento de la Federación estuvo signado en gran medida por el rumbo que le imprimieron los tres primeros presidentes: Noguera, Netri y Piacenza. En nuestro trabajo mencionado *ut supra*, hemos analizado con mayor detalle el accionar de los dos primeros y apenas mencionamos al último. En este caso nos detendremos en los primeros mandatos de Piacenza —que fue reelegido sucesivamente hasta 1945—, ya que es allí donde se produce el acercamiento y el posterior distanciamiento con el PS.

El período en que presidió Noguera no llegó ni a los tres meses pero fue intenso en el sentido en que se aprobaron los estatutos y se creó el Boletín más tarde convertido en diario La Tierra, órgano de difusión y eje central en la comunicación con los afiliados que ha perdurado a través de toda la historia de la institución.⁴

4 Noguera era un notable dirigente socialista de Pergamino. Fue maestro de escuela y periodista, fundador del diario El Imparcial llamado luego El Heraldó y el Nuevo Heraldó.

Restaino, que ha buceado en la biografía de Noguera, destaca la febril actividad que llevó a cabo en los escasos meses en que presidió la Federación, primero quedándose en Rosario lo que implicaba el momentáneo abandono de sus propias tareas como agricultor, presidiendo las reuniones de la Comisión Directiva y comunicándose mediante manifiestos con todos los asociados y público en general, y por carta con miembros de los gobiernos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y con la autoridad nacional. También se comunicó por el mismo medio con los gobiernos de Italia, Francia y España, invitándolos a conocer la constitución de la novel organización para poder difundir su actividad entre los futuros migrantes, para que estuviesen informados de que en este país podían contar con su auxilio.

Desde el comienzo se notó el enfrentamiento entre el presidente de la Federación y otros miembros de la dirección con el asesor letrado Francisco Netri de tendencia moderada. Esto se reflejó claramente

En 1911, debido al boicot económico de que era objeto todo el tiempo y que llevó a la quiebra de su pequeña empresa editorial, y cansado de sufrir persecuciones policiales a causa de sus ideas políticas, dejó sus actividades en la ciudad para retirarse a vivir y trabajar en el campo. Pronto abrazó con fervor la causa de los agricultores sometidos al cumplimiento de contratos de alquiler leoninos y viviendo a expensas de los vaivenes del mercado y de las condiciones climáticas. Con gran entusiasmo convocó a una asamblea de los colonos el 14 de julio de 1912 en Pergamino que contó con la asistencia masiva de los mismos. Esta sería la simiente de la Unión de Agricultores de Pergamino oficializada el 20 de julio de 1912. También allí se organizó una huelga general para el 28 de julio que abarcó a todas las profesiones de la ciudad e incluyó una manifestación callejera que contó con Noguera como orador. De esta manera Noguera entró de lleno en las luchas que se diseminaban por entonces en toda la pampa húmeda argentina, cuyo episodio más difundido fue el llamado “Grito de Alcorta”. Como representante de Pergamino participó en la asamblea constitutiva de la Federación Agraria Argentina el 1 de agosto de 1912. En la siguiente reunión del 15 de agosto, tuvo un rol muy destacado ya que se discutían los estatutos de la Federación, que habían sido encomendados a Francisco Netri y a Daniel Infante. Este último daba por hecho que se aprobaría su versión sin ninguna discusión. Lejos de ello, se lo rechazó casi unánimemente lo que provocó el alejamiento de Infante y dejó el camino expedito para la aprobación de la propuesta realizada por Francisco Gnoatto, representante de Arroyo Seco y destacado militante socialista. También ese día se eligió la Comisión Directiva que una vez constituida nombró como presidente a Antonio Noguera. Una biografía muy completa es la de Restaino, (2012). También es mencionado en las dos versiones del libro de Grela (1958 y 1985).

te en los artículos que se publicaban en el Boletín y trascendió a la prensa rosarina en especial al diario La Capital y el *GiornaledegliItaliani*. Pronto Noguera fue objeto de la acusación más común cuando se quiere desplazar a alguien sin tener demasiados argumentos: se lo acusó de querer inmiscuir la política partidaria socialista en la vida de la Federación. Las discusiones fueron acaloradas y hasta ofensivas y Noguera quedó bastante solo y aislado. La invitación al Diputado Juan B. Justo para visitar la Federación provocó oposiciones y controversias y dio más pie a las acusaciones de que se quería inmiscuir al PS en la organización. Una y otra vez, a través del Boletín, Noguera manifestó la absoluta prescindencia de compromisos políticos tanto con el gobierno como con la oposición. Pero su destino parecía estar sellado desde el comienzo, él era socialista, pero además muy batallador y confrontativo, lo que le valió la total oposición en la Comisión Directiva de la que fue primero desplazado de su cargo y luego expulsado por haber informado unilateralmente del conflicto a las seccionales. Se convocó a un Congreso Extraordinario que se reunió el 8 de diciembre en Rosario; nuevamente la presencia del Dr. Infante, ya en su función de Intendente de la ciudad, tuvo un rol central para imponer una tendencia moderada aun a costa de la expulsión y hasta el encarcelamiento de los delegados más contestatarios.⁵ Quien quiera negar que estos incidentes eran el reflejo de una denodada lucha política se equivoca se diría intencionalmente: ¿qué era si no la presencia del Intendente de Rosario presidiendo una asamblea de chacareros sin serlo él mismo? ¿Qué significado tuvo entonces el apoyo de una prensa moderada y proclive al oficialismo gobernante? ¿Qué fue el vacío que se le hizo a un grupo de luchadores de la primera hora como Menna, Ghilarducci, Capdevila, Jáuregui, Ghesi, Ginés, etc.? Lo decimos otra vez, el contrincante era muy poderoso, se estaba poniendo en juego

5 Se decretó la expulsión de Noguera sin derecho a réplica ya que se le impidió hacer uso de la palabra; en son de protesta se retiró Francisco Capdevila de Máximo Paz y Lorenzo Ginés de Camilo Aldao fue hecho detener por la policía que intervino a instancias del Dr. Infante.

la política agraria, el poder estaba concentrado ya desde mucho antes en los terratenientes ligados al comercio exterior, era inevitable la organización de los chacareros, pero había que tornarla lo más inocua posible. A partir de este congreso el Dr. Netri presidiría la Federación y, aun en su moderación, le iría la vida en el intento.

Los años por venir fueron de mucha dificultad para el funcionamiento de la entidad agraria por razones diversas.⁶ Fue una gestión caracterizada por recurrentes demandas al Estado para que definiera una política agraria capaz de contener las reivindicaciones de los sectores enrolados en la FAA. En su mayoría las mismas no adquirieron formas disruptivas sino que se canalizaron a través de solicitudes en el sentido de aprobación de leyes, dirigiéndose al Congreso de la Nación y al Ministerio correspondiente. Con esto Netri privilegió un estilo peticionario, dando más cabida a la solicitud que a métodos más drásticos como las huelgas, táctica que solo fue empleada en última instancia cuando ya la presión de las bases era incontenible. Daremos algunos ejemplos: en 1913 y 1914 hubo huelgas en lugares puntuales acompañadas estas acciones de múltiples enfrentamientos intrainstitucionales con sectores muy combativos que habían quedado fuera de la conducción. Entre las solicitudes al Ministerio de Agricultura está la

6 Desde el punto de vista económico, Argentina se vio afectada por los acontecimientos mundiales, en particular la primera guerra mundial que impactó en el comercio tanto de importación como de exportación e interrumpió el flujo de inmigrantes de ultramar, ambas cuestiones relacionadas con la inseguridad en el transporte marítimo. En realidad, la demanda de productos granarios y los precios se vieron incrementados. Lo que conspiró contra la exportación argentina fue la distancia a los mercados de consumo y la disminución de la disponibilidad de bodegas de embarque. Esto, unido a las malas cosechas por razones climáticas en 1913 y 1916, impactó de lleno en el universo de productores representados en la Federación, en los ingresos de la misma y en todas las actividades emprendidas. El cambio de signo del gobierno nacional también influyó, ya que al asumir Yrigoyen rompió el monopolio que pretendía Gran Bretaña respecto de la compra de granos y aceptó vender a países neutrales. Desde el punto de vista político, asistimos a la llegada al poder de un gobierno más representativo de sectores medios de la población a través de la Unión Cívica Radical que ganó tempranamente, en 1912, la elección de gobernador en la provincia de Santa Fe, una de las más representativas del movimiento agrario de aquellos años.

creación de un Tribunal de Arbitraje entre propietarios y arrendatarios y a los legisladores del Congreso de la Nación el pedido de tratamiento de los proyectos de ley presentados por los diputados Palacios y Justo en 1913 y los proyectos del ex Ministro Eleodoro Lobos. Ninguna de las peticiones tuvo éxito y el único avance en materia de legislación agraria fue la aprobación de la prenda agraria y de los *warrants*, ambas muy lejos de las necesidades e intereses de los trabajadores de la tierra y muy cerca de los sectores ligados al monopolio de la comercialización (Bonaudo y Godoy 1985, p. 177)

La presidencia de Netri se vio abruptamente interrumpida con su asesinato perpetrado por un antiguo empleado del organismo federado en octubre de 1916. Su desaparición ocurrió en un momento en que la FAA se hallaba en una durísima lucha por su propia supervivencia. Como ya hemos graficado, los cambios en el comercio internacional producidos por la circunstancia de la guerra, hacían muy difícil la situación de los trabajadores del campo representados por la organización. También hay que decir que después de 4 años de su creación, los incentivos logrados por sus asociados eran escasos y predominaba un desorden considerable en el plano administrativo que llevó a tal disminución del número de seccionales⁷ que ponía en riesgo la existencia misma de la organización.

Según el relato de García Serrano (1966), uno de los primeros nombres a los que se apeló luego del asesinato de Netri fue a Esteban Piacenza⁸, oriundo y representante de la localidad de Coronel Moldes,

7 En ese momento permanecían 27 secciones afiliadas que comprendían 700 socios al día. García Serrano (1966), p. 60.

8 Piacenza había nacido el 7 de mayo de 1879 en la aldea de Macio, Piamonte, Italia y emigró con su padre a Argentina en 1893. Desde el comienzo de su estadía en nuestro país se dedicaron a tareas rurales como peones y luego como encargados de una granja en Ezeiza. Más tarde se establecieron en la Pampa Central donde no les fue muy bien por lo que buscaron nuevas perspectivas, esta vez como arrendatarios en la provincia de Córdoba. Siguiendo una trayectoria similar a la de muchos inmigrantes de la época, los Piacenza pudieron acceder a la propiedad de la tierra y establecerse y permanecer en el lugar (García Serrano, 1966).

en el sur cordobés. Éste acudió de inmediato y junto a otros directivos resolvieron convocar a las secciones que permanecían adheridas a un congreso que se realizó en noviembre de 1916 y que propuso una nueva modificación de los estatutos y eligió una conducción presidida por Piacenza que comenzó a actuar inmediatamente. En abril de 1917 el dirigente dejó su chacra y se mudó a Rosario. Los conflictos con los terratenientes arreciaban y las disensiones internas unidas a la inactividad de la Federación en los últimos tiempos, habían minado en parte la resistencia de los chacareros. Es por ello que se convoca a un congreso extraordinario a reunirse en ese mismo mes de abril para discutir la manera de enfrentar dicha situación. Poco a poco la Federación comenzó a recuperar su actividad y las seccionales volvieron a reafiliarse.

Los puntos de encuentro entre la FAA y el PS

Tanto durante 1917 como en 1918 el conflicto agrario se mantuvo, si bien no hubo un movimiento huelguístico generalizado sí se plantearon numerosas huelgas aisladas, que fueron reprimidas en muchos casos. El gobierno de Yrigoyen, que nunca tuvo una clara política agraria, no dio respuesta a ninguno de los planteos del sector de la producción. Hubo numerosos proyectos de ley destinados a mejorar diversos aspectos relacionados con la situación agraria, —presentados por socialistas, demoprogresistas y radicales— pero todos fueron sistemáticamente ignorados por la oposición conservadora y en la mayoría de los casos no salieron de las comisiones legislativas respectivas. El único proyecto que fue aprobado durante los primeros años del gobierno radical, la llamada Ley del Hogar sancionada el 27 de septiembre de 1917, nunca entró en vigencia por falta de reglamen-

tación.⁹ La negativa a reglamentarla por parte de Yrigoyen se debía a que él sostenía que los beneficiarios tenían que ser argentinos para no inundar los campos de extranjeros; esta cuestión no estaba contemplada en la ley (Bonaudo y Godoy 1985, Solberg 1975).

La posguerra planteó nuevos desafíos relacionados fundamentalmente con la baja del precio de los cereales y la escasez de algunos insumos como las bolsas para el acopio, unido esto a los crónicos y estructurales problemas de nuestro agro como las desmesuradas tarifas ferroviarias, los vaivenes climáticos y la inestable relación de los productores con la tierra derivada de la concentración de la misma en manos de terratenientes. Como ya dijimos, ni los conservadores ni los radicales abordaron seriamente los planteos iniciales de la FAA de regular los contratos para evitar la incertidumbre que significaba para el trabajador no saber si iba a poder continuar arrendando la tierra que estaba trabajando. Los conflictos se agravaron en 1918 debido a la vigencia continuada del impuesto a las exportaciones, en un principio planteado como transitorio; las intensas lluvias que dañaron las cosechas de 1918-1919; la prolongada huelga portuaria y la movilización de los peones rurales que reveló con nitidez las contradicciones entre intereses clasistas de ambos sectores (Bonaudo y Godoy 1985, p. 180).

La respuesta de la FAA fue una nueva declaración de huelga por la crítica situación del agro argentino (Bonaudo y Godoy 1985, pp 180 a 184. Solberg 1975, pp 265 a 268) que adquirió mayores proporciones debido a que también se plegó la reorganizada Liga Agraria de La Pampa.¹⁰ La respuesta del gobierno consistió esencialmente en una marcada represión acompañada del intento de desprestigio de los

9 Dicha ley contemplaba la accesibilidad a la tierra pública de parte de productores, la familia debía ser la propietaria, y recibiría lotes de hasta 200 has. La crítica que la FAA le hacía era que las tierras disponibles se hallaban en lugares muy alejados y eran de dudosa calidad, lo que justificaría que los lotes fuesen más grandes.

10 La Liga Agraria de La Pampa había surgido al calor de las luchas de 1912 y mantuvo un accionar en simultáneo con la FAA, sin formar parte de ella. Durante el período de la guerra se mantuvo latente y resurgió con una asamblea en Inés y Carlota en el sexto

huelguistas acusándolos de anarquistas, perturbadores del orden, agitadores, etc. Como resultado de la fuerte presión ejercida por los chacareros, el Poder Ejecutivo Nacional envió varios proyectos de ley al Congreso que naufragaron ante la negativa permanente de la bancada conservadora al igual que los proyectos presentados por los legisladores del socialismo.

Durante estos años, la cuestión agraria fue objeto de abordaje de muchos políticos e intelectuales de diverso origen social (Halperín Donghi, 1984) pero en nuestro caso nos detendremos solamente en las coincidencias entre el discurso y los acuerdos de la FAA y el PS obrando el último casi como mediador sobre todo ante el Poder Legislativo. Aquí aparece una posible contradicción ya que hemos hablado, citando a Ansaldi (1991), de la debilidad de los partidos políticos frente a cierta fortaleza de las corporaciones en la mediación entre la sociedad civil y el estado. Ello es así, lo continuamos sosteniendo, haciendo la siguiente advertencia: la FAA era por entonces una organización en plena etapa de consolidación, sin capacidad de ejercer ninguna presión al modo como lo hacen las corporaciones y el PS bregaba por la representación política de esos sectores.

Juan B. Justo tiene numerosos escritos al respecto y en general su crítica aludía a la concentración de la tierra en pocas manos, considerada como la causa del estancamiento en el progreso agrícola. En su escrito de 1917 y en la fundamentación de los proyectos de ley de la bancada socialista de 1919¹¹, se hace hincapié en la crítica situación del ocupante-trabajador temporario de la tierra que nunca puede realizar planes que vayan más allá de los dos o tres años que dure el contrato de alquiler o mediería. Esto incidía sobre la vivienda que era necesariamente precaria, sin mínimas condiciones higiénicas; en

aniversario de su creación el 16 de agosto de 1918. Fue notable el liderazgo ejercido por los socialistas, en especial por el destacado dirigente Antonio Buira (Asquini, 2013).

11 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1919, tomo 5, pp 53 y sig.

la dificultad para adoptar nuevas técnicas agrícolas como por ejemplo la rotación de cultivos para superar prácticas que denomina “de rapiña”.¹² La causa del atraso en el agro argentino estaba dada, entonces, en el latifundismo y en los negociados con las tierras. La propuesta legislativa apuntaba a desalentar al gran propietario mediante altos impuestos a los campos improductivos y así evitar la especulación que llevaba al acaparamiento de tierras en extensas propiedades.

Notamos una coincidencia entre la evolución de la postura que asumió el PS y la de la FAA respecto al tema de la propiedad de la tierra. La organización agraria surgió justamente planteando modificaciones en las condiciones de arriendo vigentes que implicaban la ampliación a 5 años de los contratos, la disminución del porcentaje a pagar por los arrendatarios, la libertad de contratación de maquinarias y seguro, el reconocimiento mediante pago de las mejoras efectuadas por los inquilinos, en fin, lo que Boglich caracterizó como la consecución de las “libertades capitalistas”. Con el paso del tiempo estas reivindicaciones perdieron protagonismo y se puso en el centro de los reclamos el tema de la propiedad de la tierra. A su vez también en el PS se evolucionó hasta poner en lugar destacado de la escena el tema de la división del latifundio y el reclamo de créditos para compra de tierra en lotes pequeños. En oportunidad en que Juan B. Justo estuvo dando una conferencia en Rosario, en la Federación Socialista Santafesina, se refirió a las condiciones extorsivas y crueles en que trabajaban los chacareros señalando lo injusto que era el latifundio y por ende la necesidad de su subdivisión. Esto fue publicado por *La Tierra* donde se destacó que el único diputado que abordaba esos tópicos era el representante del PS.¹³

12 “Por las chacras llegará el libro a nuestras pampas y entre montes, praderas y sembrados aparecerá en ellas el jardín” *Diario de Sesiones*, opcit, p. 58. ¡Qué ingenuas suenan cien años después aquellas palabras de Justo!

13 *LT*, 04/03/1921.

Fue una época en que ambas organizaciones compartían reclamos y actividades y muchos empleados y miembros de la FAA eran simpatizantes o afiliados al socialismo. En ambos periódicos se nota un intento mancomunado de crear una representación compartida que abarca desde las mismas o similares temáticas hasta un lenguaje similar, una forma parecida de redactar la noticia, coincidencias en columnas de opinión, etc. Desde el punto de vista fáctico tenemos que a fines de junio de 1920 se hizo el VIII Congreso de FAA en Río 4º. El mismo estuvo presidido por Nicolás Repetto y asistió también Juan B. Justo que fue invitado a hacer uso de la palabra en el cierre del mismo.¹⁴ A comienzos de 1921 *La Vanguardia* informaba de las visitas de dirigentes de la FAA a diversos lugares de la república para dar charlas y hacer reuniones con los productores. Frente a algunos sucesos había puntos de vista compartidos como lo era la condena al accionar del Partido Socialista Internacional. Desde *La Tierra* se calificaba al mismo de posturas extremistas no adecuadas al sistema democrático.¹⁵ Otro ejemplo de las buenas relaciones entre PS y FAA fue la defensa que se hacía en *La Tierra* del gobierno socialista de Mar del Plata. En un artículo se aplaude la decisión de la justicia de restituir al intendente socialista Teodoro Bonzini, que había sido destituido arbitrariamente por el gobierno provincial.¹⁶ También convergían en el enfrentamiento que se daba con la iglesia católica que se atribuía haber sido la impulsora de la marcha de chacareros a Capital Federal para solicitar la pronta sanción de la ley agraria cuando en realidad había sido organizada por la FAA. Relacionado con la autoría de dicha ley, *La Tierra* decía “El primer proyecto Agrario Argentino es de Bernardino Rivadavia. El segundo es del socialista Juan B. Justo y el último del Ministro de agricultura”. A continuación manifiesta que la Federación no presentó proyecto por no tener ningún diputado pero

14 LV, 01/07/1920.

15 LT, 22/10/1921.

16 LT, 11/03/1921.

nombra todas las acciones realizadas para presionar al gobierno.¹⁷ En otro artículo criticaba a los “Círculos de Obreros Católicos” por desconocer tanto los proyectos presentados por los socialistas, en particular Juan B. Justo, como los años de lucha de la Federación en pos de que se sancionara la ley contractual agraria.¹⁸

Asimismo trasciende la intención de elaborar un entramado simbólico de construcción identitaria manifestado en una especie de “deber ser” de los afiliados. Un ejemplo se refiere al caso de desavenencia entre chacareros y peones en que se aconsejaba no apelar a la policía sino a los gremios respectivos (FAA y FORA) para que oficiaran como mediadores o el hecho de que los chacareros debían contratar peones agremiados y éstos debían trabajar con federados.¹⁹ Otra apelación compartida estaba dirigida a los afiliados inmigrantes a quienes se instruía todo el tiempo para nacionalizarse y así poder votar o, aunque más no fuera, participar en las elecciones comunales donde se permitía el voto a los extranjeros.²⁰

El IX congreso de la FAA realizado en Rosario a fines de agosto de 1921 fue uno de los últimos eventos en que todavía armonizaban la FAA y el PS. Las temáticas abordadas fueron numerosas así como las decisiones que se tomaron. Entre los temas planteados estaban la decisión de adquirir una imprenta propia para lo que era necesario acordar la forma de reunir el dinero para pagarla; la constitución o no del partido agrario que desde tiempo atrás planteaban algunos afiliados; el pacto con la FORA; la cuestión de la ley agraria; establecer

17 LT, 08/11/1921.

18 LT, 08/11/1921.

19 Puede leerse una entrevista a un delegado de la FORA que era antiguo afiliado socialista en que éste relata su gira por el sur de Córdoba en pos de allanar desentendimientos entre chacareros y peones. *La Vanguardia* 12/12/1920.

20 Así lo hacía un artículo titulado “Renovación de las autoridades comunales” donde se decía que los que no iban a votar hacían abandono voluntario de un derecho que había costado mucho conquistar. Denunciaba también la trampa que significaba que los cargos no fuesen rentados, lo cual imposibilitaba la postulación a los carentes de recursos. *La Tierra*, 26/08/1921.

claramente quienes podían ser miembros de la Federación. A los fines de este trabajo conviene explayarnos un poco sobre la posibilidad de constitución de un partido agrario. En el imaginario de quienes lo proponían, estaba presente la idea de una marginación del sector en la arena política argentina, y no se percibían a sí mismos ni siquiera como parte de todo el sector agrario sino sólo de los chacareros, es decir, un horizonte sectorial bastante limitado. Claramente se nota un intento de subordinar lo político partidario a una lógica corporativa, lo que equivalía a la defensa casi exclusiva de los intereses económicos del sector representado por la Federación. Todo el tiempo se habla de leyes que el Congreso no aprueba, es decir imaginan un partido para una actividad casi exclusivamente legislativa. La idea fue defendida en este congreso por varios oradores pero no logró el consenso necesario para su aprobación ya que la mayoría de quienes se oponían argumentaban que la FAA había sido creada con una finalidad netamente gremial.²¹ Pasarían todavía diez años antes que el proyecto se concretara, y aun así con muy poco éxito.

Y finalmente... el desencuentro

Pero hubo un punto que comenzó a discutirse en este Congreso y donde se vislumbra un clivaje en el seno del mismo. Se trataba del balance anual que no había sido firmado por el Síndico Solari²², afiliado al PS, con el cual habrá más adelante un fuerte enfrentamiento. A

21 Piacenza intervino para aclarar que años antes había defendido la idea de que la Federación promoviese la creación de un partido político pero que en ese momento ya no sostenía esa postura. Como todos sabían él era socialista y si no se dedicaba más a su partido era por estar enteramente abocado a la FAA. “Declara que considera necesario la formación de un partido agrario y está seguro que con el transcurso de los tiempos se constituirá en el país un partido agrario que podrá tener afinidades socialistas”. La Tierra, 09/09/1921.

22 Se trataba de un faltante de dinero, 18000 pesos, que el presidente Piacenza prometía devolver en caso de que no se encontrara la manera de probar haber sido gastado.

partir de entonces La Tierra comienza a construir un discurso desfavorable al PS, va creando así mismo un ambiente hostil a la presencia de empleados afiliados al partido. Era obvio que la coyuntura tanto del país como internacional había cambiado, se habían recompuesto los mercados mundiales que retomaron una acentuada demanda de granos y los precios estaban en alza. La FAA continuaba con sus demandas históricas, pero recompuesta y fortalecida interiormente, aumentando año a año el número de filiales y por tanto los ingresos dinerarios ¿Podríamos decir que ya no necesitaban del apoyo del PS? Tal vez.

El X Congreso de la FAA se llevó a cabo en Bahía Blanca entre el 28 y 31 de mayo de 1922. Lo primero que se trató fue el informe de la comisión formada el año anterior que debía revisar los libros de la institución en donde figuraba un faltante de dinero de 18000 pesos que fue depositado por Piacenza como garantía. Según lo que manifiesta el Síndico, que revisó algunos períodos anteriores, no se trataba de dolo o malversación de fondos, sino de deficiencias de orden administrativo, por lo cual pidió que no se culpara de ello al presidente. Finalmente se votó por unanimidad la moción de que el mencionado déficit fuera cargado a ganancias y pérdidas y que se le devolviera a Piacenza lo depositado. La acusación que hizo el PS contra Piacenza lo ubicó, al interior de la Federación, en un rol de víctima de acusaciones injustas. Comenzaron a aparecer en La Tierra una serie de cartas de productores dando su respaldo al presidente de la Federación y manifestando que confiaban en su honestidad. A su vez empezaron a publicarse notas adversas a los socialistas como por ejemplo “Un hombre que miente” referido al diputado Justo, alabado muy poco tiempo atrás por ser parte del único partido que en las Cámaras proponía una legislación favorable a los sectores rurales. El artículo criticaba los dichos de Justo en una conferencia brindada en Rosario donde manifestó que “la marcha del 27 de septiembre de 1921 en Buenos Aires se efectuó por indicación de los socialistas”. Aclara que no quería quitarle mérito a aquellos, pero la marcha había sido organizada por los chacareros sin que ningún partido se lo insinuara o indicara. Agregaba “solo entendemos

negar asertos audaces de algunos dirigentes, empeñados, desde un tiempo a esta parte, en verter veneno contra nuestra sociedad [...]”.²³ El hecho en sí no es de gran envergadura, la marcha había sido exitosa más allá de cualquier paternidad que se le asignara. Lo importante es que había una rivalidad que afloraba todo el tiempo. Unos días después se publicó en *La Tierra* un artículo que evidenciaba la ruptura de relaciones con un título digno de una nota necrológica: AQUÍ YACEN las relaciones que unieron a la F.A.A. con el P.S.²⁴ Deja en claro que el principal enfrentamiento era con el Dr. Repetto al decir: “Desde hoy quedan rotos definitivamente los lazos espirituales que nos unieron a aquella agrupación política durante seis años. El doctor Repetto puede reír mefistofélicamente sobre su victoria”. Reconoce que nunca existió un vínculo material o pacto de acción ente las dos organizaciones pero sí puntos de vista comunes, coincidencias tácticas y relaciones amistosas. Al más puro estilo de vecinos mal avenidos, *La Tierra* saca a relucir sus críticas a Justo y Repetto por la estancia que ellos poseían en la provincia de Córdoba, en donde no aplicaban con sus inquilinos lo mismo que proponían una y otra vez en sus proyectos de ley. El articulista se pregunta en varias oportunidades por qué el PS se inmiscuye en cuestiones internas de la Federación como lo es el manejo del dinero o la reforma de los estatutos. Es una nota larguísima, llena de rencor apenas contenido.

Por su parte, en el PS estaba en marcha el andamiaje previsto para sus afiliados díscolos. Cumpliendo con lo que establecía el artículo 46 del estatuto²⁵, el CS de las secc. 1° y 3° de Rosario habían procedido a la expulsión de los afiliados Piacenza y A. H. Molina. Para ello se había formado una Comisión Investigadora de seis miembros cuyos resultados fueron publicados en *La Vanguardia* a mediados de

23 LT, 02/01/1923.

24 LT, 11/01/1923.

25 En el encabezado del informe se lee lo siguiente: “[...] los centros tienen atribuciones para imponer a sus adherentes penas disciplinarias en defensa del programa, del método, de la moralidad o de la armonía de sus afiliados” LV, 02/06/1923.

1923 aunque el informe tenía fecha de diciembre de 1922. Algunos de los cargos que se le hacen a Piacenza son: manejo autoritario y discrecional de los fondos de la Federación con omisiones injustificadas y sospechadas de maliciosas; desconocimiento hacia los legisladores socialistas de su intervención para que fuera sancionada la ley agraria; despido sin justificación de un trabajador de apellido Wortman por haber publicado en *La Tierra* una nota donde disienta con Piacenza en materia de cooperativismo; cesantía de otros trabajadores de afiliación socialista y/o presiones bajo amenaza de cesantía; a Herrera Molina se lo acusa de cobrar coimas (en relación a la adquisición de las máquinas para la imprenta de *La Tierra*); censura impuesta al antiguo síndico de la Federación e importante miembro del PS, Cristóbal Solari, por no haberse presentado al ser requerido por la Comisión.

A modo de cierre

Con el paso del tiempo quedó clara no solamente la ruptura entre la FAA y el PS, sino también un profundo encono con el radicalismo, en especial con el sector yrigoyenista. Tanto es así que al producirse el golpe de estado de 1930 el periódico *La Tierra* recibió con marcada expectativa la llegada de Uriburu al poder con su propuesta de régimen corporativo. Cuando esta propuesta dejó de ser funcional al sector burgués que había promovido el golpe, de nuevo la FAA aceptó el convite para integrarse. Esta vez lo hizo a un partido de efímera duración, la Unión Nacional Agrícola (UNA) que dio su apoyo a la fórmula Justo-Roca (h) (Bonaudo y Godoy, 1985, pp 201-202; Ansaldi 1993, pp 94-95 y Agricultores Federados Argentinos, 2007, p 75). Nuevo fracaso que en esta oportunidad vino de la mano del quebranto de la propia Federación como coletazo de la enorme incidencia que la crisis de 1929 tuvo en todos los sectores pero especialmente en los más vulnerables. Concluimos retomando las palabras de Ansaldi (1993) cuando advierte “de los límites que tiene no solo la definición

de los chacareros como clase sino, en particular, para generar el “es-píritu de escisión” necesario para zafar de tal condición y constituirse en dirección (o en parte de ella) de un nuevo sistema hegemónico”.

Referencias bibliográficas

- Agricultores Federados Argentinos, S. C. I. (2007). *Surgimiento, desarrollo y organización chacarera en la historia de una cooperativa*. Rosario: Borsellino Impresos S.R.L.
- Ansaldi W. (1991). La interferencia está en el canal. Mediaciones políticas (partidarias y corporativas) en la construcción de la democracia argentina. *Boletín americanista*, n°, 44, pp. 7-24
- Ansaldi, W. (1993). “La pampa es ancha y ajena. Las luchas por las libertades capitalistas y la construcción de los chacareros como clase”, en Bonaudo M. & Pucciarelli A. (Comps). *La problemática agraria, nuevas aproximaciones*. Buenos Aires: CEAL.
- Asquini, N. (1999). “1919: No arar, no sembrar”, en Asquini N., Cazenave W. & Echenique J. *Conflictos sociales en La Pampa 1910-1921*. Santa Rosa: Fondo Editorial Pampeano.
- Bonaudo M. & Godoy C. (1985). Una corporación y su inserción en el proyecto agro-exportador: la Federación Agraria Argentina (1912-1930). *Anuario* (XI), 11.
- Bonaudo M. & Pucciarelli A. (Comps.) (1993). *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones*. Buenos Aires: CEAL.
- Dellavale, M. (2012). Los hechos de Alcorta (1912), su repercusión en Córdoba y su vinculación con el socialismo. Presentado en las Jornadas Académicas “Tierra y movimientos sociales en Argentina: a cien años del Grito de Alcorta”. Rosario; Instituto de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
- Dellavale M. I. (2013). El Partido Socialista y la Federación Agraria Argentina: una década de encuentros y desencuentros (1912-1922), Actas de las XIV Jorna-

- das de Historia/Departamentos de Historia. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo. Disponible en: <http://cdsa.academica.org/000-010/702.pdf>
- Federación Agraria Argentina (1939). FAA. Apuntes para su historia 1912-1928. Rosario: Talleres Gráficos Guillermo Fenner.
- García Serrano T. (1966). *Esteban Piacenza. Apuntes biográficos*. Rosario: Librería y Editorial Ruiz.
- Grela P. (1958 [1985]). *El grito de Alcorta. Historia de la rebelión campesina de 1912*. Buenos Aires: CEAL.
- Halperín Donghi, T. (1984). *Canción de otoño en primavera: previsiones sobre la crisis cerealera en la Argentina (1894-1930)*. *Desarrollo Económico*, n° 95.
- Justo, J. B. (1901). *Programa Socialista del Campo*. Buenos Aires: Cooperativa Tipográfica.
- Justo, J. B. (1933). *Discursos y escritos políticos*. Buenos Aires: El Ateneo.
- Odonne J. (1934). *Historia del Socialismo Argentino*. Buenos Aires: Talleres Gráficos La Vanguardia.
- Panbianco Á. (1993) *Modelos de Partido*. México: Alianza Editorial.
- Restaino R. (2012). *Antonio Noguera. Un periodista combativo*. Pergamino: Editorial El pan de aquí.
- Solberg C. (1975). “Descontento rural y política agraria en la Argentina, 1912-1930”, en Giménez Zapiola M. (Comp.) *El régimen oligárquico*. Buenos Aires: Amorrortu.

Acerca de cómo la confrontación no siempre es resistencia al agronegocio.

El caso de las organizaciones agrarias empresariales, de la agricultura familiar, campesina e indígena, 1991-2002

Gabriela Olivera

Introducción

El planteo central de este capítulo apunta a visualizar cómo las organizaciones que interpelan al Estado puede variar de signo, según cómo se posicionen ideológicamente¹ con respecto al nuevo modelo agrario, conocido entre otras denominaciones, como “agronegocio”, vigente en la actualidad.

Partimos de una perspectiva teórica que cuestiona la noción de Estado como aparato o apéndice de las clases dominantes y que considera al mismo como arena política de relaciones de poder, en el cual se despliegan relaciones hegemónicas que trascienden las alianzas de clases para convertirse en una verdadera “dirección intelectual y mo-

1 Entendemos por ideología al conjunto de ideas y creencias colectivas que postulan modos de comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, la política, la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología.

ral” sobre las clases y fracciones de clase que recorren la sociedad política y civil a través de un conjunto de mediaciones (Catamutto, 2015)

Sobre la noción de organización existen vastas líneas de desarrollos teóricos, en general provenientes de la teoría política o la sociología que del campo historiográfico. O’donnell(1978, pp. 41-46) reconoce un plano corporativo-organizativo de construcción de los actores que se refiere a la representación y a la defensa de los intereses sectoriales en organizaciones tales como las cámaras, los gremios, los sindicatos y que se distingue del plano específicamente político-ideológico en que trasciende a los intereses particulares para constituirse en portador de intereses más generales, a través de las burocracias estatales, los partidos o los movimientos políticos. Lattuada (2006), desde la sociología, se ubica en una perspectiva teórica neocorporativista en la cual resulta central el análisis de las posiciones y los recursos de los colectivos sociales y las organizaciones, destacándose entre ellas las agencias estatales. Desde este enfoque es relevante el estudio de las relaciones, los conflictos entre las organizaciones y con el Estado.

Para considerar la problemática de las organizaciones del sector agropecuario es necesario explicar las formas y las características que asume el agronegocio en Argentina. El núcleo central de este estudio se ubica en las intersecciones entre la sociología rural, la economía política y la historia agraria. Apuntamos a construir una visión sintética y relacional de las organizaciones rurales, para lo cual nos hemos basado principalmente en fuentes secundarias, provistas por investigaciones producidas por especialistas en la temática considerada y, en menor medida, en entrevistas a dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) en el año 2007.

Desde nuestra perspectiva, las organizaciones pueden ser consideradas como sujetos que se construyen y redefinen sus perfiles en base a las siguientes cuestiones: por un lado, los discursos y los contenidos ideológicos que las organizaciones llevan al espacio público, tanto con relación a las políticas públicas y a otras entidades (princi-

pal aunque no exclusivamente agrarias) y, por el otro, el contenido y las formas que asumen las confrontaciones con el Estado y las luchas desplegadas en el espacio público, en términos de, entre otras cuestiones, la acción colectiva disruptiva. Este concepto puede ser entendido como la acción orientada a intervenir en el campo político con el objetivo de influir en las decisiones gubernamentales, a las que pueden incluso llegar a redefinir reglas en el campo político. Es relevante considerar además las formas y los mecanismos a través de los cuales se cimentan los consensos, para dar lugar a la agregación y a la representación de intereses. (Schuster *et al*, 2006; Scribano, 2003).

Estudiamos a las organizaciones agrarias empresarias, de la agricultura familiar en sus segmentos más capitalizados,² de campesinos e indígenas,³ sus discursos,⁴ las demandas que guían su acción en

2 Cabe aclarar que la agricultura familiar comprende a un amplio espectro de productores agropecuarios. En su conjunto puede definirse teóricamente por la existencia de un equipo de trabajo familiar, el involucramiento directo del titular en las actividades productivas, gestión y comercialización. Algunos autores han enfatizado el peso que revisten los aspectos identitarios en este tipo de actores. Ser agricultor familiar es mucho más que un oficio o una categoría productiva. Es una forma de vida. El vínculo con la tierra es un elemento central en esa identidad (Muzlera, 2009, pp. 68-72). Friedman caracteriza a la agricultura familiar como producción mercantil simple y destaca su peculiar flexibilidad frente a coyunturas críticas dado que no tiene requerimientos estructurales de ganancia media y por tanto, presenta ventajas competitivas frente a la economía capitalista (Friedmann, 1981). Aquello que diferencia al productor mercantil simple del campesino es su grado de capitalización o su capacidad de acumulación y su fuerte vinculación con el mercado como orientador de su producción. Otra diferencia importante del campesinado con respecto al resto de la economía familiar es que su inserción en diferentes relaciones de mercado (de trabajo, financiero, tierras e insumos) es más débil y parcial. (Abramovay, 1998; Murmis, 1998). Este estudio abarca también a las organizaciones indígenas, cuya base social está representada en gran medida por campesinos. La condición étnica y cultural empero, no está forzosamente ligada a la actividad agropecuaria.

3 Este texto no considera a las asociaciones de trabajadores rurales, lo que constituye una limitación a la reconstrucción histórica. No obstante consideramos que el estudio de las organizaciones empresarias y de la agricultura familiar constituyen una temática lo suficientemente densa y compleja como para ameritar un tratamiento en sí mismo.

4 Formas sistemáticas de utilizar el lenguaje. Las dimensiones implicadas en los discursos son claves para comprender los procesos de producción de sentido de una sociedad. (Foucault, 1970).

el espacio público y los sustratos ideológicos que subyacen en esos discursos.

Nuestro punto de partida temporal es la década de 1990 porque en aquel momento histórico el actual modelo agrario -con eje en la producción de *commodities*, en particular la soja- se generalizó, al compás de la implementación de políticas de reformulación del papel del Estado en la economía, la sociedad y la desregulación de los mercados. Al respecto, tuvo particular relevancia el decreto 2284 de 1991 (el que se analiza en el segundo apartado). El período bajo estudio termina en el 2002, cuando se deroga el régimen convertible de paridad cambiaria entre el peso y el dólar. A través de la ley 23928 se había fijado la paridad cambiaria entre el dólar estadounidense y el peso a una tasa fijada por ley con el fin de asegurar la estabilidad monetaria. Se obligaba al Banco Central a mantener reservas por un monto equivalente al 100% de su base monetaria. Tuvo una eficacia antiinflacionaria inmediata y de estabilización de una economía altamente inflacionaria (Gerchunoff & Torre, 1996). La paridad cambiaria afectó a los bienes transables, es decir a las *commodities*, no así a los servicios -recientemente privatizados- y a quienes contaban con regímenes especiales o tenían baja exposición a la competencia externa. El peso “anclado” de manera fija al dólar no resultó beneficioso para el sector agropecuario, ya que éste vio reducido el poder adquisitivo local de sus divisas, mientras los precios internos de los servicios y los bienes transables se incrementaban (Basualdo, 2010). Si bien esta política puso en jaque la rentabilidad del sector agroexportador debido a que ellos producían bienes transables en el mercado internacional, los sectores más perjudicados fueron los pequeños y medianos productores familiares muy integrados a los mercados. A partir del 2002, el agronegocio siguió expandiéndose y consolidándose, pero las condiciones de la política económica y el accionar de los actores exceden los propósitos de esta investigación.

Nuestra hipótesis central se nutre de las siguientes premisas. Por una parte, sostenemos que la estructura de representación de in-

tereses agrarios y cada una de las organizaciones que la componen han experimentado transformaciones relevantes, debido centralmente a los siguientes factores: el surgimiento y la consolidación del agronegocio, las políticas estatales neoliberales y la crisis de representación política, que trajeron aparejada una devaluación del papel que cumplían los partidos políticos, los gremios y una disminución en la participación de sus asociados, cuestiones que han delineado nuevas reglas de juego en la institucionalidad agraria. Los cambios en el perfil de las entidades gremiales y la creciente relevancia de entidades nuevas se explican por estos factores. Por otra parte, dentro del conjunto diverso de organizaciones agrarias se han conformado dos vertientes: una que apunta a la reconversión y a la adopción de pautas propias del agronegocio por parte de segmentos de la agricultura familiar y el empresariado rural. Esta vertiente tiene epicentro territorial y mayor desarrollo en la región pampeana⁵. Plantea, entre otras cuestiones, que la adopción de los lineamientos del agronegocio es la única vía de integración al mundo globalizado en términos beneficiosos para el país y de modernización económica. La otra vertiente se opone y resiste⁶ al agronegocio tanto en su discurso como sus prácticas y afirma que existen otras vías alternativas de desarrollo rural. Esta vertiente tiene como principales protagonistas a los campesinos, a los indígenas y se sitúa territorialmente en lo que se denomina globalmente como “área extrapampeana”, la que comprende el noreste, noroeste y la Patagonia argentina. Finalmente, consideramos que ambas vertientes apelan a la

5 Área geográfica situada en el centro del país y también en Uruguay y el Estado de Río Grande del Sur en Brasil. Es una estepa de clima templado. Constituye la región con la economía más próspera y con mayor uso de nuevas tecnologías y desde la etapa agroexportadora el núcleo básico de producción de cereales y ganado

6 Definimos al término “resistencia” en un sentido amplio, como procesos de conflictos y confrontaciones que llevan adelante determinados actores con relación a otros que tienen una posición hegemónica con relación a otros. El conflicto se expresa en la escena pública en diversas formas de protesta y organización colectiva, a partir de las cuales se van plasmando ciertas formas de comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, es decir se van construyendo y redefiniendo ideologías.

confrontación con el Estado y a la acción colectiva. Pero es el sustrato ideológico de la demanda que se esgrime al Estado la que define el posicionamiento de apuntalamiento o resistencia al agronegocio.

Lattuada, basándose en Moyano, conceptualiza a las entidades gremiales como de tipo reivindicativas por tener como objetivo fundamental la defensa integral de los intereses de un determinado colectivo; ser universalista en la naturaleza de los fines que persiguen y la actividad que desarrollan, y tener un discurso con un fuerte componente ideológico, construido en función de los valores que asumen sus dirigentes y las formas en que éstos interpretan los problemas de su base social. Estos rasgos se deducen de sus funciones esenciales: representación, reivindicación y defensa de intereses. Indica también la existencia de otro tipo de organizaciones no reivindicativas que persiguen objetivos de naturaleza económica, presentan un discurso acotado a fines específicos. Un ejemplo del segundo tipo de entidades son las cooperativas que llevan adelante sus operatorias en el mercado, las que han sido históricamente relevantes pero que en el período considerado han dejado de serlo. En este segundo tipo ideal se podrían ubicar las “nuevas entidades”, ubicadas tanto en el campo del apuntalamiento como de la resistencia a los lineamientos del agronegocio (Lattuada, 2006, pp.20-23). Planteamos esta tipología porque pensamos que puede ser pertinente para el análisis de la nueva institucionalidad agraria.

En el apartado siguiente realizamos una presentación sintética en las características más relevantes de las políticas neoliberales durante la vigencia del régimen convertible y del agronegocio en Argentina. Posteriormente, nos dedicamos al análisis de los discursos, las demandas y sus contenidos ideológicos, las acciones colectivas llevadas adelante por los diferentes tipos de organizaciones, en el marco de las políticas públicas.

1. Políticas públicas, surgimiento y desarrollo del agronegocio en Argentina

Desde la asunción del gobierno de Menem en 1989 se aplicaron políticas de corte neoliberal de manera sistemática. Estas se basaron en una reducción en las funciones de regulación estatal, la privatización de empresas públicas, planes de ajuste fiscal y apertura externa de la economía. Los sectores más concentrados de la economía fueron beneficiados desde la esfera gubernamental y a través de las privatizaciones de las empresas estatales industriales y de servicios. Las agencias multilaterales de crédito, los acreedores y los inversores extranjeros se constituyeron en interlocutores privilegiados en las decisiones gubernamentales (Basualdo&Aspiaz, 2002)

Argentina emprendió otra etapa de agriculturización y de modernización tecnológica. Los volúmenes producidos y exportados crecieron de manera significativa. El gran incremento de los precios internacionales de los *commodities* y, en especial la soja, junto a la introducción de un nuevo paquete tecnológico y una nueva forma de organizar la producción favorecieron el proceso de “sojización” de la economía agraria. Desde 1990/1991 a 1995/1996 la superficie cultivada con soja había crecido 1.000.000 has, mientras que en el quinquenio posterior (1995/1996 a 2000/2001) crecería 4.660.000 has, y en el siguiente (2000/2001 a 2005/2006) el incremento sería de 4.700.000 has sembradas con soja (Giarraca, 2011.pp.333).

En el contexto de la reformulación del papel del Estado en la economía, la sociedad y su implementación a través de “reformas estructurales” en 1991 -por medio del decreto 2284- se desregulaba el comercio interior de bienes, servicios y se ampliaba la apertura del mercado externo. Además, se desregulaban las relaciones laborales en las actividades portuarias, se simplificaba la inscripción en los registros de los importadores y exportadores de la Administración Nacional de Aduanas y se reducía el tamaño de la administración pública. Se

eliminaban la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, La Corporación Argentina de Productores de Carne, el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, la Dirección Nacional del Azúcar, el Mercado consignatario de Yerba Mate y el Instituto Nacional Forestal. Posteriormente, se sancionaron otras medidas desregulatorias en materia de transporte, seguros, puertos, navegación, pesca y servicios, como la telefonía. La eliminación de estos organismos públicos del sector agropecuario, de las regulaciones que ejercían -que se habían cimentado desde la década de 1930- y la derogación de los impuestos que servían para financiar a los organismos disueltos afectó profundamente a la dinámica interna del sector agropecuario (Barsky & Dávila, 2008). Con la desregulación de los mercados el Estado autorizó la comercialización de los cultivos transgénicos y se incorporaron las nuevas prácticas productivas asociadas a éstos, procesos operados a lo largo de la década de 1990. En 1996 se liberó la comercialización de la soja resistente al herbicida glifosato, comercialmente difundida bajo el nombre *Roundup Ready* propiedad de la multinacional Monsanto. Su uso se difundió al igual que la práctica de la siembra directa. Estos tres pilares productivos: soja transgénica, glifosato y siembra directa constituyen lo que se conoce como “paquete tecnológico” (Gras & Hernández, 2009). Los rasgos centrales del agro argentino se vieron reconfigurados de manera abrupta, dando lugar a una agricultura dominada en mayor medida por la lógica de los “negocios”, por el mercado y fuertemente asociada a las revoluciones en las áreas de la biotecnología y la ingeniería genética. Se afianzó una agricultura empresarial, con fuertes vínculos entre la industria, el comercio y las finanzas (Carini & Olivera, 2015, pp.245-270). Esta cuestión tuvo particular relevancia en la estructura social agraria, con la creciente inviabilidad económica y la consecuente desaparición de una parte importante de la agricultura familiar, campesina e indígena. Entre los censos de 1988 y 2002 desaparecieron el 25% de las explotaciones agropecuarias en Argentina, mientras aumentaban las unidades de más de 500 ha (y particularmente aquellas de entre 1.000 y 2.500 has), lo que entre otras

cuestiones, pone en evidencia un proceso importante de concentración de la tierra, más que la concentración de la propiedad de la tierra propiamente dicha, dado que entre otras cuestiones, los *pools* de siembra⁷ y los fideicomisos han accedido (y lo siguen haciendo) a la tierra a través del arriendo y no de la compra. (Giarraca & Teubal, 2013.p. 30; Teubal et al, 2005)

Las “reformas estructurales” y los procesos de desregulación del sector agrario provocaron fuertes grietas en el entramado político y social nacional. La política no aparecía como un mecanismo adecuado para cambiar las formas de vida y trabajo de la población. Su relevancia y legitimidad se devaluaron. Algunas identidades políticas se disolvieron, otras se transformaron. Cambiaron los contenidos, las demandas de los colectivos y sus representaciones sociales, operándose una profunda crisis de representación que afectó al conjunto de la sociedad, a los partidos políticos y a las entidades gremiales (Pucciarelli, 2001).

Desde diferentes miradas analíticas este nuevo patrón social y productivo ha sido denominado como “nueva ruralidad”, “agricultura o ruralidad globalizada”, *agribusiness* o “modelo extractivo”(Hernández, 2009;Gras,2009;Giarraca & Teubal,2013).Estos conceptos habilitan a pensar en una modalidad distinta de actores y relaciones sociales en el agro. Comprende, entre otras cuestiones, la coexistencia de empresas de alta complejidad tecnológica, empresas que forman parte de *holdings* con el soporte del capital financiero internacional,

⁷ El *pool* de siembra accede a la tierra en general, a través del arriendo (y no la propiedad del suelo). El inversor aporta el capital y el agrónomo el conocimiento para organizar y llevar adelante el proceso de producción. Estos empresarios trabajan a gran escala, ya que arriendan una cantidad de tierras en diferentes lugares simultáneamente, lo que les permite minimizar los riesgos climáticos y negociar los arriendos en condiciones ventajosas. El contratista lleva adelante el plan de actividades mientras que las semillas, los fertilizantes y los agroquímicos son provistos a través del *pool* de siembra. Los *pools* muestran estrecha relación con el capital financiero; en el caso de los fideicomisos prevalece el capital bancario (Barsky& Dávila, 2008,pp. 90-97).

empresas de agroturismo, en mundos rurales en los cuales conviven campesinos, productores familiares y trabajadores rurales segmentados por los cambios en los procesos de trabajo. Estos actores, presentes en las nuevas arenas, tratan de imponer o adaptarse a las nuevas reglas de juego, afianzar o resistir gramáticas de poder político (Carini & Olivera, 2014, p. 9).

2. La nueva institucionalidad del agronegocio

Según Lattuada (2013, pp. 49-57), la explicación acerca del surgimiento y del crecimiento de las nuevas asociaciones y las profundas transformaciones de las organizaciones pre-existentes radica en que cambiaron las condiciones de viabilidad de las explotaciones agropecuarias en el marco del nuevo modelo agrario y la implantación de las políticas neoliberales. Esto impulsó a los productores a buscar nuevas fórmulas de organización y asociación, pero todas presentaban como rasgo en común una discursividad menos integral, que respondía a demandas más acotadas, específicas. La totalidad de estas nuevas asociaciones se caracterizaban por constituir grupos informales (formas organizativas laxas) y por esa razón el autor las denomina como “formas protoasociativas”, puesto que en este conjunto existía poca cantidad de asociaciones civiles, sociedades de hecho y extremadamente pocas sociedades de responsabilidad limitada. Otro rasgo distintivo de la “nueva ruralidad” es que se ha profundizado la fragmentación del andamiaje institucional del agro pampeano, provocándose una verdadera “explosión pluralista de asociaciones de todo tipo en el territorio nacional”.

2.1. Políticas públicas, discursos y acciones de las organizaciones gremiales

Durante la vigencia del régimen convertible (1991-2002), un aspecto central de la política gubernamental fue la supresión de las retenciones⁸ y, otra estaba ligada al otorgamiento de créditos para la adopción de nuevas tecnologías y para impulsar la reconversión productiva del sector. El gobierno implementó además una batería de medidas paliativas para los pequeños productores. Estas medidas apuntaban a mejorar la vinculación de los pequeños productores con el mercado y al sostenimiento de las condiciones mínimas de vida. Fue impulsada desde diversos organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, otras fuentes de financiamiento del presupuesto nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Con estas fuentes de financiamiento los programas más importantes que se implementaron fueron Cambio Rural y el Programa Social Agropecuario (Lattuada, 2006. pp.113-136). Pese a la adopción de esta política la situación se hizo cada vez más crítica y el endeudamiento apareció como el problema central entre el segmento de pequeños y medianos productores que estaban adoptando el “paquete tecnológico” (siembra directa/ soja RR/ glifosato).⁹

Este fue el caso paradigmático del origen del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, quienes constituían inicialmente un grupo de pequeños y medianos productores familiares de la provincia de La Pampa. Se centraron en la problemática del endeudamiento, en

8 Impuesto a las exportaciones, recurso estratégico para el financiamiento del Estado. (Barsky & Dávila, 2008, pp.143-154)

9 El trabajo de campo realizado en el departamento San Justo, en Córdoba, durante 2013 y 2014 muestra estas tendencias. (Olivera, 2014, pp.162-165)

detener la ejecución y los remates de tierras, reconsiderar la legitimidad de las deudas, refinanciar los montos a plazos no inferiores a los diez años y a tasas que no excedieran el nivel internacional, teniendo en cuenta la capacidad de pago de cada explotación (Lattuada, 2001)

El problema del endeudamiento fue relevante y particularmente vinculado a pequeños productores estrechamente ligados al mercado, pero la crisis de representación política trajo aparejada otros problemas comunes al conjunto de las asociaciones gremiales. Se redujo el número de asociados. Su interés en la discusión y la resolución de problemáticas acuciantes, a través de su participación activad disminuyó. La representatividad de sus dirigentes fue crecientemente cuestionada y desaparecieron fuentes estatales de financiamiento de las organizaciones. En la medida en que estos cuestionamientos no formaban parte de la agenda estatal se multiplicaron las protestas y las acciones directas.

Las demandas de los gremios cuya base social estaba representada por los empresarios rurales y la agricultura familiar más capitalizada se centró en la reducción de impuestos, mayores facilidades en el acceso al crédito bancario, refinanciación de pasivos, reintegros para las exportaciones de las economías regionales, eximición de las deudas previsionales que pesaban sobre un segmento importante de productores (Carini & Olivera, 2016, pp.55-65). Se solicitaba al Estado que declarara situaciones de emergencia agropecuaria, en una estrategia que combinaba medidas de acción directa y canales de diálogo para obtener respuestas a sus demandas. La protesta rural fue impulsada desde este tipo de organizaciones gremiales que era pre-existentes a las políticas neoliberales como FAA, Confederación Rural Argentina (CRA), CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria limitada, entidad cooperativa de tercer grado) y otras nuevas que se conformaron en la década de 1990, como por ejemplo la Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), la Asociación de Productores de la Zona sur (APASUR). Es necesario puntualizar que en estas acciones diversas, ninguna de las organizaciones cuestionaba el régimen de la

moneda convertible, dadas las experiencias inflacionarias e hiperinflacionarias anteriores. (Lattuada, 2006, pp.177-206)

Las principales formas de lucha fueron los piquetes (que implicaban paralización del tránsito terrestre), la paralización de las actividades bancarias y de los pagos de los impuestos, los tractorazos, las concentraciones y las asambleas de productores, los cierres de los comercios y apagones de energía eléctrica. Mencionamos, por su importancia, los paros agrarios de 1994 y 1999, los que habían sido convocados por la FAA y contaban con el apoyo de CRA y CONINAGRO. El primer paro consistía en un paro “tranqueras afuera”, es decir durante diez días las entidades rurales acordaban que sus asociados no realizaran ninguna operación de mercado. El segundo tenía como un eje principal el problema del endeudamiento tributario, la reducción del precio del gasoil y de las tarifas de peajes. En este marco Confederaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) acordaron movilizaciones en la ciudad Capital y otras localidades, tales como Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Al mes siguiente FAA convocaba a otro paro de “tranqueras afuera”. Acompañan la medida CRA y CONINAGRO, a la que se le suma por primera vez Sociedad Rural Argentina (SRA) (Carini, 2016, pp.236-269).

Es necesario aclarar que las organizaciones que participaban en estas movilizaciones no actuaban de manera coordinada. En algunas coyunturas las movilizaciones eran protagonizadas de forma separada, en otras se establecían alianzas efímeras. Las demandas que prevalecían en las diversas formas de lucha también variaban.

Cabe especial mención el accionar de la FAA. Dado que esta organización contaba con una base social muy heterogénea, compuesta por segmentos de agricultura familiar que se estaban reconvertiendo a las pautas del agronegocio, otros segmentos que se endeudaban, quienes dejaban deser viables como unidades económicas y campesinos, existía una puja interna fuerte en su interior, en la lucha por espacios y cargos en su interior. (Lattuada, 2003, pp. 184-206). Ideológicamente

convivían de manera antagónica quienes estaban a favor del agronegocio y también quienes se oponían críticamente.

Las cooperativas, integradas mayoritariamente por pequeños y medianos productores, experimentaron un deterioro progresivo. El número de productores y el nivel de actividad económica disminuyeron como producto de la crisis y la concentración que afectó a sus bases sociales, por la debilidad financiera y la inadecuada capacidad para enfrentar las nuevas condiciones de apertura y desregulación financiera. (Lattuada & Renold, 2004, pp.43-45).

Por otra parte, antiguas entidades cooperativas de segundo grado y relevante peso relativo-tales como Agricultores Federados Argentinos (AFA), Asociación de Cooperativas Agrarias (ACA), Cooperativas Unidas Limitadas (Sancor)-experimentaron cambios sustanciales, adoptando una lógica más empresarial con relación a sus perfiles primigenios(Lattuada, 2016, p.51).

En un momento de severa crisis del régimen convertible, en el año 2000, se realizaron elecciones en la conducción de la FAA y la lista ganadora (bajo la presidencia de Eduardo Bussi) expresaba un cierto giro que procuraba consensuar políticas gremiales afines entre sectores a favor o adversos al agronegocio, expresando esta cuestión los profundos procesos de cambios y reconversiones productivas que experimentaba la agricultura familiar (Entrevistas realizadas a dirigentes de FAA en el año 2007).¹⁰

Con la caída del régimen convertible luego de la crisis política, social y económica del 2001 y la consecuente devaluación, el sector de bienes transables se vio beneficiado internacionalmente en un primer momento, para luego ingresar en un estadio de resultados fluctuantes. La devaluación generaba una situación de retorno coyuntural a un

10 En el año 2007 realizamos 5 (cinco) entrevistas a Directores suplentes y titulares de la FAA. Si bien las entrevistas versaban sobre la agricultura familiar, se vertieron posiciones muy diferentes sobre el agronegocio y las estrategias gremiales.

escenario pre-convertibilidad, no carente de conflictos y protestas rurales. La temática del endeudamiento, que había sido central para los pequeños productores anteriormente, perdía relevancia en la medida en que algunas explotaciones pequeñas lograban condonar o refinanciar sus deudas. Otras demandas adquirían importancia, tales como las variaciones en el tipo de cambio, la baja en las retenciones a las exportaciones y, particularmente entre los pequeños productores se iba afirmando la importancia de los reclamos sobre precios sostén¹¹ (Latuada, 2013, pp. 58-59)

2.2. Las nuevas organizaciones que apuntalaban el agronegocio¹² y su vinculación a las organizaciones gremiales

Las principales organizaciones de nuevo cuño que apuntalaban y siguen apuntalando el agronegocio, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola(AACREA) y Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa(AAPRESID) -a diferencia de SRA que postulaba que la modernización del agro tenía la liberalización de los mercados como eje central- afirmaban que era el dinamismo, la innovación tecnológica, la que lideraría la revolución en la biotecnología. (Gras & Hernández, 2009, pp. 35-39). Hernández (2009) afirma que los promotores del agronegocio han construido una “solidaridad de facto”, la que está compuesta por aquellos actores impulsores y beneficiarios del modelo como los pools de siembra, los fideicomisos, los grandes y medianos productores que practican el agronegocio en condiciones de rentabilidad, las empresas y comercios

11 Precio mínimo garantizado por el Estado.

12 Usamos el tiempo verbal pasado porque nuestro período de estudio es la década de 1990, lo que no significa que estas organizaciones no existan actualmente, en algunos casos aún más consolidadas.

de agroquímicos, etc. Para estos actores el *agribusiness* es la única vía posible de actualización y participación exitosa en el mundo globalizado y a esta cuestión se refieren con “ruralidad globalizada”. Plantean que para que la explotación agropecuaria y la agricultura familiar puedan permanecer en el mercado y capitalizarse, debe transformarse en una “empresa-red” que sea capaz de incorporar un management moderno y que pueda desplazarse desde lo agrario a lo transsectorial (industrial, financiero, comercial, etc.). La familia como equipo de trabajo es vista desde este paradigma como inviable y para superarse debería reconvertirse en empresa de la información, la comunicación y la aplicación de conocimientos biotecnológicos.

Liaudat (2015) sostiene que estas entidades apostaban y siguen apostando a una construcción hegemónica en las características ideológicas del discurso, discurso que trasciende la raigambre local para involucrarse en una raíz transnacional, que toma como modelo los Centros de Técnicas Agrícolas franceses, los que plantean una relación novedosa entre instituciones públicas, privadas y un plan orientado para modernizar la empresa agraria. Esta hegemonía se expresa y expresaba discursivamente, entre otras cuestiones, en el “paradigma de la red”, en el cual se rediseñaba la organización del trabajo de la empresa rural tradicional y la agricultura familiar. El factor propiedad de la tierra era devaluado y prevalecía el conocimiento como factor clave. La “cadena de valor”, conformada por la red de estas nuevas empresas constituían un *cluster*, que presentaba ventajas competitivas por la amplitud de su escala y la disponibilidad relativa de capital. La implantación social y el desarrollo ideológico-técnico de este discurso con pretensiones hegemónicas se realizaba no solo a través de AACREA y APRESID, sino de las universidades públicas y privadas, en el grado y en el posgrado, tales como Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y Universidad Católica Argentina (UCA) (Hernández, 2009, pp. 45-59).

AACREA surgió en 1957. Un rasgo relevante de esta asociación fue y es la celebración a las nuevas tecnologías en los procesos de pro-

ducción, cuestión visible ya desde la década de 1960. Su objetivo es, afirmaban, constituirse en “punta de lanza de una nueva agricultura” con superioridad técnica. Prevalcían las preocupaciones técnicas y la necesidad de integrar conocimientos científicos a las prácticas agrícolas. Su accionar se basaba en el trabajo con grupos de productores locales, en la elaboración conjunta de planes de trabajo que tendieran a la viabilidad económica según los lineamientos del agronegocio y en el que el asesoramiento técnico cobraba centralidad. Ellos afirmaban que los grupos CREA actuaban como “pools de ideas y experiencias”, como enlaces entre el saber desarrollado en el ámbito científico y su implementación en las explotaciones agropecuarias, a través de los planes de experimentación empírica, en reuniones periódicas con un asesor técnico donde se establecía el plan de trabajo para cada empresa (Gras & Hernández, 2013b, pp, 47-55).

AAPRESID fue creada en 1989 de un desprendimiento de AACREA, ya que en su interior existían visiones tensionadas entre los límites de una agricultura conservacionista o productivista. AAPRESID implicó el triunfo de la postura productivista, expresada en su dedicación casi exclusiva a la siembra directa, aunque persistían continuidades relevantes con respecto al perfil de AACREA. Ambas organizaciones cobraron mayor impulso con la autorización estatal de los Organismos Genéticamente Modificados en 1996 y seconstituyeron en organizaciones productivas con alcance multiescalar (que operan en territorios nacionales, regionales y transnacionales)(Gras & Hernández, 2013a, p.42) (Gras & Hernández, 2013b, pp. 37-50).

Su discurso está centrado en lo técnico y se enorgullecen de haber construido organizaciones e ideas sin la ayuda del Estado, instando a los productores a la organización autónoma del Estado, devalúan la política y excluyen explícitamente de su identidad los aspectos gremiales y enfáticamente los políticos. No obstante, ejercen presiones sobre el Estado tipo *lobbyng* en determinadas coyunturas, en general, en directa asociación con empresas de semillas, agroquímicos nacionales e internacionales y con gremios empresariales. Construyen legi-

timidad a partir de presentarse como una referencia en el campo del conocimiento y mostrar los avances tecnológicos de otras partes del mundo. Se distancian de las entidades gremiales del sector a las que muestran como meramente corporativas pero a cuya lucha corporativa se suman (Liaudat, 2015).

Al respecto, Lattuada (2003) sostiene que las nuevas asociaciones replanteaban la estructura interna y las estrategias de las entidades gremiales, incorporando a la función de defensa de intereses sectoriales, una mayor oferta de servicios, asesoramiento técnico con el objetivo de “ganar posiciones” frente a otras entidades en la disputa por las mismas bases sociales. Para Gras (2010) las nuevas asociaciones no entraban en competencia por las bases sociales puesto que podría pensarse en una suerte de “división del trabajo” que implicaría que las nuevas se concentraran en los aspectos técnicos, en los ámbitos específicos, reforzando así su lugar de entidad especializada e impulsando incluso a sus asociados a integrarse a las de tipo gremial que son las que se dedican a la defensa de los intereses más generales ante, entre otras cuestiones, las políticas económicas.

¿Competencia o complementariedad entre las entidades de antiguo o nuevo cuño que apuntalaban el agronegocio? Sin dudas, un interrogante que necesita ser profundizado. Al respecto, un estudio de caso sugerente y fundado es que aporta Carini (2016, pp. 216-341) en su estudio sobre la Sociedad Rural de Río Cuarto. Durante la etapa de la convertibilidad esta entidad apeló a estrategias clásicas corporativas, como el *lobby* que ejercía sobre el Estado provincial y la movilización gremial, pero al mismo tiempo realizó un importante esfuerzo institucional para favorecer la reconversión de sus bases sociales según los lineamientos del agronegocio. La prestación de servicios, la relevancia otorgada a las prácticas que indujeran o facilitaran la reconversión productiva de sus asociados pasaron a ocupar un lugar central que incorporaba componentes discursivos diferentes con respecto a los que históricamente habían caracterizado a la entidad. Mantenían

una fluida relación con AACREA y AAPRESID a través de conferencias y seminarios.

2.3. Demandas, acciones y elementos ideológicos que la vertiente que resistía y resiste al agronegocio

En un contexto de fuerte conflictividad social generada por las políticas de ajuste neoliberal durante la década de 1990, la acción directa fue creciendo también en los ámbitos rurales del noreste, noroeste y la Patagonia argentina. Estas áreas, principalmente el nordeste y el noroeste, presentan preponderancia campesina. Se han gestado nuevas redes (ferias francas, redes propias de comercialización con supermercados y cooperativas de producción o trabajo). Ha habido protestas protagonizadas principalmente por campesinos e indígenas, como paros agrarios, cortes de ruta, marchas en distintas zonas del país: fruticultores del Valle de Río Negro, cañeros de Tucumán, yerbateros de Misiones, tamberos de la cuenca lechera de Córdoba. Las reivindicaciones han sido variadas: solicitudes de diversos tipos de subsidios y créditos estatales, fijación de precios sostén que garantizaran precios compensatorios de los costos por la producción de materias primas (Lattuada, 2013, pp. 45-60).

No obstante, es posible afirmar que ya desde fines de la década de 1990 la lucha central de los campesinos e indígenas ha sido por la tierra. La agriculturización que resultaba de la aceleración de la sojización, en gran parte incentivada por el alza en el precio de esta *commoditie* en el mercado internacional -con epicentro en la región pampeana- ha implicado un avance sobre el territorio en el que se asienta la producción campesina e indígena. Este territorio ha cobrado mayor valor con el corrimiento de la frontera sojera y ganadera pampeana, ya que la expansión de la superficie cultivada con soja ha acrecentado el interés por comprar tierras para uso ganadero más allá

del territorio pampeano, lo que a su vez, ha impulsado procesos de titulación de tierras por parte de empresarios vinculados al agronegocio. Las titulaciones no han tenido en consideración los antiguos derechos posesorios de campesinos e indígenas y entonces se han producido confrontaciones y denuncias por usurpación de tierras, en algunos casos violentas (Barbetta *et al*, 2009, pp. 190-201).¹³ Además, los megaproyectos mineros, sus requerimientos de agua, tierra y la contaminación ambiental derivada de las nuevas tecnologías han confinado a los antiguos pobladores a una disminución cuantitativa y cualitativa de sus territorios. Con relación a este proceso algunos autores hablan de “pampeanización” de la Argentina, en el sentido en que el espacio sojero pampeano ha avanzado más allá de sus propias fronteras (Norte de Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Formosa, etc.), en una dinámica territorial que va despojando o arrinconando a los pueblos indígenas y campesinos (Castillo, 2013, p.125).

La resistencia ha sido impulsada por actores preexistentes al agronegocio, como el Movimiento Agrario Misionero (MAM), han surgido también nuevas entidades, de variadas formas organizacionales, como el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), la Red Puna, a la que se sumaba a mediados de la década de 1990 el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Trabajadores sin Tierra (UST) de Mendoza, el Encuentro Calchaquí de la zona de los Valles de Salta, entre otras. En las estrategias de defensa del territorio campesino ha participado activamente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Una cuestión central en la agenda de este tipo de entidades es la lucha por generar procedimientos legales de titulación de tierras indígenas (Hocsman, 2014, pp. 50-53).

13 A partir de la reforma constitucional de 1994, se estableció el derecho a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígenas, al considerar su preexistencia al Estado nacional (Hocsman, 2014).

En esta multiplicidad de asociaciones, algunas se autodenominan como autogestivas, en el sentido en que enarbolan consignas de autonomía y horizontalidad en sus formas organizativas internas, otras han contado con el apoyo económico de organizaciones no gubernamentales.¹⁴ Surgió también una línea de organizaciones que luchan contra la contaminación y los efectos que los agrotóxicos tienen sobre la salud humana y el ambiente, que construyen el sujeto de “afectados ambientales”, como por ejemplo Madres del Barrio Ituziangó, Movimiento Paren de fumigar, Movimiento de Médicos de Pueblos Fumigados, la que no tiene forzosamente una base social rural, pero sí una clara postura crítica frente al agronegocio por sus consecuencias ambientales y sobre la salud humana (Barri, 2013).

Estas organizaciones de base local se van articulando a los movimientos campesinos o indígenas nacionales y latinoamericanos como el Movimiento Nacional Indígena (MNCI), la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y a la Vía Campesina. Por su parte, las organizaciones locales que protestaban contra la contaminación ambiental y el uso de agrotóxicos en el agronegocio se han vinculado a agrupaciones mayores, como el Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe, un movimiento plural y diverso de experiencias de desarrollo, investigación, formación y promoción que congrega a más de 85 instituciones de agricultores, campesinos, ONG, universidades, comunidades indígenas, sin tierra, mujeres y jóvenes rurales desde una perspectiva agroecológica (Latuada, 2013, p. 54).

En el entramado entre organizaciones campesinas e indígenas locales con universidades y profesionales locales se fueron constituyendo espacios para la reflexión, el debate y la producción de ideas críticas a los lineamientos del agronegocio. Los alineamientos con

14 Estas entidades en general cuentan con financiamiento de fundaciones u otras organizaciones internacionales.

otras entidades nacionales y latinoamericanas han contribuido de manera sustantiva al intercambio de ideas y experiencias. Pese a la heterogeneidad de ideas, actores y discursividades señalamos que existe un sustrato ideológico común, en el sentido en que hay una postulación colectiva con elementos afines y convergentes en los modos de comprender, interpretar, actuar sobre la sociedad, la economía, la política, la ciencia y la tecnología. Pensamos que esta cuestión nos habilita a plantear la existencia de una vertiente que resiste al agronegocio desde la década de 1990.

No existe una idea única de desarrollo “alternativo”, “post-desarrollo” o desarrollo “contra-hegemónico”, sino diversos conceptos, vinculados a diferentes experiencias teóricas y/o históricas, tales como la noción de soberanía alimentaria -que connota la producción de alimentos según las necesidades de la población y no la acumulación de capital-¹⁵la biodiversidad como idea opuesta a la sobreexplotación de recursos naturales, el buen vivir -referido a la ampliación y mejoramiento en la calidad del consumo popular- el Estado Plurinacional que incluye al indigenismo. Estas ideas apuntan a garantizar la diversidad productiva y el abastecimiento de los mercados locales(Svampa, 2012, pp.17-58).

Esta vertiente de pensamiento caracteriza al actual modelo agrario como “extractivista” o “neoextractivista”, el que se refiere a un patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de los recursos naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como a la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos o con fuerte presencia campesina e indígena. El neoextractivismo se basa en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y

15 “derechos de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo....por encima de los mercados y las empresas.” (Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria. 2001)

petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos agrarios (maíz, soja y trigo) y biocombustibles. Otra característica es que se trata de megaemprendimientos, de tipo capital-intensivos y no trabajo-intensivos, que son llevados adelante en general, por grandes corporaciones (Giarraca&Teubal, 2013).

Desde la perspectiva de Svampa (2012, pp. 17-58), el modelo extractivista es producto de relaciones internacionales de carácter eminentemente político. Se hizo realidad porque el Consenso de Washington (1995) logró reforzar reglas de juego asimétricas entre los países latinoamericanos y la geopolítica mundial, tanto en los planos políticos como ambientales, los que, entre otras cuestiones, garantizaron la seguridad jurídica al gran capital transnacional. Propiciaron y apuntalaron procesos de desregulación estatal y privatizaciones, es decir, políticas de claro sesgo neoliberal. Estas macropolíticas inauguraron un “cambio de época” que sentaron las bases y las condiciones de posibilidad para que en el modelo de acumulación cobrara centralidad el “Consenso de Commodities, con inflexión extractivista”, basado en la intensificación en la exportación de bienes primarios, es decir en una economía externamente inducida desde los países centrales y las potencias internacionales que condujo a una “reprimarización” de las economías latinoamericanas.

Esta vertiente plantea que el agronegocio presenta una determinada dinámica territorial cuya tendencia es a la ocupación intensiva del territorio, a través de formas ligadas al monocultivo o monoproducción, entre cuyas consecuencias se halla el desplazamiento de otras formas de producción (economías locales/regionales). Consideran que el avance sobre el territorio combina, en gran parte de los casos, la dinámica del enclave o de la fragmentación territorial (escasa producción de encadenamientos endógenos relevantes, que favorezcan un modelo de integración territorial y regional), dislocación de las economías locales tradicionales (Svampa, 2012, pp.25-58). Según esta visión, la dinámica territorial del agronegocio tiene como consecuencias desplazamientos de trabajadores, campesinos e indígenas por el

alto consumo de recursos no renovables como agua, tierra, minerales, etc. que utilizan estos megaemprendimientos, los que atentan contra la biodiversidad e impiden la reproducción endógena y de recursos de vida, mientras garantizan ganancias extraordinarias para las empresas multinacionales y rentas diferenciales a escala mundial, cuestión que –afirman- se expresa entre otros aspectos, en la deforestación y el deterioro ambiental (Giarraca, 2011, pp. 330-335).

Conclusiones

Durante la década de 1990 observamos una miríada de asociaciones agrarias: gremiales, técnicas, preexistentes, nuevas, de existencia efímera o de presencia más estable, con bases sociales en diferentes capas de empresarios rurales, productores familiares, campesinos e indígenas, que se articulaban a entidades nacionales, internacionales, que se posicionaban apuntalando o resistiendo al agronegocio.

El conjunto de las organizaciones han apelado a mecanismos de negociación con el Estado o a la acción directa en diversas coyunturas. No obstante, ha prevalecido la confrontación a las políticas estatales neoliberales. Las formas más importantes de confrontación de las organizaciones frente al Estado han sido los paros agrarios, los cortes de ruta, las marchas, las asambleas, etc.

El contenido de las demandas esgrimidas frente al Estado presentaba variaciones sustantivas. Las principales reivindicaciones de los gremios que nucleaban a empresarios rurales y a la agricultura familiar más capitalizada han sido la reducción de impuestos, mayores facilidades para acceder al crédito bancario, refinanciación de pasivos, reintegros para las economías regionales, eximición de deudas previsionales, durante el período de vigencia de la convertibilidad, sin cuestionar a este régimen monetario. Con la devaluación la protesta ruralista continuó, pero su contenido varió y cobraron importancia

las demandas referidas al tipo de cambio y la baja de las retenciones. En el caso de los pequeños productores que habían adoptado el “paquete tecnológico” la problemática se centró en el endeudamiento, en detener la ejecución, los remates de tierras y el refinanciamiento de las deudas en el sistema bancario. Esta problemática se tornó menos crítica con la devaluación, ya que algunas explotaciones lograron refinanciar o condonar sus deudas.

El accionar de AACREA y AAPRESID se basaba en el trabajo y la experimentación empírica con grupos reducidos de productores locales, en la elaboración conjunta de planes de trabajo que tendieran a transformar a la empresa rural tradicional en una empresa-red integrada horizontal y verticalmente en una idea a transversalidad que incluía a la producción primaria, la industria, el comercio, la prestación de servicios y con particular énfasis, el management. Los lineamientos generales del “paradigma de la red” y aportaba sustento ideológico al conjunto de las organizaciones con base social en el empresariado rural y la agricultura familiar más capitalizada. Su accionar se basaba en el trabajo y la experimentación empírica con grupos reducidos de productores locales, en la elaboración conjunta de planes de trabajo que tendieran a transformar a la empresa rural tradicional en una empresa-red integrada horizontal y verticalmente en una idea a transversalidad que incluía a la producción primaria, la industria, el comercio, la prestación de servicios y con particular énfasis, el management. En esta vertiente existen postulaciones diversas y pero comunes en lo relativo a modos de comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, la economía, la política, la ciencia y la tecnología que nos remiten a una postura de apuntalamiento del agronegocio ya que incorpora los avances provistos por la biotecnología y la bioingeniería genética como la única vía de inserción exitosa de la agricultura en el mundo globalizado.

En el mismo campo de disputa política otras organizaciones con accionar disruptivo era llevada adelante por campesinos e indígenas, acompañados por organizaciones ambientalistas. Estos sujetos-a tra-

vés de la agregación de sus intereses en organizaciones nuevas o pre-existentes- han interpelado también al Estado por subsidios, créditos estatales, solicitudes de intervención estatal en la fijación de precios compensatorios a los costos de la producción de materias primas. Las reivindicaciones de protección del ambiente, la salud humana y la lucha por la tierra -que fue cobrando centralidad- constituyen posicionamientos y densidades ideológicas que interpelan de manera frontal al modelo agrario vigente. Esta resistencia contrahegemónica se nutre de conceptualizaciones tales como la soberanía alimentaria, la biodiversidad, el enfoque indigenista, las teorías sobre la descolonización, etc.

El mayor aporte de este estudio es visualizar cómo la acción colectiva –aun siendo disruptiva-puede o no interpelar el sentido de las prácticas, las visiones de los actores, las políticas públicas y del mismo modelo hegemónico en el agro.

Referencias bibliográficas

- Abramovay, R. (1998). *Paradigmas do capitalismo agrário em questao*. San Pablo: Editora de Unicampo.
- Barbetta, P. et al. (2009). “Argentina”, en Giarraca, N. & Teubal, M. (Eds). *La tierra es nuestra, tuya y de aquel....Las disputas por el territorio en A. Latina*. Buenos Aires: editorial Antropofagia.
- Barri, F. (2013). “Resistencia comunitaria de los pueblos fumigados en Argentina”, en Giarraca, N. y Teubal, M (Eds). *Actividades extractivas en expansión ¿Reprimarización de la economía argentina?* Buenos Aires: Antropofagia.
- Barsky, O. y Dávila, M. (2008). *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Basualdo, E. (2010). *Estudios de Historia económica argentina. Desde mediados del s. XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Basualdo, E. & Aspiazu, D. (2002). *El proceso de privatización en Argentina. La renegociación con las empresas privatizadas: revisión contractual, supresión de privilegios y de rentas extraordinarias*. Buenos Aires: FLACSO-Argentina.

- Cantamutto, F. (2015). Construcción de hegemonía y Estado: algunas bases teóricas. *Estudios sociales del Estado*, I (1).
- Carini, G. & Olivera, G. (2015). Agricultura empresarial, estrategias productivas e institucionales en Córdoba, Argentina (1990-2002). *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, XIX (2).
- Carini, G. (2017). *Discursos, prácticas y estrategias en mutación. La sociedad rural de Río Cuarto en el marco del nuevo régimen social de acumulación de los noventa*. Tesis de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Carini, G. & Olivera, G. (2016). “Derechos, peticiones e intereses en un entramado regional: las asociaciones rurales del sur de Córdoba durante la década de 1990”, en Souza Coelho, A.; Basconzuelo, C. & Quiroga, M. (Eds.). *Ação coletiva e territorialidade: dinâmicas, práticas, significados e abordagens*. Bahía: Universidad do Estado de Bahía.
- Castillo, P. (2013). Expansión regional del cultivo de soja en Argentina: ¿Pampeanización de las economías regionales?, en Martínez Dougnac, G. (comp). *De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Friedmann, H. (1981). *The family farm in advanced capitalism: outline of a theory of simple commodity production in agriculture*. Toronto: Toronto American Sociological Association.
- Foucault, M. (1970). *Arqueología del saber*. México: Siglo XXI.
- Gerchunoff, P. & Torre, J. (1996). La política de liberalización económica de la administración de Menem. *Desarrollo Económico*, XXXVI (143).
- Giarraca, N. (2011). El “desarrollo” en América Latina basado en la extracción de recursos naturales. *Informe de Derechos Humanos en Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Giarraca, N. & Teubal, M. (2013) (Coords.). *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* Buenos Aires: Antropofagia.
- Gras, C. (2009). “El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y los dilemas de sus organizaciones”, en Gras, C. & Hernández, V. (Coords). *La agricultura familiar. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos.

- Gras, C. & Hernández, V. (2009). “El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorural en Argentina”, en Gras, C. & Hernández, V. (Coords). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires:editorial Biblos.
- Gras, C. (2010). “Crisis y reconversiones en la agricultura familiar”, en Gras, C. y Bidaseca, K (Dir) *El mundo chacarero en tiempos de cambio. Herencia, territorio e identidad en tiempos de cambio*. Buenos Aires: Ciccus.
- Gras, C. & Hernández, V. Gras (2013a). “Los pilares del modelo de *agribusiness* y sus estilos empresariales”, en Gras, C. & Hernández, V. (Coords). *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización*. Buenos Aires: Biblos.
- Gras, C. & Hernández, V. (2013b) “Asociatividad del empresario agrícola en Argentina. AACREA y APRESID en perspectiva2, en Muzlera, J. y Salomón, A. (Coord). *Sujetos sociales del agro argentino. Configuraciones históricas y procesos de cambio*. Rosario: Prohistoria.
- Hernández, V. (2009) “La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pampas gringas”, en Hernández, H y Gras, C (Coords). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos.
- Hocsman, L. (2014). “Capital y producción agropecuaria: despojos y resistencias en Argentina”, en Bórquez, A., Méndez Pereyra & Porto-Gonzales (Eds.). *Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012)*. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana-Ediciones Continente.
- Lattuada, M. (2001). Articulación de intereses y movimientos sociales en Argentina. El caso del movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. (MMAL). *Revista Internacional de Sociología*, tercera época, 30.
- Lattuada, M. & Renold, J. (2004). *El cooperativismo agrario ante la globalización*. Argentina: Siglo XXI.
- Lattuada, M. (2003). “Transformaciones institucionales en las corporaciones agrarias a fines del s. XX. El caso de la Federación Agraria”, en Bendini, M. *et al* (Eds). *El campo de la sociología actual: una perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: La Colmena.

- Lattuada, M. (2006) *Acción colectivas y corporaciones agrarias en Argentina. Transformaciones institucionales de fines del siglo XX*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Lattuada, M. (2013). “Transformaciones en el asociativismo rural. Estrategias de resistencia y adaptación ante cambios de contextos económicos y políticos”, en Gasselin, P.& Cloquell, S.& Mosciaro, M (Eds). *Adaptación y transformaciones de las agriculturas pampeanas a inicios del s XXI*. Buenos Aires: CICCUS.
- Lattuada, M. (2016). “Las formaciones económicas precooperativas de la agricultura familiar”, en Bageneta, J.& de Arce & A. Mateo, G (Comps). *Entre la economía social y el mercado. Reflexiones para un debate abierto en el agro latinoamericano*. Buenos Aires: Intercoop Editora Cooperativa Ltda.
- Liaudat, M. (2015). La construcción hegemónica de las entidades técnicas en el agro argentino: análisis de los discursos de AAPRESID y AACREA en la última década (sin paginar). *Mundo Agrario. Revista de estudios rurales*, XVI (32).
- Murmis, M. (1998). “Agro argentino. Algunos problemas para su análisis”, en Giarraca, N. & Cloquell, S. (Eds.). *Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales*. Buenos Aires: La Colmena. Muzlera, Miguel (2009). *Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la pampa gringa*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Odonnell, G. (1978). Notas para el estudio de la burguesía local, con especial referencia a vinculaciones con el capital transnacional y el aparato estatal. *Estudios Sociales CEDES*, n° 12.
- Pucciarelli, A. (2001). El régimen político de las democracias excluyentes. El caso de la República Argentina. *Revista Sociohistórica* 9/10.
- Schuster, F. et al (2006). Transformaciones en la protesta social en Argentina (1989-2003). *Documentos de trabajo* 48. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
- Scribano, A. (2003). Reflexiones sobre una estrategia metodológica para el análisis de las protestas sociales. *Sociologías* V (9).
- Svampa, M. (2012). “Pensar el desarrollo en América Latina”, en Massuh, G. (Ed). *Renunciar al Bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Mardulce Editora.

...La confrontación no siempre es resistencia al agronegocio...

Teubal, M. *et al.* (2005). “Transformaciones agrarias en Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario”, en Giarraca, N. & Teubal, E. (Eds). *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*. Buenos Aires: Alianza Editorial.

Entre la confrontación y la profesionalización: estrategias de legitimación del agronegocio *

Gabriel Fernando Carini

Introducción

La configuración de un nuevo paradigma productivo colocó en el centro de la escena a entidades agrarias centradas en cuestiones no reivindicativas,² muchas de las cuales habían sido creadas en el con-

* Una versión revisada de este capítulo fue publicada en *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, n° 40. [Centro de Investigaciones Socio Históricas, IdIHCS-UNLP/CONICET](#), La Plata, 2017.

2 Lattuada (2006), retomando una categorización de Moyano Estrada (1991) para el caso español, ha propuesto la presencia de dos tipos ideales de organizaciones en el agro pampeano: reivindicativas y no reivindicativas. A pesar de que ambas actúan como actores colectivos en los procesos de intermediación social se diferencian según la amplitud de objetivos que persiguen, los valores que poseen sus dirigentes y cómo los trasladan a sus discursos así como por la función que asumen respecto de su base social. Las primeras se caracterizan por tener como objetivo fundamental la defensa integral de (todos) los intereses de un determinado colectivo, ser universalista en la naturaleza de los fines que persiguen y en la actividad que desarrollan y tener un discurso con un fuerte componente ideológico, construido en función de los valores que asumen sus dirigentes y de las formas en que éstos interpretan los problemas de su base social. En tanto que las asociaciones agrarias no reivindicativas se caracterizan por la defensa de intereses no integrales de sus asociados (en general, aunque no exclusivamente, intereses de naturaleza económica), lo que implica que orientan sus acciones hacia una lista cerrada de temas o cuestiones, sus acciones presentan una naturaleza no universalista (exclusivista) y su

texto de la modernización agrícola de la década de 1960. Esto planteó la emergencia de una nueva institucionalidad, especialmente en la región pampeana, de carácter innovador, dotada de un perfil diferencial respecto al de las asociaciones tradicionales –como Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) o Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)– que promovió novedosas maneras de operar colectivamente dentro del aparato productivo, mediante asociaciones organizadas en torno a modernas tecnologías, rubros específicos de producción y, eventualmente, nuevos modelos productivos (Flood, 2005; Lattuada, 2006; Gras y Hernández, 2009 y 2013). Estas entidades se caracterizaron por poseer estilos de liderazgos con un alto grado de profesionalidad y con capacidad de gestión frente a los cambios que se producían cuestión que resultó funcional a los desarrollos innovativos (Bocchicchio y Cattáneo, 2005; Alapin, 2008; Gras y Hernández, 2013). Asimismo, estas entidades introdujeron un nuevo lenguaje y enfoques diferentes para definir el papel del sector agropecuario en la economía nacional, que puede observarse mediatizado en un ‘discurso tecnologizante’ centrado en la consideración de que el avance tecnológico es el elemento vital para el agro, realizando una apelación al productor para que asuma una ‘mentalidad empresarial’, centrada en el conocimiento (Balsa, 2007, pp. 153-154).

La presencia de estas entidades en el mapa asociativo del agro nacional planteó visiones diversas sobre su incidencia en las lógicas institucionales de las entidades tradicionales o de tipo reivindicativo y la situación de sus asociados.³ Para Gras (2009, p. 231), por una parte, las nuevas asociaciones no entraron en una competencia por las bases

discurso no es necesariamente ideológico, en el sentido de que no intenta ser una determinada visión del mundo ni una forma de interpretar los problemas generales de su base social (real y potencial), sino que es un discurso pragmático acotado no a valores, sino a un fin específico.

3 Un estado de la cuestión exhaustivo sobre la emergencia de la nueva institucionalidad agraria y su implicancia sobre las dinámicas institucionales de las asociaciones tradicionales puede encontrarse en Carini (2017).

sociales puesto que podría pensarse –según la autora– en una suerte de ‘división del trabajo’ que implicaría para las primeras ‘concentrarse’ en un ámbito específico, el de lo técnico, reforzando así su lugar de entidad especializada e impulsando a sus asociados integrarse a las de tipo ‘gremial’ que son las que se concentran en la ‘defensa’ del sector ante –por ejemplo– los efectos de las políticas económicas. Por otra parte, para Lattuada (2003 y 2006), estas nuevas asociaciones habrían llevado a replantear la estructura interna y las estrategias de las asociaciones reivindicativas –como por ejemplo, incorporando una mayor oferta de servicios sumados a su tradicional función gremial– para ‘ganar posiciones’ frente a otras entidades que ‘disputan’ entre sí por las mismas bases sociales.

Con ese trasfondo, el objetivo del presente artículo es observar cómo una asociación tradicional, es decir, aquella que se caracterizaba por la función primordial la defensa, representación y reivindicación de los intereses de sus asociados elaboró –a partir de una transformación en las modalidades de interpelación de sus bases sociales– un nuevo horizonte discursivo tendiente a justificar saberes y prácticas vinculados al modelo productivo en ciernes, el agronegocio. Puntualmente, nos interesa indagar los discursos que estructuraron las asociaciones de productores tradicionales a los fines de facilitar la apropiación de las lógicas involucradas en el agronegocio y las tensiones o desplazamientos que en ese proceso se operaron en las formas históricas de comunicación con sus asociados. Para ello tomaremos como objeto de análisis la discursividad mediatizada en la prensa generada por la dirigencia rural de la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC).⁴

4 Entidad de primer grado nacida en 1938, como efecto del accionar de la Agrupación de Accionistas Ley 11.747. Región Sud de Córdoba, la que entendía que había agotado los fines para los cuales había sido constituida y, por ende, era necesario profundizar la agremiación en otra entidad. Se encontraba adherida a Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y, por su intermedio, a la CRA. La SRRC nuclea a medianos y grandes productores, especialmente dedicados a la producción agrícola mixta, con un marcado predominio de la ganadera así como actividades vinculadas a la

Partimos de la idea de que en el contexto de predominio del agronegocio, la SRRC elaboró, a partir de las intervenciones públicas de su dirigencia en la prensa, un nuevo sentido sobre lo que consideraban las modalidades más adecuadas de abordar los procesos productivos. Los lugares comunes de ese nuevo discurso fueron reactualizados por los dirigentes riocuartenses y proporcionaron su propia justificación del agronegocio. La incorporación de enunciados, términos y frases de tono tecnologizante se sumaron –de forma más o menos conflictiva– a la matriz discursiva liberal-conservadora que históricamente había sostenido la entidad. Sostenemos que estas intervenciones de los dirigentes ruralistas conformaron un modo peculiar de adecuar sus discursos a los ‘nuevos tiempos’, construyendo explicaciones plausibles de las transformaciones estructurales que debieron afrontar sus bases sociales durante la década de 1990. A su vez, el empleo de estos tópicos tecnologizantes constituía un llamado a sus asociados para que profesionalizaran sus prácticas agropecuarias, asumiendo pautas de comportamiento ligadas a una racionalidad empresaria.⁵

genética animal en cabañas. En cuanto al perfil social de sus asociados, la institución agrupaba mayoritariamente a profesionales (especialmente abogados, ingenieros agrónomos y médicos veterinarios), que poseían cierta diversificación de sus actividades (en muchos casos asociadas con la venta de servicios y productos agrícolas) y estaban ligados al poder político, especialmente al provincial y nacional. En cuanto los discursos que históricamente sostuvo se pueden inscribir en una matriz de tipo liberal-conservadora asociada a la defensa de la propiedad de la tierra, la no intervención del Estado en los negocios privados (Carini, 2014; 2014a y 2015).

- 5 Sobre esa base, consideramos a la columna institucional como instrumento de legitimación que posee la facultad de producir y fijar legitimidades, es decir, de justificar prácticas y maneras de ver (Angenot, 2010). Al mismo tiempo, estas prácticas discursivas poseen una alta performatividad, es decir, capacidad para inducir cambios en las prácticas de los sujetos. Las construcciones simbólicas sobre la realidad agraria en su columna institucional son caracterizadas y analizadas a partir de la inscripción en lo que Balsa (2007, 2012 y 2013) ha identificado como las tres formaciones discursivas dominantes en los discursos públicos de las asociaciones agrarias. Al retomar el concepto de formación discursiva de Foucault (1968) la construcción de la tipología se asienta sobre la reiteración de enunciados, el empleo de ciertos términos y expresiones clave que le otorgan y construyen un sentido determinado sobre la cuestión agraria. En este sentido, se destacan las modalidades de interpelación y la construcción de los destinatarios del discurso, las representaciones sobre el Estado y su rol en la economía, la cuestión tributaria y la propie-

A los fines de dar cuenta de lo planteado, apelaremos a la información contenida en periódicos y suplementos especializados circulantes a nivel regional, centrándonos en la columna institucional de la SRRC. El análisis de estas fuentes es relevante, puesto que los mismos son un medio habitual de ‘mediatización de la ruralidad’ a la par que se erigen como un espacio simbólico que supone la re-producción de las representaciones de los sectores agrarios (Carniglia, 2011). Estos soportes constituyen selecciones de datos de la ‘realidad’, que se organizan de determinada manera para decir, hacer entender y dar a conocer (Carreras Doallo, 2012) y, por lo tanto, son un elemento privilegiado para el análisis de las estrategias de los actores agrarios que contribuyeron a internalizar los imperativos del nuevo modelo productivo. A pesar del creciente interés que se registra en el ámbito de las ciencias sociales por desentrañar los diversos aspectos implicados en los proyectos editoriales,⁶el análisis de los soportes que abordan temáticas agrarias continúa escasamente explorado. No obstante, esto no quiere decir que se desconozca el ‘valor’ heurístico de estas publicaciones. De hecho, son empleadas habitualmente como fuentes primarias que

dad de la tierra. Cabe destacar que –si bien se encuentra implícito en el planteo de Balsa (2007, 2012 y 2013) y en el concepto propuesto por Foucault (1968)– estas formaciones discursivas poseen historicidad y pueden adquirir preponderancia unas frente a otras en determinadas coyunturas históricas. Esta cuestión reviste un interés central para nuestra investigación puesto que nos permite identificar cambios y continuidades en las formas históricas tanto de interpelar a las bases sociales de la entidad como de interpretar los problemas sectoriales.

- 6 En la actualidad se evidencia un creciente interés por indagar los diversos aspectos implicados en las empresas editoriales de diferentes temporalidades donde resultan capitales los aportes de la antropología, la literatura y la historia de las ideas. Ocuparon un lugar privilegiado en ese campo el estudio de los proyectos editoriales impulsados por revistas culturales, el análisis de la recepción y circulación de ideas, y los públicos consumidores. También se han emprendido trabajos que abordaron las empresas editoriales o bien se enfocaron en estudiar los diarios de mayor circulación nacional. Realizar un estado de la cuestión sobre esta temática excede los límites de esta tesis. Solo queremos mencionar algunos de los trabajos que contribuyeron a abrir estos interrogantes para la historia argentina del siglo XX, abordado textualidades específicas o que han planteado minuciosas síntesis y/o balances: Sidicaro (1993), Saïtta (1998), Eujanian (1999), Girbal-Blacha y Quatrochi (1999), Ulanovsky (2005), Da Orden y Melón Pirro (2007), Lobato (2009), Lida (2012), entre otros.

permiten obtener datos significativos para reconstruir los entramados en los que se ven involucrados los actores agrarios.⁷ A pesar de esto, existen valiosos antecedentes que para diferentes temporalidades han trabajado tanto respecto de las representaciones que sobre diversas cuestiones agrarias fueron plasmadas en revistas especializadas como en relación con el tratamiento periodístico que recibieron ciertas problemáticas, como los instrumentos impositivos que gravaron la tierra, la incorporación de tecnología en los procesos productivos, el lugar de la mujer en el campo y la familia rural, entre otras cuestiones (Gutiérrez, 2002, 2004 y 2005; De Arce, 2009 y 2011; Carniglia, 2011). En ese marco, fueron menos transitadas tanto las prácticas editoriales de las asociaciones de productores como los temas y problemas contenidos en sus páginas. Una excepción a esta situación lo constituyen los trabajos de Poggi (2011a y 2011b) donde se analizan las representaciones construidas por la SRA y FAA sobre la cuestión de la reforma agraria desde sus publicaciones. No obstante, estos trabajos nos habilitan a establecer puntos de contraste y comparaciones y, fundamentalmente, a observar la construcción histórica de los discursos que sobre el agro circularon en determinados momentos históricos.

“Cada día más empresarios”: la construcción de un nuevo horizonte discursivo

Desde fines de la década de 1980 la SRRC emprendió un conjunto de acciones que redefinieron su tradicional función gremial. Estas actividades consistieron en dotar a su estructura institucional de una amplia serie de servicios entre los que se destacaron la creación de rondas de negocios, la firma de convenios con empresas proveedoras de insumos y la estructuración de múltiples actividades de capacita-

7 Algunas reflexiones sobre estos tópicos pueden consultarse en Carreras Doallo (2012).

ción y actualización empresarial. Paralelamente, la dirigencia agraria introdujo una serie de cambios institucionales a partir de los cuales motorizó esas acciones, por ejemplo: se crearon delegaciones zonales en localidades aledañas, se constituyeron cámaras dentro de la entidad que tenían como función principal la de asesor en aspectos puntuales a la comisión directiva, se re-fundó el Ateneo Juvenil, etc.⁸ Como contrapartida se pudo observar que las formas discursivas de interpelación que la dirigencia ruralista históricamente empleó se combinaron con otras tendientes a estimular el cambio en pautas y comportamiento empresario de sus bases sociales.

Teniendo en cuenta lo enunciado, en este apartado exploraremos dos de esas modalidades desde las que se construyó un nuevo horizonte discursivo en consonancia con las coordenadas que el nuevo paradigma productivo le otorgaba centralidad. Por un lado, examinaremos los sentidos que asumió la idea de reconversión productiva en la discursividad generada por la dirigencia de la SRRC. Aquí procuraremos mostrar si se generaron tensiones en los principios y valores que tradicionalmente habían caracterizado a la entidad con la incorporación de tópicos asociados a una matriz de tipo tecnologizante (Balsa, 2007). Por otro lado, analizaremos las dimensiones que asumió la construcción de una estrategia de difusión del nuevo imaginario productivo. Frente a la intensidad que revistieron las acciones de oferta de servicios, capacitación y actualización de las bases sociales, la SRRC dispuso parte de su esfuerzo institucional en la publicación de una columna editorial en el suplemento agropecuario del diario local. A partir de esta estrategia de mediatización de las acciones institucionales se evidenciaron y cristalizaron operaciones discursivas tendientes a fijar la legitimidad de una nueva concepción de la actividad agropecuaria. Fue en ese proceso quedaron expuestos –discursivamente– algunos de los desplazamientos y rupturas más característicos del agronegocio.

8 Por razones de espacio no podemos ahondar en esta dimensión de análisis. Una primera aproximación la ofrecimos en Carini (2014a).

“La reconversión, divino tesoro”:⁹ una nueva forma de interpe-
lación de las bases sociales de la SRRC

Durante la década de 1990 emergía como enunciado operativo la ‘reconversión’ para explicar los procesos de transformación de los sujetos agrarios y de sus prácticas. Este era un término que atravesaba las interpretaciones de la totalidad del sector y era comúnmente utilizado tanto por los agentes de la SAGyP como por los dirigentes de las entidades rurales. Para los primeros, suponía parte del diagrama de una política agropecuaria destinada a aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector.¹⁰ En tanto que, para los segundos, el término remitía, además, a la necesidad de asumir una actitud más empresaria en la gestión de los procesos productivos. Ambos usos proponen pautas y modelos de comportamiento en cierta medida comunes pero, en el caso de los productores agropecuarios riocuartenses, se iría redefiniendo su sentido a partir de la dinámica económica y política de determinadas coyunturas. Por ejemplo, pudimos observar cómo la idea de reconversión era empleada en el momento de emergencia y de consolidación nuevo régimen de acumulación para reclamar al Estado la habilitación de líneas de crédito que la hicieran posible la reproducción de las unidades productivas en un contexto de declive de los precios internacionales. Asimismo, desde mediados de la década de 1990 la reconversión fue esgrimida como crítica a los partidos políticos y a los políticos para marcar la necesidad de que estos acto-

9 Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto (AHMRC), Hemeroteca (H), Puntal (P), lunes 02/01/1995, p. 31.

10 Ver por ejemplo las declaraciones de Felipe Solá, responsable de la cartera durante el período 1989-1998. Discursos más extremos fueron esgrimidos, por ejemplo, por el ing. Jorge Antonio Ingaramo para quien “En la Argentina deben desaparecer 200.000 productores agropecuarios por ineficientes”. Bajo el enunciado de la reconversión, por ejemplo, se estructuraron desde el gobierno nacional un conjunto de programas para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias en el proceso de adecuación a la nueva realidad económica.

res debían cambiar sus prácticas tal como lo hicieron los productores agropecuarios.¹¹

Siguiendo esta cuestión, aquí nos interesa observar qué sentidos, trasladados al plano productivo, asumió la noción de reconversión en los discursos de la dirigencia de la SRRC. Hay en el discurso generado por los directivos de la entidad la construcción de la ‘reconversión’ como un imperativo, es decir, como una condición *sine qua non* que posibilita la salida del ‘estancamiento’ por el que atravesaba el sector a inicios de la década de 1990: “La necesidad de reconvertir es impostergable. La importancia deriva de la crisis de rentabilidad que vive el sector; la urgencia, dado los serios peligros de continuar como hasta ahora”(AHMRC, H, P, sábado 04/09/1993, p. 2-3).¹² Esa transformación no solo es inevitable sino que es, al mismo tiempo, una operación radical, puesto que conlleva asumir la obsolescencia de saberes que habían caracterizado los procesos productivos por décadas y constituían un capital social que se transmitía de generación en generación: el oficio de productor agropecuario (Hernández, 2009; Muzlera, 2009). Así quedaba implícito en el discurso de otro de los dirigentes:

“Lo que queda claro es la necesidad de cambiar las empresas agropecuarias, de mejorarlas, como está ocurriendo con todas las empresas argentinas. Ello obliga, primero, a un propio cambio de mentalidad. Supone admitir que lo que fue válido en el pasado puede dejar de serlo hoy. Esto cambia radicalmente el modo de pensar y actuar”(AHMRC, H, TA, viernes 21/01/1994, p. 2-3).

11 Remitimos a Carini (2014 y 2014a) donde abordamos con mayor profundidad esta cuestión.

12 Ver también: AHMRC, H, P, domingo 16/01/1994, p. 28.

En ese contexto, la ‘reconversión’ no suponía alterar la estructura de la distribución de la tierra que había caracterizado a la región, es decir, trabajar con mayores cantidades de superficie en propiedad en desmedro de las unidades productivas más pequeñas; ni un suplantarse una producción por otra sino intensificar, por ejemplo, el uso de insumos industriales (AHMRC, H, P, sábado 04/09/1993, p. 2-3). El desafío consistía, para la dirigencia de la entidad, en elevar la productividad y rentabilidad de la producción, esto se podía lograr por medio de la conjunción de diversas alternativas. La primera, apelando a diversas estrategias asociativas que permitieran reducir costos, mejorar posicionamientos en la comercialización e incrementar los ingresos de las unidades productivas. Así, la editorial de la entidad recomendaba: en primer lugar, el adelanto de compras de insumos en *block*, como semillas (agrícolas y forrajeras), agroquímicos, herbicidas e insecticidas, productos básicos para la elaboración de raciones balanceadas en el predio. La segunda sugerencia, consistía en apelar a la contratación conjunta de técnicos de las distintas áreas (agronomo, veterinario, economista, contador, administrador, etc.), de mano de obra especializada para solucionar algunos déficits transitorios o para trabajos que no justifican personal permanente, de trabajos de maquinaria especializada, como labranza cero, la henificación, las pulverizaciones agrícolas. Por último, una tercera alternativa, era asociarse y así facilitar el uso de la maquinaria existente, comprar maquinarias y equipos nuevos, utilizar equipos ya instalados como mangas y bretes, secadoras de granos, molidoras-mezcladoras, básculas, etc. También era una herramienta sugerida para realizar trabajos de tercerización de tareas agrícolas y forrajeras; para recibir capacitación en áreas que no son contempladas habitualmente como la de manejo financiero y de comercialización; y para aumentar el valor agregado de la producción, comercializando productos directamente al consumidor (AHMRC, H, P, sábado 04/09/1993, p. 2-3).

El segundo elemento partía de considerar la estructura de costos fijos de las unidades productivas – previa crítica a la ‘presión fiscal’

ejercida por el Estado¹³ – y ponía en acento en optimizar los recursos ya existentes en las unidades productivas y recurrir al asesoramiento técnico para hacer frente a los procesos productivos:

“La posibilidad de reducir los gastos tranqueras adentro están ligados a controlar los costos administrativos, lograr el ordenamiento financiero, perfeccionar el uso de la información, adoptar prácticas agrícolas probadas y aplicar asistencia técnica en todas las áreas que afectan al negocio. En definitiva, la reconversión productiva se produce esencialmente trabajando distinto sobre las cosas que tenemos y conocemos y solo una vez superados los problemas actuales de creación de nuevos mercados y facilidades de comercialización de la producción, intentar nuevas alternativas de producción”(AHMRC, H, P, sábado 04/09/1993, p. 2-3).

Sobre esta dimensión era, en definitiva, donde radicaba el ‘cambio de mentalidad’ que permitiría sobrellevar airoosamente un período de transformaciones estructurales para el agro. En una efusiva interpelación un dirigente de la SRRC se refería a la necesidad de emplear ‘decisiones estratégicas’ en la ‘gestión’ de las ahora devenidas ‘empresas agropecuarias’, donde la planificación, el cálculo y análisis de costos y, fundamentalmente, el asesoramiento financiero eran condiciones indispensables para el ‘negocio’:

“No son algo misterioso ni esotérico. Se saben, se conocen, otros sectores ya las aplican. Y una vez que se cuenta con las herramientas, hay que dar paso a la acción. Animarse a vencer la inercia. Empezar a analizar proyectos nuevos, con prudencia

13 Este era un argumento habitualmente presente en los discursos enunciados por la dirigencia en el acto inaugural de la feria de invierno y un componente central de la discursividad de tipo liberal-conservadora. Ver por ejemplo: AHMRC, H, P, domingo 10/09/1995, p. 24; AHMRC, H, P, domingo 01/09/1996, p. 25; AHMRC, H, P, domingo 14/09/1997, p. 24.

y sin atropellarse. Considerando todos los factores que intervienen, además de los productivos (financiación, comercialización, impuestos). No podemos seguir quedándonos en diagnósticos y análisis mientras las empresas se funden. No hay mucho más para analizar. Hay que dejar la deliberación impropia para pasar, con planes y prudencia, a la acción”(AHMRC, H, *TA*, viernes 21/01/1994, p. 2-3).

La construcción de estos enunciados que apelaban a romper con hábitos y formas de producir que históricamente los productores agropecuarios habían asumido sin cuestionamiento y que se sostenían en un conocimiento de lo agropecuario basado en una experiencia ancestral implicó, en términos de Hernández (2009), una verdadera ruptura congnitiva. Ahora bien, este proceso no se produjo sin fisuras o tensiones ni constituyó un discurso unívoco en el interior de la SRRC. Para muchos productores agropecuarios el impulso dado a la reconversión había implicado asumir significativas inversiones, fundamentalmente, destinada a la renovación de implementos y maquinaria agrícola. Muchos de estos gastos se habían afrontado asumiendo obligaciones crediticias (en instituciones financieras del sistema público y privado) que no pudieron ser canceladas. Esta problemática no parece haber afectado a la base social de la SRRC, puesto que no figura entre las principales reivindicaciones y demandas de la entidad como sí es central en el caso de la FAA.¹⁴ Sin embargo, parte de la dirigencia de la SRRC se mostraba crítica frente a los ‘esfuerzos’ que había significado la reconversión en términos de endeudamiento financiero producto de la carencia de una “clara política agropecuaria”(AHMRC, H, *P*, lunes 02/01/1995, p. 31).

Tal vez la crítica más vehemente provino del entonces presidente de CARTEZ y expresidente de la SRRC Eduardo Budd. En una editorial denominada “Reconversión, divino tesoro” el dirigente ruralista

14 Ver por ejemplo lo enunciado en Carini y Olivera (2016).

sancionaba la actitud de los funcionarios y ‘tecnócratas’ del gobierno nacional frente para quienes la reconversión constituía:

“(…) una nueva panacea y la solución mágica a todos los problemas que nos acosan (...) ¿Quién será entonces el iluminado que piensa que la reconversión puede poner fin a la crisis del campo? Sería interesante conocer qué es la reconversión en el sector agropecuario para estos funcionarios y tecnócratas que sin el más mínimo atisbo de sentido común llevan computadoras, con modelos y con números que en el papel dan bien y en el bolsillo mal (...) Que un ministro mande a los productores a ‘vivir al campo para ahorrar’ y un tecnócrata los saque ‘tranqueras afuera’ para hacer marketing no va, esto es desorden, desprolijidad y porque no decirlo ‘ignorancia’”(AHMRC, H, P, lunes 02/01/1995, p. 31).

Seguidamente esgrimía una crítica a la clase política que no ha podido ‘renovarse’ como si lo logró el ‘campo’, el cual “(…) se renueva constantemente y a lo largo de los años ha mejorado sus rendimientos en todos los subsectores. Hasta en algunos casos ha superado rindes internacionales con costes menores”(AHMRC, H, P, lunes 02/01/1995, p. 31). Como se desprende de este fragmento, el ‘campo’ en la perspectiva del dirigente ruralista era un sector que ya se había reconvertido y que necesitaba ‘señales’ por parte del gobierno nacional. Esas ‘señales’ consistían en los clásicos reclamos históricamente sostenidos por la entidad: generar una política agropecuaria con una actitud agresiva en la “búsqueda permanente de mercados” y la reducción de las cargas impositivas que no retornaran en obras y servicios para el sector(AHMRC, H, P, lunes 02/01/1995, p. 31).

A pesar del impulso institucional que se le otorgó a los procesos de profesionalización de los perfiles de las bases sociales de la SRRC (Carini, 2014a), realizados bajo las coordenadas del agronegocio, el discurso relativo a los mismos distó de constituir un relato monocorde. Las diferentes coyunturas resignificaron el contenido de

lo que para la dirigencia constituía la reconversión. De imperativo impostergable a panacea o solución mágica las nuevas formas de concebir la producción agropecuaria como negocio generaron tensiones en el plano discursivo entre los principios liberal-conservadores en los que históricamente la dirigencia de la entidad había cimentado sus interpretaciones de la realidad con los enunciados asociados a la matriz tecnologicizante que el contexto social y económico le otorgaba centralidad. Es decir, profesionalización, empresarialidad, tecnificación lejos de constituir un plasma que bañó todas las interpretaciones de la época fueron, en el plano discursivo, elementos que se incorporaron a veces conflictivamente a la discursividad de la entidad por lo que los enunciados, frases y expresiones asociados a la matriz discursiva liberal-conservadora continuaron siendo el recurso expresivo más frecuentemente utilizado para interpelar y movilizar a las bases sociales.

La prensa como instancia de profesionalización de las bases sociales y legitimación del agronegocio

Los vínculos entre prensa, agro y entidades gremiales fueron frecuentes y, por ende, poseen una dilatada historicidad. Muchas de las organizaciones rurales ‘nacionales’ estructuraron publicaciones destinadas a dar cuenta de las diferentes dimensiones vinculadas a su devenir institucional. Tal vez los ejemplos más conocidos sean los casos de *Anales* publicación de la SRA y el periódico *La Tierra* editado por la FAA.¹⁵ La SRRC también mostró inquietud por mediatizar su quehacer institucional. Fue a partir de la década de 1990 que se observó un esfuerzo sostenido en este sentido. Más precisamente, desde

15 No existen abordajes exhaustivos sobre estos proyectos editoriales. Una excepción lo constituyen los trabajos de Poggi (2011a y 2011b) que desde la teoría crítica del discurso ha explorado algunas de las dimensiones en torno a las representaciones de la reforma agraria en las publicaciones de la SRA y FAA durante la década de 1970.

el 29 de abril de 1994 y con una periodicidad semanal, se comenzó a publicar una columna institucional denominada *Información Ruralista*. Las motivaciones de esta iniciativa eran claras, así se lo reflejaba en la primera aparición: “Nuestra Sociedad Rural se ha comprometido brindar, a sus asociados y productores en general, una gama de servicios, que tienen que ver con su desenvolvimiento empresario y con su necesaria permanente actualización(AHMRC, H, SA, viernes 29/04/1994, p. 4). De esta manera, se emprende una actividad difusora no solo de las actividades institucionales de la SRRC sino de todo un conjunto de saberes y prácticas vinculados a una nueva concepción de agricultura. La lectura de *Información Ruralista* ofrecía a los productores, por ejemplo, información novedosa sobre las modificaciones en las obligaciones impositivas y previsionales, las nuevas líneas de créditos bancarios, las perspectivas para el comercio agropecuario, la política forestal, la vacunación y otras prácticas asociadas a la sanidad animal, recaudos para combatir plagas y malezas, los rendimientos de cosecha, la incorporación de tecnología de punta a los procesos productivos. La columna usualmente se puede ubicar en el género informativo. Sin embargo, ocupa un lugar relevante las notas del género de opinión, en especial, aquellas que se corresponden a editoriales y a análisis y/o comentarios.

Una de las particularidades que revistió esta empresa editorial fue que se incorporó como un espacio editorial dentro del *Suplemento Agropecuario Tranquera Abierta* del diario *Puntal*.¹⁶ Es decir, a diferencia de los casos anteriormente citados, la columna de la SRRC se

16 La edición del suplemento estuvo a cargo de quien al mismo tiempo se desempeñaba como jefe de prensa de la SRRC. Esta publicación circulaba los días viernes y presentó características bastante uniformes para el período que va entre mayo de 1995 y enero de 2002: su estructura o conjunto de secciones no varió y la cantidad de páginas osciló entre 8 y 12 de tamaño tabloide. Los promedios anuales por edición de la circulación neta pagada de los días viernes para el período considerado fueron de 6.197 ejemplares. Discriminado año por año del período 1994-2002 la edición neta pagada para los días viernes fue de: 1994: 5.039 ejemplares; 1995: 8.172 ejemplares; 1996: 7.211 ejemplares; 1997: 7.044 ejemplares; 1998: 6.635 ejemplares; 1999: 6.098 ejemplares; 2000: 5.062

dirigió no solo a los asociados sino también a otros productores agropecuarios y al público interesado en temáticas rurales. Se ha señalado que los periódicos y/o suplementos rurales se dirigen también a los actores de la ciudad, un ámbito siempre clave de la decisión sobre aspectos básicos del trabajo, los consumos y la vida rurales (Carniglia, 2011, p. 161). A esto cabe agregarle que, es en ese ámbito, el de la ciudad, donde se dirimen las políticas públicas que se destinan al sector. Entonces, esta inclusión le permitió a la dirigencia ruralista ampliar el alcance de sus intervenciones y pudo desde ese lugar sentar un ‘deber ser’ sobre la actividad agropecuaria.

En este sentido, consideramos que la columna *Información Ruralista* funcionó como una plataforma que no solo permitió a la entidad abrir un canal de comunicación con sus bases sociales y, de esa forma, retener, fortalecer y estrechar su acción gremial, sino que, al mismo tiempo, favoreció la profesionalización de las mismas al propiciar que adoptasen una ‘actitud más empresaria’. Simultáneamente, la edición de la columna operó como un vehículo que permitió una determinada construcción simbólica sobre lo rural. Así, los discursos e interpretaciones esgrimidas por la dirigencia de la SRRC constituyeron una de las formas de penetración y legitimación de las prácticas y saberes ligados al nuevo paradigma productivo.

Bajo esta concepción, en este apartado atenderemos al entramado simbólico que la entidad construyó respecto del agronegocio. Exploraremos dos dimensiones discursivas que marcan una ruptura respecto al modelo de desarrollo rural previo. La primera se vincula con la dinámica generada por el nuevo paradigma socio-productivo en relación con las lógicas territoriales y la presencia de nuevos actores en el paisaje agrario. La segunda hace referencia al conjunto de saberes y habilidades a partir de los cuales la SRRC construyó un

ejemplares; 2001: 5.520 ejemplares y 2002: 4.995 ejemplares. Datos proporcionados por el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC).

imaginario sobre el oficio del productor agropecuario y la actividad agropecuaria.

Las lógicas territoriales del agronegocio y los nuevos actores en la pampa riocuartense

Como lo mencionamos previamente, uno de los elementos más visibles que trajo aparejado la configuración del agronegocio fue la acentuación del proceso de agriculturización, el cual, generalmente, estuvo asociado a la expansión de la soja. Este fenómeno revistió en el espacio económico de Río Cuarto un crecimiento geométrico que si bien no alcanzó para desplazar completamente actividades productivas históricamente características de dicho espacio sí ocasionó múltiples consecuencias socio-territoriales.¹⁷ No obstante, la sojización (y sus implicancias) constituyeron un aspecto que preocupó a los empresarios nucleados en la SRRC. Entre estos factores, la inquietud de la dirigencia se asociaba a la conservación de las propiedades edafológicas de los suelos pero los señalamientos realizados no apuntaban a deslegitimar la vigencia del agronegocio sino que por el contrario se apelaba a una estrategia discursiva que apuntaba a una atenuación de los argumentos vertidos (Poggi, 2011). Es decir, se incorporaban en el discurso generado por la entidad para remarcar las características positivas que posee una determinada práctica o elemento a través de citas o referencias directas a estudios o a determinados agentes. En *Información Ruralista* se advertía sobre el peligro de la pérdida de las cualidades de los suelos producto de la intensidad que había asumido la agricultura y se esgrimía la necesidad de incorporar la siembra directa como paliativo de esa situación, cuestión que apoyada por medio

17 Remitimos a la lectura de Carini (2014a).

de un estudio del INTA. Desde la columna institucional se comentaba que:

“Hoy, esos suelos tienen menos de la mitad de la materia orgánica y de nitrógeno que cuando se comenzó con la agriculturización permanente. El círculo vicioso de la degradación de los suelos y el monocultivo no es fácil de interrumpir, porque juegan factores de tanto peso como la estructura minifundista de la zona y la rentabilidad de los campos. Más hoy en día, cuando muchos campos están siendo alquilados y explotados por terceros. Esta situación limita la adopción de prácticas que frenen la degradación de los suelos – como pueden ser las prácticas conservacionistas y la inclusión de cultivos con rastrojos voluminosos, como el maíz y mucho mejor si esos campos fueran de producción mixta. Hemos mencionado el INTA, organismo que ha hecho y sigue haciendo mucho por la conservación del suelo” (AHMRC, H, TA, viernes 04/07/97, p. 7).¹⁸

Asociado al proceso de agriculturización en la región en otras editoriales la entidad señalaba la preocupación por la situación de la ganadería, producción que históricamente había caracterizado a Río Cuarto y sobre la que se asentaba todo el entramado socio-económico de la región (Carini, 2014a). Se denunciaban los procesos de desplazamiento que estaba sufriendo dicha actividad respecto de la agricultura por la coyuntura favorable de precios internacionales que atravesaba ésta última. El panorama que se trazaba era “francamente negativo”, evidenciándose una disminución de la producción de carne hacia zonas marginales dentro del departamento de Río Cuarto, una caída en los niveles de preñez y, en virtud de esto, en la producción de terneros desmejorando así la calidad de esa producción. Seguidamente la editorial empleaba enunciaciones, expresiones y frases correspondientes a dos matrices discursivas diferentes. Por un lado, se cuestionaba la

18 Ver también: AHMRC, H, TA, viernes 13/06/97, p. 7.

“falta de previsibilidad de las autoridades” y, consecuentemente, de una política sectorial, reclamándose:

“(...) mejores condiciones para lograr esa mayor producción, como la implementación de líneas de créditos accesibles, con tasas razonables, que estén de acuerdo con la rentabilidad del sector. Por ahora, esto no solo no sucede así, sino que, por el contrario, los costos de esas empresas ganaderas aumentan día a día, desmejorando aún más su situación” (AHMRC, H, *TA*, viernes 04/10/96, p. 7).

Esta crítica formaba parte de la matriz discursiva de tipo liberal-conservadora que había caracterizado a la SRRC. Por otro lado, con esa discursividad comenzaban a percibirse enunciados que se pueden inscribir a una matriz tecnologizante. Los dirigentes de la entidad ponían de manifiesto que “(...) pese a todo los ganaderos perseveran y hacen esfuerzos para mejorar su producción, acudiendo a la implantación de pasturas adecuadas, con un manejo racional y sin descuidar su infraestructura e instalaciones” y recordaba que “La Cámara de Ganadería de esta Sociedad Rural brinda su servicio de asesoramiento y actualización técnica como contribución a ese mejoramiento productivo ¡Acérquese a nuestra sede!” (AHMRC, H, *TA*, viernes 04/10/96, p. 7).

Como ya lo dijimos, el llamado para que los productores se acercaran a la SRRC se vinculaba con la estructuración de estrategias de empresarialización de las bases sociales que la entidad llevaba a cabo desde fines de la década de 1980. Claramente se exponían estos lineamientos en una nueva columna institucional. Se pueden identificar en el desarrollo editorial – como en el caso anterior – la complementación de elementos de la matriz liberal-conservadora y de la tecnologizante. Por una parte, se da cuenta de la centralidad del sector agropecuario para el crecimiento de la economía nacional y regional:

“Las expectativas de siembra de granos gruesos: maíz, sorgo, girasol, soja, maní, etc. de acuerdo con estimaciones oficiales y privadas, son realmente alentadoras. Nuestro sector está nuevamente dispuesto a brindar su importante cuota, en favor de la economía regional y nacional, contribuyendo decididamente a la reactivación de nuestras comunidades. Los comercios del ramo venderán más semillas, más insumos, más herramientas de trabajo, más maquinaria agrícola, más de todo, poniendo de manifiesto la importante gravitación del sector agropecuario en el desenvolvimiento integral de pueblos y ciudades” (AHMRC, H, *TA*, viernes 27/09/96, p. 7).

Y, por otra parte, se argumentaba sobre la necesidad de asumir una mentalidad empresarial que implicaba recurrir al asesoramiento profesional en tanto aspectos productivos como administrativos y, fundamentalmente, a la incorporación de los avances en el ámbito de las tecnologías y los implementos agrícolas.

“Quizá la circunstancia sea nuevamente propicia, también, para reflotar algunas sugerencias: acudir, en la medida de las posibilidades, a la moderna tecnología, realizando una buena inversión, a favor de precios compensatorios de los cereales y oleaginosas. Utilizar buena semilla, realizar una adecuada implantación del cultivo elegido, seguir su evolución como corresponde, emplear maquinaria e implementos adecuados e ir pensando en la comercialización de esa producción que esperamos. ¡Hacerse cada día mejores empresarios! Acudir a los profesionales técnicos, a la asesoría contable y fundamentalmente A LAS ENTIDADES QUE LOS REPRESENTAN! Esta Sociedad Rural, a través de sus asesores, de sus cámaras adheridas, de convenios de integración, con organismos y otras entidades, está en la tarea de apoyar esa necesaria actualización de los productores ¡TENGAMOS EN CUENTA... ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN!” (AHMRC, H, *TA*, viernes 27/09/96, p. 7. Mayúsculas en el original).

Otro componente clave implicado en las lógicas del agronegocio fue la incorporación de tecnología y la generación de nuevas solidaridades como las que se expresaron por medio de los *pools* de siembra y de la vinculación con agentes financieros extra-locales. En este punto, resulta interesante rescatar la argumentación sobre los ‘beneficios’ de *pools* de siembra en la región. La dirigencia realizaba una extensa comunicación en la que procuraba “desmitificar” los “presuntos aspectos negativos” de estos actores y remarcar “algunos resultados muy auspiciosos” de los mismos. En primer lugar se enfatizaba en el componente local que muchas de esas empresas poseían y también en el movimiento económico que generaban para la ciudad, puesto que se abastecían de insumos en comercios locales, muchos industrializaban los cultivos en plantas procesadoras de la región y “(...) el cincuenta por ciento de lo producido queda en la región. Se suma al alquiler de los campos, el monto de los costos por las labores que se realizan mediante los contratos respectivos” (AHMRC, H, *TA*, viernes 26/04/96, p. 7). En segundo lugar, se abogaba por la función que cumplían estas empresas en cuanto a evitar la salida de los productores del proceso productivo aunque no se lograba dimensionar que esa situación en muchos caos – como ha sido señalado por la literatura especializada – fue irreversible. La columna recordaba que:

“(...) son muchos los productores de la zona, que contratan el alquiler de parte de sus campos con estas empresas, comprometiendo su propio trabajo pero, sin endeudarse, con un saldo económico importante y favorable. A través de estas asociaciones, favorecen la permanencia de los productores en sus predios, evitando que sean expulsados del sistema, lo que es bueno para las economías regionales. De lo contrario, muchos de esos productores pasarían a engrosar poblaciones urbanas, en éxodo proclive al pauperismo y a los problemas sociales propios de las grandes urbes” (AHMRC, H, *TA*, viernes 26/04/96, p. 7).

Por último, en tercer lugar, la columna destacaba una suerte de paradoja a los fines de legitimar la presencia de los *pooles* de siembra en la región. Lejos de entender que estas actividades eran intensivas y que podían – en ocasiones – comprometer la sustentabilidad de los suelos y los recursos naturales se sostenía al implementar las modernas tecnologías de labranza y recurrir a un adecuado asesoramiento técnico producían el efecto contrario:

“En lo que hace a la conservación de los suelos, hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas trabajan con métodos conservacionistas, con técnicas adecuadas para la preservación de los recursos naturales – por ejemplo, la siembra directa – incorporando a los establecimientos rurales afectados por estos contratos, maquinaria agrícola y tecnologías de última generación. Igualmente es necesario advertir que estas empresas cuentan con el asesoramiento de profesionales técnicos de conocida capacidad e idoneidad, que siempre dejan enseñanzas en cuanto a los más eficientes sistemas de trabajo y de producción. Por último, cabe reflexionar, con relación a los condicionamientos que nos impone esta dura economía, no solo de Argentina, sino de todo el mundo moderno, que muchos productores por si solos no pueden hacer frente a todas estas exigencias, de viendo apelas a estos convenios con los pools de producción, para sortear estas dificultades. En suma: hay que aceptar las realidades y obrar en consecuencia”(AHMRC, H, *TA*, viernes 26/04/96, p. 7).¹⁹

En síntesis, a partir de las intervenciones en la columna institucional, la dirigencia de la SRRC construyó una legitimación de las lógicas implicadas en el agronegocio. A pesar de que se avizoraban algunas problemáticas derivadas de este nuevo ordenamiento produc-

19 Ver por ejemplo: AHMRC, H, *TA*, viernes 26/04/96, p. 7; AHMRC, H, *TA*, viernes 10/05/96, p. 7. Las dimensiones relativas a la tecnología las abordaremos en el apartado siguiente.

tivo, las críticas esgrimidas no llegaban a cuestionar la vigencia del mismo. Como contrapartida, se tendió a enfatizar en los beneficios de las nuevas tecnologías y de la actividad económica de los nuevos actores.

La empresa innovadora y el nuevo empresario rural

Se ha sostenido que la vigencia del agronegocio implicó una serie de desplazamientos en relación con las formas de concebir la actividad agropecuaria que se tradujeron en modalidades radicalmente distintas respecto de etapas anteriores de operar dentro del proceso productivo (Hernández, 2009; Gras y Hernández, 2009 y 2013a). Mirados en conjunto, estos procesos acentuaron el carácter empresario de la actividad agropecuaria, la complementación de habilidades y saberes de diferentes ámbitos del conocimiento y la necesaria integración de lo rural con lo industrial. En ese marco, articulado en la idea de la reconversión empresaria, desde *Información Ruralista* se comenzaban a realizar referencias a esos desplazamientos y, por ende, a socializar un conjunto de saberes y prácticas vinculados al agronegocio. Un lugar destacado lo ocupaba la necesidad de procurar un manejo empresarial de las explotaciones agropecuarias como plataforma necesaria no solo para alternar exitosamente en los mercados internacionales sino también para asegurar la reproducción de las mismas.²⁰ Así, las instancias de profesionalización de la actividad agropecuaria generadas por la SRRC poseían su contrapartida en la faz discursiva que alertaba sobre las mutaciones en el negocio agropecuario y, por ende, en la institucional:

“(...) por cuanto Argentina está inmersa en un mundo que ha cambiado. Esta Sociedad Rural de Río Cuarto continuará ejer-

20 Ver por ejemplo: AHMRC, H, *TA*, viernes 18/11/1994, p. 7.

ciendo su democrática posición de defensa del sector agropecuario (...) Pero también sabemos que nuestra acción deberá encaminarse al mejoramiento de [la] vida de nuestras empresas rurales". (AHMRC, H, TA, viernes 24/07/1998, p. 7).

Esta suerte de toma de conciencia de la dirigencia rural se asentaba discursivamente en el imperativo de garantizar una transformación en las estructuras productivas de las empresas agropecuarias de los productores asociados a la SRRC que ahora debía orientarse a incrementar la productividad a través de la incorporación de tecnología y a realizar un uso "inteligente" de las habilidades administrativas y financieras.

"Ya nadie puede estar ajeno a la profunda transformación que viene dándose en los sistemas agroalimentarios. Este deviene, indudablemente, como consecuencia de la creciente globalización de las economías mundiales, modificando las estructuras productivas, industriales y fundamentalmente comerciales de todos los países, que ya no admiten posicionamientos que pretendan asimilarse o no involucrarse en estos cambios. (...) Las empresas rurales se ven obligadas a producir cada días más, para lo que deben adecuar sus estructuras, actualizándolas y preparándolas para esa mayor producción. Ello significa también la necesidad de acceder a la moderna tecnología e implica necesariamente una mayor capitalización. Pero ésta debe ser racional, ordenada y oportuna, de acuerdo con la propia envergadura de cada empresa. No siempre esa tecnología implica grandes inversiones, pero sí alcanzar una estructura adecuada, que permita los cambios que deben darse en el andamiaje de la empresa, preparándola para acometer el desafío de nuestros tiempos" (AHMRC, H, TA, viernes 24/07/98, p. 7).

Finalizaba la editorial afirmando que se estaba en presencia de una "verdadera revolución [que] se da no solamente en los siste-

mas productivos. Esto se continúa, tiene una natural correlación, en el desenvolvimiento empresario” (AHMRC, H, *TA*, viernes 24/07/98, p. 7). Esta noción implicaba, para la dirigencia rural de la SRRC, hacer un uso adecuado de las opciones que ofrecen los mercados y recurrir a “una buena y oportuna asesoría” (AHMRC, H, *TA*, viernes 24/07/98, p. 7). Sin embargo, lo anterior no nos debe llevar a pensar que los elementos del discurso tecnologizante fueron apropiados de forma plena por la dirigencia rural de la entidad. Por un lado, como detallamos, se insistía en prestar atención a los “nuevos requisitos” de la actividad agropecuaria, mejorar eficiencia y productividad a partir de los avances tecnológicos. Por el otro lado, existían en la columna institucional referencias constantes a ser cautelosos con endeudarse más allá de los límites que permitía la propia empresa. Esta situación se ponía de manifiesto especialmente con la cuestión de la tecnología, que se consideraba como un “espejismo”:

“¡Cuánta cosa buena que hay para mejorar nuestra producción agropecuaria! Empero, debemos ser cautelosos a la hora de tomar decisiones, Los productores ya lo saben, pero siempre es oportuno formular alguna prevención o reflexión: mucho de lo que apreciamos en las parcelas agrícolas demostrativas, no deja de ser un espejismo. Son cultivos o pasturas logradas así con recursos que no se tienen en el campo: riego, encanalado del suelo, fertilizadas al máximo, con cuidados a lo largo de su evolución, que bien merecen el calificativo de ‘bebes malcriados’. Con ‘todos los chiches’, por adoptar una expresión popular. Esa tecnología, adaptada a nuestras reales posibilidades, podrá ser asimilada paulatinamente, como sucede con todos los adelantos, pero no debemos pretender tener lujos inmediatamente. ¡No nos dejemos encandilar! En cuanto a la maquinaria agrícola, también hay que contemplar su eventual adecuación al dimensionamiento de nuestro campos y a nuestras necesidades ¡y posibilidades!” (AHMRC, H, *TA*, viernes 21/03/97, p. 7).

Cobraba relevancia en ese contexto, la apelación a estrechar vínculos transectoriales que atendieran a una diversificación de la red de producción en virtud de las cualidades-especificidades de consumidores ubicados en los más diversos mercados internacionales. Recordemos que uno de los pilares del nuevo modelo agropecuario lo constituyó la posibilidad de trasvasar las fronteras de lo rural e integrar distintos actores y componentes de la cadena productiva que agregaran una mayor complejidad al negocio agrícola (Hernández, 2009; Gras y Hernández, 2013). Para la dirigencia de la SRRC, esto se traducía un llamado para que sus asociados incrementaran su empresariedad, procurando el desarrollo de emprendimientos agroindustriales.

“(…) debemos pensar en emprendimientos que permitan procesar la materia prima que se obtiene en nuestros campos. Favorecer la radicación de agro-industrias sobre la base de los productos alimenticios que tenemos a nuestro alcance. Río Cuarto, insistimos, es un importante – y natural – centro dinamizador de la economía regional, con base agropecuaria. Es un núcleo comercial proveedor de insumos para el campo de una dilatada región. Pero, ha llegado la hora de pensar en la transformación de nuestra producción primaria, en el procesamiento de esos bienes en la industrialización. Más precisamente en la agro-industria. Procesar, en el lugar en el que se da la producción, incorporándole mano de obra e inversiones de capital, procurando un mayor movimiento económico general. He aquí, entonces, el gran desafío de la hora actual” (AHMRC, H, *TA*, viernes 08/03/96, p. 7).

Otro núcleo de la discursividad generada desde la columna institucional de la SRRC fue el que se abocó a comentar las competencias y saberes que se debían considerar para enfrentar la actividad productiva como un negocio. En este sentido, se generó un discurso con una alta performatividad empresaria, es decir una enunciación que legitimaba prácticas que consideraba adecuadas en el nuevo contexto productivo y que pretendía generar un cambio en las modalidades de

operar en el proceso productivo de las bases sociales de la entidad. En ese discurso la eficiencia constituía la coordinada sobre la cual se asentaba la garantía de la reproducción de la empresa agropecuaria. Esto implicaba no solo atender a mejorar las técnicas y demás aspectos atinentes a lo productivo sino también perfeccionar lo relativo a la comercialización de la producción. En ese proceso, resultaba esencial el asesoramiento especializado como lo podemos apreciar en el siguiente fragmento:

“Si nos sentimos eficientes, debemos procurar serlo más, mejorando nuestros sistemas de producción, delineando estrategias superadoras de la actual situación, con vistas a mejorar rendimientos que, a su vez, nos permitan acceder a una mejor posición vendedora de lo que producimos. Debemos estar alertas e informados sobre el desenvolvimiento, las perspectivas y la evolución de los mercados. Debemos practicar mejores técnicas de producción. Ver lo que hace el vecino y cómo lo hace, si es que éste obtiene mejores resultados que nosotros. Escuchar a los técnicos que demuestran reales conocimientos y una sabia experiencia, con resultados a la vista. Tener un panorama global. Estamos inmersos en un mundo cada vez más competitivo y cada vez más exigente. No podemos aislarnos. Por el contrario, debemos actuar en consecuencia.” (AHMRC, H, *TA*, viernes 18/11/1994, p. 7).

Así, desde el discurso de la dirigencia ruralista se comenzaba construir la necesidad de incorporar al conocimiento como un nuevo factor (decisivo) para llevar adelante el proceso productivo. Esta situación era advertida casi de forma constante en las páginas de *Información Ruralista* que al respecto comentaba:

“(...) los productores dedican sus esfuerzos para la adecuada y oportuna implantación de cultivos de cosecha gruesa (...). Estas tareas suponen inversiones, fuertes erogaciones sobre las que necesariamente deben tomarse decisiones empresarias racionales, suficientemente analizadas y evaluadas, dado que

sobre este basamento económico-financiero, deben sustentarse todos los planes de producción del campo. Hoy en día, deben tenerse en cuenta todas las estimaciones que cada ejercicio requiere. En el caso de la agricultura, se deben tomar las lógicas y razonadas evaluaciones, sobre la base de datos actualizados de mercado y sus perspectivas, para lo que será indispensable una correcta información y una confiable asesoría. Así, al momento de adquirir semillas y agroquímicos, sin desdeñar el grado de confianza que puedan ofrecernos determinados operadores del mercado, deberemos analizar y evaluar precios, condiciones, calidad de la mercadería, financiamiento, etc. ya que el comercio dispone ahora de numerosas líneas, al alcance de cada productor. Se deberá disponer de una información actualizada sobre líneas de créditos, con sus respectivos plazos, intereses, montos prestables, etc. Será también necesaria la actualización técnica sobre rendimientos que ofrecen las distintas variedades, tareas culturales, ciclos de cada semilla, su aptitud productiva, su tolerancia frente a plagas, enfermedades, malezas, etc. En cuando a los agroquímicos, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc. Su debido conocimiento técnico sobre su correcta aplicación, etc. (...) creemos que la actualización, la información, el análisis y la evaluación económicos, son presupuestos que nadie debe desdeñar” (AHMRC, H, *TA*, viernes 10/10/97, p. 7).

De forma más enfática se sostenía: “Debemos hacernos cada día más empresarios. Acudir a la información actualizada, asesorarnos convenientemente, conocer la situación de los mercados” (AHMRC, H, *TA*, viernes 10/05/96, p. 7). Se argumentaba de esta forma sobre la necesidad de reconvertir la actividad agropecuaria en una de tipo empresarial y asumir roles más activos en relación con el conocimiento. El carácter empresario era asociado a la toma de decisiones basadas en manejo de información sobre tópicos que excedían lo meramente productivo. De esta manera se consideraba fundamental para el perfil socio-productivo del productor agropecuario la atención de los diversos componentes del campo financiero como la inevitabilidad de recu-

rir al asesoramiento de técnicos y especialistas en diversas áreas del conocimiento.

La actividad agropecuaria, para la dirigencia de la SRRC, ya no consistía en el dominio de habilidades meramente agronómicas sino que incluía una vasta gama de competencias. Se trataba de una actividad cada vez más profesionalizada donde el conocimiento sobre la nueva coyuntura productiva y financiera requería de una actualización permanente con el fin de asegurar la performance empresarial de los productores. En un extenso fragmento que transcribimos a continuación, la dirigencia de la SRRC daba cuenta de esta ruptura y abogaba por la necesidad de abandonar el “conservadorismo” y asumir un “manejo empresario”:

“Quizá por tradición, por conservadorismo o por su propia naturaleza, el productor ha sabido manejarse siempre con capacidad e inteligencia en los diversos sistemas productivos, pero – ahora más que nunca – muestras sería falencias en lo que hace a su manejo empresario ¿Cómo se advierte esto? En un posicionamiento no del todo firme frente a los mercados, en donde debe comercializar su producción. (...) Los mercados ya no son los mismos de algunos años atrás. Se han diversificado. Actúan de manera distinta. En nuestros días se manejan múltiples opciones para la venta de productos primarios o procesados, industrializados. En materia de granaria, debemos conocer opciones, mercados de futuro, etc. en cuando a la ganadería, los otrora grandes mercados concentradores van perdiendo su hegemonía y en cambio existe la posibilidad de vender en campo, en ferias locales, etc. Debemos conocer todas estas variables y operar con las que nos ofrezcan mejores posibilidades. Pero no solo debemos conocer todo sobre comercialización. Debemos igualmente saber manejar los créditos, es decir los diversos elementos de financiación de la empresa rural. En definitiva: escuchar a los que saben. Asesorarse” (AHMRC, H, TA, viernes 19/04/96, p. 7).

Existía en la dirigencia una percepción sobre la necesidad de amoldar las prácticas de las bases sociales de la entidad a la nueva realidad productiva. En su discurso se encontraba presente la convicción de un quiebre respecto a la forma de concebir la actividad agropecuaria. Así, a diferencia de un pasado no tan lejano el éxito de la empresa rural ya no dependía de la habilidad de su titular para “manejarse en los distintos sistemas productivos”, este tipo de conocimiento heredado de generación en generación, como lo plantea Hernández (2009), se tornó superfluo. El imperativo del nuevo contexto productivo requería de la decisiva intervención de los saberes de técnicos y especialistas, la dirigencia de la SRRC entendía que ya no bastaba con el saber agronómico sino que apelaba a que este sea complementado con diferentes capacidades.

A modo de cierre

La profesionalización de la actividad agropecuaria iniciada por la SRRC demandó la necesidad de validar la adopción de nuevos saberes y habilidades. Esa operación fue realizada mediante la estructuración de una estrategia discursiva que tuvo una alta performatividad empresarial, puesto que procuró estimular el cambio en las pautas y comportamientos productivos de las bases sociales de la entidad, apelando a que asumieran las labores productivas como unas de tipo empresarial. Es decir, se propiciaba un quiebre en la concepción de la actividad agropecuaria. La construcción de este nuevo imaginario se mediatizó, fundamentalmente, a través de la prensa gráfica. Este soporte no solo permitió comunicar las actividades institucionales a las bases sociales sino que además le permitía a la dirigencia ruralista alcanzar a un público más amplio. Información Ruralista, la columna institucional de la SRRC se mostró como un mecanismo difusor eficaz para cimentar la profesionalización del oficio de productor agropecuario.

En esta operación se encontraba implícita una modalidad distinta de interpelación de las bases sociales que incorporaba componentes discursivos diferentes a los que históricamente habían caracterizado la enunciación de la entidad. La dirigencia de la SRRC acudió a enunciados, frases y conceptos de corte tecnologizante. Así, eficiencia, tecnología, cálculo racional, manejo empresario, asesoramiento, fueron las coordenadas desde las cuales se procuró producir un cambio en las formas tradicionales de concebir (y operar) dentro y fuera del proceso productivo. En un plano discursivo, para la dirigencia de la SRRC se trataba, fundamentalmente, de un cambio en las estructuras comerciales y productivas que volvían superflua la experticia meramente agronómica. Bajo esa idea rectora, por un lado se hacía hincapié en que los productores prestasen atención a las perspectivas y modalidades de negocios que proponían los mercados nacionales e internacionales. Esto era una pre-condición de la actividad productiva –tan importante como la fertilización de los suelos– que aseguraba la comercialización y, por ende, la rentabilidad de lo producido. Por otro lado, era preciso tener presente que la actividad agropecuaria constituía una cuestión de especialistas. Hubo una apelación constante destinada a remarcar el carácter excluyente que poseía el asesoramiento técnico. Éste no se limitaba solo a lo agronómico sino que abarcaba otras competencias como lo legal, lo contable, lo administrativo que necesariamente debían resolverse tranquilas afuera. También en esa forma de concebir la actividad agropecuaria residía la convicción de que se debía tener en cuenta no solo lo que ocurría tranquilas adentro sino que cada vez ocupaba más importancia lo que acontecía por afuera, con la comercialización de la producción. Estas argumentaciones –de carácter constante– vertidas en la columna institucional constituían la contracara de un conjunto de conferencias, seminarios, demostraciones, capacitaciones, etc. que habían re-significado las funciones asumidas por la SRRC. De esta manera, el discurso operaba como un medio que reforzaba la idea del cambio que se estaba llevando a cabo en el mo-

delo organizativo de la entidad y que también era indispensable reproducir en las explotaciones agropecuarias de los asociados a la entidad.

Estos elementos del discurso de la entidad respondían a una matriz discursiva tecnologizante, es decir, distinta a la que históricamente habían orientado las intervenciones públicas de los dirigentes de la SRRC. Lejos de poner en tensión los principios sobre los cuales se habían asentado las interpretaciones de la dirigencia se incorporaron sin alterarlos y, en ese proceso, adquirieron un nuevo sentido. En ese entramado discursivo, los imperativos del nuevo modelo agrario aparecían como ineludibles. La reconversión empresarial era la noción (multifuncional) que se empleaba para marcar la impostergable necesidad de producir un cambio tanto en las prácticas como en las modalidades de concebir el proceso productivo.

Sin embargo, en la justificación del agronegocio a partir de los tópicos tecnologizantes realizada por la dirigencia de la SRRC pueden reconocerse ciertos límites. Se observaban las consecuencias negativas de la sojización pero se relativizaban sus efectos a partir de la adopción de la siembra directa, se denunciaba el desplazamiento de la ganadería por la agricultura pero se encontraban las causas en la inexistencia de una política agropecuaria, se celebraba el avance tecnológico pero se llamaba a cautela al momento de implementarlos al proceso productivo. Es decir, la dirigencia riocuartense –a similitud de lo que había acontecido con la performatividad política que proyectaba la convertibilidad (Carini, 2014)– realizaba señalamientos que ponían de manifiesto efectos adversos de las lógicas involucradas en el agronegocio pero que no llegaban a cuestionar la legitimidad que había adquirido entre los productores.

En definitiva, las respuestas de la SRRC frente a un contexto que implicaba profundas transformaciones en la dinámica económica y política supuso la necesidad de ofrecer una respuesta activa por parte de la dirigencia agraria para garantizar la propia reproducción institucional. Así, los cambios en los discursos y las prácticas fueron verso

y anverso de una misma estrategia institucional por medio de la cual no solo se vehiculizó una determinada construcción simbólica sobre lo rural sino que, concomitantemente, se erigió además en un canal por el que penetraron y se legitimaron los saberes ligados al nuevo paradigma productivo.

Referencias bibliográficas

- Alapin, H. (2008). *Rastrojos y algo más. Historia de la siembra directa en Argentina*. Buenos Aires: Teseo/Universidad de Belgrano.
- Angenot, M. (2010). *El discurso social. Los límites de lo pensable y lo decible*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Balsa, J. (2007). Las disputas hegemónicas en torno de las cuestiones sociales agrarias de la pampa argentina en la actualidad. En Girbal-Blacha, N. y Mendonça, S. (coords.). *Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil* (pp. 149-170). Buenos Aires: Prometeo.
- Balsa, J. (2012). Formaciones discursivas y disputas por la hegemonía en torno a los modelos de desarrollo agrario. En Lázaro, S. y Balsa, J. (Coords.). *Agro y política en Argentina. El modelo agrario en cuestión, 1930-1943* (pp. 35-117). Buenos Aires: CICCUS.
- Balsa, J. (2013). Los avatares de la reforma de la ley de colonización durante el primer peronismo (1946-1955). En Girbal-Blacha, N. y Mendonça, S. (Dirs.). *Corporaciones agrarias y políticas públicas en América Latina* (pp. 193-226). Rosario: Prohistoria.
- Bocchicchio, A. y Cattáneo, C. (2005). Transformaciones en la agricultura e innovación organizacional en asociaciones de productores: los casos de AAPRESID y ASAGIR. En Benencia, R. y Flood, C. (Comps.). *Trayectorias y contextos. Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa* (pp. 89-104). Buenos Aires: La Colmena.
- Carini, G. (2014a). Reivindicaciones, discursos y estrategias en mutación: la Sociedad Rural de Río Cuarto en el marco de una 'nueva agricultura' (1990-2000). En Olivera, G. (Dir.). *El agro cordobés en el siglo XX: entramados productivos, políticos y sociales desde una perspectiva histórica* (pp. 223-280). Córdoba:

- Editorial de la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.
- Carini, G. (2014). Reivindicaciones, discursos y conflicto: las corporaciones agrarias en el marco de la estructuración del 'consenso' neoliberal (1989-1991). *Conflicto Social* 7 (12), pp. 88-113. Recuperado de: <http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/579>
- Carini, G. (2015). Nuevo Estado, viejos intereses: corporaciones agrarias y mediación política en el interior de Córdoba (1935-1955). *Estudios del ISHIR*. 5 (11), pp. 93-113. Recuperado de: <http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR/article/view/421>
- Carini, G. (2016). Debates y controversias en el marco de la normalización de las prácticas historiográficas: Jorge Sábato y la formación de la clase dominante en Argentina. En Basconzuelo, C. y Maldonado, G. (Comps.). *Construyendo investigadores en ciencias sociales* (pp. 303-321). Río Cuarto: UNIRÍO.
- Carini, Gabriel Fernando (2017). "Agro, negocio y nueva institucionalidad en las pampas: itinerarios y propuestas de abordajes para el análisis de la representación de intereses agrarios". En: Banzato, G.; Blanco, G.; Perren, J. (comps.). *La Expansión de la frontera productiva y estructura agropecuaria*. Buenos Aires: Prometeo-AAHE [En prensa].
- Carniglia E. (2004). La mediatización de la ruralidad. Representaciones del espacio en la prensa especializada nacional. En Ciamdevilla G. y Carniglia, E. (Comps.). *Comunicación, ruralidad y desarrollo* (pp. 285-306). Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Carniglia, E. (2011). *Las ruralidades de la prensa. Agronegocio, tecnología y agrarismo*. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Carreras Doallo, X. (2012). Los medios gráficos como fuente. Un análisis de la revista La Chacra durante el peronismo clásico. *Estudios Rurales*, 2 (2), pp. 184-201. Recuperado de: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales/article/view/1394>
- Da Orden, M. y Melon Pirro, J. (Comps.) (2007). Prensa y peronismo. Discursos, prácticas, empresas, 1943-1958. Rosario: Prohistoria.
- De Arce, A. (2009). Mujeres, familia y trabajo. Chacra, caña y algodón en la Argentina (1930-1960). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

- De Arce, A. (2011). Impresiones de la conflictividad agraria. Tres miradas sobre el agro argentino de los años treinta. En Cerdá, J. y Leite, L. (Comps.). *Conflictividad en el agro argentino. Ambiente, sociedad y Estado* (pp. 71-102). Buenos Aires: CICCUS.
- Flood, C. (2005). Trayectorias institucionales comparadas de innovación tecnológica en la región pampeana. En Benencia, R. y Flood, C. (comps.). *Trayectorias y contextos. Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa* (p. 137-177). Buenos Aires: La Colmena.
- Eujanian, A. (1999) Historia de revistas argentinas. 1900/1950. La Conquista del público. Buenos Aires: Asociación Argentina de Editores.
- Girbal-Blacha N. y Quatrochi D. (1999). Cuando opinar es actual. Revistas argentinas del siglo XX. Buenos Aires: Academia Nacional de Historia.
- Gutiérrez, T. (2002). El peronismo y el “Mundo agrario”. Una visión sobre el agro argentino, 1949-1955. *Mundo Agrario*, 2 (4), pp. 1-14. Recuperado de: <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/viewFile/v02n04a04/1527>
- Gutiérrez, T. (2004). Las representaciones del agro argentino en el peronismo y el posperonismo. La revista Mundo agrario, 1949-19621. *Anuario del CEH*, 4 (4), pp. 37-53.
- Gutiérrez, T. (2005). Revista La Chacra: industria editorial, agro y representación (1930-1955). En Lázaro, S. y Galafassi, G. (Comps.). *Sujetos, políticas y representaciones del mundo rural. Argentina 1930-1975* (pp. 19-61). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Gras, C. (2009a). El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y los dilemas de sus organizaciones. En Gras, C. y Hernández, V. (Coords.). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios* (pp. 215-237). Buenos Aires: Biblos.
- Gras, C. y Hernández, V. (2013). Los pilares del modelo *agribusiness* y sus estilos empresariales. En Gras, C. y Hernández, V. (Coords.). *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización* (pp. 17-49). Buenos Aires: Biblos.
- Gras, C. y Hernández, V. (2013a). Asociatividad del empresariado agrícola en Argentina. AACREA y AAPRESID en perspectiva. En Muzlera, J. y Salomón,

- A. (Coords.). *Sujetos sociales del agro argentino. Configuraciones históricas y procesos de cambio* (pp. 36-67). Rosario: Prohistoria.
- Hernández, V. (2009). La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios. En Gras, C. y Hernández, V. (Coords.). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios* (pp. 39-65). Buenos Aires: Biblos.
- Lattuada, M. (2003). Transformaciones institucionales en las corporaciones agrarias a fines del siglo XX. El caso de la Federación Agraria Argentina. En Bendini, M. et al (Comps). *El campo en la sociología actual: una perspectiva latinoamericana* (pp. 177-213). Buenos Aires: La Colmena.
- Lattuada, M. (2006). *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Lida, M. (2012). *La rotativa de Dios. Prensa católica y sociedad. El Pueblo, 1900-1960*. Biblos: Buenos Aires.
- Lobato, M. (2009). *La prensa obrera*. Buenos Aires: Edhasa.
- Muzlera, J. (2009). *Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la pampa gringa*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Poggi, M. (2011a). Discursos, representaciones y debates sobre cuestiones agrarias en la prensa argentina. La “reforma agraria” en La Nación, La Opinión Anales y La Tierra – 1973. (Tesis de Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades – Orientación en Comunicación – de la Universidad Nacional de Quilmes).
- Poggi, M. (2011b). Problemática agraria y prensa escrita en la argentina de los años 70. Representaciones y debates sobre la propiedad de la tierra. (Tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes).
- Sáitza S. (1998). *Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 1920*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Sidicaro, R. (1993). *La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación (1909-1989)*. Buenos Aires: Sudamericana.

**¿Área de investigación o subcampo historiográfico?
Análisis de la agenda y los desafíos de los estudios sobre
cooperativismo agrario en la actualidad.**

Rocío Soledad Poggetti

Introducción

Los estudios sobre cooperativismo agrario comenzaron a insertarse en la agenda historiográfica en la década de 1980, momento en el que la producción historiográfica inició un proceso de renovación de la mano, entre otros factores, de la crítica a las tendencias tradicionales. Allí empezaron un recorrido que, atravesando diversos enfoques, en las fronteras o en las intersecciones de los mismos y desde diferentes problemáticas, fueron configurando un área temática específica dentro de los estudios rurales. Desde entonces se han multiplicado los investigadores interesados en la temática, las producciones y los trabajos presentados en diversas instancias de socialización científica que, en su conjunto, pueden analizarse como la etapa pionera en el proceso de constitución y afianzamiento de los estudios sobre cooperativismo agrario.

Reconstruir su derrotero y dar cuenta, a modo de síntesis, de la dinámica desplegada -amplia y compleja, por cierto-, implicó un esfuerzo analítico que escapaba a los límites de este capítulo. Hecha

esta aclaración, se pretendió proporcionar una imagen del camino recorrido, plantear interrogantes sobre la especificidad de los estudios sobre cooperativismo y esbozar algunos desafíos que se consideraron pertinentes en pos de profundizar determinadas líneas de investigación que contribuyeran al afianzamiento de éstos.

A lo largo del capítulo se intentó dar cuenta en primer lugar, del surgimiento de las temáticas sobre cooperativismo dentro de tradiciones historiográficas como la historia agraria o la historia de empresas así como en el marco del paradigma de la economía social, argumentando que desde estos espacios los estudios cooperativistas iluminaron problemas historiográficos de larga data a partir de la reconstrucción de aristas específicas de temáticas inscriptas en los mismos, que los recortes contemporáneos no analizaban.

En segundo lugar, se planteó de manera exhaustiva la producción historiográfica que se ha realizado sobre la dinámica del cooperativismo durante el primer peronismo, teniendo en cuenta no sólo la diversidad y la amplitud de las indagaciones sobre el desarrollo del movimiento en este contexto desde diversos marcos referenciales, sino sobre todo porque son esos mismos planteamientos los que permitieron pensar en un proceso de afianzamiento de los estudios cooperativistas como área temática, que comenzó a despegarse de las tradiciones en las que nació, apropiándose de los enfoques y construyendo una particular manera de abordar problemas históricos. Se tuvieron en cuenta además, los aportes surgidos en otros marcos disciplinares como la Sociología y la Geografía.

En tercer lugar, se esbozaron los pendientes de esta agenda y los posibles desafíos derivados de ellos, en pos de contribuir al proceso de consolidación en el que se encuentran los estudios sobre cooperativismo.

Antes de iniciar este recorrido, es menester poner el enfoque de este capítulo en discusión. Definir a los estudios cooperativistas como línea de investigación, como área temática -en el sentido en el

que hasta aquí se lo ha hecho- o como sub-campo de conocimiento, inscriptos en el campo más amplio de los estudios rurales, involucra posicionamientos teóricos y epistémicos diferentes. A modo de disparador, se pretendieron plantear algunas líneas interpretativas que habiliten el debate.

Surgimiento, desarrollo y consolidación de los estudios sobre cooperativismo.

Los estudios sobre cooperativismo comenzaron a profundizarse desde la década de 1980 del siglo pasado. Si bien esto no quiere decir que con anterioridad no se investigaran determinadas dimensiones de éste, implicó al menos pensar que “(...) la historiografía reciente emergió luego de una discontinuidad política que hizo posible otra de corte historiográfico” (Pagano, 2010, p. 39), con las consecuencias para la renovación de la agenda que ello acarreó.

La recuperación del estado de derecho en ese contexto permitió por un lado, que los historiadores locales pudieran empaparse de las innovaciones que se estaban produciendo en las tendencias historiográficas internacionales, teniendo en cuenta la “crisis de la historia” acaecida en la década de 1970 -de la mano del desgaste de las hermenéuticas tradicionales y las macrorepresentaciones a ellas asociadas-; por otro, permitió visibilizar el trabajo realizado durante la dictadura en los centros académicos privados -y también fuera de ellos-, en torno a los cuales se articularon puntos de partida, agendas, equipos y redes que contribuyeron a romper con la estabilidad autocomplaciente, motivando el surgimiento de una renovada agenda, extensa y dinámica, que valorizó nuevos temas y sujetos y permitió desplegar un enfoque micro-histórico que otorgaba un papel relevante a los actores y sus estrategias (Barbero, 2006).

La implosión de la Historia (Iggers, 1998) habilitó espacios para que los estudios cooperativistas, entre otros, iniciaran un proceso de florecimiento. De este universo historiográfico, “(...) caracterizado por el desgranamiento temático, los cruces conceptuales y metodológicos, la dilatación de las fronteras y la estimulación de confluencias disciplinarias, la multiplicación y diversificación del universo documental” (Pagano, 2010. P. 51) merecieron especial atención para este trabajo tres áreas temáticas: la historia agraria, la historia regional y la historia de empresas, en tanto que desde los diversos enfoques de éstas surgieron problemáticas historiográficas inéditas, que apuntaban a la reconstrucción e interpretación de diferentes aspectos de la dinámica asociativa del agro.

La temática del cooperativismo se inscribió también, además de las mencionadas, en la corriente intelectual de la economía social, de la mano de la cual surgieron en Latinoamérica y en Argentina en el siglo XXI -al calor de la crisis económica, productiva y social- una multiplicidad de dinámicas cooperativas con el objetivo de incrementar la capacidad económica, social y cultural de los pequeños y medianos productores (Bageneta, Arce y Mateo, 2016). La riqueza y diversidad de esas experiencias asociativas reactualizaron los debates en las Ciencias Sociales desde este marco, y permitieron pensar cómo las cooperativas fueron (y son) actores claves en la redefinición de la relación entre economía y mercado, ponderando variables socio-comunitarias y medioambientales. En conjunto, las investigaciones realizadas desde esta perspectiva constituyeron un aporte clave para los estudios académicos, en tanto buscaron profundizar el conocimiento de asociaciones, actores, discursos, representaciones e identidades recientes, al tiempo que fueron ponderadas -o deberían serlo- como un insumo clave para la gestión de políticas públicas tendientes al logro de un desarrollo sustentable, endógeno y democrático.

En primer lugar, la Historia Agraria, un área particular dentro de los estudios rurales, sumó a los tradicionales enfoques económicos, sociales y legislativos sobre el desarrollo agrario argentino y pampea-

no, aspectos políticos, históricos y antropológicos; esto permitió, de la mano de la inclusión de una multiplicidad de actores, romper con la “imagen estática y monocorde del mundo rural” (Pagano, 2010, p. 59) al tiempo que focalizar los análisis desde la interrelación de diversos factores intervinientes en los procesos abordados. Caracterizada por ser un espacio de convergencia (y tensiones) entre diferentes disciplinas sociales, especialmente entre la Economía, la Antropología rural y la Sociología política, la historia agraria constituyó un anclaje clave para las investigaciones sobre cooperativismo que pretendieron problematizar las configuraciones sociales del agro, sus características y cómo se rearticulaban en relación a la dinámica cooperativista, analizar los cambios en el régimen de tenencia en relación al accionar de estas asociaciones, los tipos de institucionalidad de los procesos asociativos, el posicionamiento de los actores frente a las políticas públicas, entre otras dimensiones.

En esta línea, los trabajos pioneros de Olivera (2006) sobre la vinculación de la dinámica cooperativa con la economía familiar en la micro-región comprendida por el Departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba durante el primer peronismo, le permitieron cotejar las tendencias en el desarrollo agrario a escala nacional con las acaecidas en este espacio. Las transformaciones en el régimen de tenencia de la tierra y la estructura social experimentada en este período, consideradas producto de la dinámica de las políticas públicas del gobierno, indujeron a la autora a problematizar en qué forma y con relación a qué aspectos de la dinámica cooperativa se vinculan las reconversiones en la economía familiar. Los incentivos materiales y simbólicos que proporcionaron estas asociaciones a los arrendatarios y pequeños y medianos productores, fue evaluado como un factor de peso que contribuyó a explicar la dinámica de movilidad social ascendente (p. 18).

En segundo lugar, la Historia Local, inserta en las discusiones entre la historia micro y los relatos con pretensiones totalizadoras¹, fue pensada desde ciertos enfoques como una mera colección de datos anecdóticos que sólo interesaban a los habitantes de los reducidos espacios a los que atañía; o desde otros, como un reflejo de procesos más generales, considerados justamente sólo por lo que de general encerraban. La Historia Local y Regional hizo explícita la artificialidad en la construcción de las dimensiones espaciales de los problemas de investigación, derribando las miradas historiográficas deterministas que los definían de manera apriorística, proponiendo un abordaje para “estudiar determinados problemas en la localidad” (Serna y Pons, 2003, p. 39). Ello permitió que los objetos lejanos y extraños cobraran una dimensión universal, sin por ello dejar de ser específicos.

La multiplicidad de investigaciones desarrolladas sobre cooperativismo desde este enfoque micro-analítico, si bien contribuyó a incrementar el acervo de conocimientos sobre esta temática relativamente reciente, corre el riesgo de quedar reducida a mera colección de datos, sin la posibilidad de problematizar las dimensiones del objeto en cuestión ni vincularlo a los procesos generales en los que se encuentra inserto.

Otras en cambio, desde la problematización de los objetos de estudio y realizando el pertinente cruce de escalas, contribuyeron a renovar miradas, a profundizar el conocimiento de determinados aspectos del desarrollo rural haciendo explícitas las tradiciones historiográficas que las sustentaban.

1 Esta discusión se encuentra inscripta en el denso debate desarrollado dentro de las Ciencias Sociales acerca de su status epistemológico (Díaz de Kóbila, 2010); desde posturas que las incluían en el campo de las Ciencias Duras hasta aquellas que las pensaban como Ciencias Ideográficas, productoras de conocimiento específico por su naturaleza y características, existieron una multiplicidad de matices (Cruz, 1991). La Historia Regional y Local, desde algunos de sus enfoques, intentó ser un principio de solución, sin la pretensión de cerrar una discusión que se reactualiza constantemente.

Tal es el caso de Gabriela Olivera, en trabajos como “*La conformación histórica de una institución paradójica: un diseño gremial-cooperativo. El caso de una cooperativa asociada a FACA, durante los dos primeros gobiernos peronistas*” (2006) o “*Cooperativas, crédito estatal y desarrollo rural. Una primera aproximación a su estudio en el caso de Córdoba*” (2006); de Graciela Mateo en “*El cooperativismo agrario en la provincia de Buenos Aires (1946-1955)*” (2002); de Noemí Girbal-Blacha en “*Cooperativismo agrario y crédito oficial (1946-1955). Una aproximación a las continuidades y cambios de la argentina peronista*” (2001) o en diversos pasajes de su libro “*Mitos, paradojas y realidades en la argentina peronista (1946-1955). Una interpretación histórica de sus decisiones político-económicas*” (2002); de Mario Lattuada cuando reconstruye dinámicas asociativas diversas en su libro “*Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX*” (2006); de Talía Gutiérrez a través de un artículo publicado en la compilación de Baggeneta, Arce y Mateo (2016), José Martín Baggeneta en su libro “*Del algodón a la soja. Territorio, actores y cooperativas en el gran chaco argentino (1960-2010)*” (2016); de Leandro Moglia en su tesis doctoral “*Un movimiento con historia. El cooperativismo agrícola en el Chaco entre 1926 y 1994*” (2013); de Laura Valdemarca en “*Acción colectiva y capital social. Institucionalizando la cooperación. Los Cóndores, 1950-1955*” (2006)², entre otros, que desde el conocimiento de dinámicas particulares no sólo nutrieron el área de estudios cooperativistas sino que definieron enfoques específicos dentro de los mismos.

El intento de construir categorías que contribuyeran a interpretar analíticamente la realidad tuvo como pioneros a Lattuada y Renold (1997). En la década de los 1990, y desde el marco de la sociología

2 Cabe aclarar que sólo se han consignado algunos de los trabajos relevados, sin con ello pretender dar una imagen completa de la prolífica publicación de los autores mencionados.

weberiana, propusieron tipos ideales en la evolución institucional del cooperativismo agrario, entendiendo que “la tipología simplifica la realidad que pretende ordenar, y en esa simplificación radica su fertilidad analítica y capacidad explicativa” (Lattuada, 2006, p. 23) La creciente complejidad económica e institucional de las cooperativas, producto de las adaptaciones a los cambios contextuales, conllevó a un distanciamiento de los valores y las prácticas doctrinarias producto de la implementación de estrategias empresariales, que en algunos casos evidenció una eminente contradicción. La organización Institucional Consecuente (OIC) redujo al mínimo las fricciones entre doctrina y práctica, mientras que la Organización Institucional Paradójica (OIP) constituyó una etapa de exitoso desenvolvimiento económico, en tanto la anterior ya había resuelto las cuestiones atinentes al afianzamiento institucional; la contradicción discursiva/doctrinaria entró en conflicto con las prácticas empresariales, lo cual hizo de este tipo ideal instituciones transitorias, en búsqueda de definiciones. En las Organizaciones Institucionales en Mutación (OIM) los autores distinguieron dos estrategias: la mutualista y la Organización Institucional de Competencia Económica Dinámica (OICED), las cuales buscaron reducir las restricciones doctrinarias que limitaban la inserción eficaz en la competencia económica.

Este aporte no sólo fue considerado válido por los tipos ideales que propuso, sino que también permitió pensar en los condicionamientos que ejerce el contexto sobre los discursos y las prácticas de los actores cooperativos vinculando las tendencias en la evolución histórica del movimiento a las características de cada Régimen Social de Acumulación (RSA).

Esta consideración partió de suponer que

(...) los agentes económicos operan y toman decisiones en un escenario caracterizado por un complejo entramado de instituciones y prácticas sociales, además de por unas condiciones estructurales que inciden en la inversión y en el proceso de

acumulación de capital en el plano microeconómico (Lattuada, 2006, p. 63).

Cada RSA constituyó un complejo proceso histórico recorrido por fuerzas contradictorias. El concepto no es equivalente, entonces, al de proceso de acumulación capitalista ni a la noción clásica de modo de producción, que suponía a éste determinado en última instancia por la economía. Permitió referir, en cambio, “(...) al conjunto complejo de las instituciones y de las prácticas que inciden en el proceso de acumulación de capital, entendiendo a éste último como una actividad microeconómica de generación de ganancias y de toma de decisiones de inversión” (Nun, 1987, p. 37).

Lattuada (2006) identificó la sucesión de tres RSA en la argentina moderna: agroexportador (1850-1930), sustitutivo de importaciones (1930-1990) y neoliberal (1990-2001), cada uno de los cuales tuvo su particular incidencia en el sector agropecuario.

Se consideró fundamental este planteo ya que ha permitido reconstruir las diferentes variables que operaron como telón de fondo en el proceso de tomas de decisiones de las asociaciones cooperativas. En este sentido, se sumaron los aportes de Acuña (1994) ya que permitieron pensar que los Estados keinesianos redefinieron los límites de lo factible al revolucionar la estructura de opciones estratégicas percibidas por los actores sociales y políticos y por ende su comportamiento histórico; en consecuencia, la legitimidad del tipo de organización capitalista para actuar colectivamente cambió, al modificarse el patrón y nivel de conflictos, la distribución de los recursos políticos, ideológicos, institucionales y económicos, que admitieron o frustraron determinadas estrategias.

La reconstrucción de las prácticas y las estrategias desde este enfoque, así como del discurso sostenido por las cooperativas de primer grado, no equivalió a realizar una mera recolección de datos, que por sus características importara sólo a sus miembros, sino que

vinculando estas dinámicas internas a las condiciones de posibilidad propias de cada contexto fue posible analizar problemas historiográficos de larga data con nuevos lentes, los que surgieron del particular enfoque cooperativo.

En tercer lugar, la mención a la Historia de Empresas en este recorrido se tornó problemática puesto que no se reconocieron dentro de ésta tradiciones específicas que abordaran el cooperativismo. Éste fue analizado marginalmente, y cuando se lo hizo por lo general se lo desvinculó de su carácter de organización social, ponderando unidimensionalmente el componente empresarial.

Ésta área temática habilitó a fines de la década de 1970 un abanico de nuevas investigaciones que priorizaron a los empresarios o las empresas, según era el enfoque teórico y metodológico de cada equipo de investigación. En el campo del análisis del comportamiento de los empresarios argentinos se osciló entre visiones que unidimensionalmente los consideraban ligados al capital financiero y al Estado, otras que matizaban las afirmaciones acerca del papel pasivo de éstos en el desarrollo local afirmando que los comportamientos fueron heterogéneos -puesto que se encontraban relacionados a las condiciones históricas en las que éstos operaban-, aquellas que ponderaron la acción política de estos actores a través de las corporaciones y dedicaron gran parte de sus producciones al análisis de la vinculación con el Estado, y finalmente las que desde un enfoque sociopolítico y cultural indagaron en los procesos de construcción identitaria. Respecto de las empresas, se identificaron los siguientes núcleos temáticos en su agenda: el análisis de las estrategias económicas de empresas particulares, la formación y evolución de los grupos económicos y los enfoques actuales que ponderan las dimensiones sociales y culturales de las firmas (Barbero, 2006).

Como se mencionó anteriormente, el análisis del cooperativismo desde este enfoque es discutible en tanto y en cuanto no se reconocieron en las categorías propuestas aquellas que defieran a las

dinámicas asociativas cooperativas, y ello quizás esté relacionado a la dificultad de categorizar a éstas como empresas. ¿Son cooperativas aquellas estructuradas en función a los principios rochdalianos o a los que han derivado de la economía social? ¿Cómo evaluar el disímil equilibrio logrado en las diversas asociaciones entre los principios y la vinculación al mercado? ¿Son “menos cooperativas” aquellas que han ponderado estrategias empresariales? Éstas y otras preguntas nos remitieron a la construcción de categorías históricas que permitieran dar cuenta de las dinámicas específicas asumidas por las cooperativas.

Reconociendo esta ausencia de tradiciones específicas se consideró necesario mencionar que los análisis sobre vertientes y perfiles cooperativos, sobre discursos y prácticas, sobre las vinculaciones con otros actores de la sociedad civil y con el Estado y sobre las estrategias que afrontaron las asociaciones cooperativas frente a las cambiantes condiciones del contexto, abrieron un abanico de posibilidades derivadas de la problematización de la dinámica cooperativa abrevando en tradiciones propias de la Historia de Empresas y que permitieron dar cuenta del surgimiento de enfoques en los cruces de las fronteras de las distintas áreas. Se consideró prioritario mencionar en este sentido el trabajo de Gabriela Olivera “*Cooperativas y gremios chacareros como piezas claves en la policía agraria peronista*” (Graciano y Olivera, 2015).

Por último, la economía social, como paradigma que pretendió integrar las relaciones sociales a la economía, demarcando una esfera en la que lo económico trasciende al mercado para incluir aspectos políticos, sociales y culturales (Olivera, 2008, p. 32), permitió indagar en la trayectoria de diversas dinámicas asociativas que surgieron en el marco de las políticas de apertura y desregulación, como estrategias que apuntaban al incremento de la capacidad de los estratos de productores más vulnerables ante los avatares del mercado.

Realizado este breve recorrido, comenzamos a reflexionar que las temáticas de análisis que se abrieron desde las áreas descriptas

permitieron iluminar diversos aspectos del cooperativismo agrario argentino a lo largo de su historia; pero también, aunque con consecuencias historiográficas disímiles a la propuesta anterior, que los estudios cooperativos contribuyeron a profundizar y/o a cambiar el foco de la mirada sobre problemas de larga data inscritos en las corrientes mencionadas.

Asumiendo la diversidad teórica y metodológica fue necesario en este punto, reconocer dos aspectos claves: por un lado que los estudios cooperativistas se han situado en un sujeto particular, antes invisibilizado, tratado sólo marginalmente o de manera fragmentada; y por otro lado, el carácter interdisciplinar del área, puesto que como se mencionó, se ha ido consolidando en la frontera de diversos campos disciplinarios y áreas temáticas.

Profundizando el debate, nos preguntábamos si el cooperativismo se constituyó como un subcampo específico dentro de la agenda historiográfica que comenzó a construirse luego de la década de 1980, o si en realidad involucró una mirada renovada sobre ciertos temas que surgieron dentro de otros campos pero que por su especificidad no fueron abordados suficientemente.

Pensarlo como un enfoque particular dentro de la historia agraria, la historia de empresa y/o la economía social implicó reflexionar en las problemáticas que se abrieron en el marco de los mismos³.

3 Así, la reconstrucción realizada por Olivera de la movilidad de los sectores chacareros en una micro-región de la provincia de Córdoba en relación al accionar cooperativista, implicó pensar un problema de larga data historiográfica desde una nueva lente. O bien, analizar las prácticas desplegadas por cooperativas agrícolas en el marco de la implementación de las políticas públicas peronistas y cómo las estrategias se modificaban de acuerdo al contexto, derivó del préstamo que hace la Historia de Empresas de ciertos enfoques teóricos y metodológicos. O del análisis de las vinculaciones entre Estado, sociedad civil y asociaciones. Pensar en el cooperativismo en la clave de la economía social lo ligó a determinado tipo de asociaciones, aquellas vinculadas a los movimientos sociales, que ponderaban prácticas participativas, endógenas y solidarias (Bageneta, Arce y Mateo, 2016).

Otro panorama se abrió al partir de la premisa de que el cooperativismo se constituyó como un “área temática en formación” (Olivera, 2008, p. 45), que surgió al interior, en las fronteras o en la confluencia de las tendencias historiográficas mencionadas, y que por tanto sentó sus bases en ellas. Las cooperativas han constituido al mismo tiempo actores económicos, organizaciones con objetivos sociales y en algunos casos gremiales, al presentar un particular marco doctrinario y amalgamar en su seno una diversidad de actores rurales y urbanos; esta particularidad motivó a los investigadores a la búsqueda de anclajes diversos que iluminaran un objeto que mutaba constantemente. Es por tanto un área que “surge en confluencia y diálogo con ciertas líneas de investigación histórica y con avances en el conocimiento producidos desde la corriente de pensamiento crítico de la economía social” (Olivera, 2008, p. 45), pero que comenzó a despegarse de ellas para constituirse en un subcampo específico.

Profundizar este recorrido para afianzarlo conlleva la necesidad de sistematizar el derrotero de los estudios sobre cooperativismo, analizar ausentes en la agenda y reconocer los desafíos a superar. La fragmentación devino una marca constitutiva y para superarla es clave dejar de mirar a los estudios sobre cooperativismo como un enfoque que ilumina problemas historiográficos surgidos en el marco de otras corrientes para pensar en la unidad del subcampo, integrado por enfoques diversos que han surgido desde las tradiciones mencionadas, pero que no dan cuenta del abanico de posibilidades que se abren desde éste.

Mencionamos a continuación unas breves notas teóricas que nos ayudaron a reflexionar sobre esta compleja problemática. Pierre Bourdieu (2013) conceptualizó a los campos como una “configuración de relaciones objetivas entre posiciones” (p. 1), las cuales van definiéndose por la posición de los agentes en relación a la distribución de especies de poder o capital. A medida que las sociedades se complejizaron el conjunto de los campos y subcampos se diversificó, dando lugar al surgimiento de espacios de relaciones objetivas que por su

especificidad desarrollaron “una lógica y una necesidad irreductibles a aquellas que rigen otros campos (p. 5)”. Cada etapa en la división de un campo involucró un salto cualitativo respecto de la anterior. Los subcampos conllevaron por tanto a un proceso de autonomización y diferenciación, producto de la acumulación de una historia particular. Fueron constituyendo en este sentido un espacio potencialmente abierto, cuyos límites se entienden como fronteras dinámicas y en constante movimiento.

La delimitación de los mismos involucró un proceso de definiciones que se hicieron desde dentro del campo o subcampo correspondiente. Delimitar qué es, cuáles son sus límites, qué capitales se disputaron, qué estrategias definieron sus agentes, desde qué tradiciones se nutrió, entre otras variables, debe formar parte de un proceso de investigación hermenéutico.

Si bien en la investigación de los campos y subcampos la primacía la han tenido las relaciones objetivas y no los individuos, es factible ingresar a aquellos a través de los agentes que los constituyen. El subcampo del cooperativismo se encuentra en proceso de autonomización y diferenciación producto de una historia particular; para adentrarse en el análisis de su lógica se hizo necesario analizar los autores representativos, en tanto que fueron pensados como puertas de entrada al mismo.

Con este objetivo, se consideró necesario, siguiendo a Olivera (2008), identificar algunos núcleos temáticos y enfoques relevantes en la agenda del cooperativismo.

Teniendo en cuenta las mismas raíces históricas del cooperativismo en Argentina a fines del siglo XIX, es indiscutible que parte de su agenda se dirimiera por un lado en la vinculación de las asociaciones cooperativas con los sectores chacareros y por otro al fenómeno de la acción colectiva en relación a la formación de estructuras de representación de los intereses de los sectores agrarios y agroindustriales. Una variante dentro de esta línea derivó en el análisis de las entida-

des de primer, segundo y tercer grado como formas de agregación de intereses. La vinculación del cooperativismo con el Estado también constituyó un punto de preocupación así como el impacto y la apropiación de las políticas públicas por parte de las diversas asociaciones. El análisis del derrotero histórico de cada una de ellas, teniendo en cuenta las variables mencionadas, motivó a algunos autores a construir categorías de análisis -tal como se mencionó-. El análisis del accionar de las mismas en el marco de los agro-negocios permitió pensarlas como entidades dinámicas y multimplantadas que gestionaron estrategias empresariales en su vinculación con el mercado y la sociedad civil.

Gracias a estos aportes es profundo el conocimiento acerca de la vinculación del Estado con las asociaciones cooperativas y federativas a través del análisis de las políticas públicas sectoriales -en particular las que tuvieron como destino al sector agrario en general o algunos de sus actores en particular, y las concepciones que subyacían a las mismas-, sobre todo en el período peronista (Lattuada, 2002; Girbal-Blacha, 2002; Mateo, 2002); pero también, aunque con menor profundidad, de otros períodos históricos (Lattuada, 1988 y 2006); también sobre los recursos y las estrategias específicas a través de las cuales fueron haciendo operativas las políticas agrarias peronistas, particularmente el crédito oficial (Olivera, 2006; Girbal-Blacha, 2003); sobre la evolución cuantitativa del movimiento cooperativo desde su contexto de surgimiento -fines del siglo XIX- y el salto que en ese sentido implicó la aplicación de las políticas públicas peronistas (Girbal-Blacha, 2003); sobre las características que asumieron las instituciones a medida que se modificaba el régimen social de acumulación; sobre cómo estas formas institucionales condicionaban los discursos y las prácticas, y cómo estos comenzaban a contradecirse a medida que se complejizaba el contexto económico; sobre cómo las vertientes institucionales en el marco de la multirepresentatividad de los actores del agro configuró diversos perfiles (Lattuada y Renold, 1997; Lattuada, 2006; Olivera, 2015), sobre las diferentes vertientes ideológicas del cooperativismo (Olivera, 2015) y sobre la articulación

entre organizaciones reivindicativas⁴ y asociaciones cooperativas; sobre las estrategias desplegadas por las asociaciones de segundo y tercer grado en determinadas coyunturas socio-históricas (Mateo y Olivera, 2006; Mateo, 2012; Olivera, 2015); sobre los procesos de institucionalización de la acción colectiva en referencia al capital social a través del análisis de una cooperativa de primer grado (Valdemarca, 2006).

Sin la intención de haber agotado el análisis de la agenda del cooperativismo y pretendiendo iniciar un debate desde un enfoque específico, se consideró que los aportes brevemente descriptos permitieron abrir líneas para problematizar el desarrollo historiográfico de los estudios sobre cooperativismo en tanto proceso de autonomización y diferenciación; pensarlo como un sub-campo dentro del campo más amplio de los estudios rurales implicó en parte que ya no puede seguir siendo analizado como un modo de mirar problemas historiográficos dentro de las áreas temáticas mencionadas, sino que debe ser considerado desde su especificidad, teniendo en cuenta las contribuciones realizadas a la complejización del conocimiento sobre la dinámica asociativa agraria en argentina desde una multiplicidad de enfoques que tendieron a comprender una realidad compleja y a veces contradictoria como son las cooperativas agrarias.

4 Lattuada (2006) diferenció entre las asociaciones de mayor nivel de formalización dos tipos ideales: las asociaciones reivindicativas se han caracterizado por llevar a cabo una defensa integral de todos los intereses de un colectivo determinado, por el carácter universalista de los fines, por tener un discurso fuertemente ideológico y porque sus funciones fueron esencialmente la representación, la reivindicación y la defensa de los intereses que los involucran. En cambio, las asociaciones no reivindicativas, entre las que se encuentran las cooperativas, defienden intereses de naturaleza económica, lo que ha hecho que sus acciones se orientaran a una agenda cerrada de temas o cuestiones y su discurso no fuera exclusivamente ideológico –sino más bien pragmático y orientado a fines-. Si bien el cooperativismo, como se mencionó, se puede ubicarse dentro de este último tipo ideal, lleva dentro de sí un sincretismo de ambos, “ya que si bien es indiscutible su organización como asociación económica (no reivindicativa), lo atraviesa y lo sostiene un discurso fuertemente ideológico, y participan de reclamos o realizan acciones que benefician directa o indirectamente a un universo más extenso que el de sus asociados” (p. 23).

Los estudios cooperativistas durante la etapa peronista: avances pensados desde una multiplicidad de enfoques.

Pudo afirmarse, según lo esbozado en el apartado anterior, que son diversos los enfoques existentes dentro del campo del cooperativismo agrario para analizar las múltiples dimensiones que la temática involucra. Algunos de ellos iniciaron su desarrollo desde la problematización del cooperativismo en el contexto del gobierno peronista, en tanto éste período marcó una transformación cualitativa y cuantitativa⁵ para el movimiento; las líneas abiertas contribuyeron a iluminar su desarrollo en otros períodos históricos, constituyendo una base necesaria e indispensable desde la que debe partir todo trabajo de investigación.

La diversidad de producciones relevantes para realizar un *paneo* historiográfico del cooperativismo durante el primer peronismo se analizó señalando a determinados autores que fueron pioneros al abrir líneas para pensar a las asociaciones cooperativas en el marco del primer peronismo. Enfoques, marcos teóricos y metodológicos diversos, así como propuestas conceptuales-analíticas para comprender la realidad empírica, caracterizaron a este mapa historiográfico.

5 Durante la etapa de la gestión peronista (1946-1955) se percibió una expansión numérica del cooperativismo, quintuplicándose, según Mateo (2012) el número de entidades y asociados, tomando como referencia el período anterior. Si se tiene en cuenta que en 1937 el número de cooperativas era de 278, en 1951 era de 944 (Girbal-Blacha, 2003), se comprende la expansión cuantitativa, en relación a los incentivos materiales y simbólicos de las políticas públicas (Olivera, 2015).

La transformación significativa del movimiento refirió por un lado a la expansión territorial y productiva que se produjo en este período, en tanto y en cuanto surgieron y/o se consolidaron cooperativas en territorios extrapampeanos -chaco y el litoral- así como se diversificaron en las diversas ramas productivas -aunque se debe reconocer el peso de las agrícola-ganaderas pampeanas-. En igual sentido, la multiplicación de funciones asumidas por las asociaciones cooperativas, adecuando los servicios a las características productivas del modelo sustitutivo, fue una variable a considerar. Los procesos de integración de segundo y tercer grado experimentaron en este período un crecimiento exponencial, al tiempo que se produjo una nueva articulación entre el Estado y las asociaciones cooperativas.

Iniciando este recorrido, se consideró necesario pensar en la relación entre los diversos sectores sociales agrarios y el peronismo a través de la gestión y la implementación de las políticas públicas. En este recorte, Lattuada (2002)⁶ analizó las diversas corrientes que problematizaron los fenómenos populistas en Latinoamérica, entendiendo que “el mayor inconveniente para encuadrar los casos en un único significado reside en la propia naturaleza contradictoria del fenómeno” (p. 3). La capacidad de mantener esa “unidad contradictoria” que hizo del populismo un medio de reestructuración de las relaciones de dominación sosteniendo similares relaciones de producción, radicó en el discurso político construido por el líder.

Se consideró pertinente dar cuenta de esta propuesta con el propósito de extraer consideraciones puntuales sobre el trasfondo de la gestión de las políticas públicas agrarias en ese contexto, a fin no sólo de comprender la trama de las mismas y las alianzas que las sostenían, sino también de esbozar un particular modo de análisis desde el cual pueden ser abordadas estas problemáticas en otros momentos históricos.

Luego del *crack* de 1929 se inició un cambio gradual en el régimen de acumulación vigente, estructurado en la exportación de productos agropecuarios de la región pampeana, en tanto que las condiciones internas y externas que lo sostenían comenzaron a redefinirse (Lattuada, 2006, p. 64) -aunque se han rastreado evidencias en el período anterior a la mencionada crisis que manifestaban signos de agotamiento-.

6 Se consideró necesario aclarar que la inclusión de Lattuada en este recorrido historiográfico se ha referido a los aportes realizados para pensar en la evolución y la dinámica del movimiento cooperativo y a los diversos actores agrarios como actores políticos desde categorías analíticas y/o conceptuales. Si bien el fundamento de su producción puede ubicarse en la Antropología Institucional, el anclaje histórico que los sostuvo lo convierte en un referente obligado.

El peronismo consolidó una economía sustitutiva de importaciones, autárquica, mercadointernista, que buscaba el pleno empleo y el aumento del consumo de la población a través de un estado interventor y planificador, que se sostenía y legitimaba en función a nuevas alianzas derivadas del redimensionamiento en las relaciones de dominación.

Las propuestas de política agraria, en el contexto electoral, definieron gran parte de su contenido en el marco de la puja política: se presentaban como “antioligárquica” y “antiterrateniente”, ya que los actores a los que se dirigían eran fundamentalmente los trabajadores rurales y los productores no propietarios. Pero el peronismo en el poder no llevó a cabo las acciones radicales propuestas, aunque sí sostuvo la alianza con medidas concretas que materializaron parte de los reclamos de los sectores claves en la misma; por otro lado, durante los dos primeros años de gobierno, se operó la traslación de ingresos desde el sector agropecuario hacia los sectores urbanos e industriales requeridos para sostener la redistribución a favor del sector industrial.

Luego de 1949 y la crisis en la balanza de pagos se inició la reorientación en las políticas agrarias tendiendo a recomponer las alianzas con los sectores tradicionales del agro en la búsqueda, a través de incentivos económicos, de un rápido aumento de la producción que permitiera soslayar los efectos negativos de la coyuntura económica. El discurso operó como un instrumento clave para ese acercamiento sin minar, al mismo tiempo, las relaciones con los sectores trabajadores urbanos y rurales, la pequeña y mediana industria, los productores no propietarios así como con los pequeños y medianos productores, que guardaban viva en su memoria los beneficios obtenidos de la mano del líder (Lattuada, 2002; Girbal-Blacha, 2003).

A pesar de estos desplazamientos, Lattuada caracterizó a las políticas públicas sectoriales durante el período 1946-1983 como un “(...) modelo que se mantiene a través de los diferentes gobiernos con

reducida elasticidad cualquiera haya sido su signo político” (Lattuada, 1988, p. 15) –trascendiendo el período al que se abocó este apartado–.

En el marco de esta línea de investigaciones también se pensó en las vinculaciones entre las diversas asociaciones representativas de los intereses del agro, y cómo las formas asociativas heterogéneas contribuyeron a cristalizar, en este contexto, una estructura segmentada de intereses (Lattuada, 2006).

Los análisis de políticas públicas deben por tanto, contemplar diversas cuestiones si lo que pretenden es problematizar la relación entre el estado y los diversos sectores agrarios, teniendo en cuenta las múltiples interdependencias y condicionamientos entre estos actores. La formulación de una “cuestión” pública, la inclusión de la misma en la agenda estatal, los sentidos que se construyen en torno a éstas, qué alianzas sostienen las políticas concretas, cómo interpretan los actores a las mismas y cómo éstas contribuyen a configurar subjetividades son algunos interrogantes para reconstruir esta dinámica (Oszlak y O’Donnell, 1995).

Siguiendo este recorrido, se consideró prioritario mencionar a Girbal-Blacha (2002, 2003). La autora contribuyó a comprender la dinámica del cooperativismo en el contexto específico del primer peronismo, marcando un quiebre con las corrientes historiográficas tradicionales en el análisis sobre el papel del agro, la evolución del mismo y las relaciones entre los actores del sector y los representantes del Estado. Vinculado a las consideraciones antes expuestas sobre la movilidad de las alianzas peronistas con los sectores agrarios los trabajos de esta autora, en una misma línea interpretativa, permitieron iniciar el recorrido en la evolución histórica del cooperativismo agrario.

La ruptura en el orden institucional y en el modelo de crecimiento luego del *crack* de 1929, supusieron la construcción de nuevas alianzas que sostuvieran el proceso industrializador. La adecuación de las políticas públicas que formuló el peronismo al nuevo juego de fuerzas se hizo siguiendo la matriz iniciada luego de la crisis: soste-

ner un proceso industrializador, reforzando el papel tradicionalmente agropecuario-exportador del país (Girbal-Blacha, 2002). Los discursos en tensión, manifestados por un lado por los representantes de las principales corporaciones del agro y por otro lado por el Estado, se construyeron sobre el desplazamiento de los sectores tradicionales del agro como protagonistas del Estado.

En este sentido, la autora definió dos etapas en la relación entre el peronismo y las asociaciones cooperativas: hasta 1949, momento de cruces, tensiones y discursos ríspidos y desde esa fecha, bajo el lema “la vuelta al campo”, un tiempo de acuerdos y reconocimientos mutuos. El Estado asumió respaldado por determinadas fuerzas económico-sociales, lo cual hizo de su autonomía un campo relativo (Oszlak y O’Donnell, 1995), en tanto que desconocer ese entramado hubiera minado la legitimidad política de las mismas.

La primera etapa en la definición de las políticas públicas peronistas se gestó en la alianza obrero-pequeña y mediana burguesía, trabajador rural-productor sin tierra-pequeño y mediano productor, en pos de sostener la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Lattuada afirmó en este sentido que las políticas públicas que afectaban directa o indirectamente al sector agropecuario no eran resultado de la influencia de los grupos de interés agrarios, sino

“consecuencia de conflictos de intereses más amplios que involucraban no sólo a éstos y al Estado, sino también a las asociaciones industriales y los sindicatos obreros; unas asociaciones cuyas cuotas de poder e influencia de consolidan en esta etapa en detrimento del poder terrateniente (2006, p. 69)”

El agro, relegado de su histórico protagonismo de las políticas públicas, no vio sin embargo alterado en profundidad su protagonismo en el desarrollo económico del país (Girbal-Blacha, 2002). Captar un electorado obrero, urbano y rural, en crecimiento, así como atraer a la burguesía a la órbita del Estado, eran los principales objetivos de

las políticas públicas del peronismo en la primera etapa. Tanto Girbal-Blacha en los trabajos ya mencionados, como Olivera (2015) y Lattuada (2006) sostuvieron que fue el componente electoral la principal motivación en este contexto. La mención a la “presión nacional sobre la tierra” (Lattuada, 2006) permitió entender las demandas al sector agrario para aumentar la producción en un contexto de disminución de su importancia relativa en la economía argentina incorporándolo en una red que lo situaba como fuente rápida y segura de financiamiento del Estado (p. 69).

La política mercadointernista y la redistribución del ingreso se vieron cuestionadas desde 1949, lo que llevó al Estado a recomponer el sistema de intereses económicos y por tanto las alianzas. Se inició así la segunda etapa mencionada. El agro volvió a ocupar el protagonismo estratégico en las planificaciones económicas y en las políticas públicas, permitiendo que se abriera otra articulación en las relaciones entre el Estado y las asociaciones cooperativas que, si bien armónica, no supuso por parte de éstas un acuerdo absoluto con ciertos aspectos de la gestión (Girbal-Blacha, 2002). El cambio de rumbo que se imprimió a la economía luego del 1949 modificó, por tanto, el esquema de alianzas prioritarias al reorientar la política económico-financiera. En este marco, el cooperativismo agrario fue pensado historiográficamente como un actor clave para reducir la intermediación comercial (Girbal-Blacha, 2001) o para descomprimir el conflicto social latente en el agro argentino (Olivera, 2013)⁷.

7 Ambas interpretaciones del cooperativismo en el contexto del peronismo implicaron variables empíricas de análisis diferentes: por un lado posicionarse en la mirada sobre las cooperativas como actores claves para reducir la intermediación ponderó los servicios o las funciones de estas asociaciones (comercialización de la producción, provisión de servicios de distinto tipo, plantas de procesamiento de materias primas); por otro, pensarlas como actores claves para descomprimir el conflicto social supuso enfocar el análisis en los mecanismos institucionales de agregación de intereses involucrados en la dinámica de las asociaciones cooperativas, como espacios de negociación y concertación. Las federaciones de cooperativas, cada una con sus particularidades, construyen mecanismos de agregación y mediación de intereses que ten-

Un mecanismo clave que utilizó el peronismo para incentivar el desarrollo del cooperativismo, ponderado por Girbal-Blacha (2001), fue el crédito oficial. Éste, si bien no estuvo ausente durante la primera etapa de la gestión, se intensificó cuantitativamente luego de la “vuelta al campo”, se hizo más flexible y se ramificó por los diversos sectores agrarios. Entre ellos, los productores por cuenta propia o a través de las cooperativas, fueron los principales destinatarios, en un contexto en que se apelaba a los clásicos incentivos económicos (Lattuada, 2002) para incrementar la producción.

En relación a los aportes descriptos en el apartado anterior acerca de la transformación del movimiento cooperativo en este contexto, Girbal-Blacha (2002 y 2003) analizó el salto cualitativo y cuantitativo que experimentó el mismo a raíz de las políticas de fomento incluidas en el Segundo Plan Quinquenal (1952-1955), tales como el crédito, la mecanización, los precios de comercialización favorables y el incentivo a la organización de sociedades cooperativas.

Realizando una interpretación general de las relaciones entre peronismo y cooperativas, Mateo (2012) planteó que los discursos amenazantes del peronismo en cuanto a la reforma agraria no tuvieron un correlato significativo en los hechos, lo cual permitió pensar en la gama de acuerdos que nutrieron los sentidos de las políticas públicas del contexto con el fin de sostener una alianza electoral. La crisis de fines de la década del 1940 implicó para el Estado la necesidad de revisar la planificación económica. Tratando de sostener la alianza anteriormente construida, y buscando al mismo tiempo un incremento de la producción agrícola y la disminución del consumo, se reforzó el papel estratégico del agro, otorgando especial relevancia al cooperativismo. (p. 6)

dieron a descomprimir los conflictos al encauzarlos institucionalmente.

La mirada de las autoras no desconoció ambos componentes en las representaciones sobre el cooperativismo que subyacían en las políticas públicas peronistas, sino que, en función a las perspectivas de investigación, priorizaron uno por sobre otro.

Las cooperativas constituyeron –y constituyen- al mismo tiempo una empresa que actúa en el medio económico y un movimiento social gestionado democráticamente, que desde sus principios doctrinarios pretendió la justicia y el progreso social. Según la autora (2006) de ello derivó que la meta educacional del cooperativismo cumpliera un rol relevante y se destinara un porcentaje de los retornos anuales hacia acciones concretas que difundieran los principios del movimiento y concientizaran acerca de la relevancia de estas asociaciones para el logro de un desarrollo sustentable. En el capítulo citado analizó también algunas iniciativas estatales que apuntaron a la formación de los recursos humanos necesarios para estas asociaciones (Ley 1.420, oficina de fomento de Cooperativas Escolares -1923-, la Ley de Cooperativas 11.388 -1926- destina el 5 % de los excedentes para acciones educativas). La inclusión dentro del Segundo Plan Quinquenal del concepto de economía social involucró en el entramado discursivo a las asociaciones cooperativas, entendiendo que las mismas constituían un andamiaje clave de la misma⁸.

En otro artículo (2002) analizó las particularidades del gobierno de Víctor Mercante en la provincia de Buenos Aires a través del análisis del discurso y las políticas concretas de esta gestión. Se consideró este análisis de vital importancia para reconstruir las particularidades provinciales en la resignificación de las políticas públicas peronistas.

Comprender el posicionamiento protagónico del cooperativismo en relación a otros actores del agro que imprimió el Segundo Plan Quinquenal desarrollado por Girbal-Blacha y Mateo en el marco de las políticas públicas peronistas, constituyó una variable analítica clave para comprender el cambio en la evolución histórica del movimien-

8 En *La economía social en la Argentina peronista (1946-1955). Una mirada desde el discurso oficial* (2013), Mateo analiza, junto a Ximena Carreras Doallo, la resignificación que hizo el peronismo de la teoría y la práctica cooperativa, a la que ubicó en el marco de la economía social, considerándola una tercera vía en la que coexistían los sectores privados capitalistas y el sector público bajo la tutela del Estado.

to cooperativo en diversas dimensiones. Por un lado en lo que atañe a su evolución estadística. Por otro, a las transformaciones en el mapa asociativo. Y finalmente, a los vínculos entre determinados cambios socio-económicos y el accionar cooperativo.

En relación a la segunda variable, se considera necesario señalar que las políticas públicas peronistas de incentivo al cooperativismo abrieron una etapa de reconfiguración del mapa asociativo: algunas de ellas, como por ejemplo, las casas de ramos generales, cuya dinámica se insertaba en el régimen social de acumulación agroexportador (Nun, 1987; Lattuada, 2006), iniciaron un proceso de reconfiguración institucional. Medianos y grandes productores encabezaron este proceso, el cual es factible de ser pensado como una decisión estratégica en pos de recuperar su posicionamiento en el mercado de la comercialización del cereal, apropiándose de los beneficios que proporcionaban el crédito⁹, las exenciones de impuestos, la distribución preferencial de maquinaria, entre otras medidas, en un contexto de recomposición de las relaciones entre el peronismo y los sectores agrarios dominantes¹⁰.

En cuanto a la última variable, el aporte clave de Olivera (2006) permitió pensar que el fenómeno de movilidad social ascendente -asociado a los cambios en el régimen de tenencia de la tierra y la estructura social agraria- encontró uno de sus factores causales en el accionar, tanto material como simbólico, del cooperativismo agrario.

9 En diversos trabajos (2006 y 2013) Olivera profundizó el análisis de la política crediticia del gobierno peronista para, luego de la “vuelta al campo”, incentivar el incremento de la producción, la racionalización en el uso de los factores productivos y la disminución de la intermediación. Las cooperativas fueron destinatarios claves de los diversos programas de financiamiento llevados a cabo a través del Banco Nación Argentina. El Banco Provincia de Córdoba se sumó a esta política estatal, manifestando una continuidad en cuanto a su prioridad de financiamiento de la producción agropecuaria provincial, aunque de manera intensificada y sistemática.

10 Esta conclusión, que en parte refiere a uno de los cambios cualitativos que evidenció el movimiento cooperativista durante el peronismo mencionados con anterioridad, derivó del análisis de caso que se encuentra en proceso de investigación y refiere a la estructura social y la dinámica asociativa de la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda.

Su histórica vinculación con el sector chacarero -entendiéndose por el mismo a los pequeños y medianos productores, así como a los arrendatarios y aparceros- se ha convertido en una marca originaria de este movimiento asociativo.

Olivera reconstruyó el mapa de las vertientes cooperativas del contexto así como de los perfiles institucionales que se fueron constituyendo, pensando a éstas como organizaciones sociales sostenidas en un marco doctrinario que ponderaba valores como la solidaridad y la igualdad entre sus miembros pero que al mismo tiempo debían insertarse competitivamente en el mercado.

La categoría de vertiente hace alusión al sustrato ideológico del cual se nutrían las identidades y las prácticas, y denota por tanto un proceso de producción de ideas que articulaba componentes tales como la base social, las alianzas, las disputas, las tensiones con otros gremios y con el Estado, así como orientaciones y filiaciones ideológicas diversas. Estos componentes ideológicos se plasmaron institucional y organizacionalmente en diferentes perfiles, concepto que remite a la concreción material de los mismos en las acciones de las diferentes asociaciones (2015).

Ambas categorías constituyen un andamiaje analítico clave para las investigaciones que procuren estudiar casos específicos, ya que posibilita la reconstrucción del desarrollo histórico de las cooperativas ponderando variables como la base social, el modelo organizacional, los discursos y las estrategias que se fueron tejiendo, entre otras, pensadas de modo dinámico. Es decir, permiten focalizar el análisis en las dinámicas internas, y cómo estas se van transformando según se modifiquen las condiciones económico-estructurales y político-institucionales en las que operan los actores involucrados. En esta última dirección, y a partir de trayectorias específicas, es factible profundizar el conocimiento de las decisiones, las estrategias, los discursos, las identidades, entre otras variables.

Como se mencionó, Olivera (2015) identificó tres vertientes en el desarrollo del cooperativismo durante el siglo XX: el primero articulado en torno a la representación gremial, el segundo en función al gerenciamiento eficiente y profesional de la administración cooperativa y el tercero en base a la construcción de un modelo particular de agroindustria ponderando la competitividad productiva y comercializadora de tipo empresarial.

Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y SanCor Cooperativas Unidas Limitadas fueron identificadas por la autora como las asociaciones federativas del cooperativismo que representaban cada una de las vertientes mencionadas en el párrafo anterior respectivamente.

Los objetivos, la base social, los lineamientos gremiales o políticos, los modelos organizacionales, los componentes ideológicos e identitarios y los discursos diferentes en cada una de las vertientes tejieron diversos procesos de alianza y/o conflicto tanto entre las asociaciones como entre éstas y el Estado. Las cooperativas de primer grado a ellas adheridas, si bien no replicaron el perfil que derivaba de la vertiente que representaba la asociación a la que se vinculaban, sí adquirieron características que se acoplaban a ellas.

FAA se posicionó, desde su surgimiento en 1912, como la entidad defensora de los intereses de los pequeños y medianos agricultores y de los arrendatarios. Los socios gremiales ingresaban en cooperativas locales primarias que estaban organizadas y formaban parte de la Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias (FACA), creada en el marco del peronismo como asociación de segundo grado con el fin de intervenir en los canales de comercialización y crédito que se intensificaron para este tipo de asociaciones luego de la llamada “vuelta al campo”. La organización institucional de la misma permitía que, tras diversos niveles de agregación (en el caso de FAA: niveles central, seccional y comarcal, y en el de FACA: cooperativas de primer grado vinculadas) se diera participación a los asociados,

posibilitando que la dirigencia conociera y encauzara los posibles conflictos desde su punto de origen. En este proceso de negociación con los grupos específicos, jugaban un papel relevante los diferentes incentivos materiales de las políticas públicas peronistas, en tanto la distribución de maquinaria, semillas, cupos de transporte, la gestión y/o el otorgamiento de créditos, entre otros, constituyeron elementos que se dirimían en la arena política de la institución. El cooperativismo que se desarrolló bajo el manto de FAA se estructuró en función a la defensa del pequeño y mediano productor así como del arrendatario a ellos adheridos.

Se consideró importante destacar la postura de FAA en cuanto al análisis que realizaba de la transformación de la base social del cooperativismo, en tanto que cuestionó el “cooperativismo terrateniente” (Olivera, 2015) como un efecto colateral de las políticas públicas peronistas, dando a entender que de algún modo se alejaban de la esencia del verdadero asociacionismo agrario.

ACA no se definía como un gremio -lo cual según Olivera (2015, p. 232) es contradictorio, ya que la asociación esgrimía demandas colectivas frente al Estado- sino como una cooperativa de segundo grado que representaba un arco amplio de intereses agropecuarios. No obstante el discurso, en la práctica nucleaba a las cooperativas cuya base social estaba constituida mayoritariamente por medianos y grandes productores. El componente que marcó la construcción identitaria de ACA lo constituía la “prestación profesional de servicios” a las cooperativas de primer grado en pos que cada una de ellas articulara una gestión organizativa de tipo racional-empresarial. La unificación de normas para la elaboración de memorias y balances, la creación de un sistema de estadística, así como de la carrera administrativa se encontraban entre las medidas implementadas. Éstas eran operativizadas través de diversos dispositivos de capacitación tanto a los gerentes como a los equipos directivos de cada una de ellas, congresos cooperativos regionales y asambleas de gerentes.

El cooperativismo lácteo, particularmente representado a nivel nacional por SanCor, articuló un discurso y una práctica asociativa que permitió a la autora caracterizarla como promotora de un particular modelo de agroindustria (p. 237). Los incentivos tanto ideológicos como materiales, entre los que pudieron citarse la sanción del Estatuto del Tambero-Mediero, el incremento de los precios pagados a los productores de leche asociados a cooperativas, la devolución de los retornos al finalizar cada ejercicio, los incentivos a la mecanización y la tecnificación de los tambos y al mejoramiento de las razas, la reivindicación en el espacio público de algunas demandas claves para el sector -como la liberación de los mercados- contribuyeron a explicar por un lado el incremento en el número de tamberos-propietarios y por otro la expansión del cooperativismo, percibido como una forma societaria más adecuada para el mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización que la empresa privada.

Para finalizar este recorrido, y porque habilita nuevos enfoques, se consideró pertinente mencionar la consideración de los agricultores y los ganaderos como actores políticos. Lattuada (2006) analizó la participación del asociacionismo agrario en las “(...) dinámicas de representación de intereses y en los procesos de formulación y puesta en marcha de políticas públicas” (p. 41). En una lectura crítica de los referentes teóricos desde los cuales se han analizado las relaciones entre Estado/sociedad civil, propuso una articulación en lo que dejaban de ser pensados como niveles exclusivos de análisis¹¹: el pluralismo y su ponderación de lo individual, la perspectiva dirigenal o corporatista y la preeminencia de las variables organizacionales y el clasismo y el peso dominante otorgado a los componentes estructurales. En función a ello, cambió la posición para entender la acción colectiva y los actores en ella intervinientes. Si para el primer grupo teórico las organizaciones son grupos de coalición de intereses indi-

11 Un pionero en la necesidad de articular los niveles estructural-económico, político-institucional e ideológico-cultural es Acuña (1994).

viduales, para el segundo son organizaciones que se constituyeron en instrumentos de dominación y para el tercero, agentes no autónomos insertos en instituciones que los condicionaban.

Durante el peronismo se favoreció un sistema corporativista de mediación en las relaciones Estado/sociedad civil. En este marco, la estructura de representación de los intereses agropecuarios se hizo más compleja y fragmentada (p.72), lo mismo que la organización económico-social. Cristalizó una estructura segmentada de representación de intereses, caracterizada por una multiplicidad de formas asociativas. El cooperativismo ocupó un lugar importante en este marco. Durante todo el período que abarcó el RSA sustitutivo, los cuatro referentes del asociacionismo no reivindicativo “(...) en forma conjunta o alternativa se constituyen en los interlocutores válidos y excluyentes del sector” (p. 87). La situación cambió en la década de 1990, cuando el sector financiero comenzaba a jugar un rol clave en los procesos de toma de decisiones del contenido de las políticas públicas “(...) mientras que aquellos actores corporativos que hasta la etapa anterior habían jugado ese rol eran desplazados a un plano secundario en el nuevo RSA” (p. 91).

Avances y pendientes en la agenda. Indicios para profundizar el debate.

Sin ánimo de haber agotado el análisis de la producción sobre cooperativismo, y en la convicción de que se ha dado cuenta de los avances fundamentales del campo, se consideró pertinente esbozar algunas cuestiones pendientes que se visualizaron en la agenda expuesta.

En primer lugar, se planteó que es necesario profundizar la indagación sobre el desarrollo histórico del cooperativismo durante las décadas de 1960 y 1970, en un contexto de transformación productiva

e institucional y de políticas públicas sectoriales tendientes a la cristalización de un cooperativismo de corte empresarial. Desde una perspectiva neoinstitucional, Lattuada (1997, 2006) abrió caminos para pensar cómo se fue modificando la estructura de representación de intereses cuando en 1960 los temas de colonización y arrendamiento pasaron a un segundo plano en beneficio del debate sobre la imposición fiscal sobre el agro y/o cuando en 1970 comenzó a hacerse extensivo el modelo tecnológico, y los créditos ya no fueron subsidiados por el Estado, sino que se establecían en función a la inflación. El peso de las asociaciones representativas como actores que desempeñaban roles claves en la construcción del sentido y en la atribución del contenido de las políticas públicas sectoriales disminuyó progresivamente hasta llegar a un punto crítico en la década de 1990, momento en que se definió un nuevo régimen de acumulación basado en “la apertura económica unilateral y la desregulación económica sin definición de sectores estratégicos en el marco de un régimen político democrático liberal” (Lattuada, 2006 p. 93).

En este marco se abrieron un abanico de posibilidades que, en función a las decisiones y estrategias, diversificaron las trayectorias asociativas. Un porcentaje de cooperativas sucumbieron ante las presiones fiscales de las deudas contraídas desde la década de 1970 para transformar las unidades productivas de sus socios, pequeños y medianos productores en general, en función a los requerimientos del modelo tecnológico y profesionalizante de la agricultura. Otras, en cambio, iniciaron un proceso de inserción exitosa en el modelo del agronegocio (Martini y Poggetti, 2012), desarrollando diversos procesos de reestructuración institucional ¿Puede decirse que estas cooperativas se consolidaron en el mercado porque optaron por estrategias de tipo empresarial? ¿Qué diferencia hay entre una empresa que sigue los lineamientos del agronegocio y una cooperativa que se basa en el mismo esquema de pensamiento y trabajo? ¿Qué discursos se construyeron sobre estos procesos? ¿Los procesos de depuración societaria formaron parte de ese proceso? Y las que decidieron disolverse ¿lo

hicieron por sostener la balanza inclinada sobre los principios rochdalianos? ¿Puede esta disminución cuantitativa explicar por sí misma el crecimiento de cooperativas ligadas a los principios de la economía social? ¿Puede pensarse a las organizaciones cooperativas como ámbitos de defensa y agregación de intereses entre actores que resisten al agronegocio? Si así fuera ¿Qué características asumen?

En un contexto extremadamente competitivo y en el que las cooperativas que lograron adaptarse a las transformaciones requeridas para insertarse exitosamente en el mercado del agroalimentación estructuraron estrategias de tipo empresarial ¿Siguen siendo los objetivos de las asociaciones de este tipo las de mejorar la posición de los productores en el mercado? Y si es necesario relativizar este principio ¿Cuáles son entonces los objetivos institucionales? ¿Cómo se reestructuran los procesos, tanto individuales como colectivos, de definición identitaria?

Es necesario hacer un paréntesis para mencionar los análisis que en este sentido se han realizado desde la Sociología, indagando la reconfiguración en las “figuras” productivas, el surgimiento de megaempresas, el impacto del modelo biotecnológico agrario, entre otras variables del proceso que cristalizó en los 90 (Gras y Hernández, 2013). Al mismo tiempo, desde la Geografía rural se llevaron a cabo indagaciones que tendieron a comprender las nuevas dinámicas territoriales que impuso el modelo del agronegocio, así como los usos del territorio en una agricultura globalizada. Los estudios cooperativistas, sin perder el eje que propone la particularidad de su enfoque, pueden nutrir determinadas líneas de investigación con los aportes mencionados tanto desde la Sociología como desde la Geografía.

En segundo lugar, queda el camino abierto, desde el marco de la historia de empresas, para correr el foco del análisis de diversas dimensiones de las asociaciones a los empresarios e indagar en la trayectoria tanto de socios como de dirigentes. No se han rastreado trabajos de investigación sobre cooperativas agrícolas desde este enfoque,

el cual se consideró relevante puesto que las dinámicas colectivas no explican *per se* la definición de prácticas y estrategias ni dan cuenta cabal de los procesos de atribución de sentido. Lejos de proponer un análisis centrado en individualidades como colección de datos específicos, se propone problematizar dimensiones asociativas hasta ahora relegadas y que tienen relevancia en la definición material y simbólica de las mismas.

En tercer lugar, se consideró necesario reconceptualizar el área de inserción de las asociaciones. Por lo general, si bien el núcleo de las actividades de las cooperativas agropecuarias anclaba en el espacio rural, su residencia era urbana y generaban funciones que impactaban en el desarrollo de las localidades y/o ciudades en las que se insertaron. Resulta importante estudiar el impacto en el desarrollo local/regional que involucra a los actores del cooperativismo, la incidencia sobre las dinámicas del espacio rural y urbano y, por ende, las nuevas territorialidades a las que dieron lugar y que contribuyeron -en muchos casos- a reconfigurar los espacios.

En este sentido, la categoría “pacto territorial” (Albaladejo, 2013) permitió pensar en la reconfiguración de las dinámicas de lo urbano y lo rural en el marco del modelo del agronegocio, entendiendo que se produjo un desacople entre las lógicas sociales y económicas a nivel de los territorios y que lo agrícola se distanció de lo rural, abriendo caminos para pensar en la reorganización de los criterios de pertenencia e identidad territorial.

Finalmente, creemos necesario explorar con mayor detenimiento la inserción del accionar de las cooperativas en el marco del agronegocio, problematizando -en relación a lo expuesto anteriormente- cómo y en qué medida se modificó su base social, qué decisiones se tomaron para gestionar estrategias empresariales en su vinculación con el mercado y la sociedad civil, cristalizando en estructuras institu-

cionales dinámicas y funciones asociativas multi-implantadas (Bageneta, Arce y Mateo, 2016; Gras, 2009)¹².

Un aspecto importante para señalar en ese proceso fue el desplazamiento de los anclajes identitarios de los sujetos agrarios (Muzlera, 2009), percibiéndose pautas de comportamiento empresarial sustancialmente diferentes a otros períodos históricos que permitieron plantear la vigencia de un nuevo sujeto social, el ‘empresario innovador’, capaz de hacer frente a la cada vez más compleja red de producción para permanecer competitivo. En su perfil ocupó un lugar de primacía la formación-competencia en gestión empresarial que incluso tuvo su expresión institucional en entidades que dejaron en segundo plano la actuación gremial y cooperativa y que se enfocaron en aspectos técnicos y organizacionales.

En este nuevo tipo social la experticia agronómica y la comprensión del mundo rural -heredadas de generación en generación- pasaron, si se quiere, a un segundo plano. El rol del conocimiento fue advertido, entonces, en dos niveles: por un lado, en su faz de ‘formación’ de competencias necesarias para conducir el negocio agroalimentario y, por el otro, en tanto factor directo de producción, en su versión ampliada, como tecnología de la información y de la comunicación, biotecnología, instrumentos de precisión, gestión del capital social, marketing, etc. (Gras, 2009a; Gras, 2010; Hernández, 2009; Gras y Hernández, 2009; Gras y Hernández, 2013 y 2013a).

En ese marco, las dinámicas asociativas se han estudiado con mayor profundidad para las entidades no reivindicativas –en términos

12 Desde el ámbito de la sociología rural se ha proporcionado una caracterización exhaustiva del modelo del agronegocio y las consecuencias para los sujetos agrarios. No solo se hace hincapié en la expansión del paquete tecnológico asociado al cultivo de la soja sino que también se examinan las nuevas tramas socio-productivas que abren paso a una nueva agricultura dominada por la lógica de los “negocios”, por el mercado, con pocos vestigios de la presencia de mecanismos extraeconómicos (Gras, 2009; Gras y Hernández, 2009 y 2013).

de Lattuada (2006)– como AACREA o AAPRESID, entidades que nuclearon al nuevo empresariado rural y que se convirtieron en usinas de la difusión de los saberes y prácticas del agronegocio (Alapín, 2008, Flood, 2007; Gras, 2009; Gras y Hernández, 2013; Liaudat, 2015). Menos relevante fue el lugar que ocupan las cooperativas y su vinculación con el agronegocio (Hernández y otras, 2013; Bageneta, 2015).

Consideraciones finales

A partir del recorrido realizado se pretendió motivar el debate en relación a la consideración de los estudios cooperativistas ¿Es el cooperativismo una línea de investigación dentro de campos historiográficos como la Historia de Empresas o la Historia Agraria? ¿O un área temática que surgió en las fronteras e intersecciones de los mismos? ¿Puede pensarse como un subcampo historiográfico autónomo? Las respuestas a estos interrogantes involucran consecuencias epistemológicas diferentes.

De lo expuesto se desprende que el cooperativismo puede pensarse como un área temática en consolidación, que hunde sus raíces en diferentes áreas y que se encuentra atravesando un sólido recorrido para definir enfoques específicos –conceptuales y metodológicos- que le permitan abordar, con la multiperspectividad necesaria, las diversas dimensiones de un objeto de estudio complejo y dinámico.

Profundizar este desarrollo consolidando los aportes y avanzando en un proceso de definiciones que permita reconocer las fronteras (con tradiciones de análisis en vías de consolidarse como propias, con un acervo de producciones relevante y publicaciones numerosas, con equipos de investigación en expansión) implica diversos procesos: profundizar en la construcción de marcos conceptuales y analíticos específicos, llevar a cabo sistematizaciones que den cuenta del estado de la cuestión y que permitan continuar un desarrollo sobre bases firmes y ahondar en el conocimiento de realidades específicas que seguramente contribuyan a iluminar problemas.

Afianzar este proceso de autonomización y especialización, asumiendo el camino recorrido y poniéndolo en debate, posibilita pensarlo como un sub-campo del saber, estudios que desde su especificidad permiten comprender dinámicas y procesos que de otra manera quedan solapados, diluyendo sus particularidades y disminuyendo la relevancia económica, política y social de desarrollos que surgen en su seno pero que lo trascienden para cambiar relaciones sociales y productivas.

Referencias bibliográficas:

- Acuña, C. (1994). *El análisis de la burguesía como actor político*. Seminario: Empresas y Estado en América Latina. Balance y perspectivas. VI seminario organizado por el grupo de trabajo “Empresarios y Estado” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 28 al 30 de diciembre, México DF, México.
- Albaladejo, C. (2013). Dinámica de la inserción territorial de la agricultura pampeana y emergencia del agribusiness. En: Grass, C. y Hernández, V. *El agro como negocio: producción, sociedad y territorios en la globalización*. Editorial Biblos: Buenos Aires.
- Alapin, H. (2008). Rastrojos y algo más. Historia de la siembra directa en Argentina. Buenos Aires: Teseo/Universidad de Belgrano
- Bagenta, J. M.; Arce, A. de; Mateo, G. (2016). *Entre la economía social y el mercado. Reflexiones para un debate abierto en el agro latinoamericano*. (Comp.) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Intercoop.
- Bourdieu, P. (2002) *Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto*. Editorial Montessor: Buenos Aires.
- Bourdieu, P. (2013). *La lógica de los campos y hábitos*. Entrevista Sociólogos. 23 de junio.
- Carreras Doallo, X. y Mateo, G. (2013). *La economía social en la argentina peronista (1946-1955) Una mirada desde el discurso oficial*. E.I.A.L., Vol. 24-Nº 2. Pp. 79-104.
- Cruz, M. (1991). *Filosofía de la historia. El debate sobre el historicismo y otros problemas mayores*. Ediciones Paidós: Buenos Aires.

- Díaz de Kóbila, E. (2007-2010). *Metodología de las Ciencias Sociales*. (4ta reimpre-
sión). Editorial Biblos: Buenos Aires.
- Flood, C. (2005) “Trayectorias institucionales comparadas de innovación tecnológica
en la región pampeana”. En: Benecia, R. y Flood, C. *Trayectorias y contextos.
Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa*. La Colmena, Buenos
Aires.
- Girbal-Blacha, N. (2002) *Políticas públicas para el agro se ofrecen. Llamar al estado
peronista*. Mundo Agrario. Vol. 3, n° 5.
- _____ (2003). *Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista
(1946-1955). Una interpretación histórica de sus decisiones político-económi-
cas*. Universidad Nacional de Quilmes: Bernal.
- Gras, C. (2009). *La agricultura familiar en el agro pampeano: desplazamientos y
mutaciones*. En: Cerdá, J. M. & Gutiérrez, T. (2009). *Trabajo agrícola. Expe-
riencias y resignificación de las identidades en el campo argentino*. Ediciones
Ciccus: Buenos Aires.
- Gras, C. (2009a). “El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y los dilemas
de sus organizaciones”, en GRAS, Carla & HERNÁNDEZ, Valeria (2009). *La
Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires:
Biblos.
- Gras, C. & Hernández, V. (2013). “Asociatividad del empresariado agrícola en Ar-
gentina. AACREA y AAPRESID en perspectiva”, en Muzlera, J. & Salomón,
A. (coords.). *Sujetos sociales del agro argentino. Configuraciones históricas y
procesos de cambio*. Rosario: Prohistoria.
- Iggers, G. (1998). *La ciencia histórica en el siglo XX. Una visión panorámica y críti-
ca del debate internacional*. Idea Books S.A.: Barcelona.
- Lattuada, M. (1988). *Política agraria y partidos políticos (1946-1983)*. Centro Editor
de América Latina: Buenos Aires.
- _____ (2006). *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina.
Transformaciones institucionales a fines del siglo XX*. 1er ed. Buenos Aires,
Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.
- Lattuada, M. y Renold, J. M. (1997). *Morfología institucional y discurso en el coo-
perativismo agropecuario*. V Congreso Argentino de Antropología Social. La
Plata, Argentina.

- Martini, M. A. y Poggetti, R. S. (2013). *Nacer y avanzar con el cooperativismo. 60 años de la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda.* Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Intercoop.
- Mateo, G., (2013). *La economía social en la Argentina peronista (1946-1955). Una mirada desde el discurso oficial.* Vol. 24, N° 2: E.I.A.L.
- Mateo, G. (2012). *Cooperativas agrarias y peronismo. Acuerdos y discrepancias. La asociación de cooperativas argentinas.* Buenos Aires, Argentina: CICCUS.
- Moglia, L. (2013). Un movimiento con historia. El cooperativismo agrícola en el Chaco entre 1926 y 1994. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Bernal: UNQ. [Inédita].
- Nun, J. (1987). “La teoría política y la transición democrática”, en Nun, J. & Portantiero, J. C. (comps.). *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina.* Buenos Aires, Argentina: Puntosur.
- Olivera, G. y Mateo, G. (2006). “Corporaciones agrarias y cooperativismo en la Argentina peronista (1946-1955). Un estudio comparativo entre la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)”. En: Olivera, G. (Comp.) (2006). *Cooperativismo agrario: Instituciones, Políticas Públicas y Procesos Históricos.* Córdoba, Argentina: Ferreyra Editores.
- Olivera, G. (2006). “La conformación histórica de una institución paradójica: un diseño gremial-cooperativo. El caso de una cooperativa asociada a FACA durante los primeros gobiernos peronistas”. En: Olivera, G. (Comp.) (2006). *Cooperativismo agrario: Instituciones, Políticas Públicas y Procesos Históricos.* Córdoba, Argentina: Ferreyra Editores.
- _____ (2006a). *Cooperativas, crédito estatal y desarrollo rural. Una primera aproximación a su estudio en el caso de Córdoba (1940-1960).* Mundo Agrario. Vol. 6, n° 12.
- _____ (2008). *El cooperativismo agrario, los chacareros y la renovación de la historia rural.* E-L@TINA: Buenos Aires; vol. 6 p. 31 – 48.
- _____ (2012). *Cultura cooperativa y gestión empresarial en la cuenca lechera cordobesa-santafecina. Argentina, fines del siglo XIX a 1970.* América Latina Historia Económica. Año 20, N° 1. Pp. 199-232.
- _____ (2013). *Cooperativismo agrario, colonización y gremios rurales durante los dos primeros gobiernos peronistas.* XIV Jornadas Interescuelas/Departa-

mentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

- _____ (2015). Cooperativas y gremios chacareros como piezas claves en la policía agraria peronista. En: Graciano, Osvaldo y Olivera, Graciela (Comp.). *Agro y política en la Argentina. Tomo II. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo 1943-1955*. CICCUS: Buenos Aires.
- Oslak, O. & O'Donell, G. (1995). *Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación*. *Redes*, vol. 2, núm. 4. Pp. 99-128.
- Pagano, N. (2010). "La producción historiográfica reciente: continuidades, innovaciones, diagnósticos". En: Devoto, F. (Ed.) *Historiadores, ensayistas y gran público. La historiografía argentina 1990-2010*. Editorial Biblos: Buenos Aires.
- Serna, J. y Pons, A. (2003) En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis. Universidad Autónoma del Estado de México. *Contribuciones desde Coatepec*, Vol. II, N° 004. Toluca, México

Territorialidad y multiescalaridad, dimensiones inherentes a los conflictos socioambientales.

Un análisis de las relaciones de un movimiento socioterritorial en disputa por el agronegocio

María Eugenia Isidro

Introducción

Desde comienzos del siglo XXI América Latina atraviesa un nuevo ciclo basado en la extracción y exportación masiva de bienes naturales que, en la mayoría de los casos, provoca fuertes resistencias por parte de las poblaciones y conflictos socioambientales. Argentina y la provincia de Córdoba no han sido una excepción en este contexto. Con el agronegocio como la actividad económica más importante y la soja como principal *commodity*, en la provincia se han generado diferentes conflictos en los que se confrontan intereses contrapuestos.

Los actores que se oponen al modelo del agronegocio se movilizan, se organizan y, en tanto sujetos políticos, constituyen movimientos socioterritoriales (Fernandes, 2006) que se encuentran insertos en un entramado complejo de disputas y alianzas. Por un lado, se enfrentan a los intereses privados de empresas nacionales o extranjeras y a las decisiones de los gobiernos en sus diferentes niveles y por el otro, establecen relaciones que les permiten hacer visibles sus reclamos no

sólo en el ámbito local sino también en otras escalas. De esta manera aparecen fuertemente vinculadas la territorialidad y la multiescalaridad, dos dimensiones que no solamente permiten caracterizar a los movimientos sociales de carácter ambiental (Svampa, 2006) sino también a los conflictos de los cuales estos son parte.

En este trabajo, que constituye el avance de una investigación más amplia¹, se analiza cómo las dimensiones de la territorialidad y la multiescalaridad atraviesan las relaciones que establece un movimiento socioterritorial específico que resiste a los embates del agronegocio desde el sur de Córdoba: la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos.

El trabajo está organizado en tres grandes partes. En la primera se hace una caracterización del modelo neoextractivo en general y del agronegocio en particular; en la segunda, se profundiza en las acciones de resistencia que surgen vinculadas a los conflictos socioambientales y, en última instancia, se efectúa el análisis específico del caso. Los datos trabajados provienen, principalmente, de la observación participante realizada durante las reuniones del movimiento y de la indagación documental.

La realidad latinoamericana: bienes naturales como mercancías

América Latina vive una etapa regida por lo que Maristella Svampa(2006)llama el *Consenso de los Commodities*, es decir, por una organización de la economía basada en la dependencia de la extracción intensiva de bienes naturales, con muy bajo valor agregado, des-

1 Tesis de Maestría titulada “Movimientos Socioterritoriales: relaciones e identidad. El caso de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos” (Maestría en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. En proceso)

tinados a la exportación a gran escala y cuyo precio se fija internacionalmente.

En términos de David Harvey (2005) esta etapa actual del desarrollo del capitalismo neoliberal está caracterizada por un proceso de “acumulación por desposesión” del cual el modelo extractivo es constitutivo. El mismo es impulsado por las grandes empresas nacionales y transnacionales que dominan sectores claves de la producción y comercialización, así como las tecnologías de última generación utilizadas en estos procesos.

Cuando hablamos de neoextractivismo nos referimos a megaproyectos extractivistas como la minería a cielo abierto, los agronegocios o el fracking, actividades que tienen múltiples aspectos en común (Giarracca y Teubal, 2013):

- Se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas y por lo tanto no son esenciales para la vida de las comunidades.
- Son actividades que generan mucho valor de cambio, grandes rentabilidades para algunos agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad.
- Se remiten a escalas de producción mayores a las tradicionales desplazando multiplicidad de actividades preexistentes.
- Generalmente están relacionadas con la generación y apropiación de “rentas diferenciales a escala mundial” (Giarracca y Teubal, 2013, p.4) de los recursos naturales.
- La actividad extractiva es altamente rentable. Los bajos costos internos generados por la fertilidad de la tierra y la gran disponibilidad de recursos mineros o petrolíferos se suman a la tendencia alcista en los precios internacionales de los commodities.
- Tienen una localización específica porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados bienes naturales.

- Significan actividades con alto consumo de recursos no reproducibles, como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad.
- Son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales).
- Desplazan masivamente a trabajadores rurales y al campesinado a la agroindustria generando, al mismo tiempo, un proceso de migración desde el campo a la ciudad.
- No siempre son considerados los “costos” sociales, económicos, culturales, medioambientales y sobre a la salud humana que estas actividades tienen.

En definitiva, el neoextractivismo latinoamericano está caracterizado por un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de bienes naturales (cada vez más escasos y en gran parte no renovables) así como también de la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados improductivos. Prima la exportación de bienes primarios a gran escala llevada a cabo por megaempresarios capital-intensivos cuyos actores intervinientes por lo general son grandes corporaciones transnacionales; generando así una dinámica territorial cuya tendencia es el avance constante y la ocupación intensiva del territorio para el monocultivo o la monoproducción, que trae como consecuencia el desplazamiento y/o destrucción de otras formas de producción y economías locales/regionales (Svampa, 2016).

El agronegocio en Argentina

Por el año 2007, Norma Giarracca ya sentenciaba: “Argentina es uno de los países de América Latina que más expone su territorio y sus recursos naturales a los procesos de privatización y apropiación por parte del gran capital transnacional” (p. 3). De hecho, el modelo de agronegocios caracterizado por el uso de la biotecnologías con están-

dares internacionales ha colocado a Argentina entre uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos lo que ha generado un crecimiento de las exportaciones y la economía nacional al mismo tiempo que ha significado una reestructuración del sistema agrario tradicional (Svampa y Viale, 2014). Se trata de un proceso novedoso, ya que por siglos la agricultura tendió a ser sustentable reproduciendo los recursos extraídos de la naturaleza. Sin embargo, dos hitos marcan el cambio radical en la forma de producción agraria: 1) a partir de la década de 1970, se produjo un intenso proceso de expansión sojera en el país, basado en la preferencia de este producto agropecuario en detrimento de otros; y 2) a mediados de los años 90 se libera al mercado la soja transgénica, cambio que trae aparejado un nuevo paquete tecnológico basado en la siembra directa y el uso masivo e intensivo de agroquímicos provocando, al mismo tiempo, la expansión de la frontera agraria y un fuerte impacto socio ambiental -acaparamiento de tierras, pérdida de bosques nativos, entre otros- (Gras y Hernández, 2013).

De esta manera se abre paso a la consolidación del *agronego-cio* en Argentina, sistema que además propicia el control, por parte de grandes empresas transnacionales, de sectores clave del sistema agroalimentario argentino. En este marco Monsanto, empresa transnacional, principal proveedora de semilla en el mundo (comprada en el año 2016 por la también multinacional Bayer), acrecienta sus ganancias con la difusión de la semilla transgénica dado que una vez establecida en el mercado, los productores agropecuarios se ven obligados a comprársela año tras año.

Las resistencias al neoextractivismo

Las actividades neoextractivistas que se imponen sin el consentimiento de las poblaciones generan fuertes divisiones en la sociedad y

resistencias colectivas. Una de las consecuencias de la profundización de las acciones extractivistas en América Latina ha sido la emergencia de conflictos socioambientales que son definidos por Svampa y Viale (2014) como “aquellos ligados al acceso y el control de los bienes naturales y el territorio, que suponen por parte de los actores enfrentados intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder” (p. 33).

Las resistencias latinoamericanas al neoextractivismo se oponen al despojo de los bienes comunes, entendidos éstos como aquellos que, por su carácter de patrimonio natural, social, cultural, pertenecen a la comunidad toda y poseen un valor que excede cualquier precio (Svampa y Viale, 2014). En este sentido, las comunidades remarcan la necesidad de mantenerlos fuera del mercado oponiéndose así al concepto de *commodity*, concepción desde la que se los piensa como mera mercancías.

Los actores involucrados en estos conflictos socioambientales (gobiernos, empresas multinacionales y vecinos autoconvocados) disputan el acceso, conservación y control de esos bienes comunes. En este contexto, tienen que enfrentar directamente la acción de las grandes empresas nacionales y transnacionales, actores hegemónicos del modelo extractivo-exportador. Mientras que en el plano local deben confrontar con las políticas y decisiones de aquellos que gobiernan una ciudad, una provincia o el país. Al mismo tiempo “deben librar una batalla cultural inmensa e imprescindible, pues confrontan con un modo de vida hegemónico que se ha generalizado no sólo en los países del Norte, sino también en los del Sur” (Svampa y Viale, 2014, p. 36). En este sentido, la disputa no es sólo material sino también simbólica.

Las poblaciones se movilizan haciendo visibles sus demandas, partiendo del derecho que tienen los pueblos de plantear el rechazo hacia cualquier proyecto que ponga en riesgo su bienestar y el de las generaciones futuras. La dinámica de las luchas socioambientales en América Latina da lugar a un “giro ecoambiental” de las luchas (Svam-

pa, 2012; Svampa y Viale, 2014) y a la emergencia de un “pensamiento ambiental latinoamericano” (Leff, 2004) en el que se ven involucradas tanto las poblaciones rurales como las urbanas, al mismo tiempo que va generando marcos comunes de acción colectiva que funcionan como esquemas de significación común y como eje de una identidad colectiva.

Río Cuarto: una agrociedad en disputa

El agronegocio y sus implicancias no se restringen solamente al espacio rural. Muchas ciudades cercanas a los núcleos agrarios productivos se convierten en centros de comercialización de productos agrícolas, son las denominadas agrociedades (Carniglia, 2015).

Agrociedad es un concepto que, desde una perspectiva relacional e histórica, permite pensar la relación entre lo urbano y lo rural desde una posición superadora a la típica dicotomía entre ciudad y campo. En Argentina, varias ciudades de la pampa húmeda (región del país conformada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe y caracterizada por la supremacía de la agricultura y los agronegocios) podrían ser definidas de esta manera.

Se distinguen tres modos de agrociedades pampeanas argentinas (Carniglia, 2015):

1. Ciudades agroindustriales: espacios urbanos en los que predominan empresas que se especializan en la transformación de las materias primas y/o en la producción de equipos e insumos para el agro.
2. Pueblos rurales: espacios urbanos que operan como soporte material en la gestión de la producción, transporte y comercialización de la agricultura globalizada pero cuya población es menor a 10.000 habitantes.

3. Agrocidades medianas e intermedias: poblaciones de entre 30.000 y 150.000 habitantes que actúan como centros de comercio y servicios en una región con predominio de la actividad agropecuaria.

A Río Cuarto, ciudad mediana emplazada en la pampa húmeda argentina, la podríamos incluir en esta última categoría de agrocidad. Si bien según el último Censo de Población y Vivienda (2010) cuenta con una población superior a los 150 mil habitantes, es el centro comercial y de servicios de la región agrícola-ganadera del sur de la provincia de Córdoba. Aunque posee industrias tanto alimentarias (Jumalá S.A., La Veneziana, La Italiana) como de agrocombustibles (BIO 4), la actividad industrial no es la predominante dentro de la economía riocuartense destacándose la comercialización de productos agropecuarios y el servicio vinculado principalmente al sector agrícola.

En esta ciudad, con el agronegocio como principal eje de disputa, en el año 2012 surge la *Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos*, un movimiento social conformado por vecinos y representantes de organizaciones sociales que tiene como principales demandas la erradicación de toda práctica contaminante a partir de la utilización de productos agrotóxicos y también la propuesta de una transición hacia un modelo agroecológico.

Este movimiento se autodefine como un “espacio abierto de denuncia, articulación y activismo en contra del modelo extractivista-depredador y sus consecuencias. A favor de modelos agroecológicos, en defensa del planeta y todas sus formas de vida”.² Actualmente, sus miembros se reúnen periódicamente cada 15 días en diferentes lugares de Río Cuarto. En esas reuniones se discuten problemáticas sean locales o no, vinculadas a sus demandas. Es allí donde también se es-

2 Fuente:<http://riocuartosinagrototoxicos.blogspot.com.ar/>

tablece el plan de acción, las estrategias y acciones colectivas directas o institucionales a llevar a cabo.

Si bien Río Cuarto sin Agrotóxico se empezó con algunas actividades aisladas durante el año 2010, cuando ni siquiera tenía un nombre, recién dos años después empieza a consolidarse como un movimiento social y comienza a tener más visibilidad en la esfera pública.³ El juicio en contra de las fumigaciones con “agrotóxicos”⁴ liderado por las *Madres del Barrio Ituzaingó Anexo*⁵ en la ciudad de Córdoba y el anuncio desde Nueva York de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández, sobre las inversiones que Monsanto realizaría en Argentina, motivó a la *Asamblea* a activar sus acciones colectivas e intensificar su visibilidad pública.

Una vez conocida la información de que dos plantas de investigación y producción de alimentos transgénicos se instalarían en la provincia de Córdoba con el aval del entonces gobernador José Manuel de la Sota, los vecinos de Río Cuarto y Malvinas Argentinas se pusieron en alerta. A partir de ese momento, la *Asamblea* riocuartense convocó a varias acciones colectivas: concentraciones en la Plaza Central y en la Municipalidad, marchas, festivales de música, cortes de ruta, entre otras. Por aquel entonces el principal objetivo era evitar la instalación de Monsanto en la ciudad, cometido que se logró en noviembre del

3 Ver en este libro: ...

4 Adoptamos el concepto “agrotóxico” en el mismo sentido que lo hacen los movimientos sociales que reclaman contra la utilización en la producción agraria de toda aquella sustancia cuya toxicidad ponga en riesgo al medio ambiente y a la salud humana.

5 Madres De Barrio Ituzaingó Anexo es una organización ambientalista formada por un grupo de madres preocupadas por la salud de los vecinos de este barrio de la ciudad de Córdoba que, al advertir la gran cantidad de casos de cáncer, empezaron a pedir explicaciones al Estado y lograron que algunas de sus demandas fueran escuchadas. El juicio que se llevó adelante en 2012 contra los fumigadores fue tomado como ejemplo de lucha y resistencia por otras organizaciones con similares objetivos. Para mayor información, se puede consultar en: <https://www.facebook.com/Cristina.Vita.Chave.Marcela/>. Ver también en este libro:

año 2013 cuando el intendente Juan Jure firmó un decreto por el cual se prohibía que la empresa transnacional se instalara en Río Cuarto.

Demandas concretas y acciones colectivas frecuentes en defensa del territorio y en contra de todo aquello que perjudique la vida en él; reuniones asamblearias periódicas y toma de decisiones conjuntas; trabajo en red con otras organizaciones y la permanencia de sus miembros que posibilita una proyección a largo plazo y la construcción de sentidos y valores compartidos, son elementos que nos habilitan a referirnos a *Río Cuarto sin Agrotóxicos* como un movimiento social con un fuerte arraigo territorial.

Territorialidad y multiescalaridad: dimensiones de los conflictos socioambientales

En América Latina, desde finales de la década de 1980 se impuso una lógica capitalista de empresas transnacionales que buscan asentarse en espacios estratégicos por la presencia de importantes bienes naturales para explotarlos y, una vez agotados, ir en busca de otro espacio en el que puedan encontrar nuevamente el recuso que necesitan.

A partir de las nuevas modalidades adoptadas por la lógica de acumulación capitalista, el territorio, es el centro de reclamos de las movilizaciones y movimientos campesinos, indígenas y socioambientales. La disputa territorial tiene que ver con concepciones totalmente opuestas del espacio y lo que significa para los sectores enfrentados: los movimientos por un lado y los grupos económicos por el otro. La “transformación del espacio en territorio se da por medio de la conflictualidad, definida por el estado permanente de conflictos en el enfrentamiento entre las fuerzas políticas que intentan crear, conquistar y controlar sus territorios” (Fernandes, 2006, p. 7). De esta manera el territorio es pensado como un espacio apropiado, como una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de relaciones de

poder. Siguiendo el planteo de Porto Gonçalves (2009), “el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, hay siempre territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales de territorialización. En un mismo territorio hay, siempre, múltiples territorialidades” (p. 5). El territorio pensado desde esta mirada involucra un proceso siempre dinámico en tanto objeto aconteciendo.

Con la finalidad de lograr sus objetivos, los movimientos sociales construyen espacios políticos, se espacializan y promueven cambios en el territorio a partir de procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización (Fernandes, 2006) que se generan a partir de las acciones colectivas emprendidas por esos movimientos sociales.

Raúl Zibechi (2003) considera que buena parte de las características comunes que tienen los movimientos sociales latinoamericanos derivan de la territorialización, es decir, “de su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas” (p. 186). Desde la década de 1980, fuertemente vinculado a las ideas de la posmodernidad, comienza a cambiar la concepción del espacio. Deja de ser pensado exclusivamente en su dimensión material y empieza a cobrar fuerza su dimensión simbólica. Se trata de un *giro espacial* a partir del cual cambia la visión epistemológica desde la que se lo aborda. Desde esta perspectiva, el territorio es concebido como un espacio de lucha, contradicción y apropiación, de conformación de subjetividades, lleno de significados culturales y memoria desde donde los movimientos sociales se construyen, articulan físicamente y donde se dan múltiples relaciones de poder en formas específicas de dominación y resistencia (Haesbaert, 2004; Porto Gonçalves, 2001). Es por eso que algunos académicos y teóricos han visto en esta dimensión un elemento central para su estudio y, al mismo tiempo, un factor novedoso en lo que respecta a la Teoría de los Movimientos Sociales. En este marco, con un fuerte arraigo en el planteo de la Geografía brasilera, surge la noción de *movimiento socioterritorial* (Fer-

landes, 2006) que permite pensarlos desde el territorio dando lugar a una comprensión espacial de las situaciones de conflictividad.

En la *Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos* la cuestión del territorio, desde el enfoque antes desarrollado, es central. Este movimiento mantiene una lucha de intereses con empresas dedicadas a la producción, comercialización y uso de productos “agrotóxicos” en la agricultura de la región sur de Córdoba.⁶ En esta agrocuidad cordobesa en el año 2012, Monsanto encontró un espacio estratégico para sus intereses. Pero en el camino también halló un grupo de vecinos que plantaron su lucha por la defensa del territorio, convirtiendo a este espacio en territorio de lucha y confrontación. Como sostiene Fernandes (2006) es en el espacio donde se construye el espacio social signado por relaciones sociales que terminan produciendo espacios fragmentados, divididos, únicos, singulares, fraccionarios y por ende, conflictivos. En esos espacios se manifiestan las intencionalidades que se tratan, en definitiva, de relaciones de poder.

Quizás fue Monsanto la que acaparó los mayores esfuerzos y acciones en los comienzos de este movimiento dada la envergadura de la planta que esta empresa quería instalar en las inmediaciones de Río Cuarto. Sin embargo, luego de que el intendente riocuartense decretara que no se podía instalar en la ciudad en pos de “la tranquilidad y la paz social”,⁷ *Río Cuarto sin Agrotóxicos* siguió vigente. Es que los reclamos de los movimientos socioterritoriales, inicialmente, tienden a ser puntuales y la misma dinámica de lucha los lleva a ampliar sus

6 A partir de un rastreo por las publicaciones en su fan page y por datos recopilados a través e la participación en las asambleas, podemos afirmar que el movimiento en cuestión también plantea demandas contra la fumigación, la pérdida de biodiversidad, contra el desmonte, por la visibilización de la agricultura orgánica natural, por la defensa de la salud de los sectores expuestos a los plaguicidas, la lucha por la sustentabilidad de los recursos naturales y por la soberanía alimentaria.

7 Ese fue uno de los argumentos utilizado por el entonces intendente de Río Cuarto en el decreto de rechazo a Monsanto. Para acceder al mismo puede consultar: <http://www.telediodigital.net/2013/11/decreto-por-monsanto-inminente-publicacion/>. (Fecha de consulta: 17/11/2017).

demandas en las que van incorporando otros temas más generales como el modelo de desarrollo destructivo, la protección de los bienes comunes y su desmercantilización, las prácticas de consumo y la soberanía alimentaria, tópicos que comparte con otros colectivos que luchan contra el modelo extractivo (Svampa, 2013).

Los movimientos sociales están imbricados en el marco de un entramado complejo en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos en diferentes escalas (locales, regionales y/o provinciales, estatales y globales). En este sentido, Maristella Svampa (2008) sostiene que la multiescalaridad, junto a la territorialidad, es una de las dimensiones fundamentales de los movimientos sociales latinoamericanos de carácter ambiental⁸.

Elizabeth Jelin (2003) ya en los primeros años del nuevo siglo sostenía que “más que en ningún momento anterior de la historia, la expresión de demandas sociales colectivas en una ámbito local (...) contienen en sí mismas la multiplicidad de sentidos implicados en la interpenetración, articulación y superposición de niveles” (p. 50). Al mismo tiempo advertía que la activación de las redes internacionales de activistas podía dar lugar a alianzas y a movimientos globales.

Así, por ejemplo, cada año la *Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos* se suma a la convocatoria mundial “Marcha contra Monsanto”. Cada 20 de mayo en diferentes ciudades del mundo se organizan acciones colectivas en las que se visibilizan las consecuencias que genera el uso de los productos “agrotóxicos” que produce la multinacional al mismo tiempo que se plantea una crítica al modelo productivo im-

8 Las otras dimensiones con las que Maristella Svampa (2006) caracteriza a los movimientos sociales latinoamericanos son: a) acción directa no convencional y disruptiva que permite visibilizar la crisis y el agotamiento de las mediaciones institucionales; b) estructura flexible y asamblearia signada por una dinámica horizontal en la cual todas las propuestas son llevadas a votación y regida por el principio de igualdad que supone la suspensión de las inscripciones sociales; y c) tendencia a la autonomía: horizonte utópico asociado al rechazo de todo tipo de relación con partidos y sindicatos.

perante a nivel internacional y las consecuencias que genera a nivel social, económico, ambiental y en la salud.

Otro evento internacional da cuenta de las demandas y acciones multiescalares. En octubre de 2016 se realizó en La Haya un simulacro de juicio contra la empresa Monsanto. El “Tribunal Monsanto” es una iniciativa internacional de la sociedad civil para juzgar a la multinacional por las violaciones de los derechos humanos y el “ecocidio” que genera. Durante el proceso de “enjuiciamiento” a Monsanto del que participaron más de mil organizaciones y 30 testigos de diferentes partes del mundo, se reunieron pruebas sanitarias y jurídicas contra la multinacional y, en consecuencia, se planteó la necesidad de que el “ecocidio” comience a ser una figura jurídica que se incorpore a los delitos que juzga la Corte Penal Internacional⁹. Es justamente ese neologismo a partir del cual se generan sentidos compartidos entre diferentes colectivos ambientales del mundo que en cada uno de sus territorios ven cómo afecta el uso de los “agrotóxicos”.

Río Cuarto sin Agrotóxicos, adhirió a la realización de este “juicio” y se sumó a la actividad pública, conjunta y simultánea que el 30 de septiembre de 2016 se realizara en diferentes partes del mundo con el objetivo de mostrar “la realidad socioambiental y productiva de nuestros territorios”¹⁰ y poner en la agenda pública el Tribunal que se realizaría al mes siguiente. Desde la *Asamblea* proyectaron el documental “Desierto verde” sumándose así a otras actividades en diferentes partes del mundo.

9 “Ecocidio”, es un término que surge de los planteos de diferentes colectivos y que refiere al daño ambiental cuya magnitud involucra a muchas especies, incluida la humana. En general, refiere a aquellos daños que se generan en el suelo, el aire, el agua, el monte y sus moradores, los humedales, los pastizales, etc. y que causan graves consecuencias para la salud y el ambiente. Para ampliar la información sobre el Tribunal Internacional Monsanto y la figura de “ecocidio”, ver: <https://www.pagina12.com.ar/32558-monsanto-responsable-de-ecocidioy> <http://es.monsantotribunal.org/>

10 Con ese objetivo se realizaba la convocatoria a través de la fan page de la Asamblea (ver: <https://www.facebook.com/events/240237263039743/>). Fecha de consulta: 30/04/2017)

En estas acciones colectivas de amplio alcance en las que la *Asamblea* habitualmente participa se comparte un discurso acerca de las demandas generales que llevan a la realización de las mismas sin perder de vista los reclamos locales que cada organización tiene -según las implicancias territoriales que la empresa y el sistema económico que ésta representa puedan tener en una escala menor. Al respecto, Jelin(2003) sostiene que “los grandes actos a escala mundial (...) sólo cobran sentido cuando articulan (casi siempre de manera contradictoria y conflictiva) las situaciones locales con los temas globales” (p. 50). Esta posibilidad de actuar en red con otras organizaciones en diferentes lugares del mundo le permite a los movimientos sociales lograr una mayor visibilidad en el reclamo al mismo tiempo que potencia el impacto y va configurándose la construcción de sentidos compartidos.

En el marco de estas relaciones multiescalares las redes sociales digitales juegan un rol importante en tanto favorecen no sólo la interacción entre las organizaciones sino que además, a partir de las potencialidades que brindan sus aplicaciones, permite compartir información, discutir temas de interés, tomar decisiones importantes a la hora de poner en práctica acciones colectivas en conjunto, etc. En este sentido, estas herramientas comunicacionales se presentan como una alternativa económica y accesible en los tiempos que corren donde el acceso a la conexión a internet se ha expandido y masificado.

Sojización y deforestación, las dos caras del neoextractivismo en Córdoba

Los siguientes datos del año 2016 dan cuenta del proceso de sojización que atraviesa Argentina. La molienda de soja en el país alcanzó 41,7 millones de toneladas, representando el mayor procesamiento

de la historia, con un crecimiento interanual del 8%¹¹. Mientras que en Córdoba, núcleo agropecuario del país, la producción sojera representó el 27% de la cosecha nacional¹². Ahora bien, este “boom de la soja” tiene su correlato en la demanda de tierras y en la consecuente deforestación que implica a su vez la pérdida de bosques nativos (AA. VV, 2016).

Si bien la expansión de los ferrocarriles a principios del siglo XX explica la parte inicial de la pérdida de bosques, el aumento de la tasa de deforestación comenzó a acelerarse hacia mediados de siglo, desde que la provincia se configuró como productora agropecuaria, destinando grandes extensiones a cultivos y cría de ganado. Este crecimiento del modelo productivo en detrimento del bosque nativo continuó a un ritmo constante hasta que, en la década de 1990, el modelo de agronegocios aceleró el desmonte en busca de nuevas tierras productivas; así, la pérdida de bosques creció de manera vertiginosa. Entre los años 1970 y 2000 se destruyeron un millón de hectáreas de bosques de la provincia y en el período 2006- 2011, otras 68.176 hectáreas (Rossi, 2016). A lo que se le suma las grandes extensiones de bosque perdidas a causas de los incendios, la expansión urbana no planificada y los emprendimientos inmobiliarios.

Durante esta época la provincia encabezó el ranking de las zonas del planeta con mayor tasa de deforestación anual provocando que en la actualidad sólo quede un 3,5% de bosque nativo en buen estado de conservación (Rossi, 2016), aun existiendo la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos sancionada en 2007 que tiene la finalidad de proteger estas áreas.

11 Informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Los datos fueron extraídos de:https://www.clarin.com/rural/molienda-soja-supero-40-millones-toneladas-2016-record_0_HkS_Cp-Kx.html. Fecha de consulta: 30/04/17

12 Fuente: <http://www.agrovoz.com.ar/actualidad/el-fondo-sojero-aporto-304-mas-en-2016-cordoba-recibio-1758-millones>. Fecha de consulta: 30/04/17

Resistencia multiscalar

Vinculado a la diversificación de temáticas que reclaman y a los vínculos reticulares antes desarrollados, desde diciembre de 2016, la *Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos* participa activamente de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa) un colectivo de organizaciones y movimientos que surgió ante la posibilidad de actualización de una Ley provincial de Bosque que reemplace la vigente (9814/09).¹³ Los cambios que se prevén favorecerían aún más los intereses de sectores vinculados al agronegocio y a proyectos turísticos de gran envergadura dejando sin protección a áreas antes consideradas en reserva por sus beneficios ecosistémicos (AA.VV, 2016).

Dos grandes acciones colectivas organizadas por la CoDeBoNa pusieron a este problema en la visibilidad pública. Unas diez mil personas salieron a las calles de la capital cordobesa el 28 de diciembre de 2016 logrando frenar el tratamiento del proyecto oficial en la legislatura; y el 1° de marzo de 2017 unas veinte mil personas se manifestaron pidiendo por el archivo del proyecto oficial y el llamado por la autoridad de aplicación a un proceso de participación ciudadana que contemple no sólo una audiencia pública, algo que viene intentando imponer el oficialismo (Unión por Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti como principal referente).¹⁴

Un verdadero proceso participativo involucraría una participación activa (proceso en el que diferentes actores pondrían en juego saberes, memorias, historias, intereses, identidades, etc. en talleres a

13 La actualización de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Ley 9814) es un proceso administrativo que se debe cumplir en el marco de la ley nacional (Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos). Cada cinco años las provincias deben revisar sus ordenamientos territoriales y actualizar el mapa de zonificación, adecuando los criterios de la ley nacional a dichas actualizaciones.

14 Fuente: fan page de la coordinadora (<https://www.facebook.com/coord.ley.bosques.cba/>).

realizarse en las diferentes regiones de la provincia) y vinculante, es decir que lo resultante de esos espacios de diálogo, discusión y toma de decisión en cada uno de los territorios sea aceptada por el Estado en los mismos términos y por ende, que sean constitutivas de las modificaciones que se le hagan a la ley vigente.¹⁵

En la actualidad, la CoDeBoNa está integrada por más de noventa organizaciones sociales de toda la provincia, el Movimiento Campesino de Córdoba y Pueblos Originarios. Las diferentes regiones geográficas tienen representación en la Coordinadora provincial. Así, son parte la Coordinadora Punilla (Norte-Centro-Sur) y Noroeste, la Asamblea de Paravachasca, la Regional Sierras Chicas, la Coordinadora Zona Sur-Este (en la que se encuentra la *Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos*), la Coordinadora Ambiental Traslasierra, la Asamblea en Defensa del Bosque Nativo Calamuchita y la Coordinadora Córdoba Capital. La cuestión territorial fuertemente presente en la construcción de este amplio colectivo de organizaciones agrupadas primero por regionales que tienen su representación en las reuniones quincenales que se organizan en el marco de la Coordinadora provincial.

Las resistencias no pueden ser pensadas separadas del territorio, es decir, de los sentidos, las memorias, las experiencias de los que lo habitan, lo construyen y reconstruyen a partir de sus prácticas. En ese sentido, la representatividad de cada zona de Córdoba dentro de la CoDeBoNa garantiza que se contemplen las particularidades de cada uno de esos territorios, o sea sus geografías, su historia, las problemáticas socioambientales puntuales. Mientras que la incorporación de los pueblos originarios con su cosmovisión fuertemente arraigada con la tierra (pacha) y a la defensa de la vida suma el aspecto étnico a este entramado social. Por su parte, con el movimiento campesino y su his-

15 La posición de la CoDeBoNa acerca de cómo debe ser el proceso de participación ciudadana a la hora de modificar la “Ley de Bosques” fue consensuada por las diferentes organizaciones que participan en ella y presentada en un acto público el 25 de abril de 2017. Para más información se puede acceder a la fan page de la Coordinadora.

tórica lucha por el derecho a la tierra frente a los embates de las elites terratenientes se suma la dimensión vinculada a la cuestión de clase.

Así, en la CoDeBoNa se puede ver la interrelación entre la multiescalaridad territorial (local, regional y provincial) y la multidimensionalidad a partir de los diferentes actores colectivos que la constituyen. En términos de Fernandes (2009), “la multiterritorialidad une a todos los territorios a través de la multidimensionalidad y por medio de las escalas geográficas, que pueden ser representadas como capas sobrepuestas en que una acción política se desdobra en varios niveles y escalas: local, regional, nacional e internacional” (p. 6).

Cada uno de esos actores con sus idiosincrasias e identidades colectivas particulares se suman a una lucha más amplia porque la defensa del bosque nativo los interpela. Algunos porque aún tienen en sus territorios bosques que defender, otros porque ya están padeciendo las consecuencias del desmonte y la utilización de esas tierras para el agronegocio y otros porque saben que al perder grandes áreas de bosque también se pierden sus productividad biológica y agropecuaria servicios ecosistémicos (calidad del agua, conservación del suelo, regulación de los ciclos de nutrientes, balance atmosférico del carbono, regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, etc.) lo que afecta a nivel global, por ejemplo, en el cambio climático y sus efectos.

Conclusiones

Territorialidad y multiescalaridad son dos dimensiones que no pueden pensarse una sin la otra a la hora de entender las resistencias ambientales. Repasemos ahora algunas de las cuestiones centrales que fueron trabajadas y que permiten entender la vinculación entre estas dos dimensiones:

- a. La presencia de un modelo económico mundial con fuerte incidencia en las economías locales. La emergencia del ac-

tual modelo de producción agrario no puede pensarse aisladamente de los procesos de globalización económica y las nuevas formas de regulación a nivel global.

- b. Las decisiones vinculadas al neoextractivismo involucran al Estado en sus diferentes niveles (local, provincial y nacional) a partir de la implementación de políticas públicas y la toma de decisiones que dan lugar y/o potencian las actividades extractivas en los territorios.
- c. Por lo general, en los territorios donde las actividades extractivas avanzan surgen resistencias de los pobladores y movimientos sociales que resisten la embestida contra las grandes corporaciones transnacionales que conciben a los bienes comunes como meros objetos de mercancía. Así, esos movimientos empiezan a configurar procesos de territorialización y resignificación del territorio a partir de sus acciones colectivas.
- d. Los movimientos socioterritoriales establecen relaciones con otros colectivos que actúan en diferentes lugares de la provincia, del país o del mundo y cuyas demandas particulares o generales tienden a coincidir logrando de esta manera un mayor impacto en sus acciones de resistencia. Así, la elección de la acción colectiva a realizar por parte del movimiento socioterritorial va a depender de las condiciones propias del territorio en disputa y de las territorialidades que allí se configuran, es decir las relaciones que en él se efectúan, de las alianzas que tenga.

En definitiva, en la dinámica multiescalar lo global y lo local se presentan como un proceso en que se materializan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, por otro lado, resistencias de las comunidades locales que no comparten las lógicas de tal modelo, ni los estilos de vida que impone. Esa relación global/local también pue-

de verse en las luchas locales, a pequeña escala, son parte de luchas mucho más amplias. En este sentido, *territorialidad* y *multiescalaridad* son dimensiones inherentes a los conflictos ambientales y, en consonancia, de los movimientos socioterritoriales que surgen en defensa de los bienes naturales.

Referencias bibliográficas

- AA.VV (2016) “Pronunciamento de los investigadores de Córdoba en defensa del Bosque Nativo”. En IDEA (Instituto de Diversidad y Ecología Animal), Córdoba. Disponible on line en: <http://www.idea.conicet.unc.edu.ar/files/Pronunciamento-de-los-investigadores-de-C%C3%B3rdoba-en-defensa-de-los-Bosques-Nativos.pdf> (Fecha de consulta: 30/04/17)
- Fernandes, B. (2009) “Territorio, teoría y política”. Sin datos de edición. Disponible on line en: <https://problemasrurales.files.wordpress.com/2008/12/territorio-teoria-y-politica-bernardo.pdf>. Fecha de consulta: 14/07/2015
- Fernandes, B. (2006) “Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales”. En: OSAL, Año 6 no. 16, CLACSO, Buenos Aires. Consulta on line en: <http://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf>. Fecha de consulta: 20/03/2014
- Giarraca, N. (2007) “La tragedia del desarrollo. Disputas por los recursos naturales en Argentina”. En: Revista Sociedad. Vol.3. Buenos Aires.
- Giarraca, N.y M. Teubal (2013) “Las actividades extractivas en la Argentina”. Comunidad de Estudios Jaina, Bolivia. Disponible on line en: <http://www.comunidadestudiosjaina.org.bo/index.php/component/search/?searchword=giarraca%20y%20teubal&searchphrase=all&Itemid=267>
- Giarraca, N., M. Teubal y otros (2007) “Tiempos de rebelión: que se vayan todos. Calles y plazas en la Argentina: 2001 y 2002”. Antropofagia, Buenos Aires.
- Gras C. y V. Hernández (2013) “El agro como negocio: Producción, Sociedad y Territorios en la Globalización”. Biblos, Buenos Aires.

- Haesbaert, R. (2004) “El mito de la desterritorialización: del fin de los territorios a la multiterritorialidad”. México: Siglo XXI Editores.
- Harvey, David (2005) “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”, en *SocialistRegister 2004: El nuevo desafío imperial*, CLACSO, Buenos Aires.
- Jelin, E. (2003) “La escala de la acción de los movimientos sociales”. En: Jelin, E. (comp) *Más allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos Sociales*. Buenos Aires: Libros del zorzal.
- Leff, E. (2004) “Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza”. México: Siglo XXI Editores.
- Porto Gonçalves, C. (2009) *De Saberes y de Territorios: diversidad y emancipación a partir de la experiencia latino-americana*. En *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, Volumen 8, N° 22, 2009. Disponible en: <file:///C:/Users/Eugenia/Downloads/polis-2636.pdf>. Fecha de consulta: 24/05/2017.
- Porto Gonçalves, C (2001) *Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. México: Siglo XXI Editores.
- Rossi, L. (2016) “Córdoba respira lucha. El modelo agrario: resistencias y nuevos mundos posibles”. Villa María: Eduvim.
- Svampa, M. y E. Viale (2014) “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo”. Buenos Aires: Katz.
- Svampa, M. (2013) “«Consensus de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina”. En revista *Nueva Sociedad* N° 244, marzo-abril de 2013, Buenos Aires.
- Svampa, M. (2012) “Consensus de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”. En *OSAL*, N°32, Buenos Aires: CLACSO.
- Svampa, M. (2008) “Cambio de época: movimientos sociales y poder político”. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Svampa, M. (2006) “Movimientos sociales y nuevo escenario regional: inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina”. En: *Cuadernos de Socio-Historia*, 19/20, La Plata. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3612/pr.3612.pdf. Fecha de consulta: 12/02/2014
- Zibechi, R. (2003). *Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos*. En: *OSAL: Observatorio Social de América Latina*. No. 9. Buenos Aires: CLACSO.

Fuentes de internet

- <http://riocuartosinagrotoxicos.blogspot.com.ar/>
- <https://www.pagina12.com.ar/32558-monsanto-responsable-de-ecocidio>
- <http://es.monsantotribunal.org/>
- <https://www.facebook.com/events/240237263039743/>
- https://www.clarin.com/rural/molienda-soja-supero-40-millones-toneladas-2016-record_0_HkS_Cp-Kx.html
- <http://www.agrovoz.com.ar/actualidad/el-fondo-sojero-aporto-304-mas-en-2016-cordoba-recibio-1758-millones>
- <https://www.facebook.com/coord.ley.bosques.cba>

Uso del territorio y modernización agropecuaria: el caso de Vicuña Mackenna (Departamento Río Cuarto- Córdoba)

Ana Laura Picciani

Introducción

La década de 1970 es un período de importancia para la formación de las características actuales de la producción en el campo argentino. El sector agropecuario atravesó un renovado proceso de reconversión tecnológica y de integración agroindustrial que, entre otros aspectos, implicó el avance de la frontera agrícola. A partir de ese momento se evidenció un crecimiento sustancial de la superficie cultivada, un aumento de los volúmenes cosechados por hectárea, el despliegue de un nuevo salto tecnológico, la intensificación de la concentración del capital agrario y una considerable reorganización del trabajo a escala social que transformó las características y la productividad de la mano de obra (Villulla y Hadida, 2012, p. 115).

Como afirma Gras (2012a) actualmente el agro argentino es sustancialmente distinto al de décadas atrás. Para la autora el crecimiento de la producción agrícola fue heterogéneo y desparejo y a razón de ello afirma que “durante la década del ’80 aumentó la producción de materias primas (re)orientadas a las exportaciones (principalmente oleaginosas y cereales), mientras que se estancaron las destinadas al

mercado interno y al consumo de los sectores populares (yerba mate, azúcar, entre otras). La puesta en marcha de un amplio programa de desregulación en el inicio de los años noventa profundizó la orientación exportadora del sector agropecuario y las tendencias a la agriculturización. Unos años después, la introducción de la soja transgénica, asociada a renovadas formas de organización de la producción, terminó de conformar un nuevo patrón de acumulación, basado sobre la intensificación agrícola, la necesidad de niveles más altos de capitalización, la conexión con cadenas globales de producción y comercialización y un peso creciente del capital financiero en la actividad. A partir de 2002 una serie de factores, como el establecimiento de un nuevo tipo de cambio, el alza sostenida de la demanda y de los precios internacionales de los commodities, y la entrada de capitales externos al sector, completaron e intensificaron el proceso de reconfiguración de la ruralidad argentina” (Gras, 2012b, p.1). De esta manera, la progresiva instauración de un modelo de crecimiento agropecuario fuertemente basado en la incorporación de ciencia, tecnología e información, para aumentar y mejorar la producción y la productividad agropecuaria –proceso que autores como Milton Santos (2000a) y Denise Elias (2005) han definido como agricultura científica– trajo aparejada conjuntamente transformaciones sociales y socioespaciales en el agro argentino contemporáneo.

La acumulación de tales transformaciones productivas fue gestando un nuevo modelo de producción. Para Gras y Hernández (2013a) las transformaciones recientes en el agro se distinguen producto de la expansión del modelo *agribusiness*. Tal modelo obliga a abandonar definitivamente algunos conceptos y definiciones que caracterizaban el universo rural y que quedaron obsoletos en el plano de las prácticas productivas, puesto que como señala Hernández (2009a), para arraigarse en el agronegocio hay que abandonar la referencia material de la explotación para insertarse en la volatilidad del capital. Gras y Hernández (2013b) también sostienen que el agronegocio puede pensarse como una red que integra la producción primaria, la elaboración

industrial de alimentos, la prestación de servicios de *management* (o gerenciamiento) a otras empresas menos desarrolladas, la formación de capacidades empresariales a través de diversas capacitaciones, entre otras.

El presente trabajo constituye una aproximación al estudio de las transformaciones productivas ocurridas en la localidad de Vicuña Mackenna a partir de la modernización de los sistemas técnicos agrícolas. Allí los objetos, las formas de trabajar y de hacer se depositan en el lugar en nombre del crecimiento productivo y económico desarticulando los sistemas técnicos existentes e implementando nuevos. Tal modernización agropecuaria adquirió en las últimas décadas nuevas dinámicas territoriales por cuenta de un significativo aumento de la producción de mercancías primarias, industriales, comerciales y de servicios. Estos cambios indican que las relaciones entre la localidad y su entorno productivo, denominado como “el campo”, adquieren nuevos contenidos espaciales, económicos y demográficos, que se derivan en la reconfiguración de la división territorial del trabajo y del uso del territorio (tanto por parte de agricultores modernos como de grandes empresas y de ambos en conjunto), que ocasionan contradicciones entre lo local y lo global. De esta manera se llega a caracterizar a la localidad bajo el nombre de “Nueva Zona núcleo” o “Zona Vip” para la producción de oleaginosas y cereales, para diferenciarse de la zona núcleo histórica que involucra localidades tales como Venado Tuerto (Santa Fe) y Pergamino (Buenos Aires).

Para poder explicar esta problemática se comenzará por desarrollar las categorías de análisis presentadas y su relación con el paradigma productivo que ha desplegado su lógica y accionar en el área de estudio para llegar a demostrar cómo, dónde, por qué y para qué el territorio es usado a partir de la modernización de los sistemas técnicos agrícolas mediante un abordaje metodológico propio de un estudio de caso.

1. División territorial del trabajo y medio técnico-científico-informacional: elementos que modifican el uso del territorio rural

El conjunto de dinámicas y relaciones que cristalizan en una determinada forma de organización del espacio agrorural responde a la idea de pacto territorial (Santos, 2000b). Estos pactos no solo constituyen una disposición estable a nivel nacional entre el Estado, los grandes protagonistas de los mundos rurales y el territorio sino también se corresponden con modalidades particulares de inserción territorial de la actividad agropecuaria a nivel local. La configuración de un nuevo pacto territorial (el agronegocio), cuyo rasgo sobresaliente consiste en la fenomenal expansión de la agricultura (y entre los cultivos el de las oleaginosas), implanta en el espacio rural cordobés un tiempo medido, un calendario ajustado a la ciencia, la técnica y al conocimiento con el objetivo de incrementar su productividad y rentabilidad.

Con el proceso de agriculturización se acelera el cambio tecnológico, propio de la modernización agropecuaria, de la mano de la concentración económica de las unidades productivas. Ambos procesos fueron capaces de disminuir el requerimiento de trabajo directo en las funciones de producción tanto agrícola como ganadera e indirectamente permitieron el incremento de servicios destinados al asesoramiento de esas producciones de la mano de nuevas relaciones entre el campo y la ciudad. A partir de ello el sur de la provincia de Córdoba comenzó a atravesar un proceso de modernización agropecuaria que necesitó de la estructura urbana para desarrollarse. Las demandas de un campo modernizado fomentaron nuevas necesidades propias de un consumo productivo¹ incrementando las ciudades en términos econó-

1 El consumo productivo rural es un consumo que coincide directamente con la producción ya que es un consumo necesario para la producción de nuevos objetos (mercaderías) o servicios esenciales para el trabajo de producción propiamente dicho. La novedad del ac-

micos y demográficos. Las áreas rurales debieron incorporar nuevos recursos informacionales y a actores con diferentes grados de inserciones territoriales provenientes de áreas urbanas.

En función de cómo los actores y las actividades productivas se reorganicen y re-articulen, es que se podrá explicar la capacidad del territorio en estudio de acoger los datos del período actual.

La división territorial del trabajo bajo este pacto territorial continúa siendo pensada para la exportación como en los pactos territoriales anteriores.² La división territorial del trabajo no cambia³ en cierta forma se reconfigura renovando el modelo productivo. Para la región pampeana “lo nuevo” está en formar parte de una división territorial del trabajo de las empresas con lógica global, podría decirse que se reconfigura tal división si se piensa sobre la lógica de producción.

El uso del territorio (Santos y Silveira, 2001a), entendido como aquel entramado constituido por infraestructuras (sistemas de ingeniería), por movimientos de la población y la distribución de la agricultura, la industria y los servicios, por estructuras normativas (legislación fiscal, civil y financiera) y por el alcance y la extensión de la ciudadanía, permite analizar y abordar cada período histórico como una superposición de divisiones territoriales, en un marco global bajo una división del trabajo hegemónica. Como lo expresa Maldonado (2015, p.15): “La razón global impone un uso del territorio que, si bien se auto-presenta como positivo, rompe u obstaculiza las solidaridades orgánicas, propias del acontecer del lugar, para instalar solidaridades organizacionales (Santos, 2000c), es decir, formas de producción verticalizadas y orientadas bajo las normas de las grandes empresas de la

tual modelo agropecuario es que tal consumo, antes realizado o planeado por una parcela de la propia producción y realizado directamente en las unidades productivas, hoy cada vez es más distribuido en un conjunto de agentes que dividen el trabajo.

2 Hacer mención a los pactos anteriores.

3 Si podría decirse que cambia en el país con el avance de la frontera agropecuaria hacia las regiones extrapampeanas.

industria agroalimentaria. El modo de producción que se instala responde a intereses extraños al lugar –razón global–; es decir, el uso del territorio en el lugar no se realiza para el lugar. Así, las instituciones locales pierden todo poder de injerencia en relación con lo que se produce, cómo se produce, para qué y para quiénes se produce. Se pierde el vínculo productivo entre los actores locales y su territorio, y se promueve un modelo sustentado en la renta por arrendamiento y en la inmovilización de la mayoría de las fuerzas productivas regionales”. Muchas veces tal uso del territorio origina cambios en las formas de producción y de organización mediante arreglos productivos capaces de evidenciar un notable desfasaje existente entre ritmos y escalas de tiempo en el territorio.

El efecto de esta solidaridad organizacional es el de una dispersión geográfica y una fragmentación de los sistemas de producción. Tal como sostiene Harvey (2000a) son “las grandes empresas las que tienen más poder para disponer de espacio, haciendo que los emplazamientos individuales sean mucho más vulnerables a sus caprichos pero también que toda la estructura de la urbanización esté mucho más abierta a los cambios y flujos de capital industrial (Harvey, 2000b, p. 189-190).

A cada periodo le corresponde una particular división territorial del trabajo agropecuario, por lo que la etapa signada por el medio técnico-científico e informacional reconfigura esta división y, por ende, el espacio rural. Específicamente en el área estudiada la división territorial del trabajo se redefine a razón de la modernización agropecuaria, incorporándose plenamente a lo que Santos (2000d) denomina Región Concentrada, convertida en Región de Agronegocio, por intermedio de “arreglos productivos” dominados por empresas nacionales y multinacionales hegemónicas al interior de los sistemas agroindustriales (ELÍAS, 2006, p.32). Las verticalidades visibles a partir del accionar de las empresas multinacionales, de la expansión de cultivos industriales, del uso de herbicidas producidos por empresas monopólicas y de sistemas de labranzas exodirigidos se imponen como racionalidad

superior y representa a los grupos hegemónicos, aplicando un orden obediente y disciplinado (Santos, 2000d, p. 241).

Al referirnos al proceso de reconfiguración del territorio ante la difusión de la agricultura científica y del agronegocio globalizado, queremos decir que es este último el que tiene el poder de imponer especializaciones productivas en los espacios locales ante demandas globales. Entonces de lo que hablamos es de una reorganización de los espacios urbanos al movimiento del capital en busca de ganancias, en el contexto de ampliación del proceso de acumulación. ¿Cómo se lleva a cabo esta reconfiguración? Por intermedio de “procedimientos acompañados por avances científicos, técnicos e informacionales donde la acción política permite su desempeño y en donde la figura del Estado es la de realizar una mínima fiscalización de la dinámica de las empresas en un territorio abierto a la modernización. Podemos asegurar que flujos materiales e inmateriales aumentan, se complejizan las tareas agrícolas y las demandas crecen al ritmo de la duplicación de las cosechas. Sin embargo, como la técnica es también organización, se hacen presente los llamados “gigantes del grano” (Cargill, Continental, Dreyfus, Bunge & Born) quienes fomentan la cientifización del campo argentino y concretizan realidades mixtas de globalidad y localidad” (Silveira, 1997, p.3).

La dialéctica entre un orden global y un orden local entonces se expresa por medio de las exigencias de agentes empresariales, quienes desenvuelven su racionalidad mediante la búsqueda de lugares funcionales a la lógica de los circuitos espaciales de producción de commodities que derivan en un uso corporativo del territorio (Santos y Silveira, 2001b).

A pesar de que el control es ejercido por las metrópolis como Buenos Aires (Argentina) lugar en el que se concentra el mayor número de sedes de empresas agrícolas transnacionales, numerosas empresas agrícolas de origen local o regional (incluso con perspectiva global) instalan sus casas matrices en localidades, a veces pequeñas,

de la región pampeana. Con la intensificación del modelo del agronegocio, los vínculos entre la red urbana y la producción agropecuaria se profundizan, las demandas de la agricultura moderna se vuelve cada vez más urbanas.

2. Vicuña Mackenna: su incorporación al agronegocio como nueva zona núcleo

Como ya se mencionó la localidad objeto de estudio forma parte de la región pampeana argentina la cual, por un conjunto de condiciones ecológicas, económicas, de infraestructura, políticas y culturales, asegura la reproducción de las inversiones agropecuarias de una manera eficiente.

Para Cóccaro (2002a) los ejes históricos directrices de las tendencias de valorización espacial del sur cordobés se materializan en: los signos de los desplazamientos de los pueblos aborígenes a través de huellas y rastrilladas; los rasgos de la última etapa de la colonización pampeana que cuadricularon las tierras; la fundación tardía de colonias, con relación a los otros “sures cordobeses” y de pueblos anexos a las estaciones del ferrocarril Sarmiento; el avance de los estancieros de Buenos Aires y de Córdoba que poseían acciones sobre el territorio de La Pampa y el sur de Córdoba; caminos al principio paralelos a las vías férreas; centros urbanos de escasa magnitud, de servicios locales, vinculados primero al ferrocarril, y luego resignificados al interconectarse de norte a sur tardíamente, con la ruta nacional 35 que conecta Córdoba con Santa Rosa y Bahía Blanca, vinculando Vicuña Mackenna, Huinca Renancó y Realicó. Estas tendencias de valorización espacial contextualizadas en diferentes escalas socio-temporales han caracterizado al sector sur de la provincia de Córdoba como frontera de la expansión pampeana, frente a los condicionamientos y limitaciones de la “configuración natural” (suelos arenosos y relictos de vegeta-

ción xerófila al oeste y de drenaje deficiente al este) jugando un papel de espacio periférico dentro del contexto pampeano, que permite definirlo por su singularidad como “sur cordobés-bonaerense-pampeano” (Cóccaro, 2002b,p.195). Para el mismo autor el ingreso reciente a un palpable ciclo húmedo, de escala no definida, sumado a aquella herencia histórica, han facilitado que se materialice la imposición de “tiempos económicos”, impuestos en la década de 1990, lo que ha promovido la agriculturización y/o especialización mixtificada, que transgrede los umbrales de las vocaciones agroecológicas específicas del territorio.

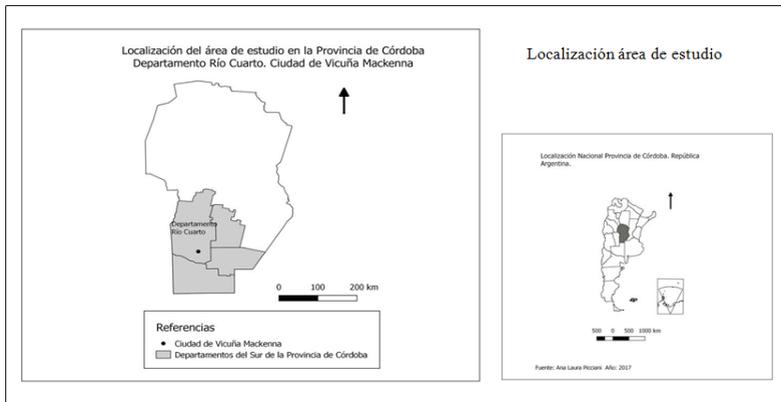


Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: Elaboración propia

La ciudad de Vicuña Mackenna (Figura 1), perteneciente al Departamento Río Cuarto y localizada en este “sur cordobés-bonaerense-pampeano”, tiene su origen justamente en el avance de la frontera nacional sobre territorios indígenas a finales del siglo XVIII y en la posterior colonización, por parte de inmigrantes europeos (vascos e italianos), a principios del siglo XIX. Estos inmigrantes se trasladaron desde la provincia de Buenos Aires y fueron quienes, cansados de las

inundaciones del río Quinto, se instalaron en la localidad de Vicuña Mackenna. Desarrollaron actividades vinculadas a la producción de lana de ovejas y posteriormente actividades ganaderas por considerarse zona de buenas pasturas para su engorde. Con el arribo del ferrocarril esta zona logró desarrollar una mayor conexión con Buenos Aires y Cuyo hacia donde se trasladaba ganado, lana, leche y carne, y llegaba desde allí la producción de frutas y verduras. Luego de la llegada del ferrocarril lo que continuará es una estructura económica agropecuaria mixta pero con fuerte peso de la ganadería. Hacia la década de 1970 se inicia una transformación en donde la relación de fuerzas cambian, pasando a tener más peso la agricultura hasta convertirse, en los últimos tiempos, en casi exclusiva.

En el año 1990 la localidad absorbió una gran densidad técnica e informacional exigida por la producción agrícola moderna al adoptar técnicas asociada a renovadas formas de organización de la producción, lo que terminó de conformar un nuevo patrón de acumulación, basado en la intensificación agrícola, en la necesidad de niveles más altos de capitalización, en la conexión con cadenas globales de producción y en comercialización y en el peso creciente del capital financiero en la actividad. Técnicas como la implementación de semillas modificadas genéticamente tendrán como puntapié inicial a la siembra directa, que permitió la disminución de la erosión del suelo, favoreciendo el incremento del rendimiento de las semillas transgénicas, aunque requiriendo el uso de maquinaria especial de siembra. El aumento de la rentabilidad de los cultivos (maíz y soja) junto a precios favorables para su producción y venta, hicieron posible su adopción por gran parte de los productores. La difusión de estas tecnologías estará en manos de las empresas creadoras de insumos biotecnológicos, que en alianza con grandes industrias farmacéuticas y químicas como así también de industrias de maquinarias agrícolas, serán capaces de atenuar las barreras físicas a la hora de desarrollar la agricultura, aumentando la escala de producción de la mano de la concentración de los procesos productivos y disminuyendo riesgos de capital. La espe-

cialización productiva en las explotaciones agropecuarias diversificó las tareas que se vinculan a un mismo proceso productivo (agricultura) añadiendo otras formas y técnicas de trabajo preestablecidas en el lugar. De esta manera se instalaron sedes de empresas de actividades agropecuarias regionales y nacionales, bancos y servicios financieros para el ámbito agrícola, instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad.

Mediante la información brindada tanto por estas empresas como por aquellas dedicadas al acopio de cereales, al procesamiento de maíz o a la producción de alimentos balanceados, y desde la experiencia de productores agropecuarios pertenecientes a la localidad, es que en los siguientes apartados se realizará un análisis de los datos que revelan tanto los Censos Nacionales y Provinciales de Población (CNPYV) como los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA). Dicho análisis se complementará con los aportes de informantes claves con la intención de narrar sus prácticas desde las categorías analíticas que sustentan el presente trabajo.

Si el nuevo paradigma productivo necesita arraigarse en el territorio abandonando la referencia material de la explotación para insertarse en la volatilidad del capital, romper límites de la agricultura tradicional y proyectarse en una red de producción, resulta necesario preguntarse ¿Cómo lo hace? y ¿Qué características de uso del territorio nos demuestran esto? En el contexto actual, las principales empresas de venta de productos agropecuarios se instalan en el territorio usándolo como abrigo y recurso (Santos, 2000e), asentando sus unidades comerciales en aquellos puntos que resultan óptimos para articular la trama de la producción agropecuaria, evidenciando un verdadero uso corporativo del territorio (Santos y Silveirac, 2001). El agronegocio avanza con la urbanización, es generalizado, la pregunta es ¿avanza con cualquier tipo de urbanización?

A continuación se indagará en las transformaciones registradas en el ámbito agropecuario del sur cordobés, área a la que pertenece la

ciudad de Vicuña Mackenna, como así también en la ciudad misma, con el fin de revelar mixturas territoriales de globalidad y localidad detectadas a partir de los efectos que la propia dialéctica generada ante la densificación técnica y normativa (verticalidades) por sobre saberes y haceres históricamente construidos (horizontalidades) expresados en las relaciones entre la ciudad de Vicuña Mackenna y su entorno productivo.

3. Acerca de las transformaciones

3.1. La producción en el entorno agrícola

En apartados anteriores se consideró que la configuración de un nuevo pacto territorial (el agronegocio), posee como rasgo sobresaliente la fenomenal expansión de la agricultura y, entre los cultivos, el de las oleaginosas. Es por ello que como punto de partida analizamos el proceso de agriculturización que ha desarrollado el área sobre todo en el último período censal 1988-2002 en función de los datos oficiales que presenta el CNA y de acuerdo al análisis realizado por Maldonado y Cóccaro (2006). Los autores describen la situación que atravesó en ese período el departamento Río Cuarto (Córdoba) respecto al uso del suelo, donde el incremento promedio de la actividad agrícola ronda en un 20 % de superficie destinada a tal actividad en desmedro de la superficie dedicada a la actividad ganadera (Tabla 1).

Tabla 1.
Porcentaje de uso del suelo en el departamento de Río Cuarto, Córdoba

PORCENTAJE USO DEL SUELO POR SUPERFICIE EN HAS. 1988- 2002					
USO DEL SUELO					
Departamento	Año	Sup. Total EAP's (ha)	Agricultura	Ganadería	Bosques y pastizales naturales
Río Cuarto	1988	1.703.378	24,6	45,6	19,5
	2002	1.468.291	46,2	30,2	17,4

Fuente: Maldonado y Cóccaro (2006, p.23)

La expansión en hectáreas en el departamento Río Cuarto de las oleaginosas plantea como situación agropecuaria un uso de la llanura cordobesa de acuerdo a los impulsos del mercado internacional, donde la superficie cultivada con soja y maní son los principales a implementar (Tabla 2).

Tabla 2.
Porcentaje de superficie de tipos de oleaginosas cultivados el departamento de Río Cuarto, Córdoba

SUPERFICIE DE TIPOS DE OLEAGINOSAS 1988-2002				
Departamento	Año	superficie ocupada por oleaginosas		
		Soja (%)	Girasol (%)	Maní (%)
Río Cuarto	1988	47,9	33,2	18,4
	2002	76,8	11,3	8,8

Fuente: Maldonado y Cóccaro (2006, p.24)

De forma aproximativa, para poder conocer el crecimiento en superficie sembrada de cereales y oleaginosas en años más recientes, se presenta el análisis elaborado por Agüero et al (2009) para la región sur de la provincia de Córdoba. Los autores reconocen, con base en los datos provenientes de la información estadística correspondiente a las campañas agrícolas 2002-2007 provista por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la provincia de Córdoba, un incremento de la superficie sembrada de oleaginosas entre los años 2002 y 2007 correspondiente a un 46 % para tal región, la cual incluye los departamentos de General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Saenz Peña y Rio Cuarto (Tabla 3).

Tabla 3.

Incremento de las superficies sembradas de granos en el período 2002-2007 en la Región Sur de la provincia de Córdoba

	SUPERFICIES SEMBRADAS DE GRANO	AÑO 2002-2007
Años	Cereales - Superficies sembradas (Has.)	Oleaginosas -Superficies sembradas (Has.)
2002	701.320	995.000
2007	766.700	1.454.000
Diferencia N°	+65.380	+459.000
Diferencia %	+9,3%	+46,1%

Fuente: Agüero *et al* (2009, p. 66)

Si bien los datos no han sido actualizados, en el trabajo de campo realizado durante los años 2015 y 2016 en la localidad de Vicuña Mackenna los productores agropecuarios entrevistados afirmaron que

la irrupción de la soja en los campos comienza entre los años 1980 a 1990. Tal cultivo hace su debut de la mano de la siembra directa la cual otorga la posibilidad de trabajar con cultivos de cobertura al no tener que labrar más el suelo, significando un cambio radical en la productividad y en la estabilidad de los campos. Consideran que hay más soja en el área al asegurar ésta una alta rentabilidad sin demasiada inversión.

3.2 La población y su ocupación

A partir del análisis censal realizado por Galfioni *et al* (2016) sobre la tasa de urbanización de Argentina y de la provincia de Córdoba, lo autores aseveran un proceso de urbanización creciente en la Argentina, es decir, que la proporción entre la población urbana y la total aumenta entre los diferentes períodos intercensales. La población urbana pasó de un 29 por ciento del total en 1869 a un 91 por ciento en el 2010, registrándose la mayor variación en el período de 1869-1914, coincidente con la llegada de inmigrantes al país. Mientras que a partir de 1970 hasta la actualidad, se registra una desaceleración permanente del proceso de urbanización.

En lo correspondiente al análisis de la evolución de la tasa de urbanización entre 1895 y 2010 al interior de Provincia de Córdoba, observa, al igual que a escala nacional, un proceso de urbanización creciente, en la que la población urbana pasó de representar el 22,4% para 1895 a un 90% para el 2010. La mayor variación de la tasa de urbanización se dio entre 1895-1960, mientras que la misma disminuyó hacia el último censo manteniendo así una tendencia estable hacia el 2010.

Al interior de la provincia de Córdoba, identifica un heterogéneo proceso de urbanización. En tanto que se constata que Capital se mantiene en todos los censos con la mayor tasa de urbanización, cuya va-

riación intercensal presenta diferencias menores a partir de 1960. Este fenómeno se asocia a la descentralización de la población hacia otros departamentos. En el caso del departamento Río Cuarto, el mismo se encuentra entre los que presentan una mayor tasa de urbanización en los primeros censos poblacionales, manteniéndose hasta la actualidad. Para el periodo intercensal 1980 - 2010, se identifica un crecimiento de su población. Para el año 1980 la población estaba constituida por 191.066 habitantes, 217.876 en 1991(un 14% más), 229.728 en 2001 (un 5% más) y 246.393 en 2010 equivalente a un 7%.

Vicuña Mackenna una de las localidades poblaciones del departamento mencionado presentó también un aumento poblacional importante. Evolucionó de 5.666 habitantes en 1980 a 7.181 personas es decir un 8% más, en 1991 a 8.994 lo que equivale a un 9% más en el 2001. El último censo de 2010 dio como resultado final 10.170 habitantes, un 13 % más. En la relación porcentual Población Urbana-Población Rural entre los años 1980 a 2001 es posible reconocer un incremento progresivo de la población urbana en desmedro de la población rural.

Si se compara el comportamiento de la población a nivel departamental y a nivel localidad, es posible reconocer un crecimiento poblacional mayor a nivel porcentual en la localidad de Vicuña Mackenna (equivalente a un 30%) a diferencia de lo ocurrido en el departamento Río Cuarto que contiene a dicha localidad, correspondiente a un 26%.

La creciente tecnificación de las actividades agrarias implica una expulsión de los trabajadores rurales. Estudios del sur de la provincia de Córdoba de Agüero *et al* (2004) detectan que en el área de influencia de diez localidades la Población Económicamente Activa (PEA) Rural entre los años 1994 y 2000 se redujo en un 36,2%. Al mismo tiempo revelan a partir de datos censales una potencial expulsión de pequeños y medianos productores debido a la escasa mano de obra que requieren los nuevos sistemas de cultivo sin dejar de obte-

nerse alta rentabilidad por escala de producción. Esto se evidencia no sólo en la reducción de la PEA ya descripta, sino también en la disminución de la población rural, que migra hacia ámbitos urbanos (Tabla 4). El mismo estudio detalla que en esas 10 localidades, entre ellas Vicuña Mackenna, hacia el año 1980 la población rural representaba un 44,3% y disminuyó a un 36,9% en 1991 y a un el 27,3% en 2001. En las entrevistas realizadas gran parte de los actores coincidieron en reconocer que la mayor parte de los campos que antes se dedicaban a la ganadería hoy se dedican a la agricultura por lo cual muchas de las personas que vivían allí se trasladaron a la ciudad, al ser ésta una actividad que demanda menos manos de obra.

Tabla 4.

Población urbana y población rural en la localidad de Vicuña Mackenna en los años 1980, 1991 y 2001

POBLACION DE VICUÑA MACKENNA 1980, 1991 Y 2001						
Localidad	Censo Nac de Población y Vivienda	Población urbana	Población rural de la zona de influencia	Total de Población (pobl. Urbana + pob. Rural)	Población urbana en porcentaje	Población rural en porcentaje
Vicuña Mackenna	1980	5666	4503	10169	55,7%	44,3%
	1991	7181	4195	11376	63,1%	36,9%
	2001	8994	3370	12364	72,7%	27,3%

Fuente: Agüero, González y Puigdomenech (2004, p. 270)

Para el análisis socio-económico de la población a nivel de localidades, corresponde aclarar que se poseen muy pocos datos censales.

Razón por la cual el indicador correspondiente a población ocupada por rama de actividad se analizará a nivel provincial. En relación a la Población ocupada de 14 años o más por rama de actividad en el año 2001 en la provincia de Córdoba se puede reconocer, un crecimiento del total de población ocupada, la cual paso de un total de 1.025.324 personas en 2001 a 1.516.447 en 2010.

Si analizamos en qué trabaja la población que trabaja es posible identificar que en la actividad perteneciente a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca para el año 2001 representaba el 10 % de la población de la provincia mientras que para 2010 el 7 %; en cuanto a la actividad comercial en 2001 respondía a un 5 % de la población y para 2010 a un 18 %; mientras la actividad de la construcción respondía en el año 2001 como así también para el 2010 a un 7 % de la población ocupada de la provincia.

A partir del análisis por rama de actividad mediante los datos censales se puede observar que la economía urbana se ve reforzada. Se podría decir que en cierta manera no se generó trabajo nuevo sino que se trata de una mutación en la cual se vio fortalecido el sector comercial. El crecimiento de la ocupación de la población en la provincia se ve reflejado así en el sector comercial.

3.3 La organización de la producción

Como mencionamos previamente, el tipo de agricultura practicada por este nuevo modelo agropecuario integra la producción primaria, la elaboración industrial de alimentos, la prestación de servicios de *management* (o gerenciamiento) a otras empresas menos desarrolladas, la formación de capacidades empresariales a través de diversas capacitaciones, entre otras. Acudiendo a esta descripción se

pudo reconocer a través de las entrevistas realizadas a las empresas⁴ emplazadas en la localidad, una organización de la producción mediante sociedades agropecuarias que se distancian de la figura del productor tradicional que dominaba buena parte de los recursos productivos. Dichas empresas se concentran y entremezclan en ese escenario con otras empresas relacionadas al agro de larga trayectoria en el lugar y que pueden desarrollar metodologías de venta sustentadas en el trato personal, cotidiano y bajo códigos basados en relaciones que nacen en el lugar pero que no dejan de estar atentos a las exigencias del negocio agrícola.

Comercios y sociedades anónimas vinculadas al agronegocio en sus diversos sistemas de comercialización⁵ (casas comerciales, centros de asesoramiento, empresas proveedoras de agroinsumos) con diferentes arreglos productivos se acoplan a la estructura urbana que fue gestada bajo el modelo productivo precedente. Son ejemplos de ellas:

1. La empresa Cofina Agro S.A. posee una oficina en la localidad de Vicuña Mackenna desde el año 2001, esta sucursal surgió, de acuerdo a lo manifestado por los encargados de la empresa, como una respuesta a la necesidad de atender los diversos negocios de la zona sur de la provincia. Las necesidades que buscan satisfacer van de la mano del asesoramiento integral a productores maniceros sobre el uso de agroquímicos, semillas y fertilizantes como así también servicio de

4 Si bien las empresas transnacionales de agro-insumos tienen estrategias globales, las mismas se adaptan a las condiciones nacionales. Las empresas que llegan tienen formas de dialogar con lo local, el productor decide comercializar con las empresas locales más que con las transnacionales.

5 Las empresas transnacionales de agro-insumos su estrategia es global y sus fines son los de maximizar ganancias con el menor costo y riesgo posible, tercerizan la venta directa al público. Así es como surgen los actores locales reproductores y difusores del medio técnico-científico-informacional. Si bien está claro que estos actores locales no son los dueños de las empresas transnacionales, reproducen y difunden sus técnicas, es por ello que se asume que son parte de las empresas transnacionales de las cuales venden los agro-insumos, ergo son caracterizados como los representantes del circuito superior de la economía urbana. (Finola, 2015:45-46).

administración de siembras. Se encargan del procesamiento de maní y su comercialización como del desarrollo de negocios de siembras mediante sistemas asociativos. La oficina tiene como fin ser un centro de generación de negocios agropecuarios con la idea de asegurar la logística necesaria para movilizar la producción de sus clientes principalmente hacia los puertos de Buenos Aires y Rosario, complementada con una ubicación estratégica en la región del sur de Córdoba sobre la ruta nacional n° 7 a pocos metros del cruce con la ruta provincial n° 35. El importante manejo de volúmenes de negocios que administra la empresa le permite el armado de los denominados *pools* de compras, para lograr así condiciones especiales de precios y garantizar la provisión en tiempo y forma de cada producto (*just in time*).

La intención es lograr una asociatividad integral, de la cual participan un número de empresas, que toman decisiones conjuntas en todo el proceso comercial. Se le brindan herramientas básicas orientadas al manejo económico financiero, para así minimizar el riesgo que pudiera generar el trabajo conjunto. Se incorporan tecnologías de gestión, información y comunicación. Entre las empresas proveedoras que nuclea a este pool de compras está: Du Pount, Basf, Emerger, Gleba, Necofertil, Insu Agro, entre otras. Siendo la empresa representante oficial de la transnacional Dow Agrosience.

2-La empresa Leones de Bleek S.A., una empresa agropecuaria, comercial y agroindustrial, instalada desde 1995 cuenta con un molino de maíz y una planta de alimentos balanceados. Esta empresa se piensa en función de este molino en donde se procesan los subproductos obtenidos cuya ventaja se obtiene tras el ahorro de los costos que implica el traslado de la materia prima, por lo cual se comenzó a procesar en el mismo lugar de donde surge. Al producirse un número y volumen importante del mismo, se empezó a moler dicho grano ya que comercialmente esto tenía alguna ventaja productiva.

El servicio de acopio de cereales también es realizado por la empresa y se recibe para ser utilizado dentro del molino de maíz o la

fábrica de alimentos balanceados o bien se comercializa en puerto o a aceiteras que son de la zona. Parte de la harina de maíz obtenida en molino tiene como destino de exportación algunos países de África. El servicio de insumos proviene de empresas como KWS, Suninagro y Basf firmas principales con las que opera la sociedad. A su vez tiene vínculos comerciales con empresas de biocombustibles instaladas en Villa Mercedes (San Luis) denominada Glucovil, con Bunge en Tanchaca (Córdoba) y en Río Cuarto con Bio 4. La planta de alimentos balanceados tiene importancia en su capacidad productiva y comercial, posee una cantidad de mano de obra contratada muy importante para la localidad.

De esta manera, las empresas que cuentan con estructura propia arraigada en la zona lo que determina cierto nivel de anclaje local, en general toman créditos bancarios y comerciales, y establecen alianzas con otros agentes. Estos agentes socioeconómicos, la mayoría de las veces, trabajan en forma independiente y mantienen una lógica organizativa y de funcionamiento más acorde con períodos previos, que implican relaciones personalizadas con conocidos de larga data, con los cuales establecen vínculos de mayor informalidad pero que están a diario ocupándose del negocio, lo cual les permite tener más plasticidad en sus decisiones. Gras y Hernández (2013d, p.54) señalan –para el caso de los productores– que “estos productores “territorializados” se encuentran doblemente interpelados: por la exigencia de responder a las condiciones del negocio agrícola en términos del Modelo Agronegocio y por la necesidad de reproducir su condición de integrantes de la base social de la trama local”. Lo mismo podríamos señalar para el caso de algunas de las empresas de la localidad, donde actores de ese mercado del agronegocio prefieren comercializar más con el actor local que con el transnacional, el actor local llámese productor o bien la empresa desempeña un rol de intermediario del transnacional pero como actor local logra desarrollar estrategias de comercialización distintas a las de la multinacional.

3-Tosquita cereales S.A. es un interesante ejemplo de empresa local. Surgió en la localidad de Tosquita en el año 1981, constituyéndose como un negocio familiar y ampliando su perspectiva empresarial decide instalar una sucursal en Vicuña Mackenna orientada al acopio de cereales, la cual para el año 1990 incorpora tanto el servicio de venta de agroquímicos y fertilizantes como la elaboración y venta de alimento balanceado. En la actualidad expandió filiales en las ciudades de Del Campillo, Villa Valeria y Huinca Renancó. A la fecha continúan los mismos socios al frente de la empresa, los mismos dueños, ingresando la segunda y la tercera generación, es decir hijos y nietos a trabajar. La empresa constituye uno de los distribuidores más importantes para el sur de Córdoba de los productos de la empresa comercial de Syngenta. Se trata de una relación comercial, de compra-venta de insumos para el productor que es su cliente.

Se puede reconocer desde fines del siglo XX el arribo de sucursales de empresas comercializadoras de insumos agropecuarios representantes de laboratorios de agroquímicos y fertilizantes mundiales. Estas empresas realizan una suerte de regionalización contando con vendedores que viajan a la zona en representación de tales marcas para la venta. Este es el caso de la sucursal denominada “Ámbito Das SA.”, representante de *Dow AgroSciences*. La empresa Cargill posee una sucursal allí también, Monsanto desarrollo un “Centro Modelo” y la empresa Compañía Argentina de Granos se instaló junto a una planta de acopio.

Los productores del entorno agrícola de la localidad aplican recetas estandarizadas recomendadas por estas sucursales. Muchos de estos laboratorios se fusionan con otros laboratorios lo cual origina nuevas propiedades a sus productos. Los productores que los aplican lo llevan a cabo con poco conocimiento sobre el tema. De esta manera realidades mixtas de globalidad y localidad ante la modernización de los sistemas técnicos se hace presente en el imaginario de la población local modificando sus estrategias para adaptarse a lo nuevo a fin de no quedar fuera de la red productiva. Muchos de los productores agro-

pecuarios manifestaron su decisión de no tener más agroquímicos en el campo ante hechos delictivos que se presentaron en la zona, por lo cual cuentan con el servicio de empresas locales. Lo que hacen es ir proveyéndose de lo que necesitan y que únicamente lo puede facilitar una empresa que tenga depósito local.

Así, cada actor cuenta con diferentes estrategias territoriales para la vinculación con sus clientes que no se propaga en forma homogénea por el espacio, sino más bien en forma selectiva buscando nichos de comercialización (Finola:2015).

Todas estas transformaciones productivas ocurridas en la localidad objeto de estudio requirieron de la aplicación de tecnología y de capital reproduciendo artificialmente las condiciones necesarias para la producción agrícola. Para ello se desarrollaron funciones vinculadas con la provisión de insumos, agro-servicios (acopio, reparación de maquinarias y herramientas, abastecimiento) comercios, y servicios personales para el abastecimiento de la comunidad. Se localizaron importantes estructuras de acopio y comercialización de granos, mercados de hacienda, algunos frigoríficos, filiales de molinos nacionales e internacionales, así como plantas agroindustriales de alcance nacional.

Como afirma Finola (2015:73): “los actores locales cumplen el rol de difusores del sistema técnico-científico-informacional relacionado a la actividad agropecuaria. Es importante destacar que, por un lado, los distintos tipos de compromiso entre estos vendedores locales con las multinacionales de agro-insumos, en lo que respecta a las cuotas de ventas y a las zonas exclusivas, genera condicionamientos tantos favorables como perjudiciales, ya que si bien en algunos casos se garantizan zonas de ventas exclusivas o mejores remanentes por las comisiones, también están subordinados o condicionados a las estrategias de las multinacionales reduciendo su campo de maniobras. Por otro lado, es interesante observar cómo los vendedores locales, en aras de obtener clientes, complementan su oferta con productos de otras marcas, y en algunos casos con otros servicios, lo que evidencia

el interés propio por conquistar mercados o aumentar sus ingresos por sobre los intereses de venta determinados por las multinacionales de la cual son agentes oficiales”.

Conclusiones

La difusión de innovaciones científico-técnicas en la producción agrícola tornó a la localidad crecientemente dependiente a los insumos generados por la industria, es decir dependiente al proceso técnico de base industrial. Así la producción agropecuaria en Vicuña Mackenna paso a ser un emprendimiento asociado a la racionalidad del periodo. Siendo capaz de regular la producción y circulación, es decir, los objetos, la forma de trabajar, las escalas de producción, la velocidad de circulación, las demandas y las prioridades en función de una monoproducción, en este caso la soja y el maíz. Lo cual crea una disminución de la PEA Rural, una mayor cantidad de población en la ciudad, un crecimiento de la población ocupada en el sector comercial y una organización empresarial de la producción donde los nexos en el lugar son subordinados a los nexos del mundo. El uso competitivo y jerárquico del territorio provocan que los mayores lucros sean obtenidos por algunos agentes que trabajan sobre los mismos recursos territoriales.

De esta manera, la dinámica del nuevo esquema de producción en Vicuña Mackenna se asocia a modelos empresariales que, dependiendo de la etapa del proceso productivo de que se trate, requieren y usan el espacio de formas renovadas. La presencia de una división territorial del trabajo y de un uso del territorio por parte tanto de agricultores modernos como de grandes empresas y de ambos en conjunto ocasiona contradicciones entre lo local y lo global. De esta manera se llega a caracterizar a la localidad bajo el nombre de la “nueva zona núcleo”. El sur cordobés, espacio marginal en la provincia, ha respondido a lo largo de su historia a impulsos o vectores extra-regionales,

extra-locales y es en función de esos impulsos que se ha estructurado y estructura el espacio. Todo es incorporado a la dinámica del mercado, dinámica que no responde a problemáticas situadas.

Esta área de producción agropecuaria con vocación exportadora introduce de a poco un modelo del agronegocio capaz de renovar la especialización productiva de la ciudad y de su entorno, ante una cada vez mayor dispersión del control técnico de la producción que deriva en un crecimiento de la economía urbana que se ve reforzada por un aumento de su economía comercial. Pero a su vez deconstruye otras formas de hacer (agentes no hegemónicos, cooperación, copresencia) para volver a construir rompiendo equilibrios preexistentes e imponiendo otros bajo nuevos contenidos de ciencia, técnica e información. La clave está en adquirir mayores volúmenes de productos obtenidos en áreas más reducidas y en tiempos más cortos, lo que deriva en una disminución de la Población Económicamente activa en las áreas rurales para pasar a un predominio del manejo corporativo del espacio agrícola donde se confunden las estrategias y los discursos del accionar de estas empresas para poder arraigarse territorialmente.

Referencias bibliográficas

- Agüero, R., Bustamante, M., Zalazar, D. & Galfioni, M. (2009). Cambios productivos en las actividades agropecuarias de la región sur de la provincia de Córdoba (1988-2007). *Reflexiones Geográficas*, n° 13. pp. 51-76.
- Agüero, R. González, J. & Puigdomenech E. (2004). Diagnósis. Problemáticas y perspectivas de la localización de la PEA agropecuaria. La región pampeana que rodea la ciudad de Río Cuarto. *Reflexiones Geográficas*, n° 11, pp. 249-275.
- Cóccaro, J. (2002). La voz del territorio: el desafío de escucharla. *Reflexiones Geográficas*, n°10, pp.193-198.
- Elias, D. (2006). Ensaio sobre os espaços agrícolas de exclusão. *NERA*, IX (8), pp. 29-51.

- Elias, D. (2005). “Reestruturação produtiva da agropecuária e novas dinâmicas territoriais: a cidade do campo”, en *Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL)*. São Paulo: Universidade de São Paulo.
- Entrevistas realizadas a productores agropecuarios y empresas del agro en Vicuña Mackenna Río Cuarto- Córdoba en los años 2015 y 2016.
- Finola, A. (2015). Territorialización de una parte del circuito superior de la economía de la ciudad de Río Cuarto orientado a la provisión de agro-insumo. Trabajo Final de Licenciatura en Geografía. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Frederico, S. (2010). *O novo tempo do cerrado: expansão dos fronts agrícolas e o controle do sistema de armazenamento de grãos*. São Paulo: Annablume.
- Galfioni, M., Lucero, F., Hernández, J., Maldonado, G. (2016). “Estudio de la dinámica poblacional de los asentamientos urbanos en Argentina. La situación de la provincia de Córdoba y la ciudad de Río Cuarto”, en *Actas del I Congreso de Geografía Urbana “Construyendo el debate sobre la ciudad y su entorno”*. San Miguel: Universidad Nacional de Luján.
- Gras, C. (2012). Los empresarios de la soja: cambios y continuidades en la fisonomía y composición interna de las empresas agropecuarias. *Mundo Agrario*, XII (24).
- Gras, C. & Hernández, V. (2013). *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización*. Buenos Aires: Biblos.
- Harvey, D. (2000). “Mundos urbanos posibles”, en Ramos, A. *Lo urbano en 20 autores contemporáneos*. Barcelona: Ediciones UPC.
- Hernández, V. (2009). “La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pampas gringas”, en Gras, C. & Hernández, V. (Coords.). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002. Ministerio de Economía de la Nación.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos 1980, 1991, 2001 y 2010. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010. Ministerio de Economía de la Nación.
- Maldonado, G. & Cóccharo, J. (2006). Pensar el riesgo desde una aproximación geográfica. Lecturas de la problemática ambiental del sur cordobés. *Reflexiones Geográficas*, n° 12, pp.18-29.

- Maldonado, G. (2015). Vulnerabilidad, adaptación y desarrollo en los espacios rurales. Un debate necesario. *Reflexiones Geográficas*, n° 16, pp. 9-20.
- Santos, M. & Silveira, M. (2001). *O Brasil: territorio e sociedade no inicio do século XXI*. Río de Janeiro: Record.
- Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Barcelona: Ariel.
- Silveira, M. (1997). Territorio de las verticalidades y horizontalidades: una propuesta de método, en *Actas del VI Encuentro de Geógrafos de América Latina*. Buenos Aires.
- Villulla, J. & Hadida, F. (2012). Salto tecnológico, tiempos de trabajo y puestos laborales en la agricultura pampeana, 1970-2010. Documentos del CIEA, n°5, pp.115-128.

**Agricultores familiares modernos:
un estudio del territorio Pozo del Carril (Río Cuarto,
Córdoba)**

Leandro Sabanés

María Villaberde

Erica Funes

Nahuel Ramos

Introducción

La presente investigación está enmarcada dentro de los proyectos de investigación “Estudio de prácticas productivas de la Agricultura Familiar del departamento Río Cuarto (2012-2015)” y su continuidad en “La Agricultura Familiar y su relación con los sistemas expertos (2016-2018)”, ambos de Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), implementado en la región del campo “Pozo del Carril”, perteneciente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAV).

Dicho territorio¹ fue motivo de investigación por parte de este equipo de trabajo en los años 1992, 2003, 2008 y 2015, realizándose cuatro diagnósticos socio-económicos-productivos-ambientales de los establecimientos agropecuarios (EAP) de Agricultores Familiares de las colonias La Aguada, Rodeo Viejo, La Piedra y La Barranquita, que circundan dicho campo experimental.

Según los estudios mencionados la región se caracterizaba por la prevalencia heterogénea de agricultores familiares (AF) que disponían de una distinta composición demográfica familiar, diferentes recursos de tierra y capital, e implementaban una diversidad de estrategias productivas. En la última década la diversidad de estrategias productivas disminuyó en los distintos establecimientos agropecuarios (EAPs) desplazando actividades tradicionales. El presente estudio observa que entre los años 1975 y 2015 un 30% de AF vendieron y/o arrendaron sus EAP en el territorio y un 40% de EAP vendieron y/o arrendaron sus campos de acuerdo con el estudio de caso entre 1992 y 2015.

Estos datos coinciden con los resultados de los últimos censos agropecuarios, observándose un 35% menos de EAP a nivel departamental de Río Cuarto, un 34% menos a nivel provincial y un 22% menos de EAP a nivel nacional, comparando el censo nacional agropecuario (CNA) 1988 con el 2002. Cabe resaltar que para el CNA 2002 la provincia de Córdoba fue la que registró el mayor porcentaje de desaparición de EAP en el país y el departamento Río Cuarto el más alto de la provincia. En cuanto a las producciones animales para el Dpto. Río Cuarto se observa una disminución entre los CNA 1988-2002 de 22% menos de animales bovinos, 42% menos de ovinos, 64% menos de porcinos, 33% menos de caprinos, y un aumento de hectáreas sembradas con cultivos oleaginosos. Esto datos evidencian la

1 Territorio ubicado en el noroeste del Dpto. Río Cuarto, región marginal, por condiciones edafo-climáticas, de la pampa húmeda agrícola Argentina.

menor diversidad de actividades y el camino hacia el monocultivo con la soja (Sabanés, Villaberde, Cowan Ros, Ricotto, 2004).

Según el CNA 2002 se registraban 251.116 EAP familiares a nivel nacional, un 76% del total de EAP, cubriendo más de 30 millones de hectáreas (has), un 18% de la superficie total. Los EAP familiares fueron importantes para el poblamiento del campo, el 67% de la población rural, y aportaron el 64% del empleo total agropecuario nacional (Scheinkerman de Obschatko, 2009). Para la provincia de Córdoba los EAP de AF representaban el 70% de un total de 26.226 (UNRC-UNC, 2007).

El llamado “modelo argentino” ha contribuido a la desaparición de gran parte de la agricultura familiar y de los trabajadores rurales. Desaparecieron 25% de los EAP a nivel nacional entre los CNA 1988 y 2002, esto significa 87.000 EAP menos, un 86% tenían menos de 200 Has. y un 9% entre 200 a 500 Has. El agro argentino se convirtió en una especie de agricultura sin agricultores (Teubal, 2008).

A nivel nacional, durante la primera mitad del siglo XX, el mundo rural estuvo regulado por un Estado fuerte, donde coexistían pequeñas y medianas unidades familiares y grandes establecimientos agropecuarios. Se crearon juntas reguladoras, acompañado por la formación de cooperativas en todos los niveles de las cadenas agroindustriales y todo un entramado de negocios y servicios que otorgó dinámica a gran parte del territorio nacional hasta la década de 1970 (Giarracca, 2009).

El proceso de agriculturización se inició en los años ochenta, por problemas físicos del suelo, se comenzó a desarrollar la “mínima labranza”, seguida por “labranza cero” y “siembra directa” durante la década de 1990. En lo económico se implementa el plan de convertibilidad (1991-2002), bajan los precios domésticos de los granos y se encarecen todos los costos directos y fijos; la soja tiene mejor precio internacional y menor costo de comercialización que los otros granos. A fines del período mencionado aparecen los cultivares de soja OGM

(organismos genéticamente modificados resistentes al glifosato) con tecnología de fácil implementación. A lo que se suma menor precio de servicio de contratistas rurales (los AF pasan a integrar la lista de venta de servicio como estrategia de ingreso extrapredial). Todo esto lleva a la difusión del monocultivo de soja y a la migración de los AF a las ciudades (Sabanés, Villaberde, Funes, 2016).

En resumen, a partir de la década del setenta, la acción del Estado en todos sus niveles en cuanto a políticas de tierra y colonización, políticas de precios, inversiones públicas, políticas crediticias, impositivas, de investigación/extensión, la acción social y educativa, no acompañaron al fortalecimiento y la permanencia de la AF. Estas acciones fueron constituidas de acuerdo a políticas públicas neoliberales, con periodos de implementación más fuertes y otros más débiles hasta el presente.

Esta investigación se plantea identificar las transformaciones en esta última década con relación a la estructura agraria, relaciones sociales, uso del suelo y cuál es la percepción de los agricultores respecto al medio ambiente.

Agricultura Familiar, Reproducción Social y Estructura Agraria

Una característica del mundo rural argentino es su complejidad y la diversidad de estructuras sociales que se formaron a través de las distintas políticas implementadas a lo largo de su historia, exhibiendo grandes diferencias sociales, económicas, productivas, y culturales entre regiones por ejemplo la región pampeana y la extra pampeana.

Simplificadamente, estas estructuras, de acuerdo a una vasta bibliografía, pueden ser reducidas a las llamadas agricultura empresarial o patronal y la agricultura familiar. La agricultura empresarial o patronal está identificada con la gran producción de granos y pecuaria

extensiva, que tiene como objetivo el lucro, con completa separación entre gestión y trabajo, donde el trabajo es asalariado y con una organización centralizada de la empresa.

La agricultura familiar puede ser definida a partir de tres características centrales: a) la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de sangre o de casamiento; b) la mayor parte del trabajo es igualmente aportada por los miembros de la familia; c) la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza su transmisión en caso de fallecimiento o de jubilación de los responsables por la unidad productiva. (Abramovay, 1992).

Por otro lado Gasson y Errington, *apud* Abramovay (1997), destacan seis características básicas que definen a la agricultura familiar: la gestión es realizada por los propietarios; - los responsables por el emprendimiento están ligados entre sí por lazos de parentesco; el trabajo es fundamentalmente familiar; el capital pertenece a la familia; el patrimonio y los activos son objeto de transferencia intergeneracional en el interior de la familia; y - los miembros de la familia viven en la unidad productiva.

Los diferentes autores coinciden en que se trata de una “forma de vida” y que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia” (Abramovay, 1992). Sin embargo, la agricultura familiar, es una categoría genérica de productores, que presenta dificultades para su conceptualización. Una de ellas es la marcada influencia que tiene sobre este sector los procesos macroeconómicos, que determinan su constante “evolución” desde formas campesinas (Kautsky, 1989) hacia formas más “empresariales”. Pasando de un sistema autárquico de producción, manipulación y distribución de alimentos (Lutzemberger, 2001) a formas más integradas y adaptadas a economías de mercado.

Las transformaciones por las que han pasado estas formas de producción no sólo son estructurales y funcionales sino ideológicas,

con profundos cambios en el sistema de valores y de representaciones, presentando otras relaciones con el trabajo, la familia, la producción, el mercado y sobre todo con la tierra, el espacio y el tiempo, en definitiva una nueva concepción de él y de su profesión (Lamarche, 1999).

Entre las principales características de estas nuevas formas de producción se destacan el aumento de estructuras económicas productivas; evolución tecnológica; las transformaciones de instalaciones; mecanización del trabajo; reorganización del trabajo; evolución de la productividad, aumento de rendimientos; aparición de nuevos actores en el acondicionamiento, transformación y comercialización de la producción; fuerte articulación al mercado generando menor autonomía y mayor dependencia; cambios en el papel y lugar de la familia, hoy más restrictos (Lamarche, 1999).

De esta evolución resultó un importante aumento en la productividad, una concentración de medios de producción, una empresa agrícola muy influenciada por la industria agroalimentaria, en el tipo y calidad de su producción, y paso de la autonomía a la dependencia cada vez mayor en el aspecto financiero, tecnológico, de mercado, político-ideológico, presentando formas de adaptación más rígidas y limitadas que sus antecesores (Lamarche, 1999).

Más adelante en el tiempo, Amín (2008) propone el concepto *agricultura familiar moderna*, que constituye un segmento indisoluble de la economía capitalista, a la cual se integra completamente. En esta nueva conceptualización ya no es importante el autoconsumo; su producción es para el mercado; su eficacia se debe al equipamiento moderno que incorpora; el principio de la renta de la propiedad desaparece de la remuneración de los agricultores, esto en los países desarrollados; el control de la producción agrícola opera por debajo del comercio moderno (principalmente de las grandes superficies). La Agricultura Familiar no es más que un subcontratista atrapado en las pinzas que forman por arriba el agronegocio (provee de semillas), la

industria (maquinarias), las finanzas (créditos) y por abajo la comercialización por parte de las grandes empresas.

Sin embargo las agriculturas familiares modernas no están orientadas por el beneficio máximo del capital invertido, criterio de las empresas capitalistas. El agricultor busca la mejor remuneración posible para su trabajo, y se comporta como un trabajador calificado, pero no es un empresario. En el capitalismo este trabajador es explotado por el capital que invierte y del cual es jurídicamente propietario, puesto que los beneficios que debe recibir de este capital van a otras manos. Esta agricultura familiar moderna encuentra su lugar en el capitalismo central dominante (Amín, 2008).

Basso y Gehlen (2015) en Brasil, analizan las racionalidades que orientan las conductas productivas de AF modernos, con heterogeneidad productiva. Concluyendo que los agricultores forjan diferentes lógicas y que la relación que ellos establecen con el mercado es fundamental para su racionalidad e identidad. En su tipología describen tres tipos diferentes de AF, tomamos para este estudio por sus características el agricultor familiar moderno convencional. Estos poseen una producción comercial orientada por la lógica de la especialización, con sistemas productivos intensamente tecnificados y altamente demandantes de capital financiero, insumos externos, crédito, conocimientos técnicos y de mano de obra calificada. Dedicados a la producción comercial de cultivos de granos y producción animal (avicultura, porcinos, tambo). La avicultura y porcinos son realizadas con base en la integración agroindustrial. Producen esencialmente para el mercado buscando ingreso. Comercializan sus productos en el mercado de *commodities*, que determina un padrón productivo de referencia universalizada. Con respecto a la tecnología, poseen un parque de maquinarias adecuado a la producción en escala, en constante proceso de incorporación de innovaciones tecnológicas, y con uso intensivo de capital financiero. En la genética, utilizan semillas transgénicas, con índices de productividad superiores a la media de la región. En sus prácticas agronómicas, hacen uso intensivo de insumos de origen in-

dustrial, realizan siembra directa con máquinas de precisión y el control de plagas y enfermedades es realizado con uso de agrotóxicos. La calificación profesional del agricultor familiar moderno convencional está vinculada a la apropiación de tecnologías bajo la lógica de la modernización de la agricultura, lo que lleva a mantenerse en constante proceso de apropiación de conocimientos y competencias específicas, tornándose cada vez más dependientes de asistencia de técnicos especializados (Basso y Gehlen, 2015).

El agricultor familiar persigue como objetivo la reproducción social de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida, muestran mayor capacidad para convivir con las limitaciones ambientales en el proceso productivo. Además son quienes producen para el mercado interno, agregando valor, preservando el patrimonio cultural y percibiendo en la mayoría de los casos, un menor precio de sus productos. A nivel de políticas de Estado son generadores de empleos y promotores de la seguridad y soberanía alimentaria (Sabanés, Villaberde, Cowan Ros, Ricotto, 2004).

Por su parte, Almeida (1986), sugiere que en lugar de la idea común de funcionalidad macroeconómica de la familia rural para el capital, aparece la idea de reproducción de la familia para sí, articulada con su inserción en la sociedad capitalista. Las familias adoptan estrategias como respuesta a presiones macroeconómicas y políticas. Las respuestas de las familias pueden ser en el ciclo corto, la intensificación del trabajo y la dispersión de la unidad de trabajo familiar. Otras respuestas de largo plazo pueden ser que los hijos migran precozmente, control de natalidad, control sobre patrimonio, familias y grupos de parientes pueden adquirir una dimensión corporativa.

Desde esta perspectiva los problemas de la economía de pequeños productores y de parentesco y propiedad se unifican, articulándose al campo externo (precios, mercado, leyes) para producir familias diversas y con cualidades de vidas distintas (Almeida, 1986).

Entendiendo a la noción de “reproducción social”, como el proceso de mantener, reponer y transmitir el capital social de generación a generación, siendo el grupo doméstico su mecanismo central, lo cual tiene simultáneamente una dinámica interna y un movimiento gobernado por sus relaciones con el campo externo (Fortes *apud* Almeida, 1986).

El concepto de sistema de estrategias de reproducción social sirve para interpretar el conjunto de estrategias a través de las cuales la familia busca reproducirse biológica y socialmente, lo que sería reproducir las propiedades que permiten mantener su posición social (Bourdieu, 1990).

De acuerdo a esto, y siguiendo con el análisis de Bourdieu (1994), que establece una tipología de esas estrategias: las estrategias de “inversión biológica”, las más importantes son las estrategias de fecundidad y las estrategias profilácticas; las “estrategias sucesorias” aspiran a asegurar la transmisión del patrimonio material entre las generaciones; las “estrategias educativas” comprenden las estrategias escolares y las éticas que constituyen la esfera moral de la familia, el acceso al sistema escolar no garantiza una movilidad social ascendente; las “estrategias de inversión económica” están orientadas a la perpetuación o el aumento del capital en sus diferentes tipos. Por consiguiente, se trata a la vez de acumular capital económico y también capital social: las estrategias de inversión social apuntan a establecer o mantener relaciones sociales directamente utilizables o movilizables, a corto y largo plazo, transformándolas en obligaciones duraderas, sobre todo por el intercambio de dinero, trabajo y tiempo; las “estrategias de inversión simbólica” son todas las acciones tendientes a conservar y aumentar el capital de reconocimiento. Se trata de estrategias cuyo objetivo es reproducir los esquemas de percepción y evaluación más favorables a las propiedades del individuo o grupo, en este caso familiar. Todas estas estrategias son interdependientes y a su vez están todas entremezcladas, y se encuentran cronológicamente

articuladas en la medida que las prioridades van cambiando durante el ciclo familiar (Bourdieu, 1994).

La reproducción del orden social se explica por las múltiples estrategias que los agentes sociales ponen en práctica para la conservación o la apropiación del capital en sus diferentes tipos, esto es: “capital económico”, constituido por los diferentes factores de producción (tierras, fábricas, trabajo) y el conjunto de los bienes económicos: ingreso, patrimonio, bienes materiales; “capital cultural”, corresponde al conjunto de calificaciones intelectuales, sean producidas por el sistema escolar o transmitidas por la familia; “capital social”, que se define en esencia como el conjunto de las relaciones sociales de las que dispone el individuo o grupo. En este sentido, la posesión de este capital implica un trabajo de establecimiento y mantenimiento de relaciones de sociabilidad; “capital simbólico”, al que corresponden los rituales ligados al honor y al reconocimiento, constituyente de ventajas sociales de consecuencias concretas (Bourdieu, 1994).

La noción de estructura agraria, utilizada en este trabajo, puede ser comprendida, como la interrelación de una serie de elementos socio-económicos propios de la vida del agricultor y que a su vez actúan en forma interdependiente e intercondicionada. Dichas estructura se encuentra compuesta por: la estructura social, dentro de la que el agricultor se desenvuelve con su sistema normativo, elementos culturales, y distintos procesos sociales que se pueden desarrollar dentro de la misma (cooperación, conflictos, diferenciación, migración y marginación entre otros); la estructura de tenencia de la tierra que hace referencia a la forma en que los agricultores se relacionan con la tierra, el acceso y los derechos que establecen para su uso; la estructura económico-productiva que está definida por quiénes, qué, cómo producen y el destino de la producción. A partir del estudio de los componentes de la estructura agraria se puede llegar a tener un entendimiento de la heterogeneidad de los resultados (físicos, económicos, sociales, culturales y ambientales) a que arriban los actores involucrados en ella ante la modificación de alguno de los componentes, como así también

la influencia que ejerce el Estado, a través de sus políticas públicas. Debe considerarse también que no se trata de un fenómeno estático, sino que puede modificarse de acuerdo a las circunstancias históricas (Margiotta y Benencia, 1981).

Frente a una creciente “mercantilización”, la agricultura familiar ha podido permanecer en el sistema, gracias a la flexibilidad que presenta en cuanto a las diversas estrategias que asume. La agricultura, y en particular la familiar es una unidad compleja de actividades productivas y reproductivas, que absorben numerosos elementos que pueden transformarse o no en mercantilizados. De la conjunción de ambas actividades surgen como resultados, productos que pueden adquirir valor de intercambio en el mercado o valor de uso e ingresar al sistema como insumo para el siguiente ciclo productivo. Los distintos grados de mercantilización influyen sobre los estilos de gestión y sobre cómo se estructura y desarrolla el trabajo agrícola en cuanto actividad productiva. El grado de mercantilización agrícola es un resultado negociado por los agricultores y otros intereses (Van Der Ploeg, 1992).

A su vez, la mercantilización está cada vez más entrelazada con el proceso de *cientificación*, que es la reconstrucción sistemática de las actuales prácticas agrícolas según pautas marcadas por diseño de carácter científico. Este proceso genera una estructura que permite al capital ejercer mayor control directo sobre el proceso de trabajo agrícola. El capitalismo unifica las explotaciones agrarias y la agroindustria en formas específicas, porque sus relaciones mercantiles se encuentran gobernadas por una matriz de relaciones de poder que las integra, a través de las relaciones técnicos-administrativas (Van Der Ploeg, 1992).

Para Goodman, Sorj y Wilkinson, (1990) este proceso es el “apropiacionismo”, por el cual el capital se apropia de procesos naturales tornándolos industriales. Las semillas se vuelven el vehículo principal del progreso tecnológico de la producción agrícola y el núcleo central de la apropiación industrial. Este proceso de apropiacio-

nismo es la base de la modernización cuya característica principal es requerir más conocimientos externos, despreciando los conocimientos del propio agricultor y su familia, donde las grandes corporaciones tienen mayores posibilidades de imponer sus intereses (Goodman, Sorj y Wilkinson, 1990).

Sin embargo, el proceso de reproducción no pasa de modo sistemático por los mercados, los factores de producción y los insumos no se movilizan por medio de las relaciones mercantiles, no entran en el proceso de producción como mercancías, y sí como valor de uso. Los agricultores producen, movilizan y utilizan valores de uso, parte para valores de cambio y parte para iniciar nuevos ciclos (Goodman, Sorj y Wilkinson, 1990).

Según Van Der Ploeg (1992): “Los agricultores adquieren, por medio del proceso de trabajo agrícola, la capacidad de desarrollar el potencial productivo de sus explotaciones, constituyendo una de las ventajas decisivas que la producción mercantil simple tiene sobre la producción capitalista en la agricultura” (p. 161). En resumen la unidad entre trabajo mental y manual, más el control efectivo por parte del agricultor sobre el proceso de trabajo presente en la producción mercantil simple, posibilita el uso de relaciones sociales no mercantilizadas para su sobrevivencia.

Estas nociones teóricas nos brindan un marco conceptual que nos ayuda a interpretar a los AF de la región del campo “Pozo del Carril” de la UNRC.

Metodología

Este estudio comprendió un recorte de la región sud-este de la Pedanía San Bartolomé (Dpto. Río Cuarto, Córdoba, Argentina), abarcando aproximadamente 40.000 Has., encontrándose parte de las co-

calificadas, realizadas en junio de 2015. Además de la recolección de información primaria y secundaria como relevamiento bibliográfico, material documental, registros de observación, y técnicas de análisis de datos bibliográficos y documentales.

La presente caracterización tiene un carácter cualitativo y busca identificar señales o indicios de procesos de transformación social, los cuales se espera continuar estudiando en una posterior etapa.

Resultados y Discusión

La conformación histórica de la estructura agraria de la región se destaca por su efímera trayectoria, entre las décadas de 1930-1940 llegan las primeras familias de colonos, primero como arrendatarios y después como propietarios, debido a las políticas de tierras y colonización a nivel nacional del gobierno de Perón (1946-1952). La estancia La Piedra de 10.000 Has. y la estancia Pozo del Carril de 5000 Has. se dividieron en EAP de aproximadamente 200 Has., formándose así las distintas colonias. Dichos colonos se dedicaban al cultivo de sorgo, maíz, trigo y lino, cuando pasan a ser propietarios comienzan con las producciones animales de ciclo completo, principalmente producción porcina y en segundo lugar la producción bovina, como así también producciones menores para autoconsumo como ovinos y caprinos.

El campo de experimentación “Pozo del Carril” fue la única fracción que no se amortizó y fue cedida a la UNRC por el gobierno provincial en la década de 1980. Después de todas estas décadas de desarrollo rural llegamos al periodo que va entre los años 1975 al 2002 que en el territorio de estudio, se produjo un proceso de concentración de tierras por la venta y/o por superficie cedida en arrendamiento.

Desde la creación de las juntas nacionales, durante el primer peronismo, más la creación de cooperativas en todos los niveles de las cadenas agroindustriales y todo un entramado de negocios y servicios

que otorgó dinámica a gran parte del territorio nacional, a mediados de los setenta todo comienza a declinar y comienzan drásticos cambios en la configuración cultural-societal a nivel nacional. Con el plan de convertibilidad de 1991 esa transformación se acelera drásticamente, surge el capital financiero en el mundo rural a través de los fondos de inversión y *pool* de siembra, así el capital transnacional además de participar de la cadena agroindustrial se introduce directamente en la producción agraria. Con las políticas públicas implementadas², todo cambia para aumentar la escala de producción y dejar afuera a un número importante de AF. Comienza una nueva lógica productiva, creada por el neoliberalismo, denominada “agronegocios” (Giarracca, 2009).

En este contexto, varios AF se vieron obligados a vender parte o la totalidad de su ganado bovino y porcino, maquinarias y en los casos más extremos a alquilar y/o vender sus tierras. Mientras que los AF más capitalizados del territorio, los *pools* de siembra y las grandes empresas fueron quienes pasaron a producir en las tierras cedidas por arrendamiento o venta en el periodo 1990-2000 (Cowan Ros, Pereira, Ricotto, Sabanés, Villaberde, 2004)

En la región de estudio existían 171 EAP para el año 1975 (según mapa de catastro provincial), de los cuales se vendieron 49 EAP en estos 40 años, representando un 30% menos de EAP en 2015. De esos 171 EAP existentes para 1975, se muestrearon 36 en el primer estudio del territorio en 1992, según Dpto. Economía Agraria. De esta muestra de 36 EAP tenemos que cuatro EAP se vendieron entre 1992-1999 y diez EAP pasaron a ser arrendados entre los años 1999-2014.

2 Políticas públicas impuestas por el uso de la fuerza de la dictadura entre 1976 y 1983. Total desregulación económica en 1991. Además del disciplinamiento social con gremios acallados, militantes sociales desaparecidos y encarcelados, y territorios aterrados, fue la gran antesala para penetrar, democracias mediante, aspectos económicos del modelo, de una dureza imposible de aplicar unas décadas antes. Comenzó la versión criolla de no hay alternativas, adaptarse a las nuevas reglas o perecer (Giarracca, 2009).

Esto significa que quedaron 22 EAP, un 60% de la muestra original, que se pueden definir con las siguientes características.

Todos los AF tienen como objetivo la reproducción social del establecimiento, para lo cual implementan una serie de estrategias como aumentar la diversidad de producciones, maximizar las actividades de reproducción³, producciones que permitan generar valor agregado, minimizar los riesgos, maximizar la mano de obra familiar, disminuir los costos directos y los costos fijos, maximizar los ingresos brutos, aumentar la escala de producción, aumentar el retorno por peso invertido y minimizando las transacciones con el mercado agropecuario.

Los EAP tenían entre 30 a 700 Has. Todos con títulos de propiedad perfecto, además la mayoría agrandaron su EAP arrendando entre un 20 a 30% más de superficie, logrando así mayor escala de producción, disminuyendo los costos en general y los fijos en particular, y maximizando el trabajo de la familia. Los AF, marginados de políticas crediticias y de fuentes de financiamiento, arrendaron una parte de su campo para generar ingresos, en algunos casos alquilaron un lote para maní a las corporaciones. No se evidencia la compra de tierras por empresas en el territorio, predominando el arrendamiento y /o compra-venta de tierras entre parientes y vecinos.

En cuanto a la mano de obra, en todos los EAP es aportada por la familia de los AF, en más del 80% de los casos el trabajo familiar es aportado conjuntamente por la segunda y tercera generación. La primera generación fueron los fundadores de los EAP (en la tabla N° 1 se observan las principales características de las generaciones de las familias rurales). Un 30% de los EAP tiene empleados asalariados

3 Actividades de reproducción son aquellas que realiza el AF para mantener los medios de producción de un ciclo para otro, no van ni pasan por el MERCADO, como por ejemplo guardar semilla para el próximo ciclo, dejar una ternera para futura madre, una pradera de gramíneas y leguminosas perenne, cuestiones que están vistas como poco eficientes o de “tecnología atrasada” por las corporaciones y por los centros de investigación.

temporarios, solo un EAP cuenta con un empleado permanente con más de treinta años de antigüedad. La segunda generación es responsable de las producciones animales y la tercera generación lo es de la agricultura. En todos los casos los responsables del manejo de la maquinaria son los miembros de la tercera generación, hijos y yernos. Los AF consideran que para manipular las máquinas modernas se debe tener cierta capacitación, esto sería una de las razones de que la tercera generación está a cargo de las mismas, ya que son ellos los que han tenido mayores oportunidades en cuanto al manejo de nuevas tecnologías.

En cuanto al capital de los EAP, alrededor del 80% del mismo es la valoración de la tierra, el resto lo completan los otros rubros como mejoras, maquinarias y animales. En la última década se ha dado un proceso de capitalización de los AF, un 86% de los EAP disponen de maquinarias agrícolas en adecuado estado de conservación, con una antigüedad menor a 10 años. La compra de maquinarias se efectuó a través de créditos del Banco Nación a bajas tasas de interés y largo plazo, y otros compraron con financiación directa de las empresas dedicadas a la comercialización de maquinarias, adquiriéndose en forma de sociedad entre padre e hijo/s y entre hermanos.

Disponer de las maquinarias necesarias posibilita realizar las labores a tiempo, para maximizar las coproducciones. Además, contar con maquinaria propia y en buen estado les permite vender servicios de contratista rural, maximizando así el uso de la mano de obra familiar. Los que poseen campos más chicos y se dedican a la agricultura, han adquirido un interesante parque de maquinarias para vender servicios y obtener su principal ingreso, siempre es la tercera generación quien realiza esta actividad.

Describiendo las producciones agropecuarias se puede indicar que el 91% de los AF tienen sistema mixto (agrícola-ganadero bovino). De este porcentaje, el 100% realiza producción de bovinos de carne, conjuntamente un 15% realiza producción de cerdos en sistemas

intensivos y semi-intensivos, y un 15% realiza avicultura articulados con corporaciones alimenticias. El 9% restante de los EAP se dedican netamente a la agricultura, produciendo soja y maíz, contando con el equipamiento de maquinarias adecuado.

Los EAP de los AF se caracterizan porque en sus tareas cotidianas se realizan conjuntamente actividades de producción y de reproducción que están íntimamente ligadas. Sin embargo, por presión del mercado y por los procesos de cientificación se van perdiendo paulatinamente las actividades de reproducción. De todas las actividades que los AF realizan, la producción bovina y porcina de ciclo completo maximizan las actividades de reproducción, y conjugan con la mayoría de sus estrategias como minimizar los riesgos, maximizar mano de obra familiar, maximizar los ingresos brutos, disminuir costos directos y fijos, aumentar la escala de producción, aumentar el retorno por peso invertido, y disminuir la penosidad al trabajo.

La producción bovina de ciclo completo se caracteriza por su flexibilidad en todo concepto, es una *caja de ahorro*, se puede vender de contado, si el ternero esta barato se cria y se vende como gordo. Dicha producción prevalece en todos los estudios, siendo producida a campo en las primeras etapas y se termina a corral, simultáneamente y/o alternadamente el engorde a corral se utiliza en todas las categorías dependiendo la época del año, con alimentación en base a suplementaciones, en particular de silaje de maíz y grano de maíz de propia producción y pellets de soja (canje de granos de soja que producen con empresas). Además, algunos compran terneros para engordar, pero lo hacen en base a la cantidad de maíz que tienen de su cosecha. Difícilmente compran maíz para alguna producción, lo normal es que se presten granos entre los amigos/parientes/vecinos hasta que coseche el propio. La cantidad de animales en la región se mantiene en el

tiempo, resaltando que se ha intensificado la producción en la zona serrana, según información del SENASA.⁴

Con respecto a la producción porcina, en 1970 el departamento Río Cuarto era el segundo productor de cerdos a nivel nacional, como rasgo distintivo de la prevalencia de AF. En 1992 la actividad se posicionaba como la segunda en importancia, se realizaba de manera extensiva y semi-extensiva. En 2015 solo quedan tres criaderos de cerdos tipo intensivo y semi-extensivo y están a cargo de AF de la segunda generación. Cabe señalar que la primera generación de AF eran “*chancheros*” con sistemas de producción al aire libre, con parideras a galpón, hoy abandonadas. Además, la poca transparencia del mercado y numerosos casos de estafa en la comercialización por parte de acopiadores, determinó el abandono de la actividad.

La mayoría de los AF coincide que producir cerdos es el primer paso para volver a capitalizarse, por transformar los propios granos en carne, requiere bajas inversiones de instalaciones, rapidez en el proceso, pero como problemas plantean la penosidad del trabajo y la escasa transparencia del precio y la cartelización de la comercialización.

La producción avícola surge en estos últimos cinco años directamente integrada con las corporaciones. Los AF que se asocian necesitan engrosar el ingreso bruto de sus EAP y ven esta sociedad como una alternativa viable, dos de ellos tienen solo 30 Has. propias y subutilizaban la mano de obra familiar. Los AF aportan a la sociedad el espacio físico, los galpones de cría, gastos de energía eléctrica, impuestos, infraestructura de agua (bombas, molinos, entre otros y su mantenimiento), combustible para calefacción de los galpones y mano de obra. La corporación aporta los pollitos, el alimento y el

4 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es un organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos.

servicio técnico-administrativo. Esta integración genera relaciones de poder expresadas a través de las “relaciones técnico-administrativas”, el agricultor se convierte en un empleado de su propio establecimiento, con total pérdida de autonomía. Ninguno de estos AF articulados pudo explicar que ingreso neto le corresponde como parte de la sociedad con la corporación. Por otro lado, esta producción no tiene ninguna actividad de reproducción, hecho que va contra su propia lógica. Una de las AF sostiene “(...) en definitiva nosotros no arriesgamos nada y solo ponemos trabajo, y así obtenemos un dinero adecuado por esa poca superficie de tierra que le dedico”... esto sí va con su lógica, que es no remunerar su propio trabajo.

En cuanto a las producciones de grano, la totalidad de los AF siembran soja como principal cultivo, destinando el 65% de la superficie agrícola. Le sigue el maíz, para el cual destinan el 35% restante, los rendimientos de estas producciones están encima de la media regional.

La difusión del cultivo de soja está asociado a actividades de reproducción como el uso de semilla propia (variedades resistentes al glifosato), a lo que se suma un buen desarrollo del cultivo en lotes precedidos de maíz, no requiere fertilizantes, se adapta a problemas climáticos, soporta ataques de insectos y malezas, tiene bajos costos directos, menores gastos de comercialización que otros cultivos, un precio histórico alto desde 1970, y por ende un buen ingreso bruto. La mayoría de las EAP disponen de maquinaria de siembra directa, lo que permite realizar las actividades a tiempo. Para los que no disponen de sembradora fue barato contratar servicios de contratistas en estos años.

En cuanto al cultivo de maíz tenemos que la semilla es híbrida y debe ser adquirida en el mercado, requiere de una adecuada fertilización y control de malezas. Tiene un costo directo significativamente mayor que la soja, y menor precio de mercado, pero con altos rendimientos el ingreso bruto supera o iguala al cultivo de soja. En cuanto a las ventajas, el grano de maíz es utilizado como base de la

alimentación de las producciones animales, en un porcentaje de 80% en las raciones, deja abundante rastrojo para alimentar a los animales, y mejora las características físico-químicas del suelo. Las características expuestas hacen del cultivo de maíz este netamente asociado a actividades de reproducción.

La realización de los cultivos de maíz y soja en un mismo establecimiento aparte de aportar a la diversificación de cultivos, maximiza la mano de obra y la maquinaria por sembrarse y cosecharse en distintas fechas (Tabla N° 2: síntesis de las principales características de las estrategias productivas).

En las distintas producciones que realizan los AF incorporan tecnología permanentemente, característica que Carballo (2003) y Amin (2008), describen como AF modernos, los cuales presentan cada vez más dependencia con el mercado de insumos, en detrimento de su independencia. Reduciendo cada vez más la dependencia con la naturaleza y las actividades de reproducción. En el marco del proceso conocido como “apropiacionismo”, por el cual una variedad de semilla de maíz es reemplazada por un híbrido de maíz, que se debe comprar todos los años. También los procesos de mineralización producidos por una pradera de pastos reemplazados por el uso de fertilización química. En todos los casos se trata de procesos de modernización que requieren más conocimientos externos, depreciando los conocimientos del propio agricultor, donde las grandes corporaciones tienen mayores posibilidades de imponer sus intereses (Goodman, Sorj y Wilkinson, 1990).

Un proceso que acelera la mercantilización, y a su vez estrecha más el vínculo entre la explotaciones agrarias y la industria unificándolas, es el de *cientificación*, definido por el autor como: “(...) la reconstrucción sistemática de las actuales prácticas agrícolas según pautas marcadas por diseño de carácter científico” (Van Der Ploeg; 1992:153).

La especificidad de regímenes de producción en que ha tenido lugar la unificación entre la industria y las explotaciones agrarias, se ve representada por una matriz de relaciones de poder, expresadas a través de las relaciones técnico-administrativas que tienen el poder de prescribir o sancionar a la agricultura de la mercantilización como proceso de trabajo (Van Der Ploeg, 1992).

El neoliberalismo imprimió mayor velocidad a la apropiación de las relaciones sociales-económicas-productivas, procurando eliminar las actividades históricas-tradicionales de reproducción que llevan a cabo los AF, para transformarlas en un insumo tecnológico (ciencia + industria) de mercado y así tener el control total de las unidades de producción. Lo que lleva a que los AF tengan que comprar cada vez mayor cantidad de insumos a valores de intercambios más altos y a vender sus productos a valores de intercambios cada día más bajos.

La comercialización de insumos y productos de cereales y oleaginosos se realizan con las corporaciones⁵ que están en la región. Entre las principales empresas se destacan el Grupo Depetris,⁶ grupo Aceitera General Deheza,⁷ ATS Agrotecnología-Servicios S.A.,⁸ Compañía

5 Dan Morgan (1979), explica como son las relaciones de intercambio en la comercialización de insumos y productos de cereales y oleaginosos de los AF con las corporaciones a nivel mundial.

6 Grupo Depetris es un grupo de empresas que le ofrecen a los agricultores agro-insumos (semillas, fertilizantes y agroquímicos), seguros agropecuarios, servicio de flete y logística, acopio y acondicionamiento de cereales y oleaginosas, asesoramiento técnico, crédito y financiero, entre otras. A su vez, articula con Syngenta, Sancor Seguros, Rizobacter Argentina S.A., Bunge, Speed Agro y Profértil. Su casa central se encuentra en la ciudad de Río Cuarto. <http://www.grupodepetris.com.ar/>. (Consultado: 25-09-2016.)

7 Grupo General Deheza es un grupo de empresas que se dedica a la de fabricación de proteínas vegetales en forma de harinas y pellets, la producción de aceites vegetales, biodiesel y bioetanol. Procesa semillas de oleaginosas, principalmente soja, girasol y maní. Trabaja establecimientos agropecuarios propios, arrendados y en asociación con productores, brinda servicios ferroviarios y portuarios. Posee su sede central en la localidad de General Deheza <https://www.agd.com.ar/es/grupo-agd> (Consultado: 25-09-2016).

8 ATS Agrotecnología y Servicios S.A es una empresa que vende agroinsumos, asesoramiento profesional, nutrición animal, comercialización de granos, acopio, transporte y siembra asociada con productores (*pool* de siembra). Es representante de Syngenta, Basf, Atanor, Rizobacter Argentina S.A., Summitagro y Bunge. Su casa central se encuentra

Argentina de Granos⁹ y Dreyfus.¹⁰ La estrategia de venta es el canje de agro-insumos por granos de soja y maíz, lo que genera ventajas en cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no implica necesariamente una erogación financiera.

La comercialización de ganado bovino siempre tuvo un mercado más transparente que la comercialización de cerdos, debido principalmente a los remates ferias, ventas a frigoríficos, matarifes, y con mayor información en los medios de comunicación, entre otros; en tanto que la de cerdos se realiza con intermediarios, acopiadores y abastecedores de Río Cuarto, que por lo general forman una cartelización del mercado.

En relación al asesoramiento profesional se observó que el contador es requerido en forma permanente por las exigencias impositivas del Estado. Las decisiones técnicas de las diversas producciones se respaldan en la experiencia propia y en los consejos de los profesionales que venden insumos.

En cuanto al nivel de conocimientos y educación formal observamos que la mayoría de los AF cuentan con conocimientos e información técnico-productivo-administrativo-económico. Todos los responsables de los establecimientos de las distintas generaciones sabían leer y escribir, en la tercera generación surgen los primeros

en la localidad de Adelia María (Córdoba). <http://www.atssa.com.ar/ats/sucursales-datos> (Consultado: 26-09-2016).

9 Compañía Argentina de Granos brinda servicios desde compra y venta de cereales. Su casa central se encuentra ubicada en la localidad de Adelia María (Córdoba). Cuenta con 93 sucursales distribuidas en 10 provincias argentinas. <http://www.cagsa.com.ar/sucursales/>. (Consultado: 26-09-2016).

10 LDC Argentina es una de las compañías más grandes del país y su tercer mayor exportador. Comercializamos oleaginosas, cereales, harina y aceite de soja, biodiesel, arroz, algodón, productos lácteos, fertilizantes, agroquímicos y semillas. Contamos con una red de activos de almacenamiento en 22 ubicaciones, y brindamos servicios comerciales y de logística, al igual que recursos y soluciones financieras a una cartera de clientes en constante crecimiento. <http://www.ldcom.com/ar/es/nosotros/louis-dreyfus-company-en-argentina> (Consultado:01-08-17).

cinco profesionales (Ver Tabla N° 1: principales características de las generaciones de las familias rurales de la zona de estudio). Se observa que la mayoría de la segunda generación participaron de grupos de capacitaciones durante casi toda la década del '90, formándose dos grupos pertenecientes al programa Cambio Rural - INTA, (10 AF en cada grupo), y un grupo de AF perteneciente al proyecto de capacitación del Dpto. de Economía Agraria-FAV, experiencias que funcionaron con reuniones de capacitación y visita mensuales del técnico a cada campo. A su vez, en la misma década se realizaron talleres y jornadas demostrativas técnicas-productivas-económicas en el campo de experimentación Pozo del Carril FAV-UNRC.

Los clubes sociales, uno por cada colonia funcionaban como verdaderos centros comunitarios, con sus equipos de fútbol, de bochas, campeonatos de domas, y sus típicos bailes familiares donde, en parte, se definían los nuevos matrimonios. La mayoría de los integrantes de la segunda generación conoció a sus cónyuges en estas actividades comunitarias. Solo ocho apellidos son los que se repiten en la zona de estudio, determinando alguna relación de parentesco. Esto ha permitido la generación de capital social comunitario (alquilen lotes entre parientes a un menor precio, a que no se vendan los campos pequeños). Una estrategia de reproducción social que ya casi se perdió es el arreglo de los nuevos matrimonios, que hasta la segunda generación se casaban dentro del territorio, ayudados por la figura de la comadre, garantizando la continuidad y/o mejoramiento de la reproducción social de la familia (Woortmann, 1995). Hoy estas prácticas ya son escasas y los nuevos matrimonios ya rompieron con esa lógica.

Con respecto a los asuntos ambientales según los AF continúa como principal problema la erosión hídrica, pero gracias al uso de la tecnología de siembra directa se va minimizando el problema, cuestión que se observa en el discurso pero no en la práctica, ya que no tiene correspondencia con la presencia de barrancas y caminos rurales intransitables. En la última década aparece la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por la alta concentración de excrementos

sólidos y líquidos generados en *Feed-lot* y presencia de arsénico en el agua para consumo animal.

Para AFM los impactos socio-ambientales no son problemas presentes en sus preocupaciones, para ellos, los problemas son el resultado de la necesidad de producir alimentos para la sociedad. Poniendo a la naturaleza al servicio de la gran agroindustria (Basso y Gehlen, 2015).

Todos los AF tienen como objetivo la reproducción social del establecimiento, para lo cual implementan una serie de estrategias. Como plantea Bourdieu (1990, 1994) los AF utilizan una serie de estrategias para conseguir la reproducción biológica a través de estrategias de inversión biológica, sucesorias, educativas, de inversión económica y de inversión simbólica. Y la reproducción del orden social se explica por las múltiples estrategias que los agentes sociales ponen en práctica para la conservación o la apropiación del capital en sus diferentes tipos, como capital económico, capital cultural, capital social, y capital simbólico.

Estas estrategias se orientan a aumentar la diversidad de producciones, maximizar las actividades de reproducción, producciones que permitan generar valor agregado, minimizar los riesgos, maximizar la mano de obra familiar, disminuir los costos directos y los costos fijos, maximizar los ingresos brutos, aumentar la escala de producción, aumentar el retorno por peso invertido y minimizar las transacciones con el mercado agropecuario.

Tabla N° 1.

Principales características de las generaciones de las familias rurales de la zona de estudio

GENERACIÓN	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA
EDAD	90 años	60 a 70 años	30 a 45 años	20 años
FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA	arrendatario y luego pasa a ser propietario	propietario y alquila más superficie	alquila en sociedad con progenitores	ausente
RESIDENCIA	en el campo	en el campo	parte en el campo y parte en ciudad de Río Cuarto	ciudad de Río Cuarto
FUERZA LABORAL EN EL CAMPO	presente	presente	una parte presente principalmente acompañando a la segunda generación	ausente
NIVEL EDUCATIVO	La mayoría sabían leer y escribir	La mayoría con escuela formal primaria rural incompleta y algunos secundario incompleto y universitario incompleto	La mayoría con escuela formal primaria rural completa y secundario incompleto y cinco profesionales universitarios	Escuela formal primario rural y secundario rural y universitario
CAPACITACIONES		Capacitaciones en los grupos cambio rural y grupo capacitación FAV		
MATRIMONIOS	entre familias de las colonias en los trabajos de minga y distintas fiestas (casamientos organizados por la comadre)	entre familias de las colonias a través de los bailes en los clubes, trabajos de minga y distintas fiestas (casamientos organizados por la comadre) solo ocho apellidos predominan en el territorio	La mayoría de los matrimonios son con personas de la ciudad de Río Cuarto	

PRINCIPALES ACTIVIDADES	al principio agricultura y luego sistema mixto ganadería (porcinos-bovinos)	Sistema mixto producciones animales (bovinos-porcinos) y maíz-sorgo	principalmente agricultura (soja-maíz)	ausente
PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO RURAL	clubes sociales, y cooperadoras escolares	clubes sociales cooperativa agrícola, cooperadoras escolares, actividades de extensión y capacitaciones	Cooperadoras escolares Actividades de extensión y capacitaciones	ausente
INFRAESTRUCTURA	Fundadores de los Clubes, escuelas, tendido eléctrico y caminos. Armado completo de los campos.	instalaciones para la producción intensiva de animales y para almacenamiento de granos		ausente

Fuente: elaboración propia.

Tabla N° 2.

Síntesis de las principales características de las estrategias productivas

ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS	
1) Tipo de actividad	mayoría sistema mixto con predominio de agricultura y ganadería bovina ciclo completo
	minoría sistema mixto con predominio de agricultura y producción porcina ciclo completo y en confinamiento
	minoría sistema mixto con predominio de producción de pollos integrados con corporaciones y producción agrícola
	principal cultivo: soja
	segundo cultivo: maíz
	venta de servicios de maquinarias
	escasa a nula producciones de autoconsumo
2) Composición interna del capital	poseen título perfecto de la tierra. Arrendan más superficie, los AF más vulnerables ceden una parte de su campo
	proceso de capitalización, aumento del valor de la tierra compra de maquinaria, galpones y silos
3) Organización del trabajo	mano de obra familiar, con predominio de dos generaciones trabajando conjuntamente y ausencia de la generación más joven
	escasa contratación de mano de obra asalariada temporaria
4) Manejo técnico	Agricultura
	siembra directa y mayor uso de tecnología e insumos de mercado: semillas OGM, agrotóxicos, fertilización sintética, barbecho químico.
	asesoramiento técnico- productivo con profesionales de las corporaciones
	Bovino
	ciclo completo, tiende a intensivo
	alimentación: grano de maíz propio y harina de soja obtenida por canje, rollo y silaje. En menor medida alfalfa, verdeos de invierno y verdeos de verano
	Cerdos
	intensivo
alimentación: grano de maíz, harina de soja obtenida por canje y concentrado balanceado	

5) Formas de provisión de insumos	cartelización de mercado
	misma corporación que les compra la producción, les vende los insumos
6) Formas de financiamiento	Agricultura: parcialmente financiada por corporaciones.
	Avicultura: financiada por corporaciones y banca financiera.
	Bovinos y cerdos: Financiamiento propio
7) Destino de la producción y comercialización	Vacunos y cerdos: mercado local y regional.
	Pollos, soja y maíz: corporaciones

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

A nivel nacional, se implementaron políticas reguladoras, acompañadas por formación de cooperativas en todos los niveles de las cadenas agroindustriales y un entramado de negocios y servicios que otorgó dinámica a gran parte del territorio nacional hasta la década de 1970.

La conformación de la Estructura Agraria fue favorable para los AF de este territorio de estudio hasta la década de 1970 y desde ahí a la fecha la acción del Estado, en todos sus niveles, se vuelve desfavorable. Llegamos al 2015 con un 30% menos de EAP a nivel de territorio comparado con el año 1975 y un 40% menos de EAP en el estudio de caso, comparado con 1992, agricultores familiares que tuvieron que vender sus campos y/o se transformaron en arrendatarios, según esta investigación.

Casi todas las familias del territorio llegaron en el mismo momento y fundaron las distintas colonias en la década comprendida entre 1930-1940, casi todas comenzaron con una dotación de recursos similar, y compartiendo el mismo contexto. Sin embargo solo algunos de esos EAP de AF permanecen, debido a las características y composiciones propias de cada familia.

Las características propias de la composición familiar (grupos familiares democráticos), con una interrelación adecuada para el trabajo y la toma de decisiones entre segunda y tercera generación, sumado a un alto nivel de conocimiento técnico-productivo-administrativo-económico-financiero, con estrategias como, diversificar sus actividades de producción y reproducción, que permitan generar valor agregado, minimizar los riesgos, maximizar la mano de obra familiar, disminuir los costos directos y los costos fijos, maximizar los ingresos brutos, aumentar la escala de producción, son las principales variables que convergen para la reproducción social.

Las estrategias que para Merlet y Jamart (2007), asumen los AF de no incorporar fuerza de trabajo externa, remunerar la fuerza de trabajo sobre la base de los resultados de la unidad de producción (no sobre una base salarial), e integrar las dinámicas generacionales y patrimoniales en la toma de decisiones, están presentes en los AF analizadas.

Coincidiendo con Amin (2008), quien señala que las agriculturas familiares modernas no responden al criterio del máximo beneficio del capital invertido. El agricultor busca la mejor remuneración posible para su trabajo, y se comporta como un trabajador calificado, pero no es un empresario. Alcanzan la reproducción de la familia, articulando su inserción en la sociedad capitalista. Las familias adoptan estrategias como respuesta a presiones macroeconómicas y políticas. (Almeida, 1986).

De acuerdo con Basso y Gehlen (2015), los AFM están sometidos a una padronización productiva que alcanza a los productos, los procesos productivos y a la familia del agricultor. Están motivados por la búsqueda de la eficiencia y la maximización de los resultados de la producción, expresándose en el aumento constante de la escala de producción, en niveles crecientes de productividad y de calidad. Constantemente están incitados por los actores dominantes de la cadena productiva a promover innovaciones tecnológicas, el no atendimento

de las determinantes del mercado globalizado pone en riesgo la sobrevivencia del establecimiento del AFM.

La adopción del paquete tecnológico productivista se presenta como la solución a sus problemas, como una opción única que les impone apenas dos alternativas: o aceptarla o dejar la actividad. Esto evidencia el porqué de la sujeción por la racionalidad productivista inserta en el padrón de modernización de la agricultura (Basso y Gehlen, 2015).

En la medida que los AF van mercantilizando cada vez más sus actividades de producción y de reproducción, también van aumentando su riesgo a desaparecer como planteaba uno de los entrevistados “(...) aquí los primeros que dejaron el campo fueron los más audaces (...)”, haciendo referencia a aquellos que se tecnificaron, monopolizaron sus producciones, y se endeudaron en el periodo 1990-2002.

Para Merlet, M. y Jamart, C. (2007), los países más avanzados del mundo se han desarrollado sobre la base de una agricultura familiar de pequeña escala, por el contrario el vigoroso desarrollo agrícola de América Latina parece basado en grandes empresas con mano de obra asalariada. El agro argentino se convirtió en una especie de agricultura sin agricultores (Teubal, 2008). Como plantea Navarro *et alii* (2013) el desarrollo agrario brasilero va imponiendo una “vía argentina”, que significa el vaciamiento demográfico del campo, con una agricultura de gran escala y alta eficiencia productiva y tecnológica.

Van Der Ploeg (2014), también explica este proceso, la agricultura familiar es exprimida y empobrecida hasta la extenuación, los precios son bajos, los costos son altos y la volatilidad excluye la posibilidad de planificar a largo plazo, el acceso a los mercados se bloquea cada vez más y las políticas agrarias descuidan a los agricultores familiares. Es por esto que hemos llegado a la dramática situación de que las tierras de los agricultores familiares se dejan ociosas, abandonadas, sin cultivar, hoy el 70% de los pobres del mundo son población rural.

Que estas últimas décadas hayan desaparecido un 30% de EAP de AF a nivel de territorio y un 40% menos a nivel estudio de caso, contribuye a la concentración de tierras, a la mayor participación de las corporaciones y desestimula el desarrollo rural del territorio.

Referencias bibliográficas

- Abramovay, R. (1992). Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão. São Paulo: Hucitec.
- Abramovay, R. (1997). Agricultura Familiar e Uso do Solo. *São Paulo em Perspectiva*, XI (2), pp.73-78.
- Almeida, M. (1986). Redescobriendo a Família Rural. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, I (1), PP. 66-83.
- Amin, S. (2008). Agricultura campesina, agricultura familiar moderna. *ALAI, América Latina en Movimiento*.
- Basso D. & Gehlen I. (2015). Agricultores Familiares modernos e diversos. *Orbis Latina*, V (2).
- Bourdieu, P. (1990). *Espacio social y génesis de las clases*. México: Grijalbo.
- Bourdieu, P. (1994). *Estrategias de reproducción social y modos de dominación*. México: Grijalbo.
- Carballo, C. (2003). Agricultura familiar. Nota. Facultad de Agronomía - UBA Copyright (A. M. Weinstock) COMUNICACION- FAUBA.
- Cowan Ros, C.; Pereira, F.; Ricotto, A.; Sabanés, L.; & Villaberde, M.- (2004). Estudio socio-económico y ambiental de la región de influencia del campo experimental de la UNRC- "Pozo del Carril"- Córdoba- Argentina. Río Cuarto: Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Giarracca, N. (2009). "El espectro de la dictadura", en *Página12*, 23 de marzo de 2009.
- Goodman, D.; Sorj, B. & Wilkinson, J. (1990). *Da Lavoura às Biotecnologías*. Río Janeiro: Campus.
- Kautsky, K. (1989). *La cuestión Agraria*. México: Siglo XXI.
- Lamarche, H. (1999). Agricultura Familiar: diversidade e adaptabilidade. *Revista de Sociologia e Política*, nº 12, pp. 161-167.

- Lutzenberger, J. (2001). Entrevista. *Revista Agroecología e Desenvolvimento Rural Sustentable*.
- Margiotta, E. & Benencia, R. (1981). Introducción al estudio de la Estructura Agraria. La perspectiva de la sociología rural [mimeo].
- Merlet, M. & Jamart, C. (2007). “Situación y perspectivas de las agriculturas familiares en América Latina”, en *Asociación para contribuir a Mejorar la Gobernanza de la Tierra, del Agua y de los Recursos Naturales*.
- Morgan, D. (1979). *Los traficantes de granos*. Buenos Aires: Editorial Abril.
- Navarro Z. *et al* (2013). Sete teses sobre o mundo rural brasileiro. Disponible en: <http://www.acesa.com/gramsci/?page=visualizar&id=1581>
- Sabanés, L., Villaberde, M. & Funes, E. (2016). Diagnóstico Socio- Económico-Productivo- Ambiental de la región del Pozo del Carril- UNRC, en *Actas de las IX Jornadas de Economía Crítica*. Córdoba: Argentina.
- Sabanés, L.; Villaberde, M.; Cowan Ros, C. & Ricotto, A.; (2004). Principales transformaciones de la estructura agraria del departamento río cuarto en el período 1988-2002. Documento Docencia Departamento de. Economía Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto [mimeo].
- Scheinkerman de Obschastko E. (2009). *Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina: un análisis a partir de los datos del CNA 2002*. Buenos Aires: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- Teubal, M. (2008). Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo. *Revista Lavboratorio*, X (22).
- UNRC-UNC; (2007). Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios. Consultor: Ministerio de Economía y Producción, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos [mimeo].
- Van der Ploeg, J. (2014). Diez cualidades de la agricultura familiar. Fundación de Estudios Rurales.
- Van Der Ploeg, J. (1992). “El proceso de trabajo agrícola y la mercantilización”, en Eduardo Sevilla Guzmán, E. & González de Molina, M. (Eds.). *Ecología, campesinado e historia*. Madrid: Ediciones de La Piqueta.

- Villaberde, M; Sabanés, L; Heguiabehere, A. & Porporato, A. (2015). “La agricultura familiar y los cambios tecnológicos en los procesos de modernización”, en *Actas de las: IX Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales argentinos y latinoamericanos*. Buenos Aires: CIEA.
- Villaberde, M.; Sabanés, L.; Heguiabehere, A.; Vigliocco M. & Porporato A. (2015) “Los agricultores familiares del centro sur de la provincia de Córdoba y su percepción del ambiente Río Cuarto, Argentina”, en *Actas de las VIII Jornadas de Economía Crítica*. Río Cuarto: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Villaberde, M.; Sabanés, L.; Heguiabehere, A.; Vigliocco, M.; Porporato, A. & Porporato, F. (2014). “Estrategias de reproducción social en la agricultura familiar”, en *Actas de las Jornadas: “la viabilidad de los ‘inviabiles’*. *Estudios, debates y experiencias sobre formas de producción alternativas al modelo concentrador en el agro*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Villaberde, M; Sabanés, L.; Heguiabehere, A.; Vigliocco, M.; Porporato, A. & Porporato, F. (2013). “Estudio prácticas agricultores familiares”, en *Actas de las VI Jornada Economía Crítica*. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.
- Wortmann, E. (1995). *Herdeiros, Parentes e Compadres*. Brasília: Hucitec-Edunb.

Los autores

Gina Lucía Aichino. Licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Doctoranda en Geografía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Su investigación se titula “Geometrías del poder y co-producciones espaciales de las estrategias desplegadas en los territorios rurales del oeste de la provincia de Córdoba (2010-2016)”. Fue becaria de posgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Participa como investigadora en diversos proyectos subsidiados y acreditados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. Durante su formación ha profundizado su compromiso con las críticas al agronegocio, participando de movilizaciones y colectivos sociales relacionados con la temática. Ha sido expositora y comentarista de diferentes eventos académicos. Se desempeña como docente de Geografía y Metodología en el nivel medio y como profesora invitada en los seminarios de grado en la Escuela de Historia y el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

Fernando R. Barri. Licenciado en Ciencias Biológicas, Especialista en Antropología, Magíster en Manejo de Vida Silvestre y Doctor en Ciencias Biológicas. Se desempeña como Profesor Adjunto de la Cátedra de Problemática Ambiental, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Es Investigador Adjunto del CONICET. Sus áreas de trabajo son las ciencias ambientales, en particular

la ecología básica y la ecología política. Es autor de más de 30 publicaciones científicas, dos libros y cuatro capítulos del libro. Director de tres tesis doctorales, cuatro tesis de maestría y ocho tesis de grado. Fue miembro de comités académicos y director de la Reserva Natural Vaquerías de la UNC. Participa además activamente de organizaciones socio-ambientales en la provincia de Córdoba.

Gabriel Fernando Carini. Profesor en Historia, Licenciado en Historia y Magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC); Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se desempeña como docente en las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia del Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC y de la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Secretario del Centro de Investigaciones Históricas de la UNRC. Ha realizado pasantías de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Barcelona. Participa en equipos de investigación acreditados en la UNRC y la UNC sobre diversos aspectos vinculados al mundo rural de fines del siglo XX y principios del siglo XXI.

María Inés Dellavale. Profesora y Licenciada en Historia egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Magíster en Partidos Políticos por el Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Es investigadora formada del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades donde integra el equipo a cargo de la Dra. Gabriela Olivera. Tiene diversas publicaciones sobre temáticas locales, centrándose en diversas dimensiones de la historia del Partido Socialista en el territorio cordobés.

Pablo Iparraguirre. Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como docente en la cátedra de Historia de América II de la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y en el Área de Historia Latinoamericana del Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Forma parte de equipos de investigación acreditados y subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.

María Eugenia Isidro. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Desde el 2016 se desempeña como becaria doctoral de CONICET. Realiza sus estudios de posgrado (Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales) en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sus investigaciones se centran en los movimientos socioterritoriales que resisten al agronegocio en la provincia de Córdoba, sus construcciones identitarias y disputas por los sentidos. Participa de proyectos de investigación sobre protesta social y transformaciones socioterritoriales. Actualmente es colaboradora en la cátedra de Introducción a la Comunicación Humana, Departamento de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC.

Erica Funes. Ingeniera Agrónoma egresada de Facultad Agronomía y Veterinaria de la UNRC. Fue Ayudante de Segunda en la asignatura Extensión Rural. Es becaria de investigación en el Área de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural del Departamento Economía Agraria. Integrante de Proyectos de Extensión y Voluntariados Universitarios. Autora y co-autora de trabajos de investigación, extensión y divulgación publicados en revistas, diarios, congresos, jornadas, encuentros, foros nacionales e internacionales.

Gabriela Inés Maldonado. Licenciada y Profesora en Geografía por la UNRC. Experta Universitaria en Sistemas de Información Geográfica (Universidad Internacional de Andalucía), Doctora de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posdoctora en Ciencias Sociales (UBA). Actualmente es Investigadora Adjunta del CONICET y Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Río Cuarto y categoría III en el Sistema de Incentivos a la Investigación. Participa y ha participado en proyectos de investigación de Ciencia y Técnica de la UBA y UNRC, Agencia Córdoba Ciencia, FONCyT, Inter-American Institute for Global Change Research, CONICET, entre otros. Dirige y ha dirigido numerosos trabajos finales de Licenciatura y de Doctorado. Ha realizado estancias de investigación en Brasil, España, Alemania y Austria. Actualmente desarrolla estudios focalizados en la transformación de la producción agropecuaria como parte del circuito económico superior y su expresión en la forma de relación urbano-rural.

Gabriela Olivera. Profesora, Licenciada y Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Cursó estudios de posgrado en Historia económica en la Universidad de Uppsala, Suecia. Es Investigadora Independiente del CONICET. Se desempeña como Profesora Adjunta en la cátedra de Historia Agraria de la Escuela de Historia, facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC e Investigadora concursada en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Dirige equipos de investigación acreditados y subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnológica de la UNC. Sus líneas de investigación se orientan a la historia social agraria, regional y al cooperativismo agrario.

Ana Laura Picciani. Profesora y Licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Doctoranda en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Becaria doctoral por el CONICET. Se desempeña como docente en la cátedra Geografía Rural del De-

partamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC. Participa en proyectos de investigación dependientes de diversos organismos de ciencia y técnica vinculados a las transformaciones socioterritoriales en el sur de la provincia de Córdoba. Posee 20 cursos aprobados de posgrado y de capacitación; 5 publicaciones en revistas y libros y 5 en Actas de Congresos. Participó como expositora en numerosos congresos y jornadas. Su tema de investigación es la nueva ruralidad y re-definición de la frontera urbana-rural en el departamento Río Cuarto, Córdoba (1995-2015).

Rocío Soledad Poggetti. Profesora en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Licenciada en Ciencia de la Educación por la Universidad del Salvador (USAL); Especialista en la Enseñanza de las Ciencias Sociales por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Adscripta de investigación en la Práctica Docente Profesional correspondiente al Profesorado en Historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y Docente de los espacios curriculares Práctica Docente y Residencia, Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario, Ciencias Sociales y su Didáctica II y Epistemología de la Historia del Instituto Superior del Profesorado de Monte Maíz (ISPMM). Participa en equipos de investigación acreditados en la UNRC y la UNC sobre diversos aspectos vinculados al mundo rural de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Entre sus publicaciones se destaca el libro “Naciendo y avanzando con el Cooperativismo. 60 años de la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda.”, publicado en la editorial Intercoop en el año 2013.

Nahuel Ramos. Estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad Agronomía y Veterinaria de la UNRC. Colaborador en Investigación del Área Agricultura Familiar y Desarrollo Rural en el Departamento Economía Agraria. Co-autor de trabajos de

investigación, extensión y divulgación publicados en revistas, diarios, congresos, jornadas, encuentros, foros nacionales e internacionales.

Leandro Sabanés. Ingeniero Agrónomo egresado de la Facultad Agronomía y Veterinaria de la UNRC. Magister en Desarrollo Rural por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (Porto Alegre, Brasil). Responsable de las cátedras de Desarrollo Rural y Economía Agricultura Familiar para las carreras de Agronomía y Veterinaria. Especialista en el área Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. Investigador categorizado III en el Sistema de Incentivos a la Investigación. Coordinador de proyectos de investigación y extensión en la región de la UNRC, con formación de recursos humanos y participación en gestión universitaria. Autor y co-autor de trabajos de investigación, extensión y divulgación publicados en revistas, diarios, congresos, jornadas, encuentros, foros nacionales e internacionales.

María Sergia Villaberde. Ingeniera Agrónoma egresada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. Magister en Desarrollo Rural por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (Porto Alegre, Brasil). Profesora Asociada del Departamento Economía Agraria en las cátedras de Extensión Rural y Sociología Rural para las carreras de Agronomía y Veterinaria, UNRC. Investigadora categorizada II en el Sistema de Incentivos a la Investigación. Especialista en el área Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. Coordinadora de proyectos de investigación y extensión en la región de la UNRC, con formación de recursos humanos y participación en gestión universitaria. Autora y co-autora de trabajos de investigación, extensión y divulgación publicados en revistas, diarios, congresos, jornadas, encuentros, foros nacionales e internacionales.

Se terminó de imprimir en
Imprenta Corintios 13
Luis Agote 2052 - B° Avenida Córdoba
corintios13@imprentacorintios.com
en diciembre de 2018